

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

No. 26, septiembre 2006
ISSN 1390-1249
CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol 10, Issue 3, September, 2006
Quito - Ecuador



FLACSO
ECUADOR

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador



ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales
Número 26, septiembre 2006
Quito-Ecuador

ISSN: 1390-1249 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC: H8 .S8 F53
(Vol. 10, Issue 3, September 2006)

Íconos, Revista de Ciencias Sociales es una publicación de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una reflexión crítica desde las ciencias sociales sobre temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y el mundo en general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, estos temas. *Íconos* se publica cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre.

Para la selección de artículos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (*peer review*).

Indexación

Íconos está incluida en los siguientes índices científicos: Sociological Abstracts, Ulrich's, Hispanic American Periodical Index (HAPI), Thompson Gale (Informe Académico), EBSCO-Fuente Académica, Latindex-Catálogo y REDALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe).

Iconos On Line

Los contenidos de *Íconos* son accesibles on line en texto completo a través de los portales de CLACSO (www.clacso.org.ar/biblioteca/revistas), REDALyC (www.redalyc.org), DOAJ (www.doaj.org), FLACSO-Ecuador (www.flacso.org.ec/html/iconos.html) y Tecnociencia (Consejo Superior de Investigación Científica de España).

Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamente el pensamiento de *Íconos*. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos siempre que se cite expresamente como fuente a *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*.

Director de Flacso-Ecuador: Adrián Bonilla
Director de Íconos: Eduardo Kingman Garcés
Editor de Íconos: Edison Hurtado Arroba
Asistente editorial: Lorena Andrade

Comité editorial

Felipe Burbano, Mauro Cerbino, Edison Hurtado, Hugo Jácome, Eduardo Kingman, Carmen Martínez, Franklin Ramírez, Alicia Torres

Comité asesor internacional: Andrés Guerrero (España), Blanca Muratorio (U. Vancouver, Canadá), Bolívar Echeverría (UNAM, México), Bruce Bagley (U. Miami, EEUU), Carlos de Mattos (PUC, Chile), Flavia Freidenberg (U. Salamanca, España), Francisco Rojas (Flacso, Costa Rica), Javier Auyero (SUNY - Stony Brook, EEUU), Joan Martínez Alier (U. Barcelona, España), Joan Pujadas (U. Rovira i Virgili, España), Liisa North (U. York, Canadá), Magdalena León (U. Nacional, Colombia), Rob Vos (ISS, Holanda), Roberto Follari (U. Cuyo, Argentina), Víctor Bretón (U. Lleida, España), Lorraine Nencel (CEDLA, Holanda), Cecilia Méndez (U. California, Santa Bárbara, EEUU).

Coordinadora del dossier "Populismo militar y etnicidad en los Andes"

Cecilia Méndez

Ensayo gráfico e imagen de portada: Taller Visual. Compilación: Lucía Chiriboga

Diseño y diagramación: Antonio Mena

Impresión: Rispergraf C.A.

Envío de artículos, información, solicitud de canje: revistaiconos@flacso.org.ec

Suscripciones, pedidos y distribución: lalibreria@flacso.org.ec

©FLACSO-Ecuador

Casilla: 17-11-06362

Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro, Quito-Ecuador

www.flacso.org.ec/html/iconos.html

Teléfonos: +593-2 323-8888 Fax: +593-2 323-7960

CDD 300.5 / CDU 3 / LC: H8 .S8 F53

Íconos: revista de ciencias sociales.—Quito: Flacso-Ecuador, 1997-

v. : il. ; 28 cm.

Ene-Abr. 1997-

Cuatrimstral- enero-mayo-septiembre

ISSN: 1390-1249

1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

No. 26, septiembre 2006
ISSN 1390-1249
CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol 10, Issue 3, September, 2006
Quito - Ecuador

Sumario

Dossier

Populismo militar y etnicidad en los Andes 13-16

Presentación del dossier
Cecilia Méndez

Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XX 17-34

Cecilia Méndez

Resumen

Partiendo de procesos políticos recientes en el Perú, que incluyen una guerra civil y la emergencia de un movimiento militarista pro-indígena y ultranacionalista, este ensayo examina la relación histórica entre campesinado y ejército durante los siglos XIX al XXI. Se especula sobre los cambios producidos con el tránsito de un ejército caudillista en el siglo XIX a un ejército profesional en el XX. El ensayo cuestiona la expandida idea de que la sierra rural y sus habitantes estuvieron excluidos de la vida nacional y de la ciudadanía "desde siempre" y postula que la participación campesina en las guerras civiles del siglo XIX fue un canal de inserción del campesinado en la política nacional, promoviendo una forma incipiente de conciencia ciudadana. Pero a medida que el ejército se profesionaliza, la relación entre instituciones armadas y campesinado se hace más jerárquica y vertical. Este proceso es paralelo a la consolidación de los primeros regímenes civiles constitucionales del siglo XX, en los que paradójicamente la exclusión del campesinado se acrecienta. En última instancia, fueron las dictaduras (civiles y militares) las que hicieron mayor eco que los gobiernos democráticos constitucionales de los intereses del campesinado.

Palabras clave: ejército, militares, campesinado, indigenismo, etnicidad, ciudadanía, autoritarismo, profesionalización, guerra civil

¿Ciudadanos armados o traidores a la patria?

Participación indígena en las revoluciones bolivianas de 1870 y 1899 35-46

Marta Irurozqui

Resumen

Mediante la comparación de la participación armada de los indígenas en las guerras civiles de 1870 y 1899, se analiza la naturaleza cambiante del acceso de esta población a la ciudadanía. La alianza entre los indios y los estamentos armados incide en dos aspectos. Primero, muestra, en primer lugar, cómo los primeros no sólo no vivieron de espaldas al proceso de construcción nacional ni fueron ajenos a las concepciones, proyectos o empresas políticas decimonónicas, sino que se constituyeron en sujetos sustanciales en la institucionalización/rearticulación territorial del Estado gracias a asumir como propia la narrativa ciudadana de cooperación nacional en su defensa grupal. Segundo, a través de la compleja figura del "soldado/nacional/ciudadano armado" refleja la capacidad de los conflictos bélicos para generar cambios de percepción y adscripción ciudadanas y para influir en los procesos identitarios de desindianización y reindianización.

Palabras clave: ciudadanía, Estado, guerra civil, identidad

El mariscal Cáceres: ¿un héroe militar o popular?

Reflexiones sobre un héroe patrio peruano 47-57

Iván Millones Maríñez

Resumen

La figura del Mariscal Andrés Avelino Cáceres (Ayacucho 1836 – Ancón 1923), héroe de la Guerra del Pacífico y ex-presidente del Perú, ha sido empleada en los últimos años por el etnocacerismo, movimiento político de trayectoria un tanto violenta que vincula elementos militaristas, indigenistas y nacionalistas. ¿Por qué se dio esta apropiación de un héroe patrio? ¿Acaso por desinterés estatal en incluirlo en el “panteón oficial de héroes”? ¿Qué encontraron los etnocaceristas en el mariscal para convertirlo en símbolo? Este ensayo intenta responder a esas preguntas, y reconstruir la compleja y parcial apropiación oficial de ese personaje.

Palabras clave: etnocacerismo, héroes patrios, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, memoria, militares, Perú siglo XIX, Perú siglo XX

Ejército cholificado: reflexiones sobre la apertura del ejército peruano hacia los sectores populares 59-72

Lourdes Hurtado Meza

Resumen

Este ensayo se refiere a la democratización social del cuerpo de oficiales del ejército peruano. Aquí planteo que a diferencia de las otras instituciones castrenses del país, el ejército es la corporación militar que cuenta con una importante oficialidad chola, es decir, de procedencia popular, migrante y andina. Este es un proceso que ha ido de la mano con la andinización de las zonas urbanas en el Perú, el discurso inclusivo desarrollado en la primera fase del gobierno del General Velasco (1968-1975) y los eventos acontecidos durante los años del conflicto armado interno (1980-2000).

Palabras clave: Ejército Peruano, etnicidad, cultura militar, conflicto armado interno

La influencia militar en la construcción política del indio ecuatoriano en el siglo XX 73-84

Cecilia Ortiz B.

Resumen

Este artículo sostiene que las Fuerzas Armadas en Ecuador han influido en la organización política de las poblaciones indígenas en un proceso que cubre un siglo aproximadamente, y en su reciente eclosión en la política nacional. El 21 de enero de 2000 la cúpula militar protagonizó un golpe de Estado en el que utilizó a un sector de oficiales superiores, a los indios organizados y a los movimientos sociales. A más de rebelarse contra un gobierno en crisis (política y económica), estos oficiales buscaron proteger el *status quo* que, erosionado por la firma de la paz con el Perú (1998), atrajo la crisis de las FF.AA al desaparecer la guerra como narrativa aglutinante de la unidad nacional. Simultáneamente, los indios utilizaron a los militares en ese escenario para conseguir presencia en los espacios de decisión política. Esta mutua utilización surgió de una propuesta militar que se deja sentir ya desde las primeras décadas del siglo XX cuando se presentan los primeros trazos de lo que posteriormente tomaría la forma de un nacionalismo multicultural.

Palabras clave: indios, Fuerzas Armadas, cultura política, proyecto nacional, defensa, nacionalismo multicultural

Militares y Estado en Ecuador: ¿construcción militar y desmantelamiento civil? 85-95

Liisa North

Resumen

Este artículo trata sobre los esfuerzos de algunos gobiernos militares por construir un Estado que responda a los intereses de la nación y no a los intereses privados de una minoría, esfuerzos que han encontrado límites en los enraizados patrones de dominación socio-política del Ecuador. El artículo comienza con una descripción de las diferencias entre la llamada “Revolución Juliana”, y las propuestas planteadas en enero de 2000, durante el derrocamiento de Jamil Mahuad. Sigue con una revisión de los momentos clave para la construcción del Estado, desde 1925 hasta 1979, las políticas de desmantelamiento del Estado llevadas a cabo por las elites civiles desde la transición hacia la democracia en el último año mencionado, y las respectivas respuestas militares a recientes protestas sociales.

Palabras clave: Construcción militar del Estado, protesta social, incorporación social, desmantelamiento civil del Estado

Ensayo gráfico

Milicia e indios: una relación contradictoria 96-104

Taller visual (Compilación: Lucía Chiriboga)

Debate

“Treinta años después”: entre la academia y la política 111-118

Ricardo Lagos Escobar

Amazonía contemporánea: fronteras y espacio global

Comentarios al dossier de ICONOS N° 25 119-130

Víctor López

Resumen

Al igual que los *mundos amazónicos* que la componen, diversa y contradictoria -fascinante en su fragilidad a la vez que exuberante en su complejidad- la cuenca amazónica ha sido materia de la investigación social en el dossier de Iconos N° 25, referido a “La Amazonía en la agenda global”. Cuatro artículos diversos, complejos, de diferente escala, alguno que otro contradictorio, siempre en la perspectiva de la integración del espacio amazónico al Estado y al mercado global, por medio de la expansión de fronteras económicas y demográficas, nos aportan su particular comprensión y método de análisis sobre las condiciones e implicaciones de la globalización en la Amazonía del siglo XXI. Nuestro trabajo ubica estos aportes en el debate sobre una Amazonía, caracterizada por ser *contemporánea*, actual, plural, en transformación y adaptación permanente, pero también postergada, expoliada y olvidada. Identificamos en los textos sus premisas teórico-metodológicas, señalando aquellos elementos que en nuestra opinión merecen un tratamiento posterior. El *espacio global*, aparece como una categoría de análisis a ser considerada en los estudios amazónicos sobre el tema que nos ocupa.

Palabras clave: Amazonía contemporánea, espacio, fronteras, globalización, estudios amazónicos, sustentabilidad

Forjando democracia: formación político-cultural y vinculaciones desde abajo 131-146

Gerardo Otero

Resumen

En contra del globalismo de izquierda que arguye que las fuerzas de la globalización han debilitado fundamentalmente a los Estados-nación, aquí se propone que esta esfera sigue siendo crítica, tanto para la imposición de los intereses de las clases dominantes, como para la resistencia y construcción de una alternativa popular-democrática. En la medida en que las raíces de las organizaciones sean locales, podrán enfocarse en los temas ambientales y socioeconómicos específicos de sus localidades, y podrán desarrollar mecanismos de participación democráticos. La práctica del Eje Rito Zapatista de Liberación Nacional (México) se usa como ilustración de esta alternativa de política popular-democrática impulsada desde abajo.

Palabras clave: movimiento indígena, EZLN, México, ciudadanía, autonomía.

Diálogo

Las posibilidades de la historia: México y Ecuador

Diálogo con Manuel Miño Grijalva 149-158

Juan Fernando Regalado

Temas

El regreso de Jumandy:**historicidad, parentesco y lenguaje en Napo** 161-172

Michael A. Uzendoski

Resumen

Este trabajo analiza los significados culturales del levantamiento indígena en el 2001 en el alto Napo como modo de investigar la historicidad indígena. Aunque hay varias publicaciones sobre el levantamiento 2001 en Napo, no se han considerado estos eventos desde una perspectiva de la historicidad kichwa. El argumento es que la historia que producen los hablantes de kichwa amazónico se estructura como un complejo de circulación de sustancias (o *samai*) que vincula actores sociales con un tiempo-espacio primordial. A través de un testimonio histórico sobre Jumandy, se muestra cómo esta complejidad simbólica de lenguaje-cultura kichwa crea vínculos de sustancia y poder con seres mítico-históricos

Palabras Claves: Napo kichwa, historia, historicidad, Jumandy, levantamiento de 2001, Amazonía, memoria, poética

Reseñas 175-194

Política editorial 197

Normas para la presentación de originales 198

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

No. 26, septiembre 2006
ISSN 1390-1249
CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol 10, Issue 3, September, 2006
Quito - Ecuador

Summary

Dossier

Militar populism and ethnicity in the Andean Region 13-16

Introduction

Cecilia Méndez

**The paradoxes of authoritarianism:
The army, the peasantry and the ethnic question in Peru:
19th to 21st centuries** 17-34

Cecilia Méndez

Abstract

Inspired by recent political processes in Peru that include a civil war and the emergence of a militaristic and ultranationalist pro-indigenous political movement, this essay examines the historical relationship between the peasantry and the army from the nineteenth to the twenty-first centuries. It speculates on the changes that the transition from a caudillista army in the nineteenth century to a professional army in the twentieth century brought about. The essay questions the widespread idea that the rural highlands and their inhabitants were excluded from the national life and citizenship "for ever" and contends that peasant participation in the civil wars of the nineteenth century was a channel for insertion of the peasantry into national politics and fostered an incipient form of citizenship consciousness. Yet, as the army professionalized, the relationship between the armed institutions and the peasantry became increasingly more hierarchical and vertical. This process was parallel to the consolidation of the first constitutional civilian regimes of the twentieth century, in which, paradoxically, the exclusion of the peasantry became more severe. In the final instance, it was the dictatorships (both civilian and military) those to be more receptive than the constitutional democracies to the interests of the peasantry.

Keywords: army, militaries, peasantry, indigenismo, ethnicity, citizenship, authoritarianism, professionalization, civil war

**Armed citizens or traitors to the patria?
Indigenous participation in the Bolivian revolutions
of 1870 and 1899** 35-46

Marta Irurozqui

Abstract

This article compares the indigenous armed participation in the Bolivian civil wars of 1870 and 1899 paying special attention to this population's changing access to citizenship. The alliance between the indians and the militaries shows, in the first place, how indians were neither alien to the process of national construction nor aloof from the political conceptions and projects of the nineteenth century, but that they became, moreover, central subjects in the institutionalization and territorial rearrangement of the State insofar as they assumed the narrative of citizenship and national cooperation as their own, on behalf of their own defense as a group. Secondly, the complex image of the "soldier/nacional/armed citizen" suggests the capacity of armed conflicts to generate changes of perception about citizenship and citizen belonging, and to influence the processes of indianization and reindianization of identities.

Keywords: citizenship, State, civil war, identity

**Marshal Cáceres: a military or a popular hero?
Reflections on a Peruvian national hero** 47-57

Iván Millones Maríñez

Abstract

The image of the Marshal Andrés Avelino Cáceres (Ayacucho, 1836-Ancón, 1923), a hero of the War of the Pacific and former president of Peru, has been used in recent years by *etnocacerismo*, a political movement of rather violent trajectory that links militaristic, indigenist, and nationalist elements. How can one explain the appropriation of this national hero? Was it the state's lack of interest in including Cáceres in the "official pantheon of heroes"? What did the *etnocaceristas* find in the marshal to turn it into a symbol? This essay tries to answer these questions, and to reconstruct the complex and partial official appropriation of this hero.

Keywords: etnocacerismo, national heroes, Marshal Andrés Avelino Cáceres, memory, military, national heroes, Perú-19th Century, Perú-20th Century.

**Cholified army. Some thoughts on the social
democratization of the Peruvian military** 59-72

Lourdes Hurtado Meza

Abstract

In this essay I maintain that there has been a process of democratization within the corps of officers of the Peruvian Army. Unlike the other Peruvian military institutions, in the army there is a significant number of cholo officers, that is to say, officers with an Andean and urban migrant background. This has been the consequence of, among other aspects, the andeanization of urban areas in Peru, the inclusive discourse towards common sectors sponsored by the military government of General Juan Velasco (1968-1975), and the events which took place during the internal armed conflict (1980-2000).

Keywords: Peruvian army, ethnicity, military culture, internal armed conflict

**The military influence on the political construction of
Ecuadorian indians during the twentieth century** 73-84

Cecilia Ortiz B.

Abstract

This article's thesis is that in Ecuador the Armed Forces have played an important role in the political organization of the indigenous peoples and their recent irruption into national politics. On January 21, 2000 the military head officers staged a coup d'état using a sector of high rank officers, the Indian organizations and the social organizations. These officers intended to protect the status quo that had suffered a hard blow after the peace treaty with Peru, which disabled war as a discourse around which to rally for national unity. At the same time, the Indians use the Armed Forces as a way of gaining national presence in decision-making political spaces. This two-way dealing emerged from a military scheme that became apparent during the first decades of the twentieth century when the first signs of what would later become a multicultural nationalism came into view.

Keywords: Indians, Armed Forces, political culture, national project, defense, multicultural-nationalism

**State building, state dismantling,
and the military in Ecuador** 85-95

Liisa North

Abstract

This article deals with some military governments efforts to build a state that could serve broad public rather than simply narrow private interests, and it does so with reference to the obstacles rooted in Ecuador's patterns of social-political domination that have undercut those efforts. The article begins with a description of contrasts between the so-called "revolutions" of July 1925 and January 2000. It then briefly reviews key moments in state building from 1925 to 1979, the policies of state dismantling pursued by civilian elites since the transition to democracy in the latter year, and military responses to recent social protest.

Keywords: Military State Building, Social Protest, Social Incorporation, Civilian State Dismantling

Summary

Ensayo gráfico

Military and Indians: a contradictory relationship	96-104
<i>Taller Vival (Compilation Lucía Chiriboga)</i>	

Debate

“Between academy and politics”	111-118
<i>Ricardo Lagos</i>	

Contemporary Amazonia: frontiers and global space	119-130
<i>Víctor López A.</i>	

Abstract

The article comments critically four diverse articles included in “La Amazonía en la agenda global”, the dossier of ICOS-NOS No. 25, may 2006. We locate these contributions in the debate about an Amazonian characterized for being contemporary, present, plural, in transformation and permanent adaptation, but also delayed, spoiled and forgotten. We identify in texts its theoretical and methodological premises, and indicate those elements that in our opinion deserve a further treatment. At last, “global space” appears as an analytical category to be considered in the Amazonian studies.

Keywords: Contemporary Amazonia, Space, Frontiers, Globalization, Amazonian Studies, Sustainability

Forging democracy: Political-cultural formation and bottom-up linkages	131-146
<i>Gerardo Otero</i>	

Abstract

Against left globalism, which argues that the forces of globalization have fundamentally weakened the nation-state, this paper proposes that this sphere continues to be critical both for the imposition of ruling-class interests as well as for the resistance and construction of a popular-democratic alternative. To the extent that the roots of social movement organizations are local, they will be able to focus on environmental and socioeconomic issues that are specific to their localities and will be able to develop democratic participation mechanisms. The practice of the Mexico’s Zapatista National Liberation Army (EZLN) is used to illustrate this popular-democratic political alternative promoted from the bottom up.

Keywords: indigenous movement, EZLN, Mexico, citizenship, autonomy.

Diálogo

The possibilities of History Dialogue with Manuel Miño Grijalva	149-158
<i>Juan Fernando Regalado</i>	

Temas

The return of Jumandy: Historicity, kinship, and language in Napo	161-172
<i>Michael A. Uzendoski</i>	

Abstract

This article analyzes the cultural meanings of the indigenous uprising of 2001 in Upper Napo as a means to investigating indigenous historicity. Although there are various publications about the 2001 uprising, no one has looked at these events from the perspective of Kichwa historicity. The argument is that Amazonian Kichwa speakers structure and produce history through a conceptual complex of substance circulation (*samai*) that links social actors with primordial time-space. Using a historical testimony about Jumandy, the paper shows how the symbolic complex of Kichwa language-culture allows people to create links of substance and power with mythohistoric beings.

Keywords: Napo Kichwa, history, historicity, Jumandy, indigenous uprising of 2001, Amazonia, memory, poetics

Reseñas	175-94
Política editorial	197
Normas para la presentación de originales	198

VII CONGRESO LATINO AMERICANO DE SOCIOLOGÍA RURAL

QUITO 20-24 Noviembre 2006



La cuestión rural en América Latina:
EXCLUSIÓN Y RESISTENCIA SOCIAL

LUGAR: FLACSO - Sede Ecuador INFORMACIÓN: www.alasru.org - email: jerazo@flacso.org.ec



ÍCONOS *on line*

Revista de Ciencias Sociales - FLACSO Sede Ecuador

Los artículos de Íconos están disponibles on line,
en formato PDF, en las siguientes bases de datos*:

REDALyC

(Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe)

www.redalyc.org

Biblioteca Virtual de CLACSO

(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)

www.clacso.org.ar/biblioteca/revistas

DOAJ

(Directory of Open Access Journals)

www.doaj.org

Portal de ICONOS en FLACSO-Ecuador

www.flacso.org.ec/html/iconos.htm

* Todos estas bases incluyen buscadores a través de metadatos
(autor, tema, palabras clave, fecha de publicación)

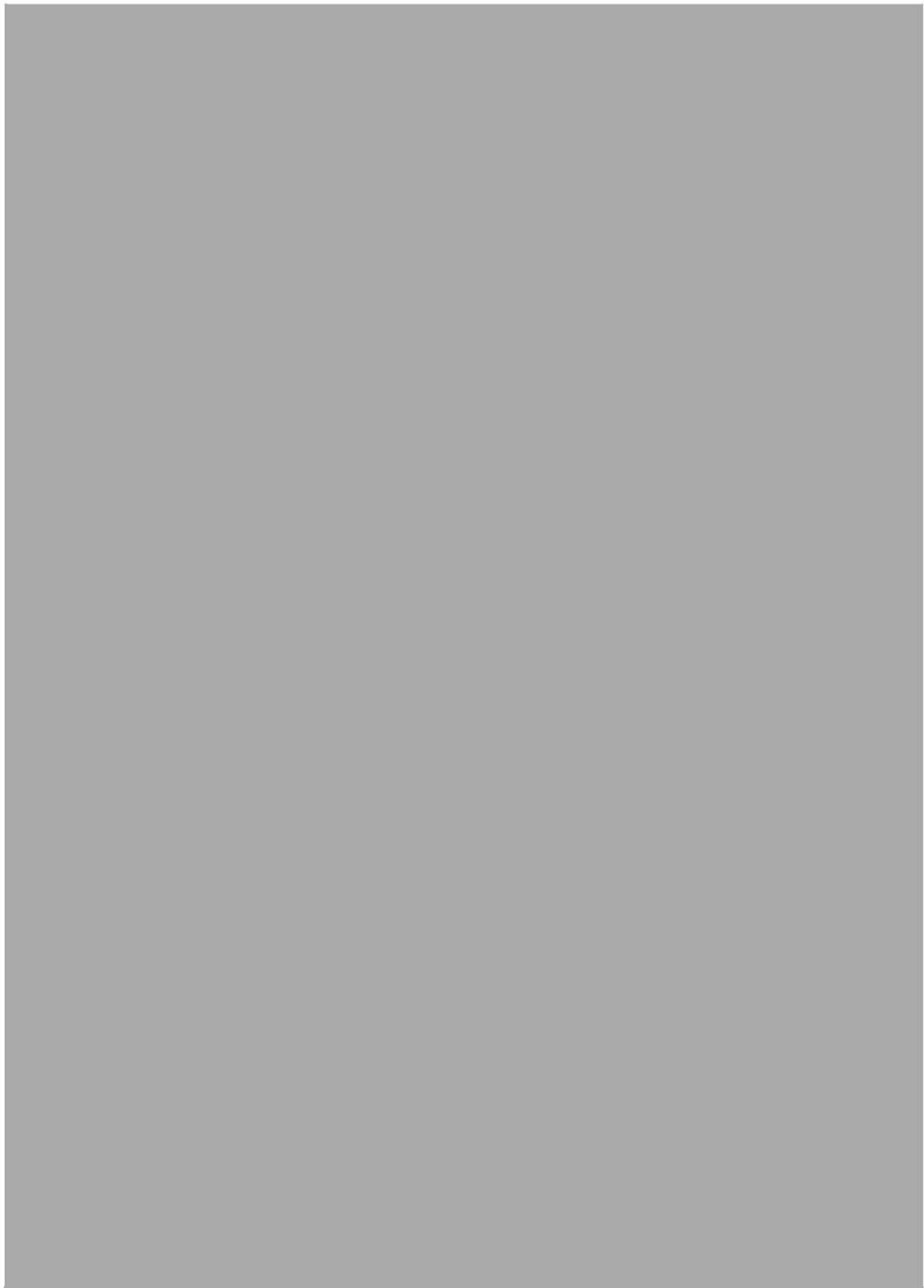
Iconos, Revista de Ciencias Sociales, está incluida en los siguientes índices científicos:

Sociological Abstracts, Ulrich's, HAPI (Hispanic American Periodical Index), Thompson Gale (Informe Académico),

Latindex-Catálogo, REDALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe) y EBSCO (Fuente Académica).

O

DOSSIER



Populismo militar y etnicidad en los Andes

Presentación del dossier

Cecilia Méndez G.

Universidad de California en Santa Bárbara

*Cuanto más pesada es la carga de lo concreto,
más probable es que sea eludido por la teoría*
Michel-Rolph Trouillot,
Silencing the Past, 1995

La idea de este dossier surgió de manera casi accidental, cuando atraída por los desarrollos políticos que llevaron unos años atrás a los militares ecuatorianos a forjar una alianza con el movimiento indígena -o a los indígenas a aliarse con los militares, como quiera vérselo- participé como única ponente no ecuatorianista en el congreso de ecuatorianistas de LASA (Asociación de Estudios Latinoamericanos) llevado a cabo en Quito en junio del 2004. Mi ponencia consistía en los esbozos de un proyecto en ciernes sobre la relación histórica entre el ejército y el campesinado en el Perú, que justifiqué contextualizándolos en una discusión sobre populismos militares en los Andes y los eventos recientes en Ecuador. Más que buscar oyentes venía a aprender *in situ* de la percepción ecuatoriana sobre su propio proceso y en búsqueda de interlocutores.

Mi interés por el tema militar y su conexión con lo étnico estaba motivado, en lo inmediato, por el deseo de entender la emergencia en el Perú del llamado movimiento “etnocacerista”, un movimiento ultra-nacionalista que nacido en los cuarteles se proyectaba como el embanderado del campesinado

y los indígenas peruanos y especialmente de los miles de reservistas de origen abrumadoramente andino que combatieron contra Sendero Luminoso, y en menor proporción contra el Ecuador, y a quienes tanto el Estado como los partidos políticos parecían haber abandonado. El llamado etnocacerismo era, a comienzos de la década del 2000, cuando surgió, un movimiento más bien marginal y no era tomado suficientemente en serio por la mayor parte de analistas sociales peruanos, debido en parte a su prédica violentista, su enfrentamiento visceral contra quienes ellos llamaban “los blancos” o “criollos” y sus posturas xenófobas, anti-norteamericanas, anti-chilenas y hasta antisemitas. El etnocacerismo proponía, en efecto, la superioridad de la “raza cobriza” -término eufemístico que ellos usaban en lugar de “indio”- sobre cualquier otra. Mezcla de indigenismo telúrico de los treinta y cuarenta, marxismo anti-imperialista de los setenta y nacionalismo militar, hay quienes no sin razón lo llegaron a considerar como una suerte de fascismo andino. El líder del movimiento, el ex-oficial del ejército Antauro Humala (hoy preso tras el sangriento asalto a un puesto policial) llegó a decir, por ejemplo, que reimpondría la pena de muerte y fusilaría los “blanquitos” de las Casuarinas (un barrio de clase alta de Lima) de ser necesario.

Más allá de este lado extremo, obviamente preocupante, lo que me interesaba del

fenómeno etnocacerista era, por un lado, que un movimiento político surgido en el ejército predicara de modo tan central un nacionalismo indigenista e incaísta lo cual, salvando las distancias, no podía sino traer reminiscencias del gobierno del General Juan Velasco Alvarado (Perú, 1968-75), anatematizado por tirtios y troyanos y aún insuficientemente estudiado, pese a haber marcado época. Por otro lado, llamaba la atención que el etnocacerismo hubiera empezado a canalizar los sentimientos de frustración de una parte significativa de la población que se sentía marginada por el racismo anti-indígena y anti-negro que impregna la sociedad peruana, el cual se veía agravado por la falta de oportunidades económicas y laborales en un contexto de voceado crecimiento económico. Se trataba, en efecto, del primer movimiento político en el Perú post-velasquista en asumir una postura abiertamente crítica frente al racismo anti-indígena y frente a las políticas neoliberales, que en otras partes del continente ya habían empezado a ser cuestionadas. De este modo, desprovisto de sus ingredientes violentistas, militaristas y xenófobos, el etnocacerismo parecía enarbolar banderas que los movimientos indígenas y populares en otras partes del continente ya habían hecho suyas. La diferencia es que mientras en países como Ecuador y Bolivia y el resto de América Latina los movimientos indígenas surgían de bases civiles y movimientos populares y sindicales de base, en el Perú el movimiento pro-indígena que alcanzaría el mayor impacto tenía raíces, bases e ideología militares. ¿Por qué en el Perú un partido de militares disidentes y ex-soldados asumió el papel que en nuestros vecinos andinos tuvo el movimiento indígena, el mismo que en el Perú permanece, si bien no políticamente inexistente, cuando menos tenue en comparación?

Con esta pregunta vine al congreso de Quito en junio del 2004 y mis esperanzas de

encontrar interlocutores no fueron defraudadas. Fue en este contexto que me reencontré con Eduardo Kingman, amigo de un tiempo atrás que acababa ser nombrado director de la revista *Íconos*. De una conversación casual, como surgen a veces las mejores cosas que nos suceden, surgió la propuesta que hoy presentamos a manera de este dossier.

El estudio de los militares reviste una importancia cardinal en la sociedad latinoamericana. No nos referimos sólo a su impacto en la política, el más obvio y el más estudiado, sino en la vida cotidiana y nuestra socialización: los desfiles marciales por fiestas patrias, los himnos nacionales, el saludo a la bandera, monumentos públicos consagrando guerras y héroes militares a veces con mayor frecuencia que civiles, marcan el paso de la identidad nacional. El tema, sin embargo, hasta hace poco, ha sido raramente abordado desde una perspectiva sociocultural. Las historias militares han sido o bien historias institucionales hechas por sus propios miembros con escasa crítica,¹ o bien estudios de denuncia por parte de las ciencias sociales: los militares como represores del pueblo, violadores de los derechos humanos y brazo derecho de la oligarquía. Estos estereotipos no dejan de tener una dosis de verdad; se derivan principalmente de los regímenes militares más estudiados por las ciencias políticas: las dictaduras militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil) y, en menor

1 Por su puesto existen excepciones y una de ellas en el caso del Perú es el ex-oficial Víctor Villanueva, a quien se deben numerosos trabajos de corte sociológico y de tono muchas veces autocrítico sobre el ejército peruano. Véase, por ejemplo, Víctor Villanueva, *Ejército Peruano: Del Caudillaje Anárquico al Militarismo Reformista* (Lima: Editorial Juan Mejía Baca, 1973); *¿Nueva Mentalidad Militar en el Perú?*, 3ª edición (Lima: Editorial Juan Mejía Baca, 1969); *100 Años del ejército peruano. Frustraciones y cambios* (Lima: Editorial Juan Mejía Baca, 1972); *El Militarismo en el Perú* (Lima: Impresa Gráfica T. Scheuch, 1962).

medida, de América Central en el contexto de la Guerra Fría.

Sin embargo, los regímenes militares han adoptado no pocas veces también posturas críticas frente a las oligarquías nativas y al imperio estadounidense y, sin romper con el autoritarismo y mesianismo inherentes las instituciones militares modernas, han intentado forjar alianzas con sectores populares, principalmente campesinos. Esto ha sido especialmente acentuado en la zona andina, donde a diferencia del Cono Sur las poblaciones indígenas y no blancas han sido mayoritarias. La Bolivia del siglo XX destaca como ejemplo por antonomasia de este fenómeno: Piénsese en los llamados militares socialistas de la post-guerra del Chaco en la década del treinta, en el general Gualberto Villarroel que en los años cuarenta convoca el primer congreso indígena, y en el llamado pacto militar-campesino del general Barrientos durante los sesenta. O piénsese en el gobierno del general Velasco en el Perú, que lleva a cabo una de las reformas agrarias más radicales del continente y, horrorizando a la oligarquía costeña, convierte al quechua en lengua oficial y a Túpac Amaru II en icono omnipresente del “gobierno revolucionario de las fuerzas armadas”. Piénsese en los acercamientos entre militares e indígenas en el Ecuador de los que da cuenta Cecilia Ortiz en este dossier. Piénsese en el “fenómeno Chávez” en Venezuela. Más recientemente, y nuevamente en Bolivia, un gobernante civil como Evo Morales, que alguna vez fuera soldado, viene incentivando -como parte de la “refundación de la república de Bolivia”- un nuevo pacto militar-campesino, aunque -a decir suyo- esta vez sería “hegemonizado por los indígenas y no por caudillos populistas uniformados”.² Con motivo de la instalación de la Asamblea

Constituyente en la ciudad de Sucre el pasado 6 de agosto “32 pueblos indígenas desfilaron delante del presidente” previamente entrenados por las fuerzas armadas, por iniciativa del propio Evo Morales.³

Motivados por estos desarrollos más o menos recientes, y por la necesidad de superar el enfoque dicotómico sobre los militares que predominó en la Guerra Fría, el propósito de este dossier es observar desde una perspectiva histórica e interdisciplinaria las instancias en que los militares buscaron establecer acercamientos y alianzas con sectores populares, principalmente campesinos y étnicamente menos favorecidos en Bolivia, Ecuador y Perú. Dada la fuerte composición indígena de estos países, no es de extrañar que los militares en tanto agentes gobernantes (o potencialmente gobernantes) se hayan visto en la situación de querer incorporar a estas poblaciones en sus proyectos políticos, con más razón en el siglo XIX en que la política pasaba por la guerra y su escenario por antonomasia era el mundo rural. Este acercamiento como sugieren los trabajos de Irurozqui para Bolivia y Méndez y Millones para el Perú, no fue siempre altruista y tuvo, más bien, muchas veces, un carácter instrumental. Sin embargo, contrariamente a las usuales explicaciones que enfatizan únicamente la participación forzada o manipulada del campesinado en los proyectos nacionales (y nacionalistas) de los uniformados -la tesis de los campesinos como carne de cañón- los pobladores rurales a veces promovieron los acercamientos con los militares y en otras supieron sacar ventaja de estas alianzas, a veces asumiendo y otras cuestionando los discursos nacionalistas, liberales, desarrollistas, o indigenistas, formulados por los uniformados, según el caso y el periodo.

2 Citado en Pablo Stefanoni, “Arranca en Bolivia la Constituyente”, *Página/12*, Buenos Aires, 6 de agosto del 2006.

3 Pablo Stefanoni, comunicación personal, 12 de Agosto del 2006, y “Arranca en Bolivia la Constituyente” *Página/12*, Buenos Aires, 6 de agosto de 2006.

En un ángulo más cultural y antropológico, el dossier invita a reflexionar sobre las diferencias existentes en cuanto a tradición, composición demográfica e ideología en las diferentes ramas de las fuerzas armadas: ejército, aviación y marina. El dossier enfatiza el estudio del ejército, sobre todo, en los artículos sobre el Perú. Lourdes Hurtado analiza el proceso de “cholificación” o democratización étnica y social del ejército peruano a partir de la segunda mitad del siglo XX, señalando claramente sus límites. Los tortuosos caminos de la creación de un héroe del ejército, el mariscal peruano Andrés Avelino Cáceres y su apropiación ambigua tanto por el Estado y el propio ejército como por grupos subversivos como el etnocacerismo, es materia del ensayo de Iván Millones.

Finalmente, en una arista tal vez más afín a los temas de la ciencia política, aunque desde una perspectiva más bien histórica, el dossier invita a repensar la usual asociación entre democracia con gobiernos civiles y autoritarismo con gobiernos militares que muchas veces se da por sentada. Esto, particularmente en los artículos de North y Méndez, sobre Ecuador y Perú respectivamente. Ellas constatan, irónicamente, que ha sido a veces durante gobiernos militares o de corte autoritario cuando se han realizado mayores esfuerzos de incorporación de las masas rurales a los beneficios del Estado y la ciudadanía e inversamente ha sido durante

gobiernos civiles cuando ha habido mayor exclusión de estas poblaciones -al menos durante el siglo XX para Ecuador y desde fines del siglo XIX en el Perú-. Esto en ninguna manera niega los marcos autoritarios en los que pudieron llevarse a cabo estos proyectos. Lo que invita es a aceptar la posibilidad de que los procesos democratizadores en lo social puedan haberse producido dentro de marcos políticamente no democráticos y que ello no merma su impacto.

Por último, el militarismo pesa tanto en la formación de la nacionalidad en los países latinoamericanos -desde los uniformes y desfiles escolares hasta los monumentos que pueblan nuestras calles- que resulta extraño que no existan más estudios del nacionalismo desde un ángulo militar. Esto se debe quizá a lo que el historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot denominó “el peso de lo concreto”. Trouillot escribió: “Cuanto más pesada es la carga de lo concreto, más probable es que sea eludido por la teoría”.⁴ Esperamos que este dossier sirva no sólo como una contribución empírica sino también como un aliciente a pensar el tema militar con menos prejuicios y desde ángulos teóricos más complejos.

⁴ Michel-Rolph Trouillot, 1995, *Silencing the Past, Power and the Production of History*, Beacon Press Books, Boston, p. 22: “The heavier the burden of the concrete, the more likely is it to be bypassed by theory”.

Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XX

The paradoxes of authoritarianism: army, peasants, and ethnicity in Peru, from XIX to XX centuries

Cecilia Méndez G.

U. California en Santa Bárbara

Email: mendez@history.ucsb.edu

Fecha de recepción: agosto 2006

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2006

Resumen

Partiendo de procesos políticos recientes en el Perú, que incluyen una guerra civil y la emergencia de un movimiento militarista pro-indígena y ultranacionalista, este ensayo examina la relación histórica entre campesinado y ejército durante los siglos XIX al XXI. Se especula sobre los cambios producidos con el tránsito de un ejército caudillista en el siglo XIX a un ejército profesional en el XX. El ensayo cuestiona la expandida idea de que la sierra rural y sus habitantes estuvieron excluidos de la vida nacional y de la ciudadanía “desde siempre” y postula que la participación campesina en las guerras civiles del siglo XIX fue un canal de inserción del campesinado en la política nacional, promoviendo una forma incipiente de conciencia ciudadana. Pero a medida que el ejército se profesionaliza, la relación entre instituciones armadas y campesinado se hace más jerárquica y vertical. Este proceso es paralelo a la consolidación de los primeros regímenes civiles constitucionales del siglo XX, en los que paradójicamente la exclusión del campesinado se acrecienta. En última instancia, fueron las dictaduras (civiles y militares) las que hicieron mayor eco que los gobiernos democráticos constitucionales de los intereses del campesinado.

Palabras clave: ejército, militares, campesinado, indigenismo, etnicidad, ciudadanía, autoritarismo, profesionalización, guerra civil

Abstract

Inspired by recent political processes in Peru that include a civil war and the emergence of a militaristic and ultranationalist pro-indigenous political movement, this essay examines the historical relationship between the peasantry and the army from the nineteenth to the twenty-first centuries. It speculates on the changes that the transition from a caudillista army in the nineteenth century to a professional army in the twentieth century brought about. The essay questions the widespread idea that the rural highlands and their inhabitants were excluded from the national life and citizenship “for ever” and contends that peasant participation in the civil wars of the nineteenth century was a channel for insertion of the peasantry into national politics and fostered an incipient form of citizenship consciousness. Yet, as the army professionalized, the relationship between the armed institutions and the peasantry became increasingly more hierarchical and vertical. This process was parallel to the consolidation of the first constitutional civilian regimes of the twentieth century, in which, paradoxically, the exclusion of the peasantry became more severe. In the final instance, it was the dictatorships (both civilian and military) those to be more receptive than the constitutional democracies to the interests of the peasantry.

Keywords: army, militaries, peasantry, indigenismo, ethnicity, citizenship, authoritarianism, professionalization, civil war.

“Este texto es un ensayo, género en el que se prescinde del aparato crítico para proponer de manera directa una interpretación. Escrito desde una circunstancia particular y sin temor por los juicios de valor, el ensayo es muchas veces arbitrario, pero en su defensa cabría decir que no busca establecer verdades definitivas o conseguir la unanimidad; por el contrario, su eficacia queda supeditada a la discusión que pueda suscitar. Es un texto que reclama no lectores -asumiendo la connotación pasiva del término- sino interlocutores; debe, por eso mismo, sorprender y hasta incomodar. El riesgo que pende siempre sobre el ensayista es el de exagerar ciertos aspectos, y por consiguiente omitir matices, pasando por alto ese terreno que siempre media entre los extremos: los claroscuros que componen cualquier cuadro”.

Alberto Flores-Galindo,
La Tradición Autoritaria

El ejército es no sólo la más antigua de las tres ramas que conforman las fuerzas armadas en el Perú, sino que es la institución estatal que ha estado históricamente más vinculada al campesinado. Los campesinos andinos constituyeron la columna vertebral de los ejércitos caudillistas del siglo XIX y siguieron siendo la principal fuente de soldados y reclutas a lo largo del veinte. Asimismo, es en los poblados rurales donde los militares de un ejército más moderno han sido destacados innumerables veces a servir. La relación entre militares y campesinos es central en cualquier intento de entender la historia política del Perú, la naturaleza de su estado y sus tensiones sociales y étnicas. ¿Por qué entonces no contamos con un estudio integral que de cuenta de ella?

Una primera explicación es la compartimentalización de los campos de conocimiento. Sociedad rural, sociedad civil, militares, Estado y etnicidad se han estudiado como

temas separados más que de manera interrelacionada, pese a que la división entre sociedad civil y militares, y entre sociedad civil y Estado, que hoy damos por sentada, no fue tal en tiempos anteriores a la profesionalización del ejército y de endémica fragilidad estatal, como fue el siglo XIX. En segundo lugar, está la expandida idea de que el campesinado indígena no pasó de ser mudo espectador o carne de cañón en los conflictos caudillistas del XIX, o bien que se mantuvo indiferente a los mismos¹. Si bien, contra estas tesis, los estudios pioneros de Nelson Manrique y Florencia Mallon de la década del ochenta subrayaron el papel activo del campesinado peruano -a través de la formación de guerrillas- durante la guerra Chile (1879-1883), se trató de un conflicto externo, que fueron excepcionales en nuestra historia, y no de una guerra civil, que fue la norma. Hasta hoy, y al margen quizá del trabajo de Nils Jacobsen y Alejandro Diez Hurtado sobre la sierra norte en las postrimerías del siglo XIX y de nuestros propios estudios sobre la provincia de Huanta en las décadas del 1820 al 1840, la participación del campesinado andino en las guerras caudillistas en el siglo XIX permanece sin ser explorada². Por su parte, los estudios sobre la participación política del campesinado en el Perú

1 Incluso, interpretaciones dedicadas a subrayar el rol activo de los campesinos en los inicios de la república terminan avalando las tesis más tradicionales. Por ejemplo, contradiciéndose con lo afirmado en la introducción de su libro, Charles Walker (1999: 212-213) concluye: “los campesinos indígenas permanecieron largamente ajenos a las luchas caudillistas”; y más aún, “el campesinado indígena del sur andino se resistió a pelear en las guerras que decidieron la lucha caudillista”. En similar sentido, ver Paul Gootenberg (1991:145).

2 Ver Manrique (1981), Mallon (1987:232-279 y 1995), Méndez (2005), Jacobsen y Diez Hurtado (2002). Taylor (1986 y 1990) y Nugent (1997) también han analizado el bandolerismo y las montoneras en la sierra norte peruana, pero enfatizando su carácter local y feudal y más que su conexión con el estado nacional o sus bases campesinas.



Afiche promocional de la reforma agraria

del siglo XX se enfocaron tradicionalmente en las llamadas “luchas campesinas”, es decir, en una historia de “resistencia” o rebeliones anti-estatales que, o bien excluía a los militares, o los presentaba como el enemigo natural del campesinado. Finalmente, estudios de síntesis sobre el ejército republicano, incluso los más críticos, ponderados y sociológicamente orientados como los de Víctor Villanueva, han soslayado a la sociedad rural³.

La guerra interna que desangró al Perú en las décadas de los ochenta y noventa y su actual

secuela política, exigen replantear estos esquemas. En aquella coyuntura sucedió algo sólo en apariencia paradójico: la mayor parte de campesinos, organizados en “rondas” y comités de autodefensa, en vez se alinearse con la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso, jugaron en última instancia un rol central en su derrota, de la mano con el ejército. Una mirada retrospectiva sugiere que las alianzas militar-campesinas fueron igualmente decisivas en momentos anteriores de nuestra historia.

3 Ver Villanueva (1973, 1969, 1972 y 1962). El interés por una historia social de los militares se ha venido incrementando recientemente, pero en el caso peruano sin que toque aún a la sociedad rural. Para el Perú son importantes los estudios en curso de Lourdes Hurtado sobre el ejército peruano (véase su artículo en este número de *ÍCONOS*) y la exploración de Humberto Rodríguez Sequeiros en torno a la “La Educación Pre-Militar en el Perú 1939-1956” (ponencia presentada a LASA-Puerto Rico, Marzo del 2006). Para América Latina uno de los trabajos comparativos más notables sobre la participación militar de las poblaciones rurales en la formación del Estado es el de Fernando López Alves (2000). Para Brasil, Peter Beattie (2001) ha analizado el problema de conscripción militar y formación del estado, y Juan Ramón Quintana Taborga (1998) lo ha hecho para Bolivia en su *Soldados y Ciudadanos, Un Estudio Crítico sobre el servicio militar obligatorio en Bolivia*. Para la colonia destaca el trabajo de Ben Vinson III

El proyecto: motivaciones y advertencias

Este ensayo sintetiza algunas hipótesis de un proyecto de investigación que se propone estudiar la relación histórica entre los campe-

(2001) sobre milicias de mulatos en Nueva España. Respecto a la participación campesina en los conflictos caudillistas en América Latina en el siglo XIX existe una literatura ya sustancial, destacando los trabajos de Mallon, Manrique, De la Fuente, Guardino, Salvatore, Guy Thompson, referidos a Argentina y México. Pero nuevamente, estos trabajos se limitan al siglo XIX y no abordan las transformaciones operadas en la relación campesinos-estado con la profesionalización del ejército.

sinos y el ejército en el Perú desde los inicios de la república hasta el presente. El proyecto tiene dos propósitos fundamentales. Primero, calibrar el papel de los militares en la movilización política del campesinado y su incorporación a la política nacional. Segundo, dilucidar la génesis y racionalidad de las ideologías autoritarias y militaristas que han dominado la escena política peruana en las últimas décadas, tanto desde el gobierno (i.e., Fujimori, Velasco), como desde la insurgencia (Sendero Luminoso, etnocacerismo). La investigación se propone observar cómo el paso de un ejército de caudillos, dependiente de montoneras y guerrillas en el siglo XIX, a un ejército profesional con soldados y oficiales formados en escuelas militares en el siglo XX, afecta la relación entre la sociedad rural, el Estado y la sociedad nacional. Uno de los factores que acompañan este tránsito es la creciente separación entre sociedad *civil* y *militares* que hasta ese entonces era bastante porosa y que muchas veces se da por sentada. En un plano más contemporáneo del análisis, proponemos que a partir del último tercio del siglo XIX, los gobiernos militares y los regímenes civiles autoritarios en el Perú han tenido mayores iniciativas — y un éxito mayor— que los gobiernos civiles constitucionales en implementar políticas estatales destinadas a favorecer al los sectores campesinos, es decir, incorporarlos a los beneficios del Estado y la ciudadanía.

Como hipótesis preliminares de un proyecto en ciernes, las ideas que presento en este ensayo no pretenden ser definitivas; mi objetivo es darlas a conocer para estimular una discusión. Este es un texto, como diría Flores Galindo, que “reclama no lectores —asumiendo la connotación pasiva del término— sino interlocutores; debe, por eso mismo, sorprender y hasta incomodar”. “El riesgo que pende siempre sobre el ensayista” prosigue el historiador, “es el de exagerar ciertos aspectos, y por consiguiente omitir matices, pasando

por alto ese terreno que siempre media entre los extremos: los clarosucos que componen cualquier cuadro” (Flores-Galindo 1999:23). Nos permitimos tomar ese riesgo en este espacio. Pero antes valgan unas precisiones adicionales sobre mis motivaciones para emprender esta investigación.

En lo inmediato el tema me atrajo, como lo he afirmado en la presentación del dossier, por la necesidad de explicar el surgimiento e impacto del llamado movimiento etnocacerista, un grupo ultra-nacionalista e indigenista de origen militar surgido paralelamente al colapso del régimen fujimorista en el año 2000. A este interés se suman razones semiautobiográficas, a saber, mi creciente perplejidad respecto a la ausencia de estudios sobre el nacionalismo militar del velascato, o gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), periodo cuya memoria —si acaso se invoca— sigue produciendo reacciones visceralmente negativas en la mayoría de sectores de la opinión pública, tanto de derecha como de izquierda. Para mí, sin embargo (como muchos de mi generación), que viví el periodo como niña escolar de clase media limeña (y no como propietaria de una hacienda o diario expropiados, o una política deportada), Velasco fue el gobernante gracias a quien por primera vez escuché en televisión y radio, con relativa frecuencia, el quechua —lengua vilipendiada y estigmatizada socialmente por su asociación con los campesinos andinos y empleadas domésticas—; con este gesto el gobierno buscaba sembrar orgullo y borrar el estigma que se cierne (aún hoy) sobre esta lengua y, sobre todo, sobre quienes la hablan. Otra de las experiencias que marcó mi percepción del velascato fue cuando el gobierno militar, en un afán simbólico de cerrar las brechas sociales, hizo que todos los escolares vistiéramos un uniforme único, lo que no dejó de causar molestia entre quienes en mi colegio, religioso y particular, se ufanaban de sus uniformes verdes Markyknoll, que

marcaban una diferencia con los de las “cholas” (la palabra es fuerte, pero así se habla/hablaba y sentía), particularmente en los desfiles por fiestas patrias. Ahora todos seríamos iguales. Y esa igualdad incomodaba a muchos, pero como era disposición del “gobierno revolucionario de la fuerza armada”, había que acatar. Sin embargo, el orden oligárquico ya en crisis, al que Velasco propinó quizá el más duro golpe de su historia, sobrevivió gracias en parte una facción del propio ejército, que derrocó al enfermo general y luego se posesionó del gobierno. Una vez en el poder, empezó a dismantelar, una a una, sus reformas. Durante esta (eufemísticamente llamada) “segunda fase” del gobierno militar, se entregó el poder a los civiles, quienes en 1980 eligieron como presidente, irónicamente, al mismo gobernante a quien Velasco había depuesto en 1968: Fernando Belaúnde, representante de una clase alta que vivió de espaldas al país real (y rural) y sus abismos sociales. A Belaúnde le tocaría afrontar los primeros cinco años de la insurgencia más sanguinaria en la historia del país y América Latina: Sendero Luminoso, cuya rebelión no fue sólo contra su gobierno sino contra el sistema democrático en sí mismo, como tan elocuentemente lo expresó su primer atentado terrorista: el bombardeo de un ánfora de las elecciones presidenciales en un pequeño pueblo andino en 1980. Para consumir la ironía, se trataba de la primera elección presidencial del siglo XX en las que votaban los analfabetos. Belaúnde, célebremente caricaturizado por la prensa como un anciano que vivía cegado por una nube que era una prolongación de sus cejas de patriarca envejecido, culpó de los primeros atentados de su gobierno a la “infiltración comunista extranjera”. Cuando reparó que el enemigo anidaba en casa, delegó el asunto a los militares, en especial a la infantería de marina, quienes ante la imposibilidad de capturar al enemigo se dedicaron a arrasar aldeas y matar campesinos,

desplegando una violencia que competía con la de Sendero, e inimaginable en los doce años anteriores de gobierno militar. La historia sigue y toma otros giros, pero por el momento dejémosla aquí.

Cuando se observan en un contexto histórico mayor los hechos que acabo de presentar de modo casi autobiográfico, se entenderá mejor por qué la compleja relación histórica entre campesinos y militares, y entre militarismo y etnicidad, resulta un tema tan urgente como irresistible, en especial para quien ha estado trabajando ya por un largo tiempo la relación entre el ejército, el Estado y la sociedad rural en el temprano siglo XIX, cuando el país vivía desangrado por guerras civiles.⁴

El Perú es, en efecto, un caso verdaderamente desconcertante en América Latina en cuanto a su sistema político y la relación que el ejército ha establecido con las poblaciones indígenas y campesinas. Tres circunstancias históricas recientes lo hacen más evidente. La primera es el ya mencionado gobierno del general Juan Velasco. Cuando en los años sesenta y setenta la mayor parte de países de América Latina estaba regida por dictaduras militares de derecha, altamente represivas, en el Perú el general Velasco Alvarado se enfrentó a la oligarquía peruana y al imperio estadounidense con su política de nacionalizaciones y su legislación pro-campesina. Velasco emprendió una reforma agraria radical, oficializó el quechua, e hizo del rebelde Inca Túpac Amaru II, ejecutado en 1781 por los españoles tras liderar una masiva rebelión contra el orden colonial —hasta entonces personaje marginal en los textos escolares—, un icono oficial del gobierno militar.

Un segundo pacto “militar-campesino” se dio entre la segunda mitad de los ochenta y los noventa cuando el campesinado andino hizo frente común con el ejército para derro-

⁴ Véase mis siguientes trabajos: Méndez (2004, 2005, 2002 y 1997).



Mitín político. Al fondo: Velasco Alvarado y Tupac Amaru

tar la insurgencia del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (SL). Pues pese a las vejaciones de que fue objeto tanto por Sendero como por los militares, el campesinado en última instancia cerró filas mayoritariamente con el ejército para derrotar la insurgencia senderista a través de las llamadas “rondas campesinas”, posteriormente bautizadas como “comités de autodefensa”. Esta alianza, sólo tardíamente oficializada por el gobierno, fue clave en el debilitamiento y la posterior derrota de Sendero Luminoso a nivel nacional. Para entenderla es necesario observar dos factores. Primero, mientras los métodos terroristas de Sendero se tornaban cada vez más vesánicos y cobraban más vidas campesinas, las fuerzas armadas, después de una época inicial de represión brutal e indiscriminada, comprendieron que campesino no equivale a senderista, y a partir de la segunda mitad de la década de 1980 optaron por una táctica de represión selectiva y de acercamiento con el campesinado. Segundo, y relacionado con esto, la alianza entre ronderos y ejército se entiende mejor cuando se repara que el Perú es el único caso en la historia reciente de conflictos armados internos en América Latina en que los grupos alzados en armas y no los representantes del Estado fueron responsables de la mayor parte de atrocidades, incluyendo desapariciones, secuestros y asesi-

natos. De acuerdo al informe de la comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (SL), fue el responsable del 54% de las muertes denunciadas a la CVR, mientras el estado y grupos paramilitares del 37%. Nuevamente, ello contrasta drásticamente con otros países latinoamericanos que sufrieron conflictos armados recientemente. En Guatemala, por citar un caso extremo, el estado fue responsable del 97% de muertes y violaciones de los derechos humanos mientras la guerrilla sólo de un 3%.⁵

La tercera coyuntura es más cercana a la actualidad. En el Perú, la agrupación política que en los últimos años ha levantado banderas abiertamente pro-indígenas no es un movimiento étnico de bases sino una agrupación política militarista fundada por el ex-mayor del ejército, Antauro Humala, el MNP o Movimiento Nacionalista Peruano, más conocido como “movimiento etnocacerista”. Desestimado inicialmente como un folklorismo anacrónico por la mayor parte de analistas, la popularidad de este movimiento creció en proporción geométrica en los últimos años, notablemente en las zonas rurales y en provincias, como fue evidente en las elecciones presidenciales de este año. Aunque Ollanta Humala, ex-oficial del ejército que estuvo asociado con el etnocacerismo, postuló a la presidencia con un partido aparte y tomando distancia de su radical hermano Antauro (hoy preso), lo hizo con una plataforma nacionalista, “anti-neoliberal”, y pro-cocalera, y sin duda capitalizando el trabajo pro-selitista que Antauro había realizado, en especial con los reservistas a nivel nacional. Ollanta fue no sólo el candidato más votado en la primera vuelta electoral, sino que obtu-

⁵ Ver Nelson Manrique, “Carta Abierta a Raúl Wiener”, 6 de Octubre de 2003, documento circulado por internet. Aún si esta cifra fuera exagerada, es un indicador significativo.

vo un significativo 47% en la segunda vuelta; su apoyo fue altísimo a nivel nacional, con excepción de Lima y la costa norte. Significativamente, en las zonas rurales que más sufrieron con la guerra interna, los votos por Humala superaron con creces el 80%, no obstante las denuncias por graves abusos de derechos humanos en su contra, presuntamente cometidos durante las campañas contrainsurgentes. Esta aparente paradoja se entiende mejor cuando se repara que a diferencia de la percepción limeña y urbana de los campesinos como meras víctimas, muchos de ellos, y en especial los ronderos —una buena parte de quienes eran a la vez licenciados del ejército— se perciben a sí mismos como héroes, agentes de la derrota de Sendero, a quien nadie parecía poder doblegar.⁶

Todo ello contrasta con la realidad de otros países latinoamericanos, particularmente Ecuador y Bolivia, donde los abanderados de la lucha antirracista, anti-neoliberal y pro-derechos indígenas fueron organizaciones civiles y políticas de base con gran convocatoria a nivel nacional. ¿Por qué en el Perú un partido de militares disidentes, ex-soldados y reservistas, asume el papel que en nuestros vecinos andinos tiene el movimiento indígena, el mismo que en el Perú permanece, si bien no políticamente inexistente, cuando

menos tenue en comparación? La pregunta, ya formulada en la presentación de este dossier, creemos que trasciende una explicación coyuntural. Ella nos lleva a repensar históricamente la influencia militar en el estudio de la organización campesina y los llamados movimientos indígenas. Al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre el potencial popular del autoritarismo militar.

Sin embargo, pese a que la trayectoria del ejército peruano es excepcional en muchos sentidos, encaja dentro de un contexto andino que no es ajeno al populismo militar y a las alianzas militar-campesinas; con diversas variantes, este tipo alianzas se dio históricamente en Bolivia y Ecuador y (hoy se da) en Venezuela, como enfatizamos también en la introducción al dossier. Los más divulgados esquemas interpretativos del militarismo en América Latina se han basado por lo general en las dictaduras militares del Cono Sur. Pero estos modelos no pueden dar cuenta de la complejidad política de los regímenes militares de la región andina central, ya que las dictaduras militares de Chile, Argentina y Brasil no tuvieron que enfrentar el mismo tipo de tensiones étnicas y raciales a las que estuvieron expuestos los militares en Perú, Ecuador y Bolivia, donde se congrega una mayor cantidad de poblaciones indígenas y no blancas. La vieja tesis que concibe al ejército como un mero “instrumento de la oligarquía” exige ser cuestionada con más contundencia en la región andina.

Ello no debe llevar, por supuesto, ni a la romantización de los caudillos decimonónicos que caracterizó a ciertas corrientes historiográficas, ni a la apología de los populismos militares autoritarios de hoy día.⁷ Se trata más

6 Existe una literatura bastante exhaustiva sobre las rondas campesinas (posteriormente bautizadas por el gobierno como “comités de autodefensa”) y la derrota de Sendero. Véase Degregori, Coronel, Ponciano del Pino y Orin Starn (1996), Carlos Tapia (1997), Stern (1998). Para un estudio más general sobre rondas, véase Orin Starn (1999). Para enfoques más actualizados véase la extraordinaria sección sobre “Comités de Autodefensa” en el *Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, tomo II, Sección segunda: Los actores del conflicto, Capítulo 1: Los actores armados, 1.5. Comités de Autodefensa (CAD), <http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/ii/15.html>. (Lima, 2003). Para una explicación sobre la alta votación de Humala en las zonas rurales más golpeadas por la guerra interna véase Páez (2006), Caballero Marín (2006) y Pajuelo (2006).

7 La idealización del caudillismo como expresión de los “sentimientos populares” está bien encarnada en la obra del venezolano Laureano Vallenilla Lanz, *Cesarismo Democrático (Obras completas, tomo I, Caracas 1983 [1919,])*. Para una discusión crítica de las ideas de Vallenilla ver John Lynch (1992: 423-

bien de desentrañar una ironía: la posible herencia democratizadora del autoritarismo. Y debo reafirmar que hablo de democratización social, no política.

Asimismo, al privilegiar las alianzas entre campesinos y militares no pretendemos desconocer ni minimizar la historia de racismo y violencia que también ha empañado esta relación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado la existencia de miles de “fosas” o cementerios clandestinos a lo largo y ancho del territorio andino, que dan cuenta de un número no insignificante de matanzas y masacres cometidas extraoficialmente por los militares en su lucha contra la insurgencia senderista, la mayor parte de ellas correspondientes al periodo llamado “la guerra sucia” (1983-1984). Mi proyecto intentará dar cuenta también de este lado tanático, procurando explicar la aparente contradicción entre las retóricas pro-indígenas y pro-campesinas presentes en el ejército y sus prácticas racistas y discriminatorias.

Finalmente, al abordar el tema de la imbricación histórica entre militares y campesinos, no es posible hacerlo sin su correlato civil. En el Perú, cuando se contrastan gobiernos militares o de tendencias autoritarias con aquellos que han gobernado bajo las banderas de la democracia, son los últimos los que han tenido mayores dificultades de ganarse el favor de las masas rurales, al menos a partir del último tercio del siglo XIX. Desde sus orígenes, con el civilismo en la década de 1870, la democracia parlamentaria peruana ha tenido un tinte elitista, o cuando menos abrumadoramente urbano. En efecto, resulta revelador que el periodo más prolongado en el que el Perú experimentó gobiernos civiles ininterrumpidos sea conocido como la República Aristocrática (1895-1919), un periodo donde

democracia y gobierno de la oligarquía llegan a ser sinónimos. Pareciera pues que en el Perú los momentos de mayor integración de los campesinos al Estado y a los beneficios de la ciudadanía coinciden con momentos autoritarios. Me refiero en particular, pero no exclusivamente, al llamado “oncenio” o gobierno de Augusto B. Leguía, un dictador civil (1919-30), cuyo gobierno reconoció, por primera vez en la historia republicana, la existencia legal de las comunidades indígenas y sus tierras, creó el “Patronato de la Raza Indígena”, y se hizo llamar sí mismo “defensor” de la misma; y al ya mencionado gobierno de Velasco, de 1968 al 1975.⁸

Al parecer, el fenómeno no sería exclusivo del Perú. Liisa North postula en este dossier que las dictaduras militares de Ecuador posteriores a la década del 1925 fueron más proclives que los gobiernos civiles electos a implementar políticas sociales que favorecieran a las mayorías, con la posible excepción del gobierno de Galo Plaza Lasso (1948-52),⁹ mientras Silvia Rivera (1984: 54) ha usado la sagaz expresión “democracia de casta” para referirse al gobierno de las oligarquías civiles en Bolivia.

Hipótesis: una modernización excluyente

Mi trabajo intentará probar que los campesinos andinos no fueron pasivos espectadores ni permanecieron históricamente al margen del estado republicano durante la mayor parte del siglo XIX, sino que participaron en la formación de estado desde sus inicios, entre otras formas, mediante su incorporación en los ejércitos caudillistas a través de guerrillas. Es lugar común afirmar que esta

424). El mejor ejemplo de la idealización de los caudillos en la historiografía en inglés probablemente sea Bradford Burns (1980).

8 Postulé esta idea con anterioridad en Méndez (2000: 231-248).

9 Véase también North (2004: 187-206).

participación fue resultado de la coacción o el engaño. No pretendo negar la existencia de estas prácticas. La crueldad de la leva, o recluta arbitraria, que afectaba desproporcionadamente a las poblaciones rurales analfabetas, fue denunciada numerosa veces por la prensa por intelectuales progresistas y hasta en obras de ficción de la época, sin que por ello se lograra extirpar.¹⁰ Sin embargo, junto a la leva estaban guerrillas, integradas y comandadas por civiles, que actuaron en concierto con el ejército regular, defendiendo simultáneamente intereses locales, regionales y nacionales.

Las guerrillas eran una adaptación americana de una forma de lucha que se originó en la península ibérica para hacer frente a la invasión de los ejércitos napoleónicos entre 1808 y 1814. Consistían en ejércitos irregulares formados por civiles, usualmente organizados en torno a sus autoridades locales, que actuaban como una fuerza auxiliar del ejército regular. Como he sostenido en trabajos anteriores, durante la guerra civil de 1834, el triunfo del bando liberal representado por el general Orbegoso, que había sido defenestrado del poder por un golpe del conservador general Gamarra, se debió en gran parte al apoyo de las guerrillas de Huanta, la sierra de Lima y Huancavelica, que fueron parte de una movilización nacional masiva en apoyo de Orbegoso, a la que Basadre denominó la “primera manifestación popular contra el militarismo en la historia del Perú”. En la provincia de Huanta esta participación fue el resultado de una movilización negociada entre caudillos nacionales, autoridades concejales y comunales, líderes montoneros y “notables” (autoridades y personajes influyentes) del lugar. Pese a que los campesinos de comunidades y sus líderes inmediatos estaban en la base de esta pirámide social, exigieron y a veces lograron importantes concesiones, como la exoneración del pago al tributo indí-



Manifestaciones campesinas organizadas por SINAMOS en apoyo de la reforma agraria decretada por la junta revolucionaria encabezada por Velasco.

gena y nombramientos como autoridades distritales, tales como gobernadores y jueces de paz, pese incluso a ser en algunos casos virtualmente analfabetos. Una situación similar se produjo en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana (1836-39), en que los campesinos de Huanta volvieron a alinearse con el bando liberal, esta vez representado por el Mariscal Santa Cruz¹¹.

Las guerrillas fueron así una instancia en que los pobladores rurales de los estratos sociales más bajos negociaban sus derechos y

10 Véase Basadre (2002 [1929]: 120-125).

11 Véase Méndez (2004, capítulo 7 y epílogo) y Méndez () Tradiciones Liberales



Mural: *Campesinos, Velasco y Tupac Amaru*

obligaciones para con el Estado, es decir, su condición ciudadana en el sentido más elemental. No sorprende, pues, que los caudillos nacionales usaran profusamente el término “ciudadano” para convocar a las poblaciones campesinas a sumarse a sus lides. Mi investigación intentará probar que este escenario no habría sido exclusivo de Huanta o la sierra central ni de la década de 1830, sino que se dio a lo largo de las guerras civiles del siglo XIX. Confirmar esta hipótesis exigirá por supuesto un arduo trabajo de archivos y fuentes primarias en general.

Complementando provisionalmente mi hipótesis está una historiografía que ha replanteado el tema de la ciudadanía desde el prisma electoral. Una verdadera revolución de estudios sobre constituciones y elecciones viene cuestionando la arraigada idea de que las poblaciones campesinas analfabetas fueron desde el inicio de la república legalmente excluidas de la condición ciudadana. Más bien, esta historiografía ha llamado la atención sobre el carácter relativamente inclusivo de las primeras constituciones al definir los criterios de ciudadanía, particularmente, los trabajos pioneros de Gabriela Chiaramonti. Chiaramonti sostiene que, siguiendo el patrón de la constitución española de 1812 -

la primera en otorgar ciudadanía a los indios en América-, las constituciones republicanas de 1823 a 1851 (y aún la conservadora de 1839) fueron relativamente generosas en otorgar el sufragio. “El requisito de alfabetización, que potencialmente (...) excluía [a los indígenas], aunque estaba previsto en la constitución de 1823”, escribe Chiaramonti, “no se exigió hasta (...) 1844 para los indígenas que residieran en localidades donde faltasen escuelas de educación primaria” (Chiaramonti 2004: 293). Similares disposiciones, nos dice la autora, subsistieron hasta 1851. Los criterios más restrictivos para el sufragio empiezan a perfilarse, según Mauricio Novoa, con la constitución de 1860, que al establecer las categorías de ciudadanos “activos” y “pasivos”, deja “a la gran masa indígena imposibilitada para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”¹². Pero Chiaramonti prefiere situar el quiebre en la ley de reforma electoral de 1896, que establece el voto directo y pone como única condición de sufragio el saber leer y escribir. En 1896, por primera vez de manera tajante y definitiva, una ley republicana excluye a los

¹² Ello, pese a que en teoría habría quedado abierta la posibilidad del voto analfabeto. Ver Novoa (2004: 283).

analfabetos -y por ende a la abrumadora mayoría indígena- de la ciudadanía¹³; éstos volverían a ejercer su derecho al voto sólo en 1980. Si bien los estudios sobre cómo se aplicaron en la práctica estas leyes electorales están en ciernes, la intención de las elites gobernantes de restringir el voto al cerrar el siglo es significativa y congruente con hallazgos en otros lugares de América Latina.¹⁴ Lo irónico en el Perú es que la tendencia a restringir el voto es paralela al ascenso político del civilismo, es decir, del Partido Civil (creado a inicios de la década de 1870), que supuestamente venía a democratizar la sociedad y la política tras casi un siglo de gobiernos militares. No en vano Basadre bautizó al periodo de predominio civilista, que coincidió con el periodo más prolongado de gobiernos civiles en el Perú desde la independencia, como “la Republica Aristocrática” (1895-1919). La ironía se ahonda cuando se repara que el presidente que promulgó la ley electoral de 1896, Nicolás de Piérola, llegó al poder no vía elecciones sino tras una masiva movilización popular, en la que bandas de montoneros (muchos de quienes eran probablemente analfabetos), jugaron un papel central. Una vez en el poder, el propio Piérola se encargó de desbandar esas mismas montoneras y guerrillas para sentar las bases del ejército profesional que hoy poseemos.

Lo que propongo, cotejando mis investigaciones en el plano militar con la nueva literatura sobre elecciones, no es, por tanto, que la exclusión de los campesinos y poblaciones indígenas analfabetas del estado y de los beneficios de la ciudadanía sea una mera invención, sino que esta exclusión, en su

forma más violenta, es un fenómeno más reciente; es producto de factores profundamente paradójicos relacionados con el proceso de centralización y fortalecimiento del estado, y dentro de los cuales me limitaré a considerar dos: a) la profesionalización del ejército y b) la modernización de la infraestructura del país a partir de la expansión del sistema de carreteras a las zonas rurales.

La profesionalización del ejército, que se inicia a fines del siglo diecinueve con la llegada de la Misión Francesa invitada por el presidente Piérola en 1896, supone la creación de las escuelas de oficiales que hasta hoy tienen vigencia. Esta profesionalización vendrá a producir un desplazamiento en la relación que los campesinos habían establecido hasta entonces con el estado, sus sociedades regionales y la sociedad nacional. Mientras los ejércitos caudillistas del siglo XIX dependieron del apoyo de sociedades y economías rurales, incluidos guerrilleros, montoneros, autoridades civiles, arrieros, hacendados y las mujeres que acompañaban a los soldados (o “rabonas”), con la profesionalización el ejército dependerá menos de estos factores en la medida en que se convierta en una institución autónoma, dependiente de un presupuesto estatal. Un ejército que ha institucionalizado la educación del soldado devendrá más poderoso institucionalmente y más influyente políticamente. Asimismo, en la medida en que el ejército dependa menos de las economías rurales, de sus mujeres y de las guerrillas, se establecerá como una entidad crecientemente masculina y distante de las sociedades rurales, de las cuales antes dependió tan estrechamente.¹⁵ La relación del ejército con

13 Véase Chiaramonti (1995: 315-316 y 2005: 325-358).

14 Ver, por ejemplo, Annino (1995). Para la evaluación más reciente del tema de ciudadanía en los Andes, ver Irurozqui (2005). Para Argentina ver Sabato (1998), para Colombia ver Sanders (2005), para México ver Guardino (2005), para Perú ver Aljovín y López, eds. *Historia de las Elecciones*.

15 Solemos pensar al ejército como una institución eminentemente masculina, pero en el siglo XIX las mujeres que acompañaban a los soldados en sus campañas, las llamadas rabonas, no se circunscribían al plano doméstico sino que formaban parte de las estrategias militares; por ello hay quien las llama “la vanguardia del ejército”. A fines de la década de 1830, el viajero

el campesinado no se interrumpe pero cambia de cariz; se vuelve más jerárquica, dejando a éste con cada vez menor capacidad de maniobra política en la medida en que lo hace más dependiente del estado, allí donde antes éste dependió de los campesinos. Este proceso, argumentaré, se cristaliza con Velasco pero sus orígenes pueden rastrearse con Augusto B. Leguía (1919-1930), un dictador civil. En otras palabras, sostendré que la profesionalización del ejército trajo consigo una “proximidad que separa”. O, para decirlo en los elocuentes términos que el historiador James Brooks usara para un contexto y actores muy diferentes, con la profesionalización el ejército y los campesinos “become closer and closer apart”. Esta “proximidad que separa”, sostendré, ha alimentado los desplazamientos que están en la base de las ideologías mesiánicas y redentoristas por parte del militarismo, con grados que varían de Velasco a Humala. Las doctrinas de seguridad nacional, típicas de la Guerra Fría, cumplieron su propio rol en alimentar el mesianismo militar y serán consideradas en este análisis.

Por otro lado, el advenimiento de las carreteras a las zonas rurales tiene efectos similares que no advirtiera Polanyi en *La Gran Transformación* (1944). La expansión del sistema vial a pueblos que estuvieron interconectados por rutas de arriaje elimina a los arrieros y pequeños hacendados, personajes claves tanto por su rol articulador en las economías rurales como por su condición de intermediarios políticos entre caudillos militares y campesinos. La aparición de las carreteras y, más recientemente, de las *combis* (camionetas privadas que ofrecen transporte público) aumenta la movilidad y promueve diversos grados de asimilación y

de integración cultural y económica del campesinado a la sociedad urbana y nacional, que han sido bien estudiados. Sin embargo, políticamente se ahondan los desplazamientos. Es decir, los nuevos intermediarios políticos entre los campesinos y el estado no son más los arrieros, montoneros, alcaldes y hacendados, sino partidos políticos y las ONGs. A diferencia de los antiguos intermediarios, éstos vienen, literalmente, de fuera, y tienen poco o nada que ver con la vida material y cotidiana de las comunidades. En este contexto se entroniza la violencia política de Sendero Luminoso.

Estos desplazamientos políticos, que son producto de la modernización del siglo veinte -una modernización en muchos sentidos excluyente- han moldeado la percepción historiográfica y política de los campesinos como históricamente aislados y ajenos a los avatares políticos de la nación y de la formación del estado, que es profundamente equivocada.

El factor educativo

La hipótesis que acabo de delinear, al ser puesta a prueba, deberá ser matizada al incluir una variable hasta ahora no mencionada: el tema de la educación.¹⁶ Pues si bien el proceso de profesionalización del ejército marca una distancia económica y material entre el mundo militar y el universo campesino, posibilita, al mismo tiempo el acceso formal del campesinado a las esferas de la instrucción militar al establecerse el servicio militar obligatorio. Anteriormente a este proceso, en las décadas de 1860 y 1870, la agenda de la educación fue también central al movimiento civilista, dejando sentir su impacto entre los oficiales del ejército que

suizo Joahnn Jakob Von Tscudi escribió: “En los ejércitos hay casi siempre tantas mujeres como hombres. Cuando Santa Cruz entró en Lima, su ejército consistió de 7,000 hombres seguidos por 6,000 mujeres” (Johann Jakob Von Tschudi 2003:59).

16 Agradezco a Iván Caro, Lourdes Hurtado y Eduardo Toche por llamar mi atención sobre este aspecto.

estaban más en contacto con el mundo rural. La importancia del tema amerita una última reflexión.

Usualmente se dice que la única manera en que los campesinos han conocido el estado en las zonas rurales es a través de policías, militares y autoridades abusivas. No dudo que ello sea cierto en incontable casos. Sin embargo, lo que se dice menos es que fue en los cuarteles donde muchos campesinos aprendieron el castellano y a leer y escribir. Si el ejército ha sido visto, con razón, junto con la policía, como el brazo represivo del estado, fue también un ente “civilizador”. En Ecuador los militares impartieron educación a las poblaciones indígenas de manera no muy distinta a la que lo hicieron los misioneros y los maestros, particularmente en las zonas fronterizas de la amazonía, donde no llegaban ni escuela ni iglesia (Ortiz 2006). En Bolivia el servicio militar obligatorio representa para poblaciones rurales muy pobres la única manera de acceder a la escuela, y constituye un verdadero “rito de pasaje” hacia la condición de “hombre”, y no únicamente en el campo.¹⁷ Según Juan Ramón Quintana, muchos usan el servicio militar como una fuente de estatus, autoestima y movilidad social que compensa el estigma asociado a una educación primaria y secundaria inconclusa (Quintana 1998). En el Perú la educación de los campesinos en los cuarteles tuvo repercusiones políticas que no han sido suficientemente ponderadas. Por ejemplo, en las primeras dos décadas del siglo XX, los “licenciados” (personas que han realizado su servicio militar) y en algunos casos los sargentos, se convirtieron en dirigentes campesinos que defendieron los intereses de sus comunidades frente al creciente despojo las haciendas. La historiografía ha pasado virtualmente inadvertido

17 Comunicación personal con Enrique Herrera, quien incluso refiere que en Bolivia hay quienes pagan para ser admitidos en el servicio militar (Lima, julio de 2005).



el hecho de que uno de los más carismáticos líderes campesinos del Cuzco en la época de Leguía, Domingo Huarca, fuera un sargento. Huarca, que murió descuartizado por agentes de los gamonales en la provincia de Espinar, tras defender los intereses comerciales de las comunidades indígenas por sobre los de las haciendas, es hasta hoy recordado como un mártir por los comuneros de la provincia.¹⁸ No era un caso aislado. Steven Pent sostiene que la dirigencia del Comité Pro-Derecho Indígena Tawantinsuyu (CPDIT), la primera organización pan nacional que agrupaba al campesinado indígena peruano para luchar por sus derechos, estaba compuesta en parte

18 Ver Steven Pent, Tesis de maestría en curso, Programa de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, Universidad de California en Santa Bárbara.



Reforma Agraria: Segundo Hito.

por licenciados, así como por la plana de maestros voluntarios de las escuelas rurales creadas por dicha organización, que en sus orígenes contó con el aval del gobierno de Leguía. Pent llega a afirmar que la influencia de licenciados en la dirigencia del movimiento explica en parte no sólo la disciplina y organización del CPDIT sino sus rasgos marciales, expresados a veces en desfiles donde se proclamaban los “derechos indígenas”¹⁹. La historia de los sargentos y licenciados-líderes campesinos en la época de Leguía se repite, aunque en un contexto y con un enemigo muy distintos, con la historia de los ronderos-licenciados en la época del senderismo.

Incluso las poderosas organizaciones obreras y campesinas de Bolivia, que no tienen par en el Perú, se nutrieron, en sus inicios, de reservistas que volvían de la Guerra del Chaco. En efecto, los nuevos partidos de izquierda que surgen en las décadas de 1930 y 1940, incluidos el POR, PIR y MNR, tienen como “prin-

¹⁹ Ibidem.

cipal soporte orgánico... a las asociaciones de ex-combatientes, que le abrieron el acceso no sólo a la nueva generación militar, sino también al emergente sindicalismo obrero y campesino en distintas regiones del país”²⁰.

La historiografía peruana no es ajena a la asociación entre personajes militares y sublevaciones campesinas. Resaltan, por un lado, el caso del coronel Juan Bustamante, uno de los iniciadores del indigenismo social en el siglo XIX, fundador de la Sociedad Amiga de los Indios, que muriera decapitado en 1868 en una violenta represión contra una rebelión campesina que se le acusaba de haber instigado en la provincia de Huancané (Puno). Por otro lado, está el ya célebre mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como “Rumi Maqui”, asociado con otra rebelión campesina en Puno en 1915. Sin embargo, no se ha reflexionado suficientemente sobre el origen militar de estos personajes. No creo que se trate de meras coincidencias. Nos atrevemos a afirmar, más aún, que el indigenismo del coronel Bustamante puede haber influido de manera directa en el pensamiento liberal de comienzos del siglo XX, específicamente en las ideas de uno de los más acérrimos críticos de la política peruana y el militarismo, Manuel Gonzáles Prada. Su célebre frase “no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan en la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera”, parece una paráfrasis de un texto de Juan Bustamante²¹. En otras palabras, si bien se ha tratado de ver al ejército

²⁰ Ver Zavaleta (1977:106).

²¹ Bustamante escribió: “No sólo constituye la nación peruana la asociación de individuos moradores de la costa del Perú sino también los pueblos de indios del interior...”, a lo cual agregó: “mi lema y mi programa son que los indios no sean excluidos de los beneficios sociales que la esplendente independencia del Perú prodiga a los blancos”. Ver Bustamante (1867, citado en Cotler 2005: 37). Para el texto de Gonzales Prada

como un ente separado de la sociedad civil, esto es mucho más acertado en tiempos recientes en que el ejército se consolida como “institución cerrada”²². Muchas veces se olvida que esta separación fue un producto histórico y no un hecho inmutable.

Bien es cierto que los gérmenes de esta separación existían con anterioridad al siglo XX. Desde el momento en que los Borbones en la segunda mitad del siglo XVIII instituyen en sus colonias de ultramar el “fuero militar” para alentar la formación de milicias que defiendan al reino contra las imperios rivales y sublevaciones internas, surge la idea de una casta militar que, como la casta religiosa, tiene códigos específicos que la protegen de las leyes que juzgan a la población civil; este sentido de “privilegio de casta” sería heredado por el ejército de la temprana república²³. Sin embargo, varios factores impidieron que la línea divisoria entre militares y población civil fuera muy marcada hasta tiempos más recientes. Uno de ellos es el estado constante de guerras civiles que enfrentaban a los caudillos militares entre sí, y no tanto contra población civil; no estaban dadas entonces las condiciones para la emergencia de una “mentalidad militar” definida por oposición a los civiles. A ello se sumaba la dependencia logística y humana en que los jefes militares se encontraban con respecto a las poblaciones civiles, principalmente rurales, y que ya hemos mencionado, que impedía un aislamiento radical, incluso espacial,

de los militares con respecto a la población civil. A mediados del siglo XIX, cuando se realizaba la odiada leva, los levados eran reclutados en una iglesia o capilla, a falta de un cuartel; esta práctica continuó hasta entrado el siglo XX²⁴. Es sólo con la institucionalización del ejército, y el consiguiente fin de las guerrillas y montoneras, en suma, con la profesionalización, que el ejército emerge como una “institución cerrada” con sus espacios propios y una cultura y valores marcadamente diferenciados de los civiles²⁵. Este estado de cosas no puede proyectarse al siglo XIX.

Reflexiones finales

Este ensayo ha querido mostrar la utilidad de un enfoque histórico para entender procesos políticos y sociales recientes que vinculan al ejército con el campesinado y las poblaciones llamadas indígenas. Nuestro recorrido por la relación militares-campesinos ha querido ir más allá de los lugares comunes sobre militarismo para subrayar la importancia del ejército en la organización y movilización política del campesinado, de un lado, y de otro, el carácter relativamente reciente de la separación sociedad civil-militares. Asimismo, hemos cuestionado otros presupuestos que con mucha facilidad se proyectan al pasado, pese a que surgieron para explicar realidades más recientes, como la expandida idea de que la sierra y sus habitantes estuvieron excluidos de la vida nacional y de la ciudadanía “desde siempre”.

ver sus *Ensayos Escogidos*, selección y prólogo de Augusto Salazar Bondy (Lima: Patronato del Libro Peruano, Empresa Gráfica Scheuch, 1956), p. 22.

22 Sobre el concepto de “institución cerrada” ver Lourdes Hurtado (2004).

23 Véase José Ragas (2005: 40 y 41) y Leon G. Campbell (1978). El estudio por excelencia del ejército en la época caudillista temprana sigue siendo el de Jorge Basadre. *La Iniciación de la República* (1929-30), recientemente reeditados por la Universidad de San Marcos. Según Basadre el fuero militar subsistió hasta 1856.

24 Véase el testimonio de 1851 del viajero E.S. Lavandais en Jorge Basadre, *La Iniciación* tomo I, p. 96-97. Esta práctica subsistió hasta entrado el siglo XX; véase Mario Razzeto (1982: 66).

25 Sobre la cultura del ejército peruano en el siglo XX véase Lourdes Hurtado, “Uniformes, hombres y armas”. Según Nunn (1979), el “profesionalismo militar” surge precisamente cuando los militares desarrollan una “mentalidad uniforme”, que se mantiene pese a los cambios de gobierno, y se define en contraposición a los civiles.

La historia no funciona, pues, de forma lineal y progresiva. Es sinuosa y puede ser circular.

Precisamente, la realidad que nos ha convocado a discutir estos temas -una guerra civil reciente entre peruanos- rompe con el patrón del ejército profesional que hemos descrito para el siglo XX y nos remite a un escenario más afín al siglo XIX, pródigo en guerras civiles. Como entonces, en la reciente guerra civil entre el Estado y Sendero Luminoso, el ejército por sus propias fuerzas no pudo batir al enemigo y, como entonces, también tuvo que recurrir a la movilización campesina -los ronderos- que, asumiendo el papel de guerrilleros decimonónicos, jugaron un rol decisivo en el desenlace del conflicto interno. Como en el siglo XIX, los militares dependieron incontables veces para su subsistencia de los recursos que les proporcionara la población campesina, los que a veces les eran arrebatados a la fuerza. La diferencia es que mientras en el siglo XIX los guerrilleros se alineaban en última instancia detrás de un caudillo militar, los ronderos se organizaban sobre bases comunales.

Pese a que la guerra ha terminado hace ya varios años, existen aproximadamente 250.000 ronderos que se resisten a ser desarmados. Sobre ello la prensa y los analistas sociales parecieran haber tendido un manto de silencio. Otro silencio, censor o temeroso, pesa sobre la época y las reformas de Velasco, muchas de las cuales, por haber quedado inconclusas, se manifiestan hoy como una demanda latente. ¿Por qué pues sorprenderse que un candidato militar cuestionado por presuntos delitos contra los derechos humanos haya tenido un apoyo tan vasto entre los campesinos en las últimas elecciones presidenciales? Estas son realidades y silencios a los que es moralmente necesario prestar mayor atención, esto es, si se quieren evitar nuevos baños de sangre y una vuelta circular al caudillismo de otros tiempos.

26 Las cifras corresponden al año 2004. Agradezco la referencia a Eduardo Toche.

Bibliografía

- Aljovín de Losada, Cristóbal y Sinesio López, editores, 2005, *Historia de las Elecciones en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Annino, Antonio, 1995, *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*, Fondo de Cultura Económica, Argentina.
- Basadre, Jorge, 2002 [1929], *La Iniciación de la República*, Tomo I, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- Beattie, Peter, 2001, *The Tribue of Blood*, Duke University Press, Dirham.
- Burns, Bradford, 1980, *The Poverty of Progress: Latin America in the Nineteenth Century*, University of California Press, Berkeley.
- Caballero Marín, Víctor, 2006, "En busca del voto rural", en *Quehacer* No. 159, DESCO, Perú.
- Campbell, Leon, 1978, *The Military and Society in Colonial Peru 1750-1810*, The American Philosophical Society, Filadelfia.
- Chiaromonti, Gabriela, 2005, "A Propósito del Debate Herrera-Gálvez de 1849: Breves Reflexiones sobre el Sufragio de los indios Analfabetos", en Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López, *Historia de las Elecciones en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- , 2004, "Los Nudos del Sufragio: un problema de gobernabilidad republicana", en Carmen McEvoy, editora, *La Experiencia Burguesa en el Perú*, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt.
- , 1995, "Andes o Nación: La Reforma Electoral de 1896 en el Perú", en Antonio Annino, coordinador, *Historia de las Elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*, Fondo de Cultura Económica, Argentina.
- Comisión de la Verdad, 2003, *Informe del Comisión de la Verdad y Reconciliación*, Perú.
- Cotler, Julio, 2005, *Clases, Estado y Nación en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Degregori, Carlos Iván, José Coronel, Ponciano del Pino, y Orin Starn, 1996, *Las Rondas Campesinas y la Derrota de Sendero Luminoso*,

- Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Flores-Galindo, Alberto, 1999, *La tradición autoritaria: violencia y democracia en el Perú*, Casa de Estudios del Socialismo, Lima.
- Gonzales Prada, Manuel, 1956, *Ensayos escogidos*, Patronato del Libro Peruano, Empresa Gráfica Scheuch, Lima (selección y prólogo de Augusto Salazar Bondy).
- Gootenberg, Paul, 1991, "Population and Ethnicity in Early Republican Peru: Some Revisions", en *Latin American Research Review* No. 26, Universidad de Texas.
- Guardino, Peter, 2005, *The Time of Liberty Popular Political Culture in Oaxaca, 1750-1850*, Duke University Press.
- Hurtado, Lourdes, 2004, "Uniformes, hombres y armas: una aproximación civil sobre la cultura militar del Ejército Peruano", monografía inédita, Lima.
- Irurozqui, Marta, editora, 2005, *La mirada esquiva: reflexiones históricas sobre la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú) siglo XIX*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
- Jacobsen, Nils y Alejandro Diez Hurtado, 2002, "Montoneras, La Comuna de Chalaco y la revolución de Piérola: La sierra piurana entre el clientelismo y la sociedad civil", en Escobar Ohmstede, Antonio y Romana Falcón, coordinadores, *Los ejes de la disputa: movimientos sociales y actores colectivos en América Latina, siglo XIX*, Cuadernos de Historia Latinoamericana No. 10, AHILA, Iberoamericana, Vervuert, pp. 57-131.
- Jakob Von Tschudi, Johann, 2003, *El Perú, esbozos de viajes realizados entre 1838 y 1842*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, Lima.
- López Alves, Fernando, 2000, *Democracy and State Formation in Latin America*, Duke University Press, Durham.
- Lynch, John, 1992, *Caudillos in Spanish America*, Clarendon Press, Oxford.
- Mallon, Florencia, 1995, *Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru*, University of California Press, Berkeley.
- , 1987, "National and Antistate Coalitions in the War of the Pacific: Junín and Cajamarca, 1879-1902", en Steve Stern, editor, *Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World: 18th to 20th Centuries*, University of Wisconsin Press, Madison.
- Manrique, Nelson, 2003, "Carta Abierta a Raúl Wiener", documento circulado por Internet.
- , 1981, *Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile*, Centro de Investigación y Capacitación, Lima.
- Méndez, Cecilia, 2005a, *The Plebeian Republic: The Huanta Rebellion and the Making of the Peruvian State, 1820-1850*, Duke University Press, Durham.
- , 2005b, "Tradiciones Liberales en los Andes o la ciudadanía por las armas", en Marta Irurozqui, editora, *La mirada esquiva: reflexiones históricas sobre la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú) siglo XIX*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
- , 2004, "Tradiciones liberales en los Andes: militares y campesinos en la formación del estado peruano", en *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, vol. 15, No. 1, Tel Aviv University.
- , 2002, "El Poder del nombre o la construcción de identidades nacionales y étnicas en el Perú: mito, historia y los iquichanos", Documento de Trabajo, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- , 2000, "La tentación del olvido: guerra, nacionalismo e historia en el Perú", en *Diálogos en Historia*, No. 2, UNMSM, p. 231-248.
- , 1997, "Pactos sin tributo: caudillos y campesinos en el nacimiento de la república", en Rossana Barragán, et al, *En siglo XIX en Bolivia y América Latina*, Coordinadora de Historia, La Paz.
- North, Liisa, 2004, "State Building, State Dismantling and Financial crises in Ecuador", en Joe Marie Burt y Phillip Mauceri, editores,

- Politics in The Andes*, University of Pittsburgh Press.
- Novoa, Mauricio, 2004, "La civitas inconclusa: ideas sobre la soberanía de la nación en 1860-1900", en Carmen McEvoy, editora, *La Experiencia Burguesa*, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt.
- Nugent, David, 1997, *Modernity at the Edge of Empire: State, individual and nation in the northern peruvian andes 1885-1935*, Stanford University Press, Stanford.
- Nunn, Federick, 1979, "Professional Militarism in Peru: Historical and Theoretical Background of the Golpe de Estado of 1968", en *Hispanic American Historical Review*, vol 59 no. 3.
- Ortiz, Cecilia, 2006, *Indios, militares e imaginarios de nación en el Ecuador del siglo XX*, FLACSO-Ecuador, Abya-Yala, Quito.
- Páez, Ángel, 2006, "El voto paradójico de las víctimas", documento circulado por Internet.
- Pajuelo, Ramón, 2006, "La Gente se ha pasado la voz", en *Argumentos* No 4, Universidad Autónoma Metropolitana, México.
- Quintana Taborga, Juan Ramón, 1998, *Soldados y ciudadanos. Un estudio crítico sobre el servicio militar obligatorio en Bolivia*, Programa Estratégico en Bolivia, La Paz.
- Ragas, José, 2005, "El discreto encanto de la milicia: ejército y sociedad en el Perú borbónico", en Gabriela Chiaramonti, *Ciudadanía y representación el Perú 1808-1860: los itinerarios de la soberanía*, UNMSM, Lima.
- Razzeto, Mario, 1982, *Don Joaquín, testimonio de un artista popular andino*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Rivera Cusicanqui, Silvia, 1984, *Oprimidos Pero no Vencidos: Las luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia, 1900-1980*, UNRIDS/CSUTCB, Ginebra.
- Rodríguez Sequeiros, Humberto, 2006, "La educación pre-militar en el Perú 1939-1956", ponencia presentada a LASA-Puerto Rico.
- Sábato, Hilda, 1998, *La política en las calles: entre el voto y la movilización, Buenos Aires 1862-1880*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
- Sanders, James, 2005, *Contentious Republicans: Popular Politics, Race, and Class in Nineteenth-Century Colombia*, Duke University Press.
- Starn, Orin, 1999, *Night watch: The Politics of Protest in the Andes*, Duke University Press, Durham.
- Stern, Steve, editor, 1998, *Shining and Other Paths, War and Society in Peru, 1980-1995*, Duke University Press, Duhram.
- Tapia, Carlos, 1997, *Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima
- Taylor, Lewis, 1986, *Bandits and Politics in Peru: Landlord and Peasant Violence in Hualgayoc 1900-1930*, Cambridge University Press.
- , 1990, *Society and Politics in Late Nineteenth Century Peru: Contumazá 1876-1900*, Liverpool.
- Vallenilla Lanz, Laureano, 1983 [1919], *Cesarismo democrático. Obras completas*, Tomo I, Universidad de Santa María, Caracas.
- Villanueva, Víctor, 1973, *Ejército peruano: del caudillaje anárquico al militarismo reformista*, Editorial Juan Mejía Baca, Lima.
- , 1972, *100 Años del ejército peruano. Frustraciones y cambios*, Editorial Juan Mejía Baca, Lima.
- , 1969, *¿Nueva Mentalidad Militar en el Perú?*, 3ª edición, Editorial Juan Mejía Baca, Lima.
- , 1962, *El militarismo en el Perú*, Impresa Gráfica T. Scheuch, Lima.
- Vinson, Ben III, 2001, *Bearing Arms for His Majesty*, Stanford.
- Walker, Charles, 1999, *Smoldering Ashes: Cuzco and the Creation of Republican Peru*

¿Ciudadanos armados o traidores a la patria?

Participación indígena en las revoluciones bolivianas de 1870 y 1899

Armed Citizens or traitors to the patria?

Indigenous participation in the Bolivian revolutions of 1870 and 1899

Marta Irurozqui

Instituto de Historia - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

Email: mirurozqui@ceh.csic.es

Fecha de recepción: mayo 2006

Fecha de aceptación y versión final: julio 2006

Resumen

Mediante la comparación de la participación armada de los indígenas en las guerras civiles de 1870 y 1899, se analiza la naturaleza cambiante del acceso de esta población a la ciudadanía. La alianza entre los indios y los estamentos armados incide en dos aspectos. Primero, muestra, en primer lugar, cómo los primeros no sólo no vivieron de espaldas al proceso de construcción nacional ni fueron ajenos a las concepciones, proyectos o empresas políticas decimonónicas, sino que se constituyeron en sujetos sustanciales en la institucionalización/rearticulación territorial del Estado gracias a asumir como propia la narrativa ciudadana de cooperación nacional en su defensa grupal. Segundo, a través de la compleja figura del “soldado/nacional/ciudadano armado” refleja la capacidad de los conflictos bélicos para generar cambios de percepción y adscripción ciudadanas y para influir en los procesos identitarios de desindianización y reindianización.

Palabras clave: ciudadanía, Estado, guerra civil, identidad

Abstract

This article compares the indigenous armed participation in the Bolivian civil wars of 1870 and 1899 paying special attention to this population's changing access to citizenship. The alliance between the indians and the militaries shows, in the first place, how indians were neither alien to the process of national construction nor aloof from the political conceptions and projects of the nineteenth century, but that they became, moreover, central subjects in the institutionalization and territorial rearrangement of the State insofar as they assumed the narrative of citizenship and national cooperation as their own, on behalf of their own defense as a group. Secondly, the complex image of the “soldier/nacional/armed citizen” suggests the capacity of armed conflicts to generate changes of perception about citizenship and citizen belonging, and to influence the processes of indianization and reindianization of identities.

Keywords: citizenship, State, civil war, identity

A través de diversos medios de comunicación bolivianos e internacionales, la llegada de Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) a la presidencia ha puesto en evidencia que la percepción pública de lo indio/indígena en su proyección nacional sigue moviéndose entre dos estereotipos identitarios ahistóricos, simplistas y antagónicos. Por un lado, está aquel que se centra en la dimensión victimista e insiste en la justa necesidad de que las sociedades indígenas tomen el poder político “después de 500 años de marginación del mismo”. Por otro, está el que hace hincapié en su primitivismo y en una tradición prehispánica despótica, responsables de hacerles encarnar cualidades poco propicias con respecto a la democratización del país¹. Es decir, la justificación del derecho de la población indígena a ocupar espacios políticos en el presente se resuelve con una exagerada dignificación de las virtudes innatas de su identidad frente a las exclusiones provocadas por las experiencias coloniales; mientras que su negación se soluciona mediante una postura despreciativa hacia esta población que, catalogándola de arcaica, fundamentalista e ignorante, cuestiona su condición de sujetos políticos y la condena a la subordinación natural. Sin embargo, pese a su oposición, ambos estereotipos identitarios, indio víctima o indio premoderno, coinciden en asumir al indígena o a lo indígena como un “otro” inalterable en el tiempo que con paciencia acecha en la sombra para conquistar su libertad o para subvertir la modernidad. El resultado es una continua recreación y autorecreación maniqueas de un colectivo llamado indio/indígena cuya identidad se naturaliza y cosifica, impidiéndose un relato histórico compartido y conjunto con el resto de la población nacional.

¹ Sobre ambas posiciones véanse *Bolpress, La Prensa*, Editores Asociados S.A. o *El País*, octubre 2005-enero 2006.

Esa lectura estereotipada de lo indio responde en gran medida a construcciones historiográficas formalizadas en la segunda mitad del siglo XIX que han permeado, unas veces acrítica y otras interesadamente, las interpretaciones académicas del siglo XX y las acciones políticas consecuentes, dando lugar a una visión de la historia nacional reducida a un enfrentamiento entre víctimas y verdugos del que sólo puede esperarse culpas y condenas (Barragán 2000b, Irurozqui 2006b). Frente a esa polaridad perversa, el propósito de este texto es incidir en la centralidad de la población indígena en la definición gubernamental a partir de la discusión de dos tópicos: la exclusión absoluta de los indígenas de la sociedad y el desinterés de éstos en insertarse en la nación e influir en el desarrollo de políticas públicas. Tal cuestionamiento se realizará mediante el estudio de la participación armada india en las guerras civiles de 1870 y 1899, siendo su interés central ilustrar la capacidad de la violencia política no sólo para generar cambios en la identidad de los colectivos que la ejercieron, sino también en la percepción pública de los mismos. Ello va a abordarse a través de una doble problemática relacionada: la naturaleza cambiante del acceso indígena a la ciudadanía y los procesos de desindianización y reindianización de parte de la población boliviana.

Ciudadanía y violencia armada

Al ser la ciudadanía históricamente percibida como una facultad que debía ser aprendida y un privilegio que debía ser ganado, con independencia de lo establecido en las leyes, su adquisición y formalización públicas dependió del peso social que tuvieran sus dos componentes básicos: los deberes y los derechos. El dominio de los primeros dio lugar a la *ciudadanía cívica*, constituida por sujetos colectivamente comprometidos con su medio,

cuyos derechos procedían del libre e individual ejercicio de las obligaciones comunitarias, mientras que el peso de los segundos constituyó la *ciudadanía civil*, integrada por consumidores o detentadores exclusivos de derechos, quienes para su disfrute no estaban obligados al cumplimiento de “cargas” colectivas o a la demostración de méritos comunitarios (Irurozqui 2005). ¿Cómo afectó esa variación ciudadana a los indígenas?

En el contexto de la *ciudadanía cívica* se perfilaron tres figuras de devoción y servicio a la causa pública como fuente de identidad ciudadana -contribuyente, trabajador productivo y soldado/nacional armado- que no adquirieron la misma importancia a la vez. Si en las primeras décadas de vida republicana, el problema de cómo sanear la hacienda pública y lograr la estabilidad financiera convirtió al tributo indígena en un elemento central tanto del proceso de institucionalización del Estado como de definición del indio como ciudadano, a finales de la década de 1850 la situación comenzó a variar. Mientras en un inicio el Estado debía actuar de motor transformador de la sociedad, en un segundo momento sólo debía programar una oferta de bienes y servicios útiles a tal fin y dejar que fuese esa sociedad la que dirigiera el bienestar y el beneficio de toda la comunidad. Como a mediados del siglo XIX Bolivia no había alcanzado las cotas de progreso esperadas tras la independencia, aquellos colectivos a los que se suponía que el Estado había otorgado mayores atenciones fueron culpados de entorpecer la mejora nacional. Dado que los indígenas habían mantenido su privilegios coloniales en lo relativo a la tierra y a la jurisdicción sobre la misma a cambio de ser tributarios y de hacerse cargo de la modernización del agro, el hecho de que no se hubiera producido la revolución agraria esperada hizo que el dinero procedente del tributo dejase de verse como crédito industrial y que la estructura comunitaria se asumiese como una

rémora arcaica que impedía la riqueza nacional. Ello provocó que el indio pasase de ser concebido como un trabajador productivo, generador de impuestos y de ganancia agrícola, a ser considerado un individuo que debía ser incorporado humanitariamente a la sociedad civilizada desvinculándole de sus tradiciones y prácticas, ya que se había demostrado que la conservación de éstas atentaba contra el desarrollo del país.

Como la mercantilización de las relaciones de autoridad y poder en nombre de construir una sociedad con “hombres libres e individuales” amenazaba el entramado comunitario y su estructura regional, hubo rechazo indígena a secundar las reformas agrarias, siendo tal actitud interpretada como procedente de una colectividad precivilizada, ignorante y bárbara y, por tanto, reafirmada la oferta criolla de que había que transformar las formas de organización rurales para evitar el estancamiento económico. Así, en la década de 1860 se discutió sobre las formas, mecanismos y estrategias más eficaces para lograr la desaparición de las comunidades. Fue en este contexto donde la figura del indio soldado cobró importancia como categoría de revitalización ciudadana. Esto sucedió tanto porque los indígenas había incorporado las claves de utilidad y de cooperación de la *ciudadanía cívica* y se reinventaban una función de servicio a la sociedad, como porque las reformas agrarias amenazaban con minar la estrategia de institucionalización del Estado en el medio local. Si en las primeras décadas republicanas los indios ayudaban a reforzar la autoridad y la solvencia económica del Estado a través del tributo, en la segunda mitad del siglo XIX lo hicieron mediante su intervención en conflictos civiles en calidad de fuerzas auxiliares. Tal ejercicio de patriotismo no sólo les mostraba como “ciudadanos armados” benefactores de la seguridad pública, sino que les hacía desempeñar un objetivo institucional: la “domesticación” de los poderes locales y la

rearticulación de una administración nacional (Platt 1982, Irurozqui 2006).

Ahora bien, ¿la conversión del indio en soldado significó lo mismo en 1870, momento en que dominaba la lógica del bien común, de la contribución colectiva y de los méritos locales propia de la *ciudadanía cívica*, que en 1899, momento en que los dictados de la *ciudadanía civil* imponían que la determinación de si un sujeto era o no ciudadano dependiera de su grado de civilización en términos de homogeneidad cultural?

Los indios y la guerra

En las guerras civiles de 1870 y 1899 se dieron tres coincidencias. Se produjo un cambio de gobierno favorable a los sublevados, el Departamento que articuló la trama revolucionaria fue el de La Paz y sus autores movilizaron a la población aymara de Altiplano como ejército auxiliar. Sin embargo, tales similitudes escondían conflictos de diferente naturaleza. En primer lugar, lo sucedido en 1870 respondía a una regeneración de los hábitos políticos de los bolivianos, de ahí que fuera definida como una “guerra de civilización” destinada al saneamiento de la administración pública y a la rearticulación institucional del territorio. En contraste, lo acaecido en 1899 obedecía a un cambio intraelitario de hegemonía regional que se sintetizó en un enfrentamiento entre unitarios -Partido Conservador- y federales -Partido Liberal-, siendo éstos últimos los que iniciaron el conflicto al oponerse a la Ley de Radicatoria que fijaba la capital de la República en Sucre, al pedir una nueva constitución y al establecer la Junta de Gobierno de La Paz.

En segundo lugar, en 1870 la sublevación del coronel Agustín Morales contra el gobierno del general Mariano Melgarejo (1866-1870) mostraba que el liderazgo en ambos bandos era de índole militar. Tal expresión no

hacía referencia a regímenes armados sino a gobiernos representativos liderados por militares. La estructuración partidaria de la época se caracterizaba por una fuerte imbricación política entre civiles y miembros del ejército y respetaba el principio de que mientras los nacionales estaban obligados a armarse para salvar a la patria, los soldados profesionales debían abstenerse de votar por ser un cuerpo nacional, de manera que para un militar la presidencia implicaba una desmilitarización identitaria en un entorno en el que la guerra revolucionaria refrendaba la institucionalización política. En 1899 la constitución interna de los partidos se mantuvo en los mismos términos, con la diferencia de que tras la Guerra del Pacífico (1879-1881) y desde las elecciones de 1884 la presidencia había recaído en nacionales vinculados al control económico y financiero del país. Ello hizo que las fuerzas del coronel Manuel Pando, jefe del Partido Liberal, se enfrentaron al ejército gubernamental del presidente civil Severo Fernández Alonso (1896-1899). Y, aunque el triunfo fue del primero, ello no redundó en la militarización de la escena pública, sino en el afianzamiento de las instituciones democráticas.

En tercer lugar, aunque hubo una notable participación india a favor de las fuerzas rebeldes, la coyuntura nacional hizo que su apuesta política y su intervención militar tuviesen objetivos y resultados grupales distintos. En 1870 los aymaras del Altiplano se convirtieron en nacionales armados con el doble propósito de conservar las tierras de comunidad y afianzar su poder jurisdiccional sobre las mismas a cambio de ser reconocidos públicamente como garantes del poder del Estado en el agro. Aunque en 1899 las demandas se reiteraron, hubo diferencias. A partir de la década de 1880 la oposición liberal centró su estrategia electoral para ganar la presidencia en el control del espacio municipal y en el desarrollo de una retórica federalista. A partir de la experiencia de la Consti-

tución de Cádiz de 1812 en el contexto independentista, los indígenas habían considerado a los municipios como una fórmula representativa capaz de conciliar lo liberal con sus demandas corporativas. Esa convicción unida a la campaña proselitista liberal en el agro y a la cercanía del municipalismo con los dictados federales, les hizo tomar conciencia de que su definitivo reconocimiento público nacional pasaba por volver a reinventar su utilidad al Estado en calidad de articuladores locales. Pero esta vez la conservación de espacios y privilegios grupales no dependería del éxito de una hipotética rearticulación administrativa estatal, sino que gestionarían tal proceso en tanto miembros de municipios nacionales. Y, en cuarto lugar, tanto en 1870 como en 1899 la presencia india en una guerra civil tuvo como consecuencia inicial que sus demandas e intereses comunitarios salieran del ámbito de lo local para adquirir una dimensión nacional. Si bien ello supuso una relectura gubernamental de la importancia política y pública de la población indígena y una oportunidad de cambio en el modo en que esta población era vista y asumida en cuanto a su responsabilidad en la construcción de la nación boliviana, esto no ocurrió de igual manera. En el primer caso su presencia armada otorgó a este colectivo la posibilidad de transformar en nacionales sus peticiones corporativas, mientras que en el segundo sus exigencias nacionales se interpretaron como grupales y segregadoras (Irurozqui 2003, 2005a).

A fin de hacer más explícita esa diferencia a continuación se va a tratar de distinguir qué les deparó en cada caso su actuación como ejército auxiliar y cómo fue percibido y juzgado públicamente su comportamiento armado. A pesar de que en ambos acontecimientos se conoce poco sobre las negociaciones y acuerdos entre los revolucionarios y los líderes indígenas, el material documental y bibliográfico disponible hasta ahora, referido

a cómo se organizó la colaboración entre las fuerzas rebeldes y la indiada, a quiénes integraban el ejército auxiliar indio y a cómo se ejercía la autoridad militar, atestiguan tanto la importancia de su colaboración como el carácter político de la misma, al tiempo que sugiere el protagonismo y autonomía indígenas a la hora de resolver cuestiones grupales mediante una acción militarizada (Demelas 1981, Condarco 1983, Platt 1990, Irurozqui 1994, Mendieta 1999, Larson 2002).

En 1870² el llamado que los rebeldes hicieron a los indígenas para “ayudar al triunfo de la santa causa que debe regenerar el país” dio lugar a dos ofertas institucionales a esta población, siendo el desarrollo de una de ellas coincidente con la etapa de guerra y de la otra con la de paz. Respecto a la primera, ¿qué significado le dieron los revolucionarios a la participación de los indios y cuál fue la oferta que creyeron estar haciéndoles? Los gerentes de la revolución de 1870 defendieron que este movimiento “interesa[ba] a los indios” por dos razones que les permitirían ser asumidos colectivamente como nacionales productivos y, por tanto, legítimos mercedores de la ciudadanía. La primera era de índole material. Su participación en el conflicto no sólo les posibilitaría “la recuperación de sus propiedades”, sino que la restitución de su medio de vida -la tierra- les daría de nuevo la oportunidad de conformarse en individuos útiles a la sociedad boliviana y contribuyentes al progreso material de la nación.

La segunda razón afectaba a su percepción pública. Su apoyo “a la santa causa de la libertad” implicaba ser reconocidos por la sociedad como individuos que aceptaban cumplir con el deber nacional de “la salvación de la patria”. Este gesto, en la medida que presupone contribución a una causa nacional en

2 La documentación referente a los acontecimientos de 1870-1871 pertenece en su mayoría al Archivo de La Paz/CN. Expedientes Judiciales 1854/1898, ff. 1-230.

términos de generosidad cooperativa, les brindaba una posibilidad de reincorporación pública a través de su redignificación identitaria. Ésta consistía en volver a adquirir una perdida imagen grupal compatible con la unidad nacional que contradijese su fundamentalismo comunitario y que combatiese la heterogeneidad étnica que limitaba su absorción nacional.

Pese a que durante la Guerra de Independencia y las primeras décadas republicanas los indios fueron reconocidos como “vecinos” y designados ciudadanos, en torno a 1870 las fuentes oficiales se referían a ellos con el sustantivo aglutinador de la *indiada*. Sin entrar a discutir la dinámica y las razones por las que este sector hubo podido experimentar un posible proceso de “reindianización” y la naturaleza del mismo, esa variación nominal llevaba implícito un cambio en la forma en que era percibida su lealtad a la nación boliviana. En la medida en que el término *indiada* se identificaba con una peligrosa colectividad de antiguo régimen con exigencias particulares sobre el control del territorio y con sistemas de autoridad y justicia propios que dejaban fuera al Estado del proceso de su regulación, sus miembros adquirirían progresivas y acumulativas culpas en el logro de la unidad nacional boliviana. Pero ese pecado de irredentismo comunitario que representaba la *indiada* encontraba en la participación revolucionaria un medio de remisión. Cuando los sublevados decían a las comunidades que su levantamiento ayudaría “al triunfo de la santa causa que debe regenerar el país”, estaban brindándoles también la oportunidad de autorregenerarse identitariamente frente al resto de la sociedad. A cambio de no permanecer indiferentes a la defensa de “la libertad y de la democracia” y de asumir a la misma como un deber patriótico ante el que sería válido cualquier sacrificio -donaciones tributarias y de víveres y “hacer la guerra sin tregua al enemigo”- obtendrían una libe-

ración definitiva de los resabios coloniales que les impedían gozar del pleno bienestar nacional. La extirpación de “la tiranía” de Melgarejo, entonces, les ayudaba a establecer vínculos de hermandad con el resto de bolivianos y permitía que su despreciada identidad grupal de *indiada* se transfigurara nominalmente en la de “pueblos”. En tanto “pueblos combatientes” daban muestras de patriotismo y ello les transformaba de nuevo en “habitantes de los pueblos” y de ahí en “el resto del pueblo”, “vecindario” o “vecinos de los pueblos a su mando”. En suma, el ejercicio indígena de la violencia revolucionaria en favor de “la causa de los pueblos” les tornaba en sujetos nacionales y, por tanto, en delegados de soberanía: primero como “pueblos en armas” y luego como miembros de “pueblo nacional”. Tal mutación pública remitía a una ciudadanía definida como una comunidad unitaria en la que la tradición y experiencia comunes no se concebían necesariamente como preexistentes, sino que podían adquirirse a través de actos patriotas en los que la violencia militar permitía el desarrollo de la lealtad nacional, siempre que fuera ejercida en términos de cooperación. En este sentido, los actos bélicos indígenas expresaban una voluntad de homogeneización cultural basada en la cohesión social de sus integrantes, quedando ésta manifiesta en la asunción por parte de los combatientes de una causa diferente a la propia y en una autoinmolación grupal al servicio de un proyecto general.

Respecto a la etapa de la paz y de la reconstrucción nacional, ¿qué significaba para el gobierno de Agustín Morales (1871-1872) que uno de los objetivos fundamentales de la revolución hubiera sido “devolver a esos infelices sus garantías individuales y de propiedad”? Para la resolución parcial de esta interrogante hay que tener en cuenta que la revolución de 1870 fue presentada por sus autores como una empresa moralizadora en contra del “caos administrativo”, financiada

con el tributo indígena y “los donativos exigidos a todos los empleados y servidores de la Patria”. La designación de Morales como “el salvador de las instituciones de la patria” sugería que no se trataba simplemente de resolver una crisis política con un cambio de titularidad del poder ejecutivo. Mediante la movilización de recursos de carácter extraestatal en coordinación con instancias administrativas y militares se buscaba desde dentro del sistema de poder un reforzamiento de las competencias estatales. Ese propósito “nacionalizador” propició que el nuevo gabinete se interesara en el bienestar indio en la medida en que su logro reafirmaba la autoridad gubernamental y con ella la eficacia de las instituciones del Estado en adquirir presencia territorial. No se trataba de negar radicalmente a las fuerzas locales una modalidad de gobierno en la circunscripción de un espacio y sobre el conjunto de sus habitantes, sino de reglamentar esa delegación de la soberanía republicana. En este esfuerzo de penetrar y de reestructurar la administración de lo público local, el Estado requirió estratégicamente explicitar su preeminencia en el control de las poblaciones a través de una alianza con el mundo indígena, visto como fuerza organizada que le ayudase a equilibrar a su favor el ejercicio de la autoridad. Tal requerimiento coincidía con la necesidad de las comunidades de un apoyo extralocal que les evitase entrar en el ámbito de control privado de los organismos locales y ser gobernadas como “cosa particular” (Guerrero 2000). Por tanto, la reivindicación indígena de sus derechos y propiedades fue potenciada y propiciada por el poder central siempre que ello supusiese una demostración con éxito de la capacidad de injerencia y de arbitraje del Estado en el mundo local. En este sentido, los indígenas ganaron presencia pública no sólo por participar como ejército auxiliar en un conflicto que les permitió ejercer de patriotas, sino también por compartir el objetivo institucio-

nal de reforzar la potestad estatal en el medio rural.

En la Guerra Federal de 1899³ los indígenas volvieron a participar en una guerra nacional en calidad de ejército auxiliar del bando sublevado, pero con la experiencia en términos de ganancias y decepciones materiales e inmateriales que había significado ésta. Si bien tras los acontecimientos de 1870 se sabe aún poco de los términos en los que se construyó la convivencia local en un contexto definido por el valor de la homogeneidad (Quijada 2000), a lo largo de las décadas de 1880 y 1890 la población indígena volvió a desdibujarse identitariamente como *la india*. Como esta categorización ponía en duda su compromiso nacional y, por tanto, la legitimidad de su acceso a la ciudadanía, el conflicto de 1899 puede interpretarse como un nuevo llamado nacional de redención para este colectivo. Su actuación como ejército auxiliar de los liberales les daría ocasión de demostrar públicamente un esforzado sentimiento patriota y una disciplina cívica, síntesis de su compromiso con la patria. Sin embargo, terminada la guerra no sólo no fueron reconocidos como “el pueblo armado”, sino que acusados de iniciar una “guerra de razas” se les condenó pública y judicialmente por traición a la patria.

¿En términos de ciudadanía, qué había cambiado? Si en 1870 la ciudadanía se enten-

3 El material documental referente a los acontecimientos de 1899: Alberto Rodríguez Forest, *Documentos para la Historia de la Guerra Civil 1898-1899*, Sucre, Gobierno Municipal de Sucre, 1999; ALP, *Proceso Mohoza (1901-194)*; Bautista Saavedra, *Defensa del abogado Bautista Saavedra pronunciada en la Audiencia del 12 de octubre de 1901*, La Paz, Tip. Artística Velarde, Aldazosa y C^a, 1902; Bautista Saavedra, “La criminalidad aymara en el proceso de Mohoza”, *El ayllu*, La Paz, 1903; Natalio Fernández Antezana, *La hecatombe de Mohoza. La supuesta complicación del cura Jacinto Escobar y la comprobación de su inocencia mediante la defensa hecha por el doctor Napoleón Fernández Antezana*, La Paz, Tip. De la Unión, 1905.

día como una conquista individual que requería esfuerzo y disciplina y a la que podían aspirar todos los sujetos que estuviesen dispuestos al sacrificio de sus ambiciones personales por el bien público, en 1899, en un contexto marcado por pérdidas territoriales y bajo la influencia del pensamiento pseudo-científico de jerarquización racial, el progreso nacional se interpretaba amenazado más que nunca por todo aquello que afectase la cohesión nacional. Ello provocó que dejase de confiarse en el poder benéfico de las instituciones republicanas y en la fuerza redentora del patriotismo para dignificar a la población, asentándose la idea de que, a causa de taras ancestrales y de un determinado origen étnico, muchos habitantes de Bolivia resultaban refractarios a la civilización y, con ello, al progreso moral y material del país. De ahí que en 1899 el ejercicio de violencia revolucionaria tornase a los indios en traidores de la patria - condición legal de pérdida de ciudadanía-, en contraste con lo ocurrido en 1870-1871 cuando los había convertido en patriotas. El detonante de esta inversión identitaria fue la masacre de Mohoza, en la que el 29 y 30 de febrero de 1899 ciento veinte integrantes del batallón liberal Pando, varios vecinos del pueblo y hacendados locales fueron victimados en esta localidad y en sus inmediaciones por un grupo de indios liderado por Lorenzo Ramírez, lugarteniente de Zarate Villca. Aunque a raíz de la matanza perpetrada por sus aliados el coronel Pando trató de disminuir sus competencias militares, su ayuda siguió siendo solicitada contra el enemigo y sólo después de terminada la guerra se tomaron medidas policiales y judiciales contra ellos. El resultado fue la anulación discursiva de los méritos bélicos que en 1870 les había otorgado reconocimiento nacional, de manera que el atentado contra el batallón liberal les hizo bolivianos indignos de participar en la construcción nacional. Los procesos de Mohoza y Peñas acaecidos entre 1901 y 1904 fueron un escenario donde no

sólo se juzgó y condenó a los implicados en las matanzas, sino a la población aymara en su conjunto, siendo ésta la que quedó invalidada en sus actitudes públicas acusada de iniciativas salvajes, brutales y sádicas, prueba de su falta de civilización.

La traición aymara a los liberales fue entendida también como venganza aymara contra la sociedad, lo que hizo evidentes cuatro deficiencias que incapacitaban a esta población para ser asumida como parte activa del pueblo boliviano. Primero, desconocían la solidaridad entre individuos en la consecución de una causa que no fue la suya propia. En el cuerpo procesal de Mohoza constaba que antes de que Lorenzo Ramírez fuera informado en Tolapampa de que el cura Escobar se había visto obligado a dar al escuadrón Pando un empréstito forzoso de 250 bolivianos para socorrer a la tropa, ya habían sido asesinados los hermanos José y Santiago Hidalgo, vecinos de Mohoza responsables de levantar a la indiada a favor de la causa federal. Su muerte sobrevino después de la discusión mantenida con Lorenzo Ramírez acerca de quiénes lideraban las fuerzas indias y cuál era la autonomía de éstas en la toma de decisiones, declarando el aymara que su causa no era “la de Pando ni la de Alonso”, sino el exterminio de la raza blanca. Esta actitud de segregación grupal y de ruptura de los compromisos intergrupales se había manifestado también en la quema y robo de algunas casas de los vecinos de los pueblos o en obligarles a vestirse “con ropas de indio (...) ya que en el futuro las autoridades serían indias”. Por tanto, la presunta negativa indígena a abandonar su fundamentalismo corporativo y a combatir el déficit de progreso que su heterogeneidad racial ocasionaba en el país a ojos de la sociedad sólo podía reindianizarlos, asentándose identitariamente lo indio como antónimo de lo boliviano.

Segundo, eran contrarios a la unidad nacional. En la defensa realizada por el liberal

Bautista Saavedra de sus clientes Tomás Ramírez, Pedro Churqui y Domingo Guayraña, éste argumentó que eran autores de un crimen colectivo de carácter social y político a favor de “un plan preconcebido de sublevación indigenal” para el que la justicia común no establecía penas. Con “astucia y rencor” los indios habían intervenido en la guerra civil movidos por sus propios fines de desencadenar una guerra de extinción de los blancos que les deparase “un gobierno y predominio autóctono”. Como de esta lucha de razas, “perpetuo antagonismo factor de todo progreso y civilización”, resultaba el triunfo de “los blancos, porque somos más fuertes y más civilizados aunque seamos los menos”, los encausados debían ser amnistiados al igual que al resto de bolivianos que participaron en el conflicto, porque en “una guerra no hay delitos, sino estrategia, recursos, represalias, venganzas, triunfos y descalabros, victoriosos y vencidos”. Es decir, la razón por la que Saavedra pedía el indulto de los acusados también era el motivo por el que la raza indígena debía quedar marginada de la construcción nacional, ya que sus anhelos grupales tanto amenazaban la cohesión del país y su integridad territorial, como imposibilitaban el sueño de convivencia de un cuerpo nacional heterogéneo.

Tercero, con su comportamiento en la guerra civil los indios no sólo habían demostrado su insolidaridad, corporativismo y sed de venganza, sino también que eran “una raza atrofiada moralmente y degenerada hasta la deshumanización” que no podía ser utilizada en las contiendas civiles. En su insistencia por demostrar la inculpabilidad de sus clientes, Saavedra argumentó que la asociación aymara a favor del exterminio de la raza blanca era un fenómeno de “muchedumbres” que redundaba en la deshumanización de sus componentes. Si bien esta afirmación implicaba la imposibilidad de exigir responsabilidades penales individuales, también significa-

ba confirmar que la fiebre homicida de los victimarios de Mohoza respondía a las taras idiosincrásicas de sus componentes. Éstas favorecían la ausencia de compasión por el sufrimiento de sus semejantes, “mucho más por los que pertenecen a otra raza superior la que sólo le inspira odio y venganza”, y el dominio de la animalidad. De hecho, la naturaleza de la violencia ejercida por los indios confirmaba a la sociedad que éstos no se comportaban como soldados, sino como bárbaros deshumanizados incapaces de hacer la guerra como gente civilizada. Presos del alcohol, con crueldad y saña mutilaban, torturaban, asesinaban y se comían a sus víctimas no siendo capaces de respetar el espacio sagrado de una Iglesia ni las convenciones de derecho internacional. Paradójicamente, fruto de su degeneración racial era también su naturaleza influenciada que les convertía en “bestias” al servicio de pasiones mezquinas como manifestaba el hecho de que su enardecimiento contra el batallón Pando proviniese de las sugerencias realizadas por el corregidor Juan Belloq, el cura Jacinto Escobar y su hermana Hilaria.

Aunque esta triple incapacitación contenía contradicciones -por un lado, se reconocía a la *indiada* la autoría de un plan de subversión preestablecido y, por otro, se le hacía dependiente de las pasiones que otros levantasen en sus instintos-, implicaba también que si lo primero les daba entidad política por contraria que fuera a los intereses nacionales, su animalización, criminalización y atontamiento disminuía la entidad adquirida y degradaba su causa.

Consecuencia del juicio y la condena de los implicados fue la descuidadización discursiva de la población indígena. La ayuda que ésta prestó a los liberales en su triunfo contra el gobierno quedó oficialmente olvidada al igual que negada la responsabilidad de éstos en la movilización india. En su lugar se erigió la matanza del batallón Pando como la

síntesis de todo lo que podía llegar a ocasionar los indígenas si tenían presencia política. No importó el confuso conflicto rural entre militares, vecinos de los pueblos e indígenas que encerraba la masacre, ni tampoco la coparticipación de los últimos en todos los sucesos. La matanza de Mohoza, interpretada no sólo como una traición al Partido Liberal, sino como una traición de los indios a Bolivia, a cuya población odiaban y querían masacrar en venganza a siglos de opresión, condenó a la población aymara a una cuarentena y minusvalía públicas. Tachada de poco confiable e inestable en sus afectos, quedó reducida a un colectivo no solidario, corporativo, atrofiado y deshumanizado y, por tanto, carente del espíritu patriótico necesario para su individualización y el reconocimiento público de sus miembros como constructores de la nación. Ante la amenaza que representaba su barbarie había que evitar en el futuro su presencia en conflictos nacionales. De lo contrario, su llamado a auxiliar a una de las fuerzas en conflicto sólo infundiría “al indio el sentido de la fuerza y predominio sobre el blanco” con la consecuente reiniciación de una guerra de razas que interrumpiría el progreso del país. Con ve ritos discursivamente en un colectivo bárbaro, sangriento, inasimilable por la civilización occidental y, por tanto, necesitado de una tutela disciplinadora de su potencial arcaico, los indios fueron objeto de una política de invisibilización pública a través tanto de condenarles a una criminalidad innata, explicitada en su deseo de una guerra de razas, como de convertirles en una población eternamente infantil incapaz de comprender el juego político. Ambas posturas, al acusar a la población india del pecado de heterogeneidad cultural y responsabilizarla de la ausencia de cohesión social y tradición cultural, la negaban un papel activo en la confección de la nación y dejaban recluida en una imagen esencialista y apolítica que la tornaba en objeto de políticas públicas.

Conclusiones

Mediante la referencia a la participación aymara en los acontecimientos bélicos de 1870 y 1899 se ha tratado de mostrar cómo los conflictos armados ejemplificaron los cambios de percepción y adscripción ciudadanas y cómo tales variaciones influyeron en los procesos identitarios de descorporatización india y de reindianización de parte de la población boliviana. En ambos casos la población indígena luchó en una guerra civil bajo la creencia de que no sólo la defensa de intereses nacionales le posibilitaría la restitución de recursos grupales y el fortalecimiento de espacios jurisdiccionales, sino que tal acción era compatible con lo nacional y lo liberal bajo la lógica representativa municipalista. Pero si en la revolución de 1870 la conversión del indio en soldado/nacional armado actuaba como un mecanismo de regeneración patriótica y consolidación ciudadana, expresando ello el triunfo de los condicionantes de utilidad, solidaridad y servicio a la sociedad contenidos en la *ciudadanía cívica*, la violencia india ejercida en 1899 condenó a esta población a la exclusión a causa de su degeneración racial, animalidad y sectarismo e ilustró el asentamiento de la *ciudadanía civil* al quedar vinculados los controles de reconocimiento público al criterio de civilización en términos de homogeneidad cultural.

Sin embargo, con indiferencia de su resultado discursivo, los episodios bélicos mostrados inciden en que lo militar fue crucial en la visibilización pública de los indígenas. Lejos de poseer un carácter antidemocrático y represivo brindó a dicha población oportunidades de existencia social y política a través de la figura del “ciudadano armado”, sostén de un sistema representativo garante del bienestar nacional. La alianza entre los indios y los estamentos armados revolucionarios y gubernamentales ha evidenciado que los primeros no sólo no vivieron de espaldas al proceso de

construcción nacional ni fueron ajenos a las concepciones, proyectos o empresas políticas decimonónicas, sino que se constituyeron en sujetos sustanciales en la institucionalización/rearticulación territorial del Estado gracias a asumir como propia la narrativa ciudadana de cooperación nacional en su defensa grupal. A comienzos del siglo XX tal tradición intervencionista/cooperativa, aunque fue desdibujada o falseada discursivamente, siguió manteniéndose a través de un progresivo aumento de la presencia indígena en la vida asociativa y en el sistema de partidos, ya que, paradójicamente, su descalificación social generó una mayor necesidad de conquista del espacio público nacional en calidad de legítimos miembros del mismo (Salmón 1997, Irurozqui 2000).

En este sentido, las colaboraciones multiétnicas y multclasistas presentes en las guerras han mostrado que la distancia entre los indígenas y el resto de los bolivianos respondió en gran medida a relatos elitistas de identidades irreconciliables, cuya intensidad y oportunismo generaron a lo largo del siglo XX fracturas sociales y distancias culturales asentadas en el tópico de la guerra de razas. De ahí que el triunfo en las urnas de Evo Morales, con su cambiante adscripción identitaria de cholo a indio, el apoyo multiétnico a su candidatura y la trayectoria política del MAS como movimiento social, muestre una realidad histórica boliviana en la que la incidencia de lo popular -con independencia de su coyuntural catalogación étnica- en la definición histórica boliviana no es excepcional, sino consustancial a su desarrollo. Ello abre varios interrogantes historiográficos: por un lado, la trascendencia del juego de recreaciones identitarias que conlleva la categoría indígena y los usos políticos y públicos del mismo (Griehaber 1985, Barragán 2000a, Méndez 2001, Lavaud 2002); por otro, el sentido historiográfico y político de las narrativas públicas que interpretan la presencia india como

una novedad histórica y la califican de desagravio racial o de amenaza a la unidad nacional. A partir de ello, ¿a qué responde la actual indianización del espacio público boliviano: a una refundación de lo nacional o a un discurso étnico de ruptura del Estado-nación? ¿Generará tal indianización de la escena política un espacio de reconocimiento y convivencia nacionales o conducirá a nuevas y dolorosas segregaciones?

Bibliografía

- Barragán, Rossana, 2000a, “¿Categoría fiscal o categoría social? La campesinización del indio”, en *Cuadernos de Historia Latinoamericana: Estado-nación, comunidad indígena, industria. Tres debates al final del milenio*. AHILA No. 8, Ridderkerk, Holanda, p. 143-167.
- , 2000b, “Tramas, dramas, epopeyas y mitos en las historias bolivianas del siglo XIX”, en *Historias... de mitos de ayer y hoy*. Revista de la Coordinación de Historia No. 4. La Paz, p. 51-94.
- Condarco Morales, Ramiro, 1983, *Zárate. El “temible” wilka. Historia de la rebelión indígena de 1899*, Renovación, La Paz.
- Demelas-Bohy, Marie Danielle, 1981, “Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia 1880-1910”, en *Historia Boliviana* No. 1-2, Cochabamba, p. 55-82.
- Griehaber, Erwin P., 1985, “La definición cambiante de un indio. Comparación de los censos bolivianos de 1900 y 1950”, en *Historia Boliviana* No. 1-2, Cochabamba.
- Guerrero, Andrés, 2000, “El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquía y transescritura”, en Andrés Guerrero, compilador, *Etnicidades*, FLACSO-Ecuador, ILDIS, Quito, p. 9-75.
- Irurozqui, Marta, 1994, *La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder en Bolivia, 1880-1820*, CBC-CSIC, Cusco.

- , 2000, *A bala, piedra y palo. La construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1825-1952*, Sevilla, Diputación de Sevilla.
- , 2003, “El bautismo de la violencia. Indios patriotas en la revolución de 1870”, en Josefa Salmón y Guillermo Delgado, editores, *Identidad, ciudadanía y participación popular desde la colonia hasta el siglo XX*, Plural, La Paz, p. 115-150.
- , 2005a, “La ciudadanía en debate en América Latina. Discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral”, *Documento de Trabajo* No. 139. IEP, Lima.
- , 2005b, “Los hombres chacales en armas. Militarización y criminalización indígenas en la Revolución Federal de 1899”, en Marta Irurozqui, editora, *La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX*, CSIC, Madrid, p. 285-320.
- , 2006a, “Sobre el tributo y otros atributos ciudadanos. Sufragio censitario, fiscalidad y comunidades indias en Bolivia, 1825-1839”, en *Bcentenario. Revista de Chile y de América* vol. 5, no. 2. Santiago de Chile, en prensa.
- , 2006b, “El pueblo soberano versus la plebe proselitista. Discurso historiográfico y etnicización política en Bolivia, 1825-1922”, en Guillermo Palacios, editor, *Historias nacionales y la construcción de los Estados liberales modernos en América Latina durante el siglo XIX*, CM, México, en prensa.
- Larson, Brooke, 2002, *Indígenas, elites y Estado en la formación de las repúblicas andinas*, PUCP-IEP, Lima.
- Lavaud y Françoise Lestage, 2002, “Contar a los indígenas: Bolivia, México, Estados Unidos”, en *Tinkazos* No.13, La Paz, p. 11-50.
- Méndez, Cecilia, 2001, “The Power of Naming, or the Construction of ethnic and National identities in Peru: Myth, History and the Iquichanos”, en *Past and Present* No. 171, Oxford Journals, p. 127-160.
- Mendieta, Pilar, 1999, “Entre el caudillismo y la modernidad. Poder local y conflictos políticos en la provincia de Inquisivi: El caso de Mohoza (1880-1899)”, Tesis de Maestría, La Paz.
- Platt, Tristan, 1982, *Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el norte de Potosí*, IEP, Lima.
- , 1990, “La experiencia andina del liberalismo boliviano entre 1825 y 1900: raíces de la rebelión de Chayanta (Potosí) durante el siglo XIX”, en Steve Stern, compilador, *Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes*, IEP, Lima.
- Quijada, Mónica, Carmen Bernard y Arnd Schneider, 2000, *Homogeneidad y nación. Con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX-XX*, CSIC, Madrid.
- Salmón, Josefa, 1997, *El espejo indígena. El discurso indigenista en Bolivia 1900-1956*, Plural, La Paz.

El mariscal Cáceres: ¿un héroe militar o popular?

Reflexiones sobre un héroe patrio peruano¹

Marshal Cáceres: A Military or a Popular Hero?

Reflections On A Peruvian National Hero

Iván Millones Maríñez

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Email: mllnes2000@yahoo.es

Fecha de recepción: abril 2006

Fecha de aceptación y versión final: julio 2006

Resumen

La figura del Mariscal Andrés Avelino Cáceres (Ayacucho 1836 – Ancón 1923), héroe de la Guerra del Pacífico y ex-presidente del Perú, ha sido empleada en los últimos años por el etnocacerismo, movimiento político de trayectoria un tanto violenta que vincula elementos militaristas, indigenistas y nacionalistas. ¿Por qué se dio esta apropiación de un héroe patrio? ¿Acaso por desinterés estatal en incluirlo en el “panteón oficial de héroes”? ¿Qué encontraron los etnocaceristas en el mariscal para convertirlo en símbolo? Este ensayo intenta responder a esas preguntas, y reconstruir la compleja y parcial apropiación oficial de ese personaje.

Palabras clave: etnocacerismo, héroes patrios, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, memoria, militares, Perú siglo XIX, Perú siglo XX.

Abstract

The image of the Marshal Andrés Avelino Cáceres (Ayacucho, 1836-Ancón, 1923), a hero of the War of the Pacific and former president of Peru, has been used in recent years by *etnocacerismo*, a political movement of rather violent trajectory that links militaristic, indigenist, and nationalist elements. How can one explain the appropriation of this national hero? Was it the state's lack of interest in including Cáceres in the “official pantheon of heroes”? What did the *etnocaceristas* find in the marshal to turn it into a symbol? This essay tries to answer these questions, and to reconstruct the complex and partial official appropriation of this hero.

Keywords: etnocacerismo, national heroes, Marshal Andrés Avelino Cáceres, memory, military, national heroes, Perú-19th Century, Perú-20th Century.

1 Artículo elaborado a partir de la investigación para una tesis de Maestría en Historia (Millones 2002). Agradezco los comentarios de Cecilia Méndez.

Cáceres, héroe militar de la Guerra del Pacífico (1879-1883), presidente y político, ha sido de una sorprendente presencia en la escena peruana en los últimos años. Icono del etnocacerismo, movimiento político cuyas acciones más llamativas han sido dos levantamientos, uno contra el entonces presidente Alberto Fujimori, en octubre del año 2000, y otro contra el mandatario Alejandro Toledo, en enero del 2005, esa figura parece estar todavía con vida, más de ochenta años después de su muerte. Más aún porque en las recientes elecciones presidenciales peruanas el ganador de la primera vuelta del 9 de abril -y luego derrotado en la segunda vuelta del 4 de junio-, el comandante en retiro Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista Peruano, había sido inicialmente parte del movimiento etnocacerista.²

Es un lugar común señalar la falta de identidad nacional en el Perú. Consecuencia, para algunos, de una historia plagada de fracasos, uno de los cuales sería precisamente la Guerra del Pacífico, una estruendosa derrota frente a Chile que costó al país sus provincias sureñas y a su aliada Bolivia la salida al mar que aún reclama. “Somos potentes: tenemos héroes; somos frágiles: casi todos nuestros héroes son

mártires” parecería ser un sentir latinoamericano (Monsiváis 2000:83), y probablemente haya quienes creen que éste no podía corresponder mejor al Perú, al menos si se examinan los rasgos de sus héroes patrios. Varios de ellos, por nuestra experiencia histórica -y por el proceso de recuerdos y olvidos colectivos,- pertenecen al mencionado episodio militar de fines del siglo XIX. No faltan entonces quienes consideran difícil identificarse con tales figuras paradigmáticas, y de allí una causa de nuestra supuesta debilidad como nación. Por ello quizás sorprenda que el etnocacerismo haya tomado como símbolo a un héroe de esa guerra. Porque esa agrupación, vinculada a grupos cercanos al ejército -exoficiales, pero particularmente licenciados del mismo-, y con una retórica que busca ganarse a sectores populares -sobre todo al habitante de provincias serranas y pobres-, asume el nombre del Mariscal Cáceres. El significado de etnocacerismo, según su líder e ideólogo, el mayor de infantería en retiro Antauro Humala, es el siguiente:

“Es la conjugación de la doctrina de guerra cacerista con la comunión arguediana de todas las sangres más el proyecto geopolítico pan-andino de la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Santa Cruz. También se debe mencionar el nacionalismo que desplegó el ex presidente, el general Juan Velasco Alvarado. La palabra *etno* es la conjugación de raza con cultura. Creemos que el nacionalismo tiene varias características, pero su esencia siempre proviene de la raza ancestral, de la estirpe” (Humala 2001: 386)³.

La “guerra cacerista” aludida en esa definición se refiere al conflicto con Chile, a fines del siglo XIX. Si bien ese episodio fue un desastre para el Perú, en él Cáceres destacó como exitoso líder. Mientras otras figuras de entonces han sido recordadas por inmolarse por la patria en un contexto bélico desfavora-

2 En el transcurso del 2005, y a medida que se acercaban las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril del año siguiente, el etnocacerismo se dividió. Un grupo liderado por los hermanos Ulises y Antauro Humala -este último preso por la rebelión acaudillada en el 2005- conservó la postura radical del movimiento. El otro hermano, Ollanta, fue moderando su discurso inicial y separándose del etnocacerismo. Así, en el 2005 él denominó a su partido “nacionalista”, término aparentemente más general y cohesionador. Sin embargo, ambos grupos comparten un discurso “anti-imperialista” y “anti-neoliberal”, ideas indigenistas, y la exaltación del papel patriótico del ejército y de su carácter popular. Cabe resaltar que en las mencionadas elecciones de abril Ollanta obtuvo alrededor del 30% de los votos válidos, mientras que el partido en el que se encontraban Antauro y Ulises obtuvo menos del 1%. En la segunda vuelta, Ollanta recibió poco más del 47% frente al 52,6% del ganador Alan García, candidato del APRA.

3 Entrevista a Humala (2001: 385, 386), enero del 2001.

ble, ése no fue el caso del mariscal, quien comandó al campesinado indígena de la sierra durante tres años en la lucha contra las tropas chilenas invasoras, en la llamada “Campaña de la Breña” (1881-1883). Sin embargo, él finalmente fue derrotado, con lo cual se acabaron los últimos focos de resistencia peruana.

Desde su aparición, el etnocacerismo recibió ataques. En Lima, varios de ellos han proveniendo de sectores de derecha o centro que vinculan la retórica de ese movimiento con la de líderes sudamericanos contemporáneos, con los cuales no simpatizan⁴. El venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y -en algún momento- el ecuatoriano Lucio Gutiérrez son algunos de esos personajes hacia quienes los etnocaceristas han expresado su admiración⁵ (Humala 2001: 386, 387). Incluso entre el material audiovisual que ese grupo vendía en Lima, hacia el 2004, publicitado como “videos nacionalistas”, se encontraban títulos como “La revolución no será transmitida”, un filme crítico del golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002, y otros como “Rebelión zapatista” y “Levantamiento indio en Ecuador”.

La identificación del etnocacerismo con Cáceres, el llamado “héroe de la Breña”, ha sido criticada. Entre el 2000 -año de la rebelión que los dio a conocer- y el 2005 -cuando se dio su segunda acción armada-, algunos

intelectuales cuestionaron el empleo de un héroe nacional con fines partidarios y subversivos⁶. De acuerdo a esas críticas se estaría tergiversando una de las funciones de los héroes patrios: integrar ciudadanos, difundir valores, cimentar una identidad nacional. Esta preocupación expresa un problema frecuente en torno a la legitimidad simbólica de las figuras heroicas: tienen varios significados que pueden ser explotados por diversos grupos e intereses.

En el Perú, además de Cáceres, la figura del líder indígena Túpac Amaru II (1738-1781), fue empleado por grupos políticos y por el Estado en diversos momentos. De rebelde anti-colonial provinciano y andino, fue considerado “héroe de izquierda” y usado por el llamado “gobierno revolucionario de las fuerzas armadas” del General Juan Velasco entre 1968 y 1975, y años más tarde por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Pero poco antes, en la década de 1960, un grupo subversivo uruguayo lo había tenido como emblema -el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros-, al igual que los guerrilleros peruanos alzados en armas en esos años (“Túpac Amaru” fue el nombre de una de sus facciones). Quizás el carácter subversivo de ese líder hizo que ya desde momentos anteriores -por ejemplo, en un contexto social e ideológico excluyente, el de la llamada “República Aristocrática” (1895-1919)- sectores de la elite se negaran a asumirlo como héroe. Así, en 1917, en el parlamento hubo quienes rechazaron llamar “Túpac Amaru” a una provincia serrana, argumentando que ese personaje “cometió el

4 Es el caso de las críticas del diario *El Comercio* o la revista *Caretas*, cuyos propietarios tuvieron conflictos con el autodenominado régimen revolucionario del General Juan Velasco, al cual se hará referencia más adelante, y al que los etnocaceristas han manifestado simpatías. También han proveniendo cuestionamientos desde un espectro político más de izquierda. En general, todas esas voces coinciden en criticar el carácter militarista, autoritario y “fascista” del movimiento.

5 La simpatía hacia Gutiérrez probablemente se debió a que encarnaba al militar aliado con el movimiento indígena (Humala 2001: 387). Recientemente, los etnocaceristas han expresado sus cercanías a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Humala 2005: 3).

6 Por ejemplo, en Lima, a raíz de la rebelión de enero del 2005, bajo los títulos de “Uso y abuso de la historia- Cáceres, rehén del etnocacerismo” y “Cáceres y el etnocacerismo. Entre la historia y el uso falaz del pasado”, el diario *El Comercio* publicó un artículo del historiador Héctor López Martínez (2005). También en ese contexto, y destacando que “Cáceres es un patrimonio de todos los peruanos” y no de un grupo político, escribió el historiador Nelson Manrique (2005).

error de encabezar una reacción contra la dominación española para hacer revivir la monarquía incásica”. En cambio, se propuso usar nombres de héroes más recientes “que hayan sucumbido defendiendo los fueros de la República”⁷.

A continuación veremos cómo la figura del héroe de la Breña fue adquiriendo diversos significados a través del tiempo y de acuerdo a los grupos que lo reivindicaban. Observaremos también los intentos del Estado de apropiarse y emplear oficialmente su imagen, y concluiremos con un análisis de por qué en última instancia, pese a su prestigio militar, su imagen dista de ocupar un lugar central en el panteón oficial de héroes.

Una figura controvertida

Por su trayectoria política, el caudillo de la Breña posee una compleja imagen multifacética. Esto lo diferencia de otros personajes de la Guerra del Pacífico menos multidimensionales que fácilmente ingresaron al panteón oficial de héroes, como el almirante Miguel Grau (1834-1879) y el coronel Francisco Bolognesi (1816-1880). Ambas figuras “dieron su vida por la patria”, y tuvieron una consagración en grandes monumentos, levantados varias décadas antes que aquel correspondiente a Cáceres: el de Grau, en el puerto del Callao, data de 1897; el de Bolognesi, en la ciudad de Lima, es de 1905; el del mariscal, en la capital, apareció recién en 1951⁸.

Una explicación de esa postergación puede radicar en que Cáceres tiene más significados

que los otros héroes mencionados. No es difícil vincular su imagen a tres aspectos claves en la historia del Perú: “raza” y cuestión indígena, desarrollo económico, y militarismo. El mariscal no podía estar ajeno al primer tema, porque en la Campaña de la Breña lideró guerrillas indígenas que no sólo atacaron tropas chilenas, sino también hacendados blancos colaboracionistas. ¿“Guerra de castas”? ¿“Lucha de clases”? ¿“Guerra nacional”? fueron preguntas que generaron grandes polémicas en el medio académico durante las décadas de 1970 y 1980, época del centenario de la guerra (Bonilla 1979, Mallon 1981, Manrique 1981). En segundo lugar, la figura de Cáceres también está ligada al desarrollo económico del país ya que, terminado el conflicto, su gobierno buscó solucionar el problema de la deuda externa peruana y recuperar la economía. Se firmó entonces el controvertido Contrato Grace (1889), que supuso la entrega de ferrocarriles estatales y otros recursos a capitalistas foráneos. Por último, Cáceres, que había ingresado muy joven al ejército y llegó a ser presidente, es una figura asociada al militarismo. Junto a un grupo de personajes igualmente ligados al ejército, oficiales y excombatientes de la guerra de 1879, detentó el poder por casi diez años, a los que una historiografía crítica dio el nombre de “Segundo Militarismo” (Basadre 1983, 7: 321).

Pe ro el carácter multifacético del mariscal de por sí no tendría por qué dificultar su apropiación estatal. El problema era que su actuación en cada uno de estos terrenos fue polémica. Por ejemplo, aunque lideró campesinos en la lucha contra los chilenos, una vez terminada ésta, e interesado en consolidarse como gobierno y reimponer el orden (Manrique 1981: 366), desarmó a sus antiguos aliados. Y cuando no pudo negociar una desmovilización -para entonces, varios ex-guerrilleros ocupaban haciendas de antiguos colaboracionistas-, los combatió y mandó a ejecutar a un grupo de ellos (Manrique 1995: 181).

7 Cf. Cámara de Senadores, *Diario de Debates* - Congreso Ordinario de 1917, p. 494, 495.

8 Sobre la inauguración del primer monumento, cf. *El País*, 29 de noviembre de 1897. Con respecto a la del segundo, *La Prensa*, 6 de noviembre de 1905; y al tercero, *El Comercio*, 31 de julio de 1951, edición de la mañana, p. 3. Sobre los etapas iniciales en la construcción de Cáceres como héroe, cf. Millones 2005.

De otro lado, con respecto al tema económico, si bien el mariscal emprendió la reconstrucción nacional luego de la guerra, la firma del Contrato Grace habría sido autoritaria, controvertida (Basadre 1983, 7: 82) y lesiva para los intereses nacionales. Han sido opiniones frecuentes sobre el tema que el Perú “pagó demasiado” con ese arreglo (Basadre 1983, 7: 87), que “entregó al país a la voracidad del capitalismo inglés” (Manrique 1981: 389)⁹.

El último punto: Cáceres y el militarismo. Este aspecto parece indicar que heroicidad y posterior actuación política pueden resultar incompatibles. Porque el caudillo llegó a la presidencia en 1886 con gran popularidad, aclamado como héroe en vida, pero casi una década después, en 1895, en el poder y con intenciones de permanecer en él, fue depuesto y exiliado, junto a sus más cercanos partidarios, tras una sangrienta guerra civil anti-militarista (Basadre 1983, 7: 295-334). Estos incidentes han llevado también a una peculiar apreciación sobre el mariscal. Al parecer, la sociedad peruana, como otras con una fuerte tradición católica, tiene una predilección por héroes mártires (Pisconte Quispe 2005: 28, 29). Por ello, hay quienes han considerado que a Cáceres le faltó morir en el campo de batalla para consagrarse (Basadre 1983, 6: 345).

Ante esa controvertida trayectoria del mariscal era lógico suponer que su ingreso al panteón oficial de héroes patrios no iba a ser fácil. ¿Cómo podía el Estado apropiarse de un personaje como él? ¿Cuál de sus facetas destacar? Veamos algunos momentos significativos en esa compleja apropiación.

Rumbo al panteón oficial de héroes

El 10 de octubre de 1923 el casi nonagenario mariscal dejó de existir. Su deceso se produjo

⁹ Sin embargo, perspectivas recientes tienen visiones menos negativas (Contreras y Cueto 1999: 147, Klaren 2004: 248).

en el “Oncenio”, periodo de gobierno autoritario y modernizador de Augusto B. Leguía (1919-1930), en el que hubo esfuerzos para fomentar una identidad nacional desde el Estado. Éste propició una proliferación de estatuas y espacios públicos en Lima y provincias que conmemoraban figuras de la Independencia. De esta época datan la plaza y monumento a José de San Martín y el monumento al Soldado Desconocido, en Lima, este último en honor a los caídos en la Guerra del Pacífico. También se erigieron monumentos alusivos a la época incaica (Millones 2002: 30-32). En ese contexto, se le organizaron a Cáceres apoteósicos funerales, y quizás contagiados por el espíritu de una época de “invención de la tradición” (Hobsbawn y Ranger 2002), entusiasmados cronistas sugirieron que el mariscal estaba llamado a convertirse en el gran héroe de la historia peruana. Sin embargo, pese a los tributos que se le rindieron -entre éstos, la concesión de la monumental Cripta de los Héroes del Cementerio General como última morada-, serían necesarios algunos años más para que adquiriera aquella estatura augurada. ¿Qué había ocurrido? Después de todo, al comenzar la década de 1920 el mariscal no sólo tenía el prestigio de su actuación en la guerra de 1879, sino la ventaja de que, como líder político (era jefe y fundador de un partido, el Constitucional) había respaldado a Leguía en su ascenso al poder en 1919.

Esa postergación puede ser explicada porque el presidente, interesado en convertirse él mismo en héroe, hizo a su propia imagen omnipresente en calles, plazas y monumentos (Millones 2002: 39,40). Pero no sólo este personalismo opacó al mariscal. También contribuyeron a ello deslices de los mismos políticos caceristas -una conspiración anti-leguista develada en noviembre de 1920-, e incluso una probable persistencia de recuerdos de la guerra civil anti-militarista de 1895. Esos factores debieron retrasar su consagra-

ción como héroe oficial, aunque hacia la fecha de su muerte aparecieron obras históricas sobre él, no necesariamente producto del apoyo estatal, que promovían su figura (Cáceres 1921, Leguía 1923, Cáceres 1924).

A los factores de ese retraso se añade que Cáceres era percibido negativamente por sectores de la elite limeña de fines del siglo XIX e inicios del XX. Él era visto si no como “indio”, al menos como “serrano”, pese a que pertenecía a una familia de hacendados y comerciantes, “blancos” o “mistis” desde el punto de vista de una ciudad andina de la época. Sin embargo, su procedencia ayacuchoana y el que, por ejemplo, hablara quechua, lengua en la que se comunicaba con sus guerrilleros (quienes lo llamaban *tayta*, “padre” en quechua), contribuyeron a que Cáceres proyectara la imagen de “serrano” frente a la elite costeña. Estos sectores debieron ver con recelo esos rasgos en una época marcadamente racista, más aun porque durante la Campaña de la Breña se habían difundido noticias del carácter violento de los combatientes indígenas que él lideró (Cavero 1994: 174-176, 283).

Por eso, cuando Cáceres llegó al gobierno en 1886, sus enemigos, que no eran pocos (porque entre el final de la guerra con Chile y su ascenso al poder, el caudillo también combatió en una guerra civil y la ganó), lo habían presentado desfavorablemente a ojos de la sociedad limeña. Esto obligó a sus partidarios a intentar borrar el estigma de indígena violento con el que sus rivales lo marcaban. En cambio, destacaron que su líder pertenecía a la “raza europea casi pura” y que su tez era “blanca, cuando no tostada por los rayos del sol o de las cordilleras”. Igualmente, negaron que éste fuera el oficial “sediento de sangre y de exterminio” y “ambicioso vulgar” que sus enemigos pretendían. Al contrario, subrayaron su carácter de militar profesional, gran estratega, y de salvador de la patria en crisis (Anónimo 1886: 63, 64, 73).

Pero mientras se trataba de difundir esas imágenes en la costeña Lima, en las provincias serranas en que se había llevado a cabo la Campaña de la Breña, Cáceres tenía otro rostro. Ya al comenzar el siglo XX, aparecía en aquellas regiones con rasgos indígenas o mestizos, fenómeno que remite a la memoria popular de la Guerra del Pacífico (Macera 1981: 405-412), la cual también inspiró danzas en fiestas patronales en que figuraban Cáceres y sus guerrilleros (Mendoza 1989). Éstas, por cierto, convenientemente olvidaban episodios menos gratos ligados al mariscal, como la a veces violenta desmovilización de sus antiguos aliados campesinos. Esa imagen indígena o mestiza del héroe tiene una sorprendente continuidad hasta el presente: en nuestros días, en el departamento andino de Ayacucho, Cáceres es considerado indígena, sobre todo en sectores populares y de origen rural (Cavero 1994: 92-94). Incluso en el imaginario popular existirían conexiones entre las figuras de Cáceres, Túpac Amaru y el Inca, según interpretaciones antropológicas de relatos sobre el mariscal, recogidos al comenzar la década de 1990 (Cavero 1994: 118, 119, 135).

En el imaginario popular urbano y costeño, por su parte, puede resultar más difícil precisar qué rasgos tenía el caudillo. Sin embargo, testimonios de Lima y sus cercanías, donde vivió sus últimos años, lo muestran como una persona sencilla, cercana a la gente del “pueblo común” y alejada de la “aristocracia” (Marín 1984: 29). Además, noticias de entonces indican que tuvo cierta preocupación por la situación de los obreros: haber evitado que unos soldados disparasen contra huelguistas en las proximidades de la capital, en enero de 1915, fue, por ejemplo, un incidente destacado en esa época (Basadre 1983, 9: 82, 83). Por ello, quizás no sorprenda que Cáceres se convirtiera en símbolo de la campaña electoral de 1919, cuando Leguía, en multitudinarias manifestaciones, prometió

recuperar las provincias perdidas en la Guerra del Pacífico, y acusó a las clases altas de haber causado aquella derrota. La presencia del mariscal en esa campaña lo liga a un discurso nacionalista y anti-oligárquico, y nos sugiere que, al momento de morir, tanto en la sierra como en la costa su figura estaba próxima a sectores populares.

Consagraciones bajo regímenes militares

Los centenarios son momentos propicios para crear o consolidar mitos, y las naciones viven de mitos. Fue a raíz de los cien años del nacimiento de Cáceres -el 10 de noviembre de 1936, y, de modo más amplio, en toda esa década-, cuando ocurrió una primera gran consagración del héroe, a cargo de un Estado dominado por los militares. Tras la caída de Leguía en 1930, las fuerzas armadas, con respaldo de sectores de la élite socioeconómica, asumieron la dirección del país, clamando por la necesidad de mantener el orden y la integridad nacional frente a la creciente ola de movilización popular liderada, sobre todo, por el APRA.

Durante esos años, cuando grupos de izquierda criticaban el rol de las fuerzas armadas, éstas continuaron con el fortalecimiento de un Estado que asumió con mayor nitidez el rol de creador y difusor de símbolos patrios, esta vez abiertamente ligados al elemento castrense. Fue entonces que el ejército buscó legitimarse políticamente promoviendo la figura de Cáceres¹⁰, aunque también es probable que esa imagen -así como las de otros héroes uniformados- estuviera dirigida hacia los propios miembros de una institución dividida por factores políticos, étnicos y

de clase (Klaren 2004: 363, Masterson 2001: 110, 113).

Las celebraciones en varios puntos del país de los cien años de Cáceres dieron tal impulso a su figura que la hicieron constante en diversas conmemoraciones patrias, incluso en los colegios, donde además empezó a aparecer con mayor frecuencia en textos escolares (Millones 2002: 54, 55). Sin embargo, uno de los episodios heroicos más elogiados entonces no estuvo vinculado a la Campaña de la Breña, sino a una batalla liderada por el caudillo en el primer año de la Guerra del Pacífico: Tarapacá (27 de noviembre de 1879), el único enfrentamiento ganado en ese conflicto por el ejército regular peruano. Que Cáceres se convierta en héroe de esa institución tiene un especial significado: entre las décadas de 1930 y 1970 el poder estuvo, en diversos momentos, en manos de las fuerzas armadas. Habían tenido éstas una serie de derrotas militares (la de 1879, la de la guerra civil de 1894-1895) (Masterson 2001: 26, 37, 107) y por lo tanto estaban interesadas en resaltar un héroe y un episodio victoriosos. Pero tampoco descuidaron la veta “popular” e “indigenista” del caudillo. Mientras crecientemente los intelectuales destacaban la existencia de una población indígena mayoritaria, analfabeta y poco integrada a la nación como un problema, desde el ejército se resaltó el papel civilizador de éste entre esa población. Obligados a realizar el servicio militar y educados en los cuarteles, sectores indígenas formaron las bases del ejército (Masterson 2001: 58, 199, 224-226), sobre todo de su infantería, de la cual Cáceres se convirtió en “patrón”.

El mariscal fue entonces reivindicado por haber liderado guerrilleros indígenas en una acción de dimensiones nacionales: la defensa de la patria. De ese modo, además del anterior elogio a su profesionalismo y destreza como estratega, el caudillo fue modelo de las relaciones militar-campesinado.

10 Véanse, por ejemplo, diarios limeños como *La Crónica*, en ediciones cercanas al centenario del nacimiento del héroe, en 1936.

El peso de este héroe fue tal que resulta sugerente que en la década de 1930 dos militares que luego encabezarían el Poder Ejecutivo, los Generales Manuel A. Odría, presidente entre 1948 y 1956, y Ricardo Pérez Godoy, Jefe de la Junta Militar de Gobierno entre 1962 y 1963, escribieran sobre la Campaña de la Breña y sobre Cáceres, respectivamente, en revistas militares (Odría 1930-31, Pérez Godoy 1936). Precisamente un posterior momento significativo en la consagración oficial del mariscal se dio durante el gobierno de Odría quien, en su segundo año liderando un régimen que combinaba autoritarismo y paternalismo para controlar los movimientos sociales (Contreras y Cueto 1999: 239), ordenó levantar en la capital una estatua en honor al caudillo¹¹.

Los procesos ocurridos entre las décadas de 1930 y 1970 muestran que el Estado se preocupó por hacer de Cáceres una gran figura. Sin embargo, ésta no llegó a ser central en el panteón de héroes oficiales-militares. En efecto, las fuerzas armadas, preocupadas por legitimarse en el poder, mal hubieran hecho en tener como símbolo a alguien con tan cuestionado gobierno (Contrato Grace y sangrienta salida del poder de por medio). Su imagen no era precisamente útil para demostrar que un gran militar podía ser un buen gobernante. Más bien hasta servía como ejemplo de lo contrario. Por eso, quienes detentaron el poder en esos años tuvieron una mayor predilección por otro héroe: el Mariscal Ramón Castilla (1797-1867), presidente de la República en dos oportunidades (1845-51, 1855-62), y bajo cuyas órdenes había combatido el héroe de la Breña en su juventud. Castilla contribuyó a consolidar el Estado; gracias a la bonanza por la exportación del guano, abolió la esclavitud negra y el tributo indígena. Sin considerar el contexto

en que las dos últimas medidas fueron dadas, ni el papel de los propios indios y negros en el proceso, los regímenes de mediados del siglo XX, como el del general Odría, consagraron a Castilla como héroe nacional (Millones 2002: 33). La figura de Cáceres quedó entonces relegada a un segundo plano. Su controvertida carrera contribuye a explicar, igualmente, por qué uno de los últimos gobiernos militares del Perú, el del General Juan Velasco (1968-1975), caracterizado por su vocación nacionalista, “anti-imperialista” y anti-oligárquica, elevó al rebelde Túpac Amaru II, y no al mariscal, a la condición de omnipresente héroe oficial.

Los 150 años de Cáceres

Un resurgimiento del caudillo de la Breña ocurrió en torno a otro aniversario, el sesquicentenario de su nacimiento, el 10 de noviembre de 1986 (en realidad, prolongación del centenario de la Guerra del Pacífico, 1979-1983, y de la Campaña de la Breña), esta vez en un contexto de violencia subversiva. Los sucesos de esos años muestran cómo la figura de un héroe puede ser empleada de diversos modos. Veamos algunos ejemplos. El presidente de la República, Alan García (1985-1990), que implementó políticas económicas y culturales de corte nacionalista y combatió a los grupos subversivos Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de “ideologías de inspiración foránea” según la retórica oficial de entonces, se autoproclamó “cacerista”. Para García, el mariscal debía servir “de reflexión para luchar contra los enemigos externos e internos que pretenden someternos a sus dictados culturales, políticos y económicos”¹².

11 Sobre su inauguración, cf. *El Comercio*, 31 de julio de 1951, edición de la mañana, p. 3.

12 Discurso con motivo del sesquicentenario del nacimiento de Cáceres; *El Comercio*, 11 de noviembre de 1986, p. A-3.

Igualmente, tiempo después, en diciembre de 1989, al inaugurarse una estatua del mariscal en el Palacio de Gobierno, el presidente volvió a referirse al personaje, símbolo, según él, del “que no se rinde ante la adversidad”.¹³ La frase no podía ser más apropiada para la ocasión: la daba un gobernante que culminaba su mandato en medio de grave crisis nacional y fuerte crítica a su gestión.

Asimismo, en esos años, mientras una historiografía de izquierda resaltaba el carácter popular e incluso “anti-oligárquico” del héroe (Vega 1986, Vilcapoma y Guzmán 1986), y una institución como la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, ligada al ejército, se dedicaba a exaltar al héroe, hubo vinculaciones entre éste y los grupos alzados en armas. Por ejemplo, el MRTA destacó que Cáceres, “el más grande genio militar de la lucha guerrillera”, durante la Guerra del Pacífico “construyó un ejército popular” (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru s/f: 40). Igualmente, al comenzar la década de 1990, exploraciones en el imaginario popular de Ayacucho, lugar donde se originó Sendero Luminoso, muestran que algunas personas hacían peculiares conexiones entre las acciones de ese grupo y las hazañas del mariscal. Sin embargo, este personaje aparecía también, según otros testimonios, como líder de soldados con uniformes parecidos a los del ejército peruano. Al parecer, en el contexto de guerra interna, los subversivos igualmente podían ser mentalmente asociados a los antiguos enemigos chilenos, en tanto “extranjeros”, con bandera roja “foránea” (Cave ro 1994: 120, 121).

Fue en esos convulsionados años que nació el etnocacerismo. Surgió como un grupo clandestino dentro del ejército, los “Militares Etnocaceristas”, que retomaba ideas velasquistas y de izquierda. Ese grupo, siguiendo el ejemplo del héroe en la

Campaña de la Breña, proponía el trabajo unificado con el campesinado para derrotar la subversión (Paredes Oporto 2005:40). La reacción de sus superiores no se hizo esperar: consideraron que realizaba un análisis negativo del ejército con el empleo de la metodología marxista, por lo que debía ser castigado (Humala 2001: 377).

No sorprende, entonces, que la aparición pública del etnocacerismo, en el levantamiento anti-fujimorista de octubre de 2000 (ocurrido en medio de acusaciones de corrupción contra el gobierno), tomara la forma, en términos de los propios protagonistas, de una “remembranza entocacerista”. Con esa expresión, sus líderes, los hermanos Ollanta y Antauro Humala, manifestaban estar inspirados en el mariscal y en sus “ejércitos campesinos y andinos” que “rescataron la dignidad nacional cuando la traición de la clase política hacia el pueblo había postrado al país ante una fuerza armada extranjera” (Humala 2001: 349). Era un intento de reestructurar una alianza del ejército con sectores populares y provincianos en momentos de crisis, y bajo “la imagen sagrada” de Cáceres.

Reflexiones finales

Los héroes patrios no son sólo figuras a las cuales se rinde rutinariamente tributo en sus respectivos aniversarios. Ellos reflejan sentimientos de una sociedad, y detrás de su culto parecen destacarse, en especial, dos fuerzas: el sentir popular y los intentos del Estado y las elites políticas de canalizar esas simpatías para legitimarse en el poder o ganar respaldo en sus proyectos. Este ensayo ha intentado mostrar cómo el culto heroico oficial (que dada la historia del Perú en el siglo XX es también un culto militar) y el popular tienen recorridos que pueden coincidir como también separarse. En ese sentido, resulta erróneo pretender que no hay figuras capaces de despertar pasio-

13 Cf. *El Comercio*, 15 de diciembre de 1989, p. A-4.

nes entre los héroes patrios peruanos. Cáceres ha sido una fuerza movilizadora, si bien controvertida y limitada a determinados momentos, regiones y grupos sociales.

Ese carácter movilizador nos permite retomar nuestra discusión inicial: ¿de dónde viene el interés etnocacerista en el héroe de la Breña? Sugiero que la atracción del etnocacerismo por este personaje procede de que confluyen en él el oficial de carrera, hábil guerrero y estratega, y el líder de guerrillas campesinas. Esta última faceta (que ha hecho de Cáceres un personaje ligado a sectores populares, y apropiado por grupos políticos de izquierda) parece relacionarse con la exaltación del héroe provinciano, mestizo o indígena, que ha venido elaborándose en regiones andinas desde terminada la Guerra de 1879 hasta el presente. Por ello, no debe sorprender que los levantamientos etnocaceristas ocurrieran en la sierra: el último de ellos, en Andahuaylas, región clave en las luchas protagonizadas por el mariscal y, en nuestros días, una de las más pobres del país. Tampoco debe extrañar que ese movimiento cuente en la actualidad con respaldo en zonas de la sierra central y sur en que el caudillo combatió en la década de 1880 y donde su figura ha permanecido vigente en el imaginario popular.

Precisamente el etnocacerismo emplea dos facetas de su héroe: el gran militar y el líder del campesinado, retomando así la ya existente imagen de Cáceres como modelo de las relaciones militares-indígenas. Pero la figura del mariscal es controvertida y, al parecer, no puede apropiarse sin olvidos selectivos: uno de los más evidentes que el nacionalismo económico de los etnocaceristas ha pasado por alto son las políticas económicas poco nacionalistas implementadas durante el gobierno del mariscal.

Sin embargo, lo más peculiar de la relación entre ese grupo y su símbolo es la existencia de varios paralelos. Por ejemplo, el liderazgo del movimiento descansa, en parte,

en miembros de una familia, los Humala, de orígenes ayacuchanos, y no precisamente humildes, como los del propio mariscal. Igualmente, Cáceres y el etnocacerismo han tenido un discurso popular y autoritario, ligado al campesinado y al mundo provinciano; los dos formaron partidos políticos luego de su acto fundacional militar: la Campaña de la Breña, el primero; el levantamiento anti-fujimorista de 2000, los segundos. Este aspecto nos remite a un último (e hipotético) paralelo entre el etnocacerismo y su símbolo: así como el mariscal dejó de lado la alianza con el campesinado para poder gobernar, quizás sus herederos habrían tenido también que olvidar, al menos en parte, su inicial discurso populista y radical, de haber llegado al poder en el 2006.

Bibliografía

- Anónimo, 1980 [1886], "Cáceres" en Andrés A. Cáceres, *Memorias de la Guerra con Chile con Diarios y Documentos Inéditos de la Campaña de la Breña*, Lima, Milla Batres, tomo 2, p. 63-122.
- Basadre, Jorge, 1983 [1939], *Historia de la República del Perú*, Lima, Universitaria, 7ª edición, volúmenes 6, 7, 9 y 10.
- Bonilla, Heraclio, 1979, "El problema nacional y colonial en el contexto de la Guerra del Pacífico", en *Histórica*, No. 3/2, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 1-34.
- Cáceres, Andrés A., 1980, *Memorias de la Guerra con Chile. Con diarios y documentos inéditos de la Campaña de la Breña*, Lima, Milla Batres, volumen 2.
- , 1924, *La guerra entre el Perú y Chile (1879-1883): Extractos de las "Memorias de mi vida Militar" tomadas al dictado y recopiladas por Julio C. Guerrero*, Madrid, Internacional.
- Cáceres, Zoila Aurora, 1921, *La Campaña de la Breña; memorias del mariscal del Perú; narración histórica*, Lima, Imprenta Americana.
- Cámara de Senadores, *Diario de Debates -Congreso Ordinario de 1917*, Lima.
- Cavero Carrasco, Ranulfo, 1994, *Imaginario e iden -*

- idad en los Andes (A propósito de "Tayta Cáceres": un héroe cultural)*, Ayacucho, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
- Contreras, Carlos y Marcos Cueto, 1999, *Historia del Perú contemporáneo*, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima.
- Hobsbawn, Eric y Terence Ranger, editores, 2002 [1983], *La invención de la tradición*, Crítica, Barcelona.
- Humala, Antauro, 2005, "El etnonacionalismo converge con el bolivarianismo: El "outsider" es el pueblo peruano", en *Ollanta*, n. 56, Lima, p. 3.
- , 2001, *Ejército Peruano: Milenarismo, Nacionalismo y Etnocacerismo*, Lima, Instituto de Estudios Etnogeopolíticos.
- Klaren, Peter, 2004, *Nación y sociedad en la historia del Perú*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
- Leguía, Jorge Guillermo, 1989 [1923], "Cáceres", en Jorge Guillermo Leguía, *Hombres e ideas en el Perú*, Lima, Asociación Cultural Integración.
- López Martínez, Héctor, 2005, "Cáceres y el etnocacerismo: En trela historia y el uso falaz del pasado", *El Dominical-Suplemento de Actualidad Cultural, El Comercio* (20 de febrero), Lima, p. 8-9.
- Macera, Pablo, 1981, "La Guerra popular y la guerra con Chile. Anexo 6", en Nelson Manrique, *Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile*, Lima, Centro de Investigaciones y Capacitación, p. 405-412.
- Mallon, Florencia, 1981 "Problema nacional y lucha de clases en la Guerra del Pacífico: la resistencia de la Breña en la Sierra Central, 1881" en *Allpanchis*, No. 17/18, Cusco, p. 203-231.
- Manrique, Nelson, 2005, "La revuelta fallida", en *Perú 21* (3 de enero), Lima, p. 6.
- , 1995, *Historia de la República*, Lima, COFIDE.
- , 1981, *Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile*, Lima, Centro de Investigaciones y Capacitación.
- Marín, José del Carmen, 1984 [1979], "Cáceres: La razón de ser del Perú", en Comisión permanente de Historia del Ejército del Perú, *Cáceres: Conductor Nacional*, Lima, Ministerio de Guerra, p. 26-30.
- Masterson, Daniel, 2001, *Fuerza Armada y Sociedad en el Perú Moderno: Un estudio sobre las relaciones civiles militares, 1930-2000*, Lima, Instituto de Estudios Geopolíticos.
- Mendoza, Zoila, 1989, 'La "Danza de los Avelinos", sus orígenes y sus múltiples significados', en *Revista Andina*, 7/2, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, Cusco, p. 501-521.
- Millones, Iván, 2005, "Inicios del culto oficial a un héroe patrio peruano: El mariscal Cáceres, héroe de la Guerra del Pacífico", en *Revista de Historia de América*, No. 132, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México, p. 173-190.
- , 2002, *De caudillo militar a héroe nacional: La creación de la figura heroica del mariscal Andrés A. Cáceres, entre la República Aristocrática y el Tercer Militarismo (1895-1939)*, Tesis de maestría en Historia con mención en Historia Política, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Monsiváis, Carlos, 2000, *Aires de familia: Cultura y sociedad en América Latina*, Anagrama, Barcelona.
- Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, s/f, *500 años de resistencia. La lucha continua. I Congreso (Documento de Discusión)*, s. p. d. i.
- Odría, Manuel A., 1930-1931, "Campaña de la Breña", en *Revista Militar del Perú*, No. 9, 10, 11, Lima.
- Paredes, Manuel, 2005, "Tengo un cohete en el pantalón", en *Quehacer*, Lima, n. 9, p. 38-45.
- Pérez Godoy, Ricardo, 1936, "Andrés Avelino Cáceres, Mariscal del Perú", en *Revista Militar*, No. 11, p. 2145-2167.
- Pisconte Quispe, Alan Martín, 2005, "Sobre héroes y tumbas en el Perú", en Tamia Portugal Teillier, compiladora, *¿Dónde están nuestros héroes y heroínas? El sentido de la vida heroica en el Perú hoy*, Lima, SUR Casa de Estudios del Socialismo.
- Vega, Juan José, 1986, "Prólogo", en José Carlos Vilcapoma y Luis Guzmán Palomino, *Cáceres invencible*, Nuevo Mundo, Huancayo.
- Vilcapoma, José Carlos y Luis Guzmán Palomino, 1986, *Cáceres invencible*, Nuevo Mundo, Huancayo.

Periódicos

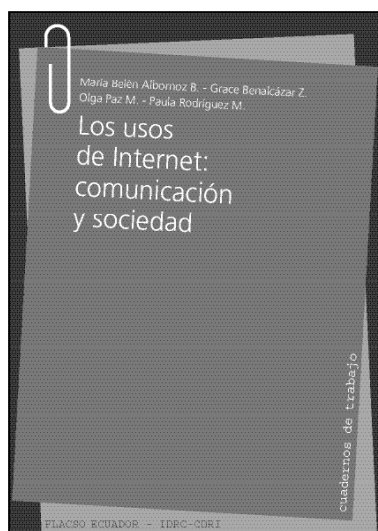
El Comercio (Lima), 1951, 1986, 1989.

El País (Lima), 1897.

La Crónica (Lima), 1936.

La Prensa (Lima), 1905.

Ediciones de FLACSO - Ecuador



Serie CUADERNOS DE TRABAJO

Los usos de Internet: comunicación y sociedad

Belén Albornoz, Grace Benalcázar,

Olga Paz y Paula Rodríguez

Flacso-Ecuador - IDRC-CDRI, 2005, 397 páginas

Los resultados de las investigaciones que presentamos en este volumen abordan el estudio de Internet desde varios enfoques y perspectivas teóricas. El texto aborda temas como la reproducción digital y los conflictos de significación que se instalan en sus circuitos; la presentación y valoración de las políticas de gestión del conocimiento en programas puntuales; la producción de sentido desde los nuevos imaginarios y formas de representación inmersos en la Web; el derecho a la comunicación en el marco de la necesidad de una reconfiguración del sistema jurídico a partir del uso de Internet.

La Internet ha dado origen a un nuevo entorno simbólico capaz de crear un escenario comunicativo mediante formas de representación digital de la realidad, de las relaciones sociales y de los saberes. Investigar los usos y apropiaciones de esas representaciones nos conduce a identificar nuevas maneras de narrar y de significar en la contemporaneidad. Por otra parte, es evidente la deficiencia de los gobiernos y los sistemas políticos y jurídicos de la subregión andina para enfrentar los retos que plantea el uso de la red y demuestra la ausencia de visión, capacidad de programación y planificación que estas instancias tienen para viabilizar una efectiva participación ciudadana en los procesos de reconstrucción del orden social que se sustenten en los importantes cambios tecnológicos a los que asistimos actualmente.

Ejército *cholificado*: reflexiones sobre la apertura del ejército peruano hacia los sectores populares

Cholified army. Some thoughts on the social democratization of the Peruvian military

Lourdes Hurtado Meza

Antropóloga (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú).

Alumna de Doctorado en el Departamento de Historia de la Universidad de Notre Dame (Indiana, EEUU)

Email: lhurtado@nd.edu

Fecha de recepción: mayo 2006

Fecha de aceptación y versión final: julio 2006

Resumen

Este ensayo se refiere a la democratización social del cuerpo de oficiales del ejército peruano. Aquí planteo que a diferencia de las otras instituciones castrenses del país, el ejército es la corporación militar que cuenta con una importante oficialidad chola, es decir, de procedencia popular, migrante y andina. Este es un proceso que ha ido de la mano con la andinización de las zonas urbanas en el Perú, el discurso inclusivo desarrollado en la primera fase del gobierno del General Velasco (1968-1975) y los eventos acontecidos durante los años del conflicto armado interno (1980-2000).

Palabras clave:

Ejército Peruano, etnicidad, cultura militar, conflicto armado interno

Abstract

In this essay I maintain that there has been a process of democratization within the corps of officers of the Peruvian Army. Unlike the other Peruvian military institutions, in the army there is a significant number of cholo officers, that is to say, officers with an Andean and urban migrant background. This has been the consequence of, among other aspects, the andeanization of urban areas in Peru, the inclusive discourse towards common sectors sponsored by the military government of General Juan Velasco (1968-1975), and the events which took place during the internal armed conflict (1980-2000).

Keywords:

Peruvian army, ethnicity, military culture, internal armed conflict

El Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército (COINDE), ubicado en el limeño distrito de Chorrillos, es una de las instalaciones militares más grandes del Perú. Ella alberga a la Escuela Militar y a otras escuelas de capacitación y especialización donde se entrenan los oficiales del ejército peruano. En la entrada principal del COINDE resaltan una serie de esculturas metálicas en alto relieve que narran la evolución del ejército de este país andino desde el pasado hasta el presente. De esta manera, al lado de guerreros incas con porras y macanas, se observan soldados *modernos* que se desplazan al lado de pesados tanques T55. En uno de los extremos del COINDE, muy cerca al antiguo Servicio de Inteligencia (SIN) se encuentra la Escuela de Comandos, institución donde se entrena a la brigada de fuerzas especiales más prestigiosa del ejército. Al atravesar el patio de la escuela, llama la atención una escultura en tamaño natural del Inca Pachacutec, el gran estratega y organizador del Estado Inca, a quien los comandos consideran como patrón y figura emblemática de su institución. En una mano, el Inca lleva una porra en actitud amenazante, y en la otra un gran escudo. Entre las múltiples arengas que se observan en los muros de este centro de entrenamiento militar, resalta la inscripción en quechua *Ama Sua, Ama Llulla, Ama Qella* (“no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso”), principios básicos atribuidos al Estado Inca, que los comandos han incorporado no sólo en la parafernalia visual de su alma máter sino también en el *deber ser* de un buen oficial del ejército. Narraciones visuales como éstas, que aluden al pasado prehispánico como fuente de tradición e historia del ejército peruano contemporáneo, también se encuentran en otras edificaciones militares como el Círculo Militar (CMP) y en las imágenes de voceros institucionales como la revista *Actualidad Militar*.



Inca Pachacutec en material promocional de la Escuela de Comandos, Chorrillos, Perú.

Sin embargo, este tipo de imágenes profundinas no aparecen en las narraciones visuales de las otras instituciones que conforman las Fuerzas Armadas del Perú: la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. ¿A qué se debe esta ausencia? En el presente ensayo expongo una reflexión sobre la apertura del ejército hacia los sectores populares del Perú, proceso que denomino *cholificación*, y la contradicción existente entre el discurso incluyente y las prácticas llevadas a cabo por esta institución durante el conflicto armado interno (1980-1993)¹. Este evento, uno de los hechos más

1 La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), fue la entidad creada por el estado peruano en 2001 para esclarecer los eventos acontecidos durante el conflicto. La CVR estableció en su Informe Final que el estado peruano, en una actitud de legítima defensa, ordenó a las fuerzas del orden (policía y fuerzas armadas) que se hiciera cargo de la lucha contra la subversión. Sin embargo, al designar esta responsabilidad a las fuerzas del orden, el estado peruano no tomó las medidas necesarias que aseguraran que la lucha contra los grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y

trágicos que ha afectado al Perú en su historia reciente y en el que más de 69.000 personas murieron a consecuencia de la violencia de los grupos alzados en armas o de las fuerzas del Estado, puso en evidencia los límites de la retórica integradora desarrollada por los militares durante el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1980). Aquí sostengo que el ejército se ha apropiado de la imagen del pasado prehispánico y ha incorporado en sus narrativas institucionales elementos asociados con lo andino y lo popular para revestir de legitimidad su rol de institución fundacional del estado nacional peruano. Más aun, ya que el ejército se representa como la corporización de lo nacional, su cuerpo de oficiales cuenta entre sus filas con un gran número de jóvenes provenientes de sectores populares del país. La democratización de esta institución, no exactamente en términos ideológicos sino más bien en términos sociales, no ha sido replicada por la Fuerza Aérea ni por la Marina de Guerra donde no hay oficiales cholos ni negros. Por el contrario, estas instituciones aún mantienen un cierto aire de exclusividad social que da cuenta de un abierto racismo hacia ciertos sectores de la población peruana.

Este ensayo está dividido en tres secciones. En la primera parte expongo algunas ideas sobre la cultura militar del ejército peruano, en la segunda sección me refiero al discurso pro-andino del gobierno del general Velasco, y en la última parte presento una reflexión sobre el conflicto armado interno y la *cholificación* del ejército peruano.

el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) se diera dentro de los parámetros legales de un régimen democrático. Esta abdicación del estado peruano en favor de militares y policías dio origen a que se desatara una guerra sucia contra aquellas poblaciones e individuos sospechosos de pertenecer o simpatizar con una agrupación subversiva.

Cultura militar peruana

De acuerdo al mandato constitucional, las Fuerzas Armadas Peruanas están conformadas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Estas instituciones tienen la responsabilidad de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República (art.165) y no son deliberantes (art.169), es decir, los sujetos que las conforman no pueden emitir opinión sobre la conducción política del país. Más allá del ámbito normativo, estas instituciones cuentan con un tipo de cultura organizacional, una cultura militar, que es aprendida, compartida y transmitida, que se traduce en discursos, prácticas y representaciones, y en la que se desarrollan estrechas redes personales que se mantienen incluso más allá de la jubilación de los individuos militares.

Asimismo, las Fuerzas Armadas peruanas son instituciones profesionales fuertemente jerarquizadas en las que la camaradería y el espíritu de cuerpo son vitales para la reproducción institucional. Estos aspectos son consecuencia de un constante proceso de resocialización a través del cual un individuo se convierte en militar en un espacio apartado de la sociedad civil -una academia militar- donde tiene que llevar a cabo una serie de órdenes y rutinas, y debe mantener una disciplina estricta. Durante el periodo de internamiento los individuos desarrollan un *ethos* militar, es decir “un conjunto de valores particulares de la profesión que asigna especial importancia a un código de honor personal y colectivo, incentiva un alto nivel de solidaridad de grupo y maneja un concepto restrictivo de las relaciones del cuerpo de oficiales con los otros componentes del ejército y con la sociedad civil” (Harries-Jenkins y Moskos Junior 1984:57) El *ethos* militar tiene que ver con la cultura institucional del ejército y con la relación de alteridad que existe entre militares y civiles pues los primeros consideran

que estos últimos no cuentan con la capacidad suficiente para gobernar el país. A ello se debe el sinnúmero de golpes militares que han afectado al Perú durante su vida republicana. Este sentido de superioridad experimentado por los militares con respecto a la sociedad civil se ve reforzado por los mitos sobre el carácter fundacional del ejército, que otorgan a esta institución un papel fundamental durante el proceso de independencia del siglo XIX.²

Otro elemento que caracteriza al ejército peruano es su retórica sobre el sacrificio. En un trabajo anterior (Hurtado 2005a), realizado en base a entrevistas, etnografías y el análisis de publicaciones militares, señalé que los oficiales de esta institución asumen la vida militar como una experiencia llena de sacrificios y durezas. Esta lectura de la experiencia militar, comparada muchas veces con la vida religiosa, tiene que ver no sólo con los riesgos propios de la carrera de las armas sino también con las limitaciones económicas que imponen los bajos salarios en las Fuerzas Armadas, y con el hecho de que los militares con frecuencia viven en lugares que aún no están del todo articulados con el resto del país. Lo interesante es que esta sensación de sacrificio no sólo compete a los oficiales sino también a sus familias, es decir, a la “gran familia militar peruana”.

Por otro lado, aunque la formación de los oficiales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea se lleva a cabo bajo premisas similares, es decir en instituciones totales con cadenas diferenciadas de jerarquía, y compar-

ten una cultura militar colectiva en la que juegan un papel importante valores como el honor y la valentía, lo cierto es que cada una de estas instituciones cuenta con sus propias particularidades. En parte, tales diferencias se deben al ámbito de acción en que se desempeña el personal de estas instituciones, es decir aire, mar y tierra, que determina el tipo de organización de las unidades militares y que también influye en la distribución espacial de los efectivos militares en el territorio nacional. De esta manera, mientras las guarniciones del ejército están localizadas en la mayor parte de departamentos del Perú de norte a sur y de este a oeste en costa, sierra y selva, las tres regiones naturales del país, la Marina de Guerra sólo tiene presencia en la costa, en algunas zonas de la selva donde hay ríos navegables, y en el altiplano peruano, en el lago Titicaca. La presencia de la Fuerza Aérea es más reducida aún pues se concentra en la costa, cerca a las fronteras con Chile y Ecuador, y en ciertas zonas de la selva amazónica.

Sin embargo, el hecho más importante que distingue a estas tres instituciones castrenses es que todavía existe un contraste en la composición racial y étnica de su oficialidad. En el Perú existe una obsesión, especialmente en los sectores medios y altos, por clasificar a la gente y así ubicarla social y racialmente en un estrato inferior o superior en relación al que uno se encuentra. Los criterios empleados para ello son el color de la piel y el lugar de procedencia, y ciertos marcadores culturales como la forma de hablar y de vestir, que para un foráneo serían difíciles de distinguir. Es lo que Guillermo Nugent (1992:119) denomina el *peruano +1* y el *peruano -1*, es decir, “esa peculiar manera de jerarquizar que los peruanos emplean en la vida social para alcanzar una presentación coherente del mundo en la que se distingue la ubicación social de las personas a partir de la relación que tienen con uno mismo”. Estos criterios también son aplicables al cuerpo de oficiales de las Fuerzas

2 En un reciente artículo periodístico con respecto a la celebración de las Fiestas Patrias en el Perú, el antropólogo e historiador Nelson Manrique llama la atención sobre la paradoja existente entre el mito fundacional del ejército peruano y el hecho de que la independencia nacional fuera alcanzada con el concurso de dos ejércitos extranjeros, de Argentina y Venezuela, con una participación limitada de los peruanos. Fuente Diario Perú 21, El Sentido del 28 de julio, 29 de julio 2006.

Armadas. Me refiero a que en ellas se observa, por un lado, una institución “blanca”, asociada tradicionalmente con una elite criolla y costeña, la Marina de Guerra, y por otro, una institución más “chola”, asociada con lo popular y lo andino, que es el ejército, y otra que está en el medio de las dos, la Fuerza Aérea, que étnicamente está más cercana a la primera. Esta asociación del ejército con lo cholo tiene que ver, por un lado, con la retórica del ejército sobre lo indígena y lo andino concebida durante la primera fase del gobierno militar (1968-1975), y por otro, porque luego de la transición democrática de 1980, el ejército paulatinamente dejó de ser una institución atractiva para los sectores medios del país (por la crisis económica y el conflicto armado interno) y se vio obligado a ensanchar su base social de reclutamiento de oficiales. Por esa razón, hoy en día esta institución cuenta con un gran número de oficiales provenientes de sectores populares.

Retórica institucional y gobierno militar

Aunque los primeros cuerpos del ejército peruano, los “Granaderos a caballo” y el “Batallón leales del Perú”, se crearon en 1821, el ejército considera el 9 de diciembre de 1824 como la fecha de su fundación institucional. Ese día se llevó a cabo la batalla de Ayacucho, en donde el ejército patriota, liderado por Antonio José de Sucre, derrotó al ejército realista. A raíz de esta batalla se produjo el retiro definitivo de las tropas españolas del Perú. Por ello, los militares asocian el nacimiento del ejército peruano con el evento que selló la independencia de la república. Es decir, consideran a su institución como la forjadora de la patria libre y soberana y por ello sienten que tienen una responsabilidad para con ella. Esta manera de considerar al ejército no es, por cierto, un discurso nuevo sino que se remonta



Detalles del mural del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército, Chorrillos, Perú.

hasta los primeros años de vida republicana, durante la Confederación Perú-Boliviana y el gobierno del Mariscal Santa Cruz. Gistóbal Aljovín (2005:113) sostiene que fue precisamente la Confederación la que creó la imagen pública que sugería que el jefe del ejército y sus oficiales y soldados eran los fundadores de una institución política pacífica.

Por otro lado, parte importante del mito fundacional del ejército es la noción de continuidad entre presente y pasado, y de que la corporación de oficiales forma parte de una institución que perdura y se mantiene a lo largo del tiempo. Esto tiene mucho valor en un país como el Perú en que las instituciones estatales están en constante crisis y en donde el horizonte de continuidad no solo en la conducción de políticas públicas sino en la

misma naturaleza del tipo de gobierno suelen presentar mucha incertidumbre para la población. Aunque periódicamente se produce el relevo generacional al interior del ejército, lo cierto es que dentro de esta institución existe un sentido colectivo que va más allá de los individuos y que se nutre de marcos normativos, rituales, tradiciones y conmemoraciones, así como de la alusión constante a figuras heroicas ideales que trazan la línea de carrera del oficial. En este contexto, recurrir a un pasado glorioso asociado con la imagen de los incas permite al ejército revestirse de legitimidad y tradición.

Cuando se revisa la información contenida en los sitios web de los institutos castrenses peruanos, se observa las diferentes maneras en que estas instituciones se auto representan. Así, cuando la Marina se refiere al periodo prehispánico del Perú, la información que brinda se refiere a la relación existente entre el mar y los antiguos pobladores del Perú y menciona el tipo de embarcaciones empleadas en el mundo andino antes de la conquista española: los caballitos de totora (embarcaciones hechas a base de juncos) y las balsas de palos³. En cambio, en la página web del ejército, la información sobre el mismo periodo, resalta el carácter bélico del ejército y su importancia como aparato de defensa de los estados prehispánicos. En la reseña histórica institucional se lee lo siguiente: “Como se sabe, la existencia de una civilización implica necesariamente una organización política, social y económica y la aparición del Estado, y por ende la necesidad de un ejército para sostenerlo y defenderlo”⁴. Esta suerte de nostalgia por lo incaico, lo prehispánico, que se percibe en las imágenes y los discursos del ejército de hoy es consecuencia del gobierno del general Velasco.

3 Ver: Marina de Guerra del Perú, *Los antecedentes: La época prehispánica* en <http://www.marina.mil.pe/>, abril 2005.

4 Ejército del Perú, *Reseña Histórica del Ejército* en <http://www.ejercito.mil.pe/historia.htm>, abril 2005.

El último gobierno militar del Perú estuvo en el poder de 1968 a 1980.⁵ La primera etapa del autodenominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada fue de 1968 a 1975 y estuvo liderada por el general Juan Velasco Alvarado. La segunda fase, de 1975 a 1980, fue conducida por el general Francisco Morales Bermúdez. Durante su primera etapa, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada percibió a la oligarquía como el enemigo del país y el ente que impedía su desarrollo. Por ello, llevó a cabo una serie de reformas referentes a la propiedad de recursos productivos como yacimientos mineros que fueron traspasados al Estado, diseñó una política de sustitución de importaciones y puso en marcha una reforma agraria radical que implicaba la expropiación de latifundios de la sierra y costa del país. A pesar del poco éxito en términos económicos de las políticas llevadas a cabo por los militares, uno de los eventos más importantes de esta primera fase del Gobierno Revolucionario fue el discurso inclusivo que los militares desarrollaron con respecto a las poblaciones excluidas del país: los indios. Es sintomático que uno de los hechos más significativos haya sido el cambio de denominación de “indio” a “campesino”. Así, la celebración del 24 de junio, que solía ser el *Día del Indio*, paso a llamarse *Día del Campesino*. Contreras y Cueto (2000:316) señalan que la reforma agraria modificó la composición de las clases altas y las bases agrarias de su poder, ellos agregan que el dinero empezó a primar como el principal factor de ingreso a estas clases y que debido a este hecho, se atenuó el racismo, que hasta ese momento había sido uno de los principales

5 Aquí no considero el régimen de Alberto Fujimori como un gobierno militar. Si bien es cierto, durante su decenio en el poder los militares fueron un elemento clave para su permanencia, la figura que tomó las decisiones fue Fujimori, apoyado -es cierto- por Vladimiro Montesinos, un ex-capitán del ejército, pero la figura civil del presidente fue la que se impuso.

factores de exclusión para la pertenencia a las clases más privilegiadas de la sociedad peruana. Por otro lado, Guillermo Nugent (1992:86) sostiene que el Velasquismo significó para los sectores conservadores del Perú una experiencia traumática pues supuso el primer intento serio por cuestionar una cultura oficial y un orden social basados en el desprecio hacia las poblaciones más pobres y andinas.⁶ Lo cierto es que la primera fase del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada implicó una ruptura de los militares a nivel de discurso y práctica con el pasado oligárquico de la clase política peruana.

El perfil social del general Velasco y de otros oficiales que formaban parte de la Junta de Gobierno fue un aspecto que influyó en el discurso antioligárquico del gobierno militar. Velasco era costeño, del departamento de Piura, pero provenía de una familia bastante humilde; hizo el servicio militar y después ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos. Dirk Kruijt señala que de los 14 oficiales que tomaron parte en el golpe de 1968 (3 generales y 11 coroneles), la mayor parte tenía orígenes humildes. Así, los generales provenían de sectores medios altos y altos, pero todos los coroneles menos 1 provenían de familias de modesta condición económica o de familias campesinas del interior del país. Kruijt (1989: 77) agrega que un número sorprendente de ellos había servido primero como soldado raso para procurar la subsistencia de la familia, luego fueron recorriendo un lento camino por los grados de cabo primero, sargento segundo y sargento primero hasta llegar a la escuela de oficiales, la Escuela Militar de

Chorrillos. La extracción social de estos oficiales era distinta a la de los oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea. La Marina, en particular, siempre se caracterizó por contar con una oficialidad proveniente de los sectores más acomodados del país. Para Juan Martín (2002:103), las diferencias de extracción social habrían sido un factor no sólo de autonomía de la minoría militar respecto de los compromisos de la oligarquía, sino también de “autolegitimación e identificación con las mayorías populares.

Más aún, el gobierno militar tuvo una retórica nacionalista que apeló constantemente a la historia y que se puso de manifiesto en imágenes asociadas a lo andino. En opinión de Juan Martín, el nacionalismo del gobierno militar más que un discurso redentorista de grupos étnicos ancestralmente dominados, lo que buscó fueron elementos de integración y diferenciación con el pasado oligárquico en tradiciones culturales que se tenían por autóctonas. En ese contexto, agrega Juan Martín (2002:163), las referencias andinas e indias, “dejaban de ser, con la reforma agraria y todo su proceso de aplicación, exclusivas de una diferencia étnica para transformarse en valores nacionales, en imágenes de toda la nación para un país que estaba dejando de ser mayoritariamente rural en favor de la vida en las ciudades”. De esta manera, el Perú de esos años fue testigo de un cambio en el discurso iconográfico estatal que dio gran énfasis a lo andino como expresión de lo nacional. Como señala Carlos Iván Degregori (1995:313), la imagen de Túpac Amaru, el *curaca* líder de la gran revuelta indígena de 1780, fue “rescatada” y se convirtió en el símbolo de la reforma agraria. Además del *curaca*, otros personajes andinos o mestizos fueron empleados en diferentes emblemas o instituciones estatales. De esta manera, las imágenes del inca Pachacutec y del escritor mestizo Garcilazo de la Vega se plasmaron en billetes y monedas de circula-

6 Habría que preguntarse hasta qué punto sigue vigente entre los sectores conservadores del Perú parte del “trauma” generado durante el gobierno de Velasco. Un indicador de su vigencia sería la crítica desproporcionada de estos sectores hacia el candidato Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista Peruano y excomandante del Ejército, que durante el último proceso electoral peruano apeló a un discurso nacionalista que se presentaba como heredero del Velasquismo.

ción nacional y una severa máscara de la cultura Chimú, famosa por sus sofisticados trabajos en metales, fue el logotipo de Petro Perú, la flamante nueva empresa estatal encargada de la extracción del nacionalizado petróleo (Sánchez 2005).

Es precisamente en medio de este ambiente nacionalista y de gran interés por las imágenes de lo andino que se crea el himno del ejército. El himno, compuesto en 1973, es uno de los textos que sintetiza mejor la retórica institucional del ejército peruano acerca de su rol en la creación del estado nacional y de su legitimidad como institución tutelar masculina que se nutre de una tradición histórica que viene desde el pasado prehispánico.⁷

Coro

El ejército unido a la historia
por fecunda y viril tradición
se corona con lauros de gloria
al forjar una libre nación

Estrofa I

Evocando un pasado glorioso
del incario su antiguo esplendor
Ayacucho, Junín, Dos de Mayo⁸
libertad conquistó con valor [...]

Estrofa II

Las fronteras altivo defiende
cual guardián del honor nacional
de su pueblo recibe las armas
y es bastión de justicia social [...]



Escuela de Comandos, Chorrillos, Perú.

Llama la atención que en esta narrativa donde se menciona a los incas y a las batallas de independencia, el ejército no haga mayor alusión a la época de la colonia. Esta forma de narrar la historia del Perú, en la que el presente es depositario de un pasado incaico no es nueva. Por el contrario, es un elemento fundamental del discurso criollo de inicios de la república. María Isabel Remy (1995) sostiene que en la retórica de las élites políticas del siglo XIX, la independencia rompía con el pasado pero además establecía una continuidad con aquello que la conquista española había quebrado: el imperio incaico. Cecilia Méndez (1995) agrega que además de la exaltación del pasado incaico, el discurso criollo convivía con una valoración despreciativa del indio en el presente. Lo que diferencia a la retórica histórica del ejército del discurso criollo, es que durante el gobierno de Velasco sí se trató de incorporar a las poblaciones indígenas -devenidas de acuerdo a la nueva nomenclatura estatal- en campesinas, a la comunidad imaginada peruana.

Entonces, el himno del ejército, que es

celebra del Día del Ejército; la Batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, fecha en que se celebra el Día de la Caballería; y el Combate del Dos de Mayo, acontecido el 2 de mayo de 1866, día en que se celebra la Fiesta de la Artillería.

7 El autor de la letra y música del himno del ejército es Pedro Schmitt Aicardi. El 9 de diciembre de 1973 se oficializó el himno. Por resolución ministerial N° 2907-73 DIRODIN se declaró a la Escuela Militar de Chorrillos depositaria de la intangibilidad del himno. Fuente: *Historia de la Escuela Militar de Chorrillos*, Ministerio de Guerra, 1982, Lima.

8 Esta línea se refiere a tres batallas o combates decisivos para la independencia del Perú: la Batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, fecha en que se

entonado en todas las ceremonias castrenses luego del himno nacional, expresa el sentir de una colectividad militar que tuvo entre sus manos un proyecto revolucionario que se sintió agente de la independencia nacional y que legitimó su presencia en el poder a través de un discurso inclusivo con los sectores populares no oligárquicos del país, es decir “el pueblo”. Un pueblo a quien esta institución trataba de brindarle -de acuerdo a la letra de su himno- “justicia social”. La relevancia e historicidad del *binomio* Pueblo-Fuerza Armada también fue impulsada desde la dimensión simbólica de los héroes institucionales.

Los héroes de las Fuerzas Armadas son figuras arquetípicas que dan cuenta del *deber ser* de un militar. Sin embargo, en las maneras de narrar las hazañas y trayectorias de estos personajes también se perciben las diferentes maneras de concebir la relación institucional de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Así, la figura heroica de la Fuerza Aérea es José A. Quiñonez, un joven piloto cuya nave fue derribada en el conflicto con el Ecuador en 1941. Sin embargo, la figura de Quiñonez no tiene el halo de leyenda que sí envuelve a los héroes del Ejército y la Marina, quienes lucharon y perecieron en la Guerra del Pacífico; un evento traumático para los peruanos no sólo por la derrota sino por la mutilación del territorio nacional pues Perú perdió las provincias de Arica y Tarapacá (Villanueva 1972). En la primera parte de la guerra, lo que se denominó la Campaña Marítima (16 de mayo - 8 de octubre, 1879) destaca la figura de Miguel Grau, el héroe máximo de la Marina de Guerra. Grau recibió el apelativo de “Caballero de los Mares” debido a su comportamiento humanitario para con la tripulación del buque chileno Esmeralda en el combate de Iquique⁹. Al

9 El combate de Iquique se llevó a cabo el 21 de mayo de 1879. En dicha ocasión, el monitor Huáscar hundió a la corbeta Esmeralda y Grau ordenó rescatar de las aguas a los sobrevivientes de la embarcación chilena.

mando del viejo monitor Huáscar, llevó a cabo una serie de incursiones en el litoral chileno que por algunos meses pusieron la balanza del conflicto a favor del Perú. Sin embargo, a pesar de su suerte inicial, Grau no pudo hacerle frente a la poderosa armada chilena y murió valerosamente el 8 de octubre de 1879 en el Combate de Angamos. Con su muerte y la pérdida del monitor Huáscar, culminó la Campaña Marítima y la armada peruana quedó destruida. En la segunda etapa de la guerra, la Campaña Terrestre surgen los héroes del ejército. El patrono o héroe máximo de esta institución es Francisco Bolognesi, limeño, de padres extranjeros, quien murió el 7 de junio de 1880 en la Batalla de Arica. A Bolognesi se le atribuye haber respondido al comisionado chileno que fue a pedirle la rendición del Fuerte Arica, que no se iba a rendir y que, por el contrario, iba a luchar “hasta quemar al último cartucho”.¹⁰ Una vez que la ciudad de Lima cayó en manos de las tropas chilenas, Andrés Avelino Cáceres se encargó de organizar la resistencia de la sierra central, donde llevó a cabo una guerra de guerrillas con el apoyo de la población local.

Si Bolognesi es para el ejército el símbolo de sacrificio por la patria, la encarnación del líder y estrategia militar es el Mariscal Cáceres. Estas dos figuras emblemáticas dan cuenta de dos dimensiones fundamentales para esta institución. Por un lado está la cuestión del amor a la patria al punto de ofrendar la vida

na. Posteriormente, Grau escribió una carta a la viuda de Arturo Pratt, capitán de la Esmeralda y máximo héroe del panteón chileno, donde le hizo presente sus condolencias y le hizo llegar los objetos personales que se habían encontrado en el cuerpo de su esposo.

10 Esta expresión es el lema del ejército. Cada año, en una ceremonia que se llama “Renovación de la Promesa”, oficiales y cadetes juran ante la estatua de Bolognesi defender la integridad del territorio nacional y los ideales de su institución “hasta quemar el último cartucho”.

misma: esto tiene que ver con la retórica del sacrificio a la que hice referencia en el acápite sobre la cultura militar, y con elementos altamente valorados entre los militares como la dignidad y el honor. Por otro lado está la importancia del sujeto militar como agente de acción, como líder y conductor de hombres¹¹, pero que también es capaz de llevar a cabo una función política, pues una vez concluida la guerra, Cáceres fue elegido presidente del Perú en dos ocasiones (1886 y 1895).

Si se comparara a Cáceres y a Grau surgen contrastes interesantes que también dan cuenta de las narrativas históricas y sociales de sus respectivas instituciones. Así, mientras Grau era blanco (su padre había nacido en España), y costeño, de Piura, zona norte del Perú que contaba con una baja densidad poblacional indígena, Cáceres por el contrario pertenecía a la clase terrateniente de la sierra sur central del país, era un *mestizo* y hablaba quechua. Su procedencia serrana y las redes que tenía con otros personajes de las elites locales le permitieron llevar a cabo diferentes alianzas con sectores populares de la sierra central y así pudo contener durante casi dos años el avance chileno en esa zona.

He centrado mi comparación en Cáceres y Grau, y no en Bolognesi y Grau, pues considero que desde la perspectiva del ejército, Bolognesi es el patrono "oficial" pero Cáceres es la figura militar que encarna la cercanía de esta institución con los sectores populares del Perú. Tan es así que durante las dos últimas décadas del siglo XX, la Comisión Permanente de Historia del Ejército, creada durante el Gobierno Militar y que tuvo por misión producir una bibliografía sobre el ejército, sus orígenes, héroes y especialmente la Guerra del Pacífico, hizo de Cáceres la figura recurrente de los textos que se produjeron a fines de los 70s y comienzos de los 80s¹². En ellos

11 Formar líderes que sean conductores de hombres es el objetivo de la Escuela Militar de Chorrillos.

se resaltaba la extraordinaria relación entre Cáceres y sus montoneras, es decir entre el jefe militar y el pueblo, entre el padre –el *Taytacha* Cáceres en quechua– y sus hijos campesinos. Esta dimensión paternal y magnánima del Tayta Cáceres fue un intento por reconstruir en otra dimensión, la bibliográfica, la idea de la alianza, del *binomio* Pueblo-Fuerza Armada.¹³

La cholificación del ejército

Como hemos visto, durante el gobierno militar el ejército elaboró un discurso inclusivo para con los sectores populares del país. Fue una retórica nacionalista que cuestionó el discurso discriminador de la antigua oligarquía peruana, y que a través del uso de elementos andinos trató de acercarse a los sectores populares del Perú. Fue durante esta etapa que se inició la *cholificación* del ejército. Aníbal Quijano (1980:71 en Degregori, 1995: 306) sostenía en los años 80s que era posible "presentar el fenómeno de la cholificación, como parte y resultado de la lucha de clases entre el campesinado y los terratenientes" de la década de los 60s. Desde su punto de vista, el cholo se consolidaba como una clase emergente en el ámbito urbano y representaba un "destino peruano que no necesariamente implicaba la aculturación total de la población indígena en el marco de la cultura occidental criolla" (Quijano 1995). Tengo la certeza que hoy, veinte años después, las predic-

12 Tal es el caso de textos como *De los Reductos a Julcamarca* (1981), *La Contraofensiva de 1882* (1982), *Huamachuco y el Alma Nacional* (1983), *Cáceres: Conductor Nacional* (1984).

13 Sin embargo, estas narraciones silenciaron el hecho que años después de haber acabada la guerra con Chile, Cáceres dio la espalda a esos campesinos alzados en armas y llevó a cabo una campaña de violencia indiscriminada contra ellos. Para más detalle sobre la actitud de Cáceres con respecto a las poblaciones del Valle del Mantaro (ver Florencia Mallon 1987).



Escuela de Comandos, Chorrillos, Perú.

ciones de Quijano se han cumplido, al menos en lo que al ejército se refiere.

En esta última sección cuando hablo sobre la *cholificación* del ejército, me refiero principalmente a la apertura del cuerpo de oficiales hacia los sectores populares del país. Considero que son tres los factores que acentuaron este proceso en el ejército: a) la expansión de las ciudades costeñas a consecuencia de la migración, b) la crisis económica de los años 80s y c) el conflicto armado interno.

La *cholificación* es un proceso que ha ido de la mano con el crecimiento de las ciudades y especialmente de Lima, centro del poder del Perú.¹⁴ El proceso de urbanización de Lima se inició a fines de los años 50s, cuando a raíz de las grandes migraciones de la zona andina los desiertos existentes alrededor de la ciudad, ubicada en el valle del Rímac, empezaron a poblarse y se convirtieron en las barriadas periféricas que luego se denominarían

“conos”¹⁵. En los conos de la capital los migrantes andinos construyeron en base a cooperación y solidaridad -no sin dificultades, por cierto- pujantes áreas urbanas que luego quedarían completamente integradas a la ciudad de Lima. La capacidad de algunas familias migrantes para acumular bienes y ahorrar generó en los años 80s una exitosa economía informal de la que han dado cuenta varios autores (Degregori, Lynch y Blondet 1986, Golte y Adams 1990). Muchos jóvenes que forman parte de la oficialidad del ejército provienen precisamente de los conos de la ciudad y no de los distritos asociados con la clase media urbana tradicional¹⁶.

Por otro lado, desde la década de los 80s la crisis económica afectó profundamente la escala salarial de los oficiales de todas las Fuerzas Armadas (Rospigliosi 1995: 234); además, militares y policías se convirtieron en los principales blancos de Sendero Luminoso y del MRTA, por lo que la carrera militar se convirtió en una ocupación de alto riesgo¹⁷. Lo que ocurrió durante las dos últimas décadas del siglo XX es que en términos económicos y sociales el ejército dejó de ser una institución atractiva para las clases medias tradicionales. Sin embargo, si el ejército dejó de atraer a las clases medias urbanas, entre los jóvenes provincianos y de sectores populares de las ciudades de la costa -muchos de ellos migrantes de primera generación- esta institución sí representaba un medio de ascenso social, pues, a pesar de la mala escala salarial, para un joven proveniente de un sector económico bajo, la carrera militar —es decir ser

14 Lima no sólo alberga al tercio de la población nacional sino que además alcanza una dimensión que es diez veces superior a la de Arequipa, la segunda ciudad del país (ver Antonio Zapata 1995).

15 El Cono Norte esta formado por los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo. El Cono Sur esta conformado por los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

16 Tal es el caso de distritos como Jesús María, Magdalena o Lince.

17 Durante el conflicto armado interno alrededor de mil efectivos del ejército perdieron la vida y un número mayor quedó en situación de discapacidad permanente a consecuencia de las heridas provocadas por enfrentamientos con o ataques de Sendero Luminosos y el MRTA (CVR 2003).

18 El Perú cuenta actualmente con cuatro regiones militares. Antiguamente contaba con cinco y sus sedes se encontraban en las ciudades de Lima, Arequipa, Piura, Iquitos y Cusco.

Fuente: <http://www.ejercito.mil.pe/>

parte del cuerpo de oficiales del ejército representaba una alternativa ocupacional segura que le brindaba un mínimo de estabilidad económica y prestigio. Este giro en la base social de reclutamiento del ejército se vio favorecido por la descentralización de los exámenes de admisión a la Escuela Militar de Chorrillos. Al tomarse los exámenes no sólo en la ciudad de Lima sino también en el interior del país, en las sedes de las Regiones Militares¹⁸, se abrió la posibilidad de que muchos jóvenes que no contaban con los medios y facilidades para desplazarse hacia la capital tomaran los exámenes de ingreso para la Escuela Militar en ciudades cercanas a sus pueblos de origen. Como era necesario contar con un mayor contingente de oficiales que pudieran ser enviados a las zonas de emergencia, los estándares de ingreso se hicieron menos rígidos y en ciertos momentos incluso se redujo el tiempo de entrenamiento y formación de los cadetes de la Escuela Militar de cuatro a tres años¹⁹.

La paradoja y tragedia de todo este proceso es que durante el conflicto armado interno, a pesar de los discursos inclusivos pro andinos y de contar con una oficialidad que paulatinamente se estaba abriendo hacia los sectores populares del país, el ejército se convirtió en perpetrador y atentó contra sectores

de la población a quienes antes decía proteger²⁰. Brindar una explicación a la magnitud de la violencia y a las acciones de algunos efectivos del ejército durante el conflicto es un asunto difícil. Sin lugar a dudas, el racismo y la discriminación hacia lo andino fueron elementos sustantivos. Si bien la base de reclutamiento de la oficialidad estaba cambiando por esos años, el grupo cholo todavía no era una mayoría dentro de esta institución, pues todavía existía un importante sector de oficiales no exactamente blancos pero sí mestizos, de procedencia social media baja, algunas veces costeños, que contaban con orígenes más urbanos que rurales, que si eran del interior formaban parte de las pequeñas elites provinciales mestizas que no eran cholos pero tampoco indígenas. Por otro lado, durante los primeros años del conflicto y hasta mediados de los 80s, las tropas, es decir los soldados, que se enviaron a las zonas de emergencia en la sierra sur central fueron unidades de Lima y de la costa y no soldados provenientes de las zonas locales pues se temía una infiltración de Sendero Luminoso (CVR 2003). Aquí también hay que considerar la influencia de la doctrina de la Seguridad Nacional, en la que se apostaba por la eliminación del enemigo interno, así como las prácticas antisubversivas sugeridas por la nefasta *Escuela de las Américas*, que ya habían sido llevadas a cabo en las dictaduras del Cono Sur. Pero incluso un mayor número de militares cholos en las zonas de emergencia no necesariamente habría asegurado una menor incidencia en las violaciones a los derechos humanos pues ser cholo no es lo mismo que ser indio. Además, si las relaciones entre los peruanos se han organizado tradicionalmente en base al desdén y el desprecio hacia lo indio -lo abyecto-, estos sentimientos también han sido reproducidos por los cholos en un intento de separarse de lo indio.

Si bien es cierto entre los 80s y 90s el ejército se desclasó y perdió status, en la Marina

19 Actualmente, y debido a la reforma educativa iniciada en el Ejército a fines de los 90s, el tiempo de formación en la Escuela Militar de Chorrillos es de cinco años. Los oficiales egresados de ella también cuentan con un grado universitario.

20 La CVR ha señalado que el principal responsable del conflicto fue Sendero Luminoso pues se alzó en armas contra el estado peruano en un momento en el cual la mayor parte de agrupaciones de izquierda habían pasado a la legalidad. Asimismo, Sendero fue el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos pues fue el responsable de casi el 60% de víctimas fatales. Sin embargo, la Comisión también ha establecido que en ciertos momentos y lugares, algunos efectivos de las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos de ciudadanos inocentes y fueron los responsables de casi el 30% de víctimas del conflicto. Muchos de estos crímenes estuvieron motivados

y la Fuerza Aérea el giro en la base social de reclutamiento no fue tan dramático. Hasta hoy la Marina especialmente ha podido mantener cierto nivel de exclusividad y de “blancura” que el ejército no tiene. Más aún, la Marina se ha convertido en la entidad depositaria de las vocaciones militares de jóvenes que pertenecen a familias militares de clase media. Para un joven cuyo padre es un oficial del ejército, formar parte de la Marina significa continuar con la tradición familiar sin perder status social. Dos eventos que evidencian las diferentes posibilidades de proyección institucional militar entre oficiales de una y otra institución son el cambio de colocación al egresar de la escuela de oficiales y el nivel de profesionalización alcanzado durante los años de permanencia en la institución. De esta manera, mientras los oficiales del ejército son destacados en sus primeros años a guarniciones lejanas, los oficiales de la Marina suelen permanecer en Lima y más adelante tienen la posibilidad de llevar estudios de postgrado en universidades privadas de prestigio (Hurtado 2005b). Incluso, una vez en el retiro, la corporación de oficiales de la Marina tiene mayores posibilidades de insertarse laboralmente en empresas privadas que los oficiales del ejército debido a su mayor nivel de capacitación profesional. Otro even-

to donde pueden percibirse las diferencias entre estas instituciones es el tradicional desfile de fiestas patrias del 29 de julio, donde desfilan los cadetes de las Escuelas de oficiales militares de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Si uno mira con atención a los cadetes que desfilan, se observa que los cadetes del Ejército tienen la piel ligeramente más oscura mientras que los de la Marina son más “blancos”. Por otro lado, una ojeada a los anuarios de la Escuela Militar de Chorrillos también permite ver este contraste entre la oficialidad del ejército de hoy y la del pasado pues se encuentran muchos más apellidos indígenas en los 90s que en los 70s.²¹

En conclusión, el discurso inclusivo desarrollado durante la primera fase del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada constituyó un evento fundamental que cuestionó el racismo y la discriminación contra las poblaciones andinas del Perú. Los militares del gobierno de Velasco fueron conscientes de la necesidad de incorporar a estas poblaciones a la comunidad imaginada nacional y dieron énfasis a una parafernalia visual que resaltaba lo andino como un elemento de integración nacional que a su vez legitimaba el rol del ejército como institución fundacional del estado peruano. Una década más tarde, el conflicto armado interno llevó al ejército a luchar contra un enemigo oculto en un escenario que no esperaban: las zonas más pobres

21 Sustento esta afirmación en la comunicación personal de varios oficiales del ejército quienes en diferentes ocasiones me han dicho, a veces con una mezcla de crítica y preocupación, que el ejército se ha “popularizado” demasiado y que ya no atrae a jóvenes de clase media. Pero también me baso en mi propia observación. Entre 1992 y 1996 trabajé como profesora de inglés en la Escuela Militar de Chorrillos y varios de mis alumnos cadetes tenían apellidos andinos como Ancco, Condori, Choquehuanca, Huaqui, Huamán, Mamani, Sulca entre otros. En las listas de cadetes ya casi no aparecían apellidos “extranjeros” como sí ocurría en las listas de promociones anteriores: Graham (1970), Candiotti Effio (1971), Williams (1973), Maury Bromley (1977), Ribbeck Giacomotti (1978), Buchhamer Bellmunt (1981), Debernardi Harbauer (1981), Bamberger (1982). Por otro lado, en los últimos años he asistido a las ceremonias de graduación

de los nuevos oficiales que egresan de la Escuela Militar de Chorrillos, así como a las ceremonias de pase al retiro que se llevan a cabo cuando una promoción de oficiales se retira del ejército luego de haber servido a su institución por 35 años. Ambos eventos están llenos de contenido ritual y constituyen importantes espacios de transmisión de memoria institucional. A dichas ceremonias concurren los familiares más cercanos de los oficiales; el contraste entre algunos marcadores de clase como la ropa, el color de piel y la forma de hablar entre las personas que asisten a una, la ceremonia de graduación, y otra, la ceremonia de pase al retiro, me permiten afirmar que sí existen notorias diferencias entre las nuevas y las viejas generaciones de oficiales que conforman el ejército del Perú.

e indígenas del Perú. La incertidumbre y el miedo desatados por un conflicto no convencional en donde no podían identificar quien era el enemigo hicieron que la retórica velasquista, inclusiva y paternalista, diera paso en ciertos momentos del conflicto a una guerra sucia que puso en evidencia de manera atroz el racismo hacia las poblaciones indígenas que no había sido superado por todos los sectores del ejército.

Luego del conflicto, esta institución se ha convertido en una de las instituciones depositarias de lo *cholo* en el Perú, es decir, su oficialidad joven proviene en su mayoría de sectores populares de origen migrante que dos décadas atrás formaban parte de una minoría al interior de esta institución militar en relación a los sectores medios más tradicionales. La *cholificación* del ejército implica una democratización en términos sociales que puede traducirse en mayor inclusión y tolerancia a las diferencias. Sin embargo, al comparar la situación de esta institución con la Marina, en donde tal democratización aún es incipiente, vemos que las brechas entre algunos peruanos basadas en clase y raza, es decir los peruanos +1 y los peruanos -1 a los que se refiere Guillermo Nugent, todavía parecen ser infranqueables.

Bibliografía

- Aljovín, Cristóbal, 2005, "A break with the past? Santa Cruz and the constitution", en Nils Jacobsen, editor, *Political cultures in the Andes, 1750-1950*, Duke University Press, Durham.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), 2003, *Hatun Willakuy. Informe abreviado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú*, Lima.
- Contreras, Carlos y Marcos Cueto, 2000, *Historia del Perú contemporáneo*, IEP, Lima.
- Degregori, Carlos Iván, Nicolás Lynch y Cecilia Blondet, 1986, *Conquistadores de un Nuevo mundo. De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres*, IEP, Lima.
- Degregori, Carlos Iván, 1995, "El estudio del otro: cambios en el análisis sobre etnicidad en el Perú" en Julio Cotler, editor, *Perú 1964-1994: Economía, Sociedad y Política*, IEP, Lima.
- Política, IEP, Lima.
- Golte, Jurgen y Norma Adams, 1990, *Los caballos de Troya de los invasores. Estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima*, IEP, Lima.
- Harries-Jenkins, Gwyn y Charles Moskos Junior, 1984, *Las Fuerzas Armadas y la sociedad*, Alianza Editorial, Madrid.
- Hurtado, Lourdes, 2005a, "Uniformes, hombres y armas: Una aproximación civil a la cultura militar del Ejército Peruano", Informe Final, Programa sobre Autoritarismo y Violencia, SUR, Casa de Estudios del Socialismo, Lima, mimeo.
- , 2005b, "¿La educación militar como forma de Educación Superior en Democracia?" en *Educación militar en democracia*, IDL, Lima.
- Kruijt, Dirk, 1989, *La revolución por decreto*, Mosca Azul Editores, Lima.
- Mallon, Florencia, 1987, "Nationalist and Antistate coalitions in the War of the Pacific: Junin and Cajamarca, 1879-1902" en Steve J. Stern, editor, *Resistance, rebellion and consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th centuries*, The University of Wisconsin Press, USA.
- Martín, Juan, 2002, *La revolución peruana: ideología y práctica política de un gobierno militar 1968-1975*, CSIC/Universidad de Sevilla.
- Méndez, Cecilia, 1995, "Incas sí, indios no: Apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú", Documento de trabajo No. 56, IEP, Lima.
- Nugent, Guillermo, 1992, *El laberinto de la choledad*, Fundación Friedrich Ebert, Perú.
- Quijano, Aníbal, 1980, *Dominación y cultura. Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú*, citado en Carlos Iván Degregori, 1995, "El estudio del otro: cambios en el análisis sobre etnicidad en el Perú", en Julio Cotler, editor, *Perú 1964-1994: Economía, Sociedad y Política*, IEP, Lima.
- Remy, María Isabel, 1995, "Historia y discurso social. El debate de la identidad nacional" en Julio Cotler, editor, *Perú 1964-1994: Economía, Sociedad y Política*, IEP, Lima.
- Rospigliosi, Fernando, 1995, "Fuerzas Armadas: Corporativismo y Autoritarismo: ¿Que ha cambiado en tres décadas?", en Julio Cotler, editor, *Perú 1964-1994, Economía, Sociedad y Política*, IEP, Lima.
- Sánchez, Susy, 2005, "Representaciones del pasado en el presente: Los Incas en los billetes peruanos. Siglos XIX y XX", ponencia presentada en el Taller sobre Estudios Andinos, Instituto Kellogg, Universidad de Notre Dame, mayo.
- Villanueva, Víctor, 1972, *100 años del Ejército Peruano: Frustraciones y cambios*, Juan Mejía Baca, Perú.
- Zapata, Antonio, 1995, "Sociedad y poder Local. La comunidad urbana de Villa el Salvador. La Lima popular del milenio" en Julio Cotler, *Perú 1964-1994, Economía, Sociedad y Política*, IEP, Lima.

La influencia militar en la construcción política del indio ecuatoriano en el siglo XX

The military influence on the political construction of Ecuadorian Indians during the twentieth century

Cecilia Ortiz B.

Historiadora. Maestra en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política (Flacso-Ecuador)

Email: ceciortizl@hotmail.com

Fecha de recepción: abril 2006

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2006

Resumen

Este artículo sostiene que las Fuerzas Armadas en Ecuador han influido en la organización política de las poblaciones indígenas en un proceso que cubre un siglo aproximadamente, y en su reciente eclosión en la política nacional. El 21 de enero de 2000 la cúpula militar protagonizó un golpe de Estado en el que utilizó a un sector de oficiales superiores, a los indios organizados y a los movimientos sociales. A más de rebelarse contra un gobierno en crisis (política y económica), estos oficiales buscaron proteger el *status quo* que, erosionado por la firma de la paz con el Perú (1998), atrajo la crisis de las FF.AA al desaparecer la guerra como narrativa aglutinante de la unidad nacional. Simultáneamente, los indios utilizaron a los militares en ese escenario para conseguir presencia en los espacios de decisión política. Esta mutua utilización surgió de una propuesta militar que se deja sentir ya desde las primeras décadas del siglo XX cuando se presentan los primeros trazos de lo que posteriormente tomaría la forma de un nacionalismo multicultural.

Palabras clave: indios, Fuerzas Armadas, cultura política, proyecto nacional, defensa, nacionalismo multicultural

Abstract

This article's thesis is that in Ecuador the Armed Forces have played an important role in the political organization of the indigenous peoples and their recent irruption into national politics. On January 21, 2000 the military head officers staged a coup d'état using a sector of high rank officers, the Indian organizations and the social organizations. These officers intended to protect the status quo that had suffered a hard blow after the peace treaty with Peru, which disabled war as a discourse around which to rally for national unity. At the same time, the Indians use the Armed Forces as a way of gaining national presence in decision-making political spaces. This two-way dealing emerged from a military scheme that became apparent during the first decades of the twentieth century when the first signs of what would later become a multicultural nationalism came into view.

Keywords: Indians, Armed Forces, political culture, national project, defense, multicultural-nationalism

El objetivo de este artículo es visibilizar el rol preponderante que han jugado los militares en el proceso de inserción de los indios en la escena política ecuatoriana durante el siglo XX e inicios del XXI. Ellos lideran un proyecto compartido con otras fuerzas sociales entre las que se cuentan la Iglesia, la izquierda, los activistas nacionales e internacionales del desarrollo y los propios indígenas a través de su participación en esta propuesta que es también de su interés. Este protagonismo de las Fuerzas Armadas en la integración de los indios a la sociedad nacional por la vía política, se posibilita por el rol que se atribuyen a sí mismas como conductoras de la modernización nacional, misión que se arrojan ante la necesidad de unificar la diversidad étnica del Ecuador y construir así la nación unitaria como objeto de defensa.

Se ven a sí mismas como las únicas capaces de conducir al Ecuador en este proceso porque mantienen una posición antipolítica que supone la ineptitud de los civiles en general, y minimiza la potencialidad de conducir sus procesos también por parte de los indios. Ello proyecta a los militares como actores clave en la pugna por el poder, pese a que la retórica los presente como no deliberantes y apolíticos. Desde la visión que mantienen de sí mismos todas sus acciones son positivas porque, además de ser científicas y objetivas, su fin es el “engrandecimiento de la Patria” y ello las legitima ampliamente también ante el sector civil.

En este proceso, sin embargo, los indios adoptan un discurso que exige respeto a sus “nacionalidades”, lo que cuestiona a primera vista el proyecto uninacional de los militares. Las FF.AA debilitan la propuesta indígena por “separatista”, estrategia que en el escenario del 21 de enero de 2000 también es utilizada con fines corporativos, en momentos de crisis institucional.

Como estrategia metodológica, analizamos el discurso militar acerca de la integra-

ción indígena que emana de sus medios de difusión interna y se manifiesta en las acciones que implementan con este fin desde sus ámbitos de poder. Recurrimos también a entrevistas a militares que aportan con su visión sobre la problemática de análisis.

La concepción de “lo militar”

Los militares se deben a un conglomerado social como ciudadanos pero, al mismo tiempo, forman parte de una entidad corporativa que alcanza altos niveles de poder de decisión al ser agente de la construcción nacional con fines defensivos, lo cual legitima su poder entre el resto de la sociedad. Entendemos pues a las FF.AA como un actor social y político imbuido en actividades castrenses, definición que alude a todas las ramas de la institución.

Históricamente, los soldados desarrollan capacidades para la intervención directa en el manejo político, ideológico y socioeconómico de las sociedades en las que operan (Rouquié 1981), en las que el Estado es el principio y el fin de la organización política y social. Ello les posibilita transferir a estas sociedades sus sistemas simbólicos, imaginarios de ciudadanía, de nación y de nacionalidad y determinar las pautas de comportamiento de los individuos en su interrelación social y política –su *militarylore*– (Loveman 1999).

Estas características de la presencia militar son fruto de una visión del mundo que se provoca con la constitución de los estados nacionales que requieren de ejércitos profesionales, cuya formación es auspiciada por las burguesías emergentes con el fin de fortalecer sus proyectos de nación. Ello ocurre en Ecuador a fines del s. XIX e inicios del XX. Los militares adoptan cánones de comportamiento que alcanzan a través de su formación en “instituciones totales” (Goffman 2001), donde adquieren las destrezas para cumplir con la que ellos reconocen como su “misión

por la Patria” (Ministerio de Defensa Nacional 1969).

La guerra moderna obliga a mantener a la nación en posición de alerta frente al enemigo. La comprensión del mundo desde el plano militar se fundamenta, entre otras, en las nociones de la geopolítica, que conciben al Estado y a la nación como un todo orgánico (Espinosa 1989). Ello como producto de la influencia que reciben los soldados ecuatorianos de la Misión Militar Chilena (1902), de corte prusiano, que les confiere una preparación en el marco de una moral particular que se identifica con el sacrificio por la Patria (Nunn 1997: 33). La Misión Italiana (1922) los adoctrina en los elementos de las políticas corporativas de integración nacional; la cúpula de mando acoge aquellas propuestas y las adapta a la realidad ecuatoriana.

Los oficiales ecuatorianos, producto de esta formación, asumen una posición política contraria a la de los actores políticos tradicionales insertos en un sistema oligárquico, y promueven la fusión del Ejército con su pueblo (Guerrero 1924), de donde se desprende la función social del soldado moderno, quien estudia a la Patria para conocerla y se capacita para administrarla (Muñoz 1949: 181).

Tal concepción del mundo, que alberga un sentido de guerra/realidad, se encarna en Ecuador desde su nacimiento a la vida republicana, en la constante amenaza de guerra con el Perú, en un contexto en el que históricamente se ha concebido al territorio como referente común de la nacionalidad. El temor frente al enemigo externo fortalece la presencia de las FF. AA hasta 1998, cuando los dos países firman el Tratado de Paz.

En la visión militar, desde inicios del s. XX la nación en Ecuador está por construirse: los indígenas se encuentran dispersos, desorganizados, en condición de retraso y analfabetos, no contribuyen a fortalecer a la nación para su defensa, tampoco al mejoramiento de la producción de manera que el país se inserte

efectivamente en el sistema de mercado (Muñoz 1949). Así, la construcción de la nación moderna, desde el imaginario castrense, es la misión que se atribuyen los militares ecuatorianos, con el fin de defenderla en conjunto con el resto de la sociedad. Los indios deberán adaptarse a este esquema, lo que implica su paso por procesos de integración que los militares están dispuestos a liderar.

Las relaciones entre indios y militares desde una visión retrospectiva

El siglo XX registra tres momentos clave que dan cuenta de la variación de la intensidad de las relaciones entre indios y militares en el marco del proyecto de modernización nacional:

a) En un primer momento, desde fines de s. XIX hasta la primera mitad del XX, el proyecto de modernización social con los indígenas establece sus fundamentos y toma forma en el ideario militar. Si bien aún no se expresa en una acción directa, las FF. AA establecen los lineamientos para institucionalizar su propuesta de construcción de nación, que se consolida en lo que resta del siglo. Para entonces, Ecuador vive las crisis de la producción caacotera en la Costa y, en la Sierra, la de la hacienda. El país atraviesa por una situación política en la que los militares son protagonistas y conducen la economía.

Tal situación se provoca con la Revolución del 9 de julio de 1925, cuando soldados de mediana y baja gradación derrocan a un segmento político-económico cuyo discurso y capacidades de acción se desgastan a lo largo de 30 años y dejan de responder a los nuevos paradigmas de la modernización en la escena global. Con gobiernos dictatoriales en distintos momentos y en fuerte alianza con la tecnocracia civil, las FF. AA introducen

leyes tendientes a modernizar al Estado e institucionalizar el manejo socioeconómico y monetario del país. En el plano internacional, también se producen momentos críticos enmarcados en la recesión de los años 30, y el reordenamiento de los bloques de poder global, resultado de la Primera Guerra Mundial.

b) Un segundo momento va desde el inicio de la Guerra Fría (1945) hasta fines de los 80. Luego de la Segunda Guerra Mundial las estrategias estadounidenses de seguridad hemisférica difunden en los países región políticas integracionistas hacia las poblaciones marginadas por su situación de “subdesarrollo” que las convierte en caldo de cultivo para una salida comunista —el enemigo interno—; al ser ésta una estrategia defensiva, las FF.AA. de cada país son el brazo ejecutor del proyecto estadounidense que se fundamenta en la Doctrina de Seguridad Nacional para, “neutralizar, contrarrestar y poner fin a la amenaza de la subversión” (Aulestia 1969: 10). Seguridad y desarrollo adquieren un significado unívoco¹. En este momento, los militares ocupan el Poder Ejecutivo por alrededor de 11 años, en los que se relevan en tres etapas dictatoriales, la primera, 1963-1966 y dos posteriores 1972-1976 y 1976-1979.

El ideario militar sobre la integración, que fundamenta las acciones de las FF. AA. a favor de la modernización social, y que se construye durante la primera mitad del s. XX, se plasma en la realidad en este período, conocido como “desarrollista” porque gira en torno al desarrollo

como fuente de poder nacional. El impulso desarrollista, bajo el paraguas de la política anticomunista de EE.UU. fortalece, en última instancia, la transformación de los indígenas en agentes de poder, una vez que se ensayan estrategias integracionistas dirigidas hacia los indios inscritas en el discurso del desarrollo que directa e indirectamente avalan esta posibilidad.

c) En un tercer momento, que va desde 1990 hasta el 21 de enero del 2000, se producen cambios de timón al interior de las FF.AA., relacionados con factores exógenos: el fin de la Guerra Fría, y endógenos: la consolidación orgánica del movimiento indígena que aparece con un discurso étnico/identitario basado en la etnicidad y el respeto a sus nacionalidades, que desde las ópticas militar y de ciertos sectores civiles, constituye una amenaza para la unidad del Estado y la nación.

En respuesta, los militares intensifican sus estrategias integracionistas para con los indios bajo su doctrina de “apoyo al desarrollo” e implementan una política de nacionalismo multicultural que parte de unir lo diverso con base en la tolerancia de ciertos rasgos de la cultura indígena, y la exclusión de otros por disfuncionales al proyecto militar de construcción nacional (Selmeski 2002). Esta política se expresa con mayor claridad en la coyuntura de la Guerra del Alto Cenepa (1995), cuando un sector de los indios amazónicos se integra a los ejércitos de la defensa contra el Perú. Desde esta perspectiva nacionalismo multicultural, mestizaje o campesinización del indio tienen significados equivalentes. Ese nacionalismo multicultural es una propuesta discursiva resultado de un proceso de homogenización que fracasó en cuanto a sus parámetros planteados a principios de siglo.

Se suman a estos factores la firma del Tratado de Paz con ese mismo país (1998)

1 En el Cono Sur los militares fueron explícitos en adoptar al comunismo como enemigo interno, y aplicaron políticas represivas en contra de la población. En Ecuador las FF.AA. ponen énfasis en el desarrollo, lo que varía sustancialmente la utilización de prácticas represivas.

y la situación de crisis interna, que desde la caída del gobierno populista del presidente Bucaram –evento que cuenta con la anuencia de la cúpula militar– desata el hundimiento del país en una crisis integral, la peor de los últimos diez años².

El proceso de modernización del agro y los militares

A lo largo de estos tres momentos, en Ecuador los indios han sido funcionales a los proyectos políticos y económicos de las elites de poder: como fuerza de trabajo en las obras públicas y servicios, en la hacienda serrana, en las plantaciones de la Costa o en los procesos de urbanización e industrialización. En el proyecto modernizador de los militares, el cual es un proyecto civilizador, homogeneizador y generador de lealtades hacia el Estado, ocupan un lugar: a) como agentes del desarrollo agrario; b) como la base para el potencial desarrollo industrial y c) como resguardo en la zona fronteriza en la Amazonía, con la conformación de “fronteras vivas” como con la instrucción militar a sus “mejores hombres” (Andrade 1984: 58) una vez que han pasado por el Servicio Militar Obligatorio (SMO), para integrarlos a las fuerzas defensivas. Estas estrategias implementadas desde la primera mitad del s. XX y en adelante, propician cambios estructurales en la cultura indígena, que dan paso a fortalecer la relación de los indios con el Estado y su proyecto nacional-societal se plasma en la realidad.

Civiles y militares ensayan modelos de modernización que implican la participación directa de los indios en este tránsito; hacia ellos se aplican políticas diferenciadas por su adscripción étnica, que condicionan su forma de integración en la sociedad nacional y tienen como colofón el tipo de organización que adoptan.

La modernización que proponen los militares (visible desde la primera mitad del s. XX), busca un estilo de integración que tolera la diferencia bajo ciertos condicionamientos, ésta contrasta con la idea del presidente García Moreno del siglo anterior (1861-1875), quien entre otras limitantes para los indios, prohíbe la entrada de los niños con su vestimenta tradicional a las escuelas (Muñoz 1974). En los años 30 aparecen trazos de un nacionalismo multicultural en el imaginario militar, atravesados por los sesgos de su época, cuando desde el gobierno militar del Gral. Enríquez Gallo se legisla para que los niños indígenas de las haciendas fueran alfabetizados en su propia lengua y por maestros de su misma adscripción étnica (Cfr. Ortiz 2006).

Cabe recordar que todo el proceso de integración indígena por la vía política, que se deja sentir con mayor fuerza desde el período desarrollista, tiene sus antecedentes en las acciones que desplegaron los militares ya desde la primera mitad del siglo XX que traían en sus contenidos, de manera inconsciente, lo que posteriormente se denominaría multiculturalismo. Esos visos de multiculturalismo, sin embargo, eran la premisa para construir un Estado unitario y una ciudadanía culturalmente homogénea.

Durante su jefatura suprema (1937-1938), el Gral. Enríquez Gallo aplica una política social en la que se perfilan los lineamientos de un proyecto nacional construido a partir de la noción de mestizaje cultural y étnico³. Para volver a los indios funcionales a la defensa y a la economía nacionales se aplican políticas integracionistas que parten de la institucionalización de un Estado débil. Se

2 Desde 1990 hasta enero de 2003, Ecuador tiene 7 presidentes.

3 Se trata de “la incorporación en sí, por los propios grupos indígenas, de la imagen ideal del ciudadano blanco-mestizo” (Guerrero 2000: 10). El mestizaje en este sentido se vuelve sinónimo de nacionalismo multicultural.

define al Ecuador como un país con vocación agrícola y al ser justamente en el sector rural donde se concentra la población “retrasada”, las FF. AA actúan para superar tal situación. Al expedirse el Código de Trabajo (1938), por ejemplo, se intenta proteger a la mano de obra agraria contra los abusos del hacendado; de garantizar su estadía en el campo y la productividad de la tierra; se establecen el jornal mínimo, la duración de las horas de trabajo y de descanso, el acceso al agua, leña, pastos, caza, etc. (Burbano 1991: 41). Así, se generan lazos entre los indios y los militares que se proyectan en el futuro.

Por otro lado, en el ideario militar de inicios del s. XX se enfatiza en la importancia de la educación para forjar la identidad nacional con la “incorporación del indio y del montubio a la vida civilizada” y la elevación de su condición humana y económica (Larrea 1938: 142). Con ese objetivo se elaboran leyes que prefiguran nociones multiculturalistas que buscan asegurar una educación diferenciada para los indios; interesa que los indios preserven el kichwa y se eduquen en sus zonas de habitación, con maestros oriundos del lugar (Larrea 1938).

El SMO, que se establece en 1938, es visto como la “escuela para el pueblo”, que dota de “buenas costumbres” y enseña a leer y escribir a los jóvenes indígenas (Larrea 1938). A través del SMO se intenta solucionar el problema de la constitución de los batallones ecuatorianos que, a criterio militar, estaban integrados por soldados con “taras raciales”, sin “virtudes morales”, en los que, a excepción de pocos individuos, todos los demás dejan ver una “tropa enana y con debilidades musculares” (Chiriboga 1939: 611).

Las FF. AA creen que es posible “mejorar la raza” de sus soldados en el cuartel. Los indios reciben educación cívica para luchar por la nación, no sólo en el campo de batalla, sino también a través del trabajo agrícola (Guerrero 1924: 300). Allí se busca transfor-

mar los hábitos de los indígenas para integrarlos en un nuevo esquema cultural favorable al proyecto económico y societal de las elites de poder.

Si bien el SMO es universal, alude a todos los jóvenes sea cual fuere su condición étnica, muchos de los programas de entrenamiento, así como los discursos que se generan a favor de su puesta en marcha ponen énfasis en el efecto homogenizador que puede ejercer entre los reclutas indígenas (Guerrero 1924, S. Larrea 1928, Chiriboga 1939). Sin embargo, en las primeras décadas del siglo, en el cuartel los jóvenes indígenas reciben un trato despectivo por su condición étnica, lo que convierte al SMO en una experiencia poco apetecida para los indios que son llevados a la fuerza a los cuarteles (Gral. H. Berrazueta, noviembre de 2003).

Pasada la década de los 60, se hace evidente que este tipo de mecanismo resulta contraproducente para el objetivo integracionista de los militares y se introducen en el entrenamiento actitudes de tolerancia hacia ciertos aspectos culturales de los indios, mientras éstos no interfieran con su proyecto civilizatorio, donde indirectamente se afianza la idea del mestizaje. Los indios responden positivamente y convierten al SMO en estrategia de movilidad social.

Las vías de comunicación son otra oportunidad de contacto civil-militar. Desde 1938 las FF. AA forman a ingenieros de caminos (Coral 1988). Además de integrar a la nación, las carreteras facilitan el control social de los habitantes asentados en zonas distantes y permiten penetrar a las FF. AA en espacios fronterizos.

La estructura de la organización indígena

El proyecto de modernización del agro no es privativo de los militares; guiados por sus propios fines, otros agentes -como la Iglesia-

favorecen la integración indígena y desarrollan mecanismos para organizar a los indios y formar líderes. Desde el período colonial, las congregaciones religiosas asentadas en la Sierra y la Amazonía se dedicaron a colonizar y evangelizar a los grupos indígenas, lo que implicó organizarlos bajo parámetros determinados. Esta tradición de Iglesia continúa durante el período republicano, con un nuevo énfasis desde la década de 1960, cuando un sector de sacerdotes opta por la Teología de la Liberación como opción de apostolado. Sobresale la experiencia de los salesianos con los shuar en la Amazonía, cuyo esquema organizativo es bien visto por los militares (Viteri 1995). La organización en la Sierra central especialmente, toma auge con Monseñor Leónidas Proaño.

Otro agente que interviene en la organización política de los indígenas es la izquierda. Desde 1926, los activistas de izquierda en Ecuador auspician la formación de sindicatos en las haciendas serranas con una visión clasista. En ese mismo año se forma la Federación Ecuatoriana de Indios, a instancias del Partido Comunista (Páez 2001). En el mundo militar también se vislumbra, a principios de siglo, la influencia del llamado socialismo utópico, que construye una imagen del indio como objeto de reivindicación paternal. El socialismo de la época no era considerado entre los militares una amenaza para el Estado, sino un mecanismo para acelerar su modernización. Al ser percibidos los indios como obstáculo para la modernización de la nación, “sindicalizar”, “ciudadanizar” y evangelizarlos son términos equivalentes.

Durante la Guerra Fría, el ambiente anti-comunista despierta recelo entre los militares frente a las tendencias de izquierda y se provoca una pugna entre socialistas, comunistas y militares para ganar adeptos entre los indígenas. Sin embargo, el activismo de izquierda entre los indios tiene cierta libertad de acción, incluso en contextos autoritarios.

Resulta significativo, por ejemplo, que la primera organización indígena de carácter nacional, ECUARUNARI, date de 1973 y sea apoyada por el Movimiento de Izquierda Cristiana, en plena dictadura militar. Es más, el trabajo de la izquierda entre los indios fortalece el proyecto militar, cuando con la instauración de la Reforma Agraria, impulsada durante gobiernos castrenses de facto, se introducen formas organizativas entre los indios y campesinos, quienes debían reunirse en cooperativas y asociaciones agrícolas como condición para la distribución de tierras entre quienes las hacen producir. Estas propuestas resultan coincidentes con los ideales y el trabajo que implementa la izquierda. Los militares establecen relaciones de sinergia funcional con los distintos activistas del desarrollo, sin importar su ideología, y, de una u otra forma, coordinan las acciones.

El proyecto nacional militar y la organización indígena

El Estado militar⁴, desde el s. XX temprano (1938), legaliza una forma determinada de organización entre los indios con la Ley de Comunas, que reconoce los derechos a una vida cívica y administrativa de caseríos, barrios, comunidades y parcialidades indígenas sin reconocimiento jurídico hasta entonces (Velasco 1990). Se emiten también la Ley de Cooperativas y la Ley de Control del

4 El “Estado militar”, como categoría utilizada para fines de este trabajo, pretende describir la estructura del Estado ecuatoriano que pese a levantarse con base en fundamentos jurídico-civiles tiene a los militares presentes constantemente: controlan y arbitran los procesos sociales y políticos de los civiles. El resto de ciudadanos otorgan potestad a los militares para que esto ocurra, sobre todo en momentos de crisis provocadas por el enfrentamiento de las facciones civiles por obtener el poder político. Pese a que la Constitución Política no les da poder dirimente, las FEAA intervienen en política por distintas vías que son legitimadas por parte de los civiles.

Trabajo y la Desocupación para evitar la migración campo-ciudad (Burbano 1991).

Estas estrategias organizativas retoman modelos coloniales – el cabildo y la comuna – y los reajustan al proyecto de modernización vigente, sin que pierdan su esencia colonialista de exclusión étnica. Los primeros trazos de este proyecto aparecen ya en el ideario militar del siglo veinte temprano, cuando el cooperativismo es visto positivamente para la organización de las comunidades campesinas (Larrea 1938). La Misión Andina para el Ecuador, organismo norteamericano que actúa bajo los lineamientos de la política de seguridad hemisférica desde la década de los 50, busca socializar a los líderes indígenas con el uso y utilidad de aquellas leyes basadas en el cabildo y la comuna, para aplicarlas en el marco previo a la entrega de tierras en el contexto de la Reforma Agraria.

El cabildo es el órgano de representación oficial de la comuna. Con su reimplantación se tienden puentes directos entre los indios y el Estado al prescindir del teniente político, intermediario anterior entre la hacienda, los indios y el Estado central. Se fortalece así el activismo indígena, pues los cabildos les otorgan otra presencia ante el Estado para exigir sus derechos (Pallares 2000: 289)⁵.

Las agrupaciones de indígenas que asumen un discurso de identidad étnica empiezan a formarse en la década de los 70. A mediados de los 80 se constituye la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE- que tiene como organizaciones de base a las comunas, cabildos y asociaciones que se van integrando entre sí con nuevas agrupaciones de tipo local, provincial y nacional. Se trata de una nueva adaptación de las leyes de régimen colonial, legitimadas en esta oportunidad

desde el mundo indígena, que acoge un proyecto diferenciado de integración y lo adapta a su discurso étnico-identitario y organizativo. El proceso vivido por los indios hasta entonces no es mal visto desde la cúpula militar que busca obviar el problema étnico con la campesinización del indio. Toma fuerza en la retórica castrense la visión del mestizaje como fuente de poder de la nación (Rodríguez Lara 1973: 17).

Culminados los períodos dictatoriales de los 60 y 70 los militares posibilitan la aplicabilidad de las leyes que crearon a su paso por el Ejecutivo que les permiten intervenir desembozadamente en el desarrollo e intensificar su contacto con los indios. Las políticas que adoptan los militares con fines desarrollistas se radicalizan con el tiempo y van dando forma al proceso de transformación del indio en actor político. Así, en la nueva Constitución de 1978, auspiciada por los militares en el período de transición a la democracia, que permite a los analfabetos elegir y ser elegidos para cargos de representación popular, los indios acceden formalmente a la ciudadanía y dejan su condición de ciudadanos de segunda a la que muchos de ellos estaban relegados debido a su analfabetismo.

En 1981, la derrota de las tropas ecuatorianas en Paquisha frente al Perú, despierta la sospecha entre el resto de ciudadanos, en torno a que la participación directa de los militares en política los distrae del su rol tradicional como defensores de la soberanía territorial. Ese momento coincide además, con su pérdida de poder una vez entregado el Ejecutivo a los civiles. Como salida a su situación crítica, las FF. AA intensifican su presencia en las tareas del desarrollo agrario, y la fortalecen en las fronteras donde se fomenta la conscripción agraria militar⁶ y se colonizan zonas de ocupación de los habitantes amazónicos como si fueran baldías. Este hecho activa la lucha de los indios de la

5 Desde la emisión de las leyes de Reforma Agraria (1964 y 1973) hasta 1993 los cabildos alcanzan un total de 2.912 en la Sierra (Zamosc 1995: 48).

zona por sus territorios con un discurso étnico.

Los militares se atribuyen una función tutelar en el proceso de integración política de los indios y se consideran artífices del rol que cumplen los líderes indígenas. A decir de un oficial, la potencialidad dirigente de los indios aflora durante SMO, y no al interior de las comunidades, hacia donde se extiende en lo posterior (Crnl. Haro, entrevista de 2003). Hasta inicios de los 90, los indígenas habían actuado dentro de los cánones de los valores militares, entre los que la organización forma parte del libreto de construcción nacional; al contrario, los indios resultan peligrosos al estar dispersos y sin líderes que funcionaran como intermediarios en su relación con el Estado.

Las cosas cambian, sin embargo, a inicios de la década de los 90 en que los indios demandan el reconocimiento de sus nacionalidades. Estas demandas son sancionadas positivamente por las propias expresiones del Ejecutivo, ocupado por el presidente Rodrigo Borja (1988-1992), quien definió al Ecuador como “multinacional”, lo cual dotó a las propuestas indígenas de capacidades inusitadas, en las escenas nacional e internacional. Los indios retoman las palabras del Presidente Constitucional de la República del Ecuador y las utilizan con el despliegue de una retórica que apunta a conseguir mayor representatividad política y el manejo directo de los recursos que se destinan al desarrollo. Apelan asimismo al reconocimiento de sus derechos territoriales en las zonas en las que habitan ancestralmente.

Desde 1990 los indios utilizan como repertorios de protesta las tomas de ciudades, especialmente de Quito, y levantamientos, eventos que continúan a lo largo de la década.

Estos hechos provocan un quiebre en el imaginario nacional sobre los indios, quienes consiguen sentarse en la mesa de negociación con los líderes civiles⁷, con lo que superan su estado de exclusión en la política. El movimiento indígena adquiere una mayor presencia pública y en 1996 se crea el partido Pachakutik en el que convergen otras fuerzas políticas que simpatizan con el proyecto indígena o que buscan capitalizar políticamente esa coyuntura a su favor.

Además de todos los factores analizados, los indios se acogen a las regulaciones internacionales que afianzan su transformación en grupo de presión de corte étnico. Al signar el Convenio 169 de la OIT los gobiernos se comprometen a “proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto de su integridad, derechos humanos, libertades fundamentales, valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales” (Fiallo 1992: 32).

Cumplen un rol favorable para el empoderamiento de este sector los actos recordatorios de los 500 años de llegada de los españoles a América que movilizan a indios y no indios. La situación indígena de subordinación a lo largo de 5 centurias “pasa factura” al orden establecido en estas celebraciones (o “anti celebraciones”) y se convierte en una de las fortalezas de los indios, cuando sus demandas políticas y reivindicaciones sociales se legitiman en el orden internacional.

En 1998, los indígenas ecuatorianos consiguen, con el apoyo de sectores no indios, que el artículo primero de la nueva Carta Constitucional de dicho año reconozca el carácter pluricultural y multiétnico del Ecuador. Logran asimismo controlar recursos, estatales y privados, para el desarrollo de

6 Éste es un tipo de servicio militar aplicado entre los habitantes del campo que combina el entrenamiento militar con aprendizajes referidos a las técnicas agrícolas, en sus propias parcelas de terreno.

7 En el gobierno de Borja (1988-1992) se generan mesas de diálogo con los dirigentes indios y los delegados del gobierno para la negociación de reconocimiento de derechos territoriales.

las nacionalidades (De la Torre 2003: 64). Así, los indios dan muestra de los avances que han logrado hacia fines del milenio: el suyo es un proceso de integración que exige el respeto a la diferencia y que se consuma por la vía política, lo que deja ver ya un cambio de percepción hacia lo indio desde la cúpula militar (Gral. Gallardo, entrevista de 2003).

La respuesta militar

Paralelamente, se viven momentos de reacomodo institucional al interior de las FF. AA. El fin de la Guerra Fría replantea el combate al comunismo y coincide con la eclosión de los indios organizados en la escena pública. El discurso indígena de respeto a sus nacionalidades provoca rechazo entre los militares. El enemigo, que hasta entonces era el comunismo, se encarna ahora en la peligrosa aspiración de multinacionalismo esgrimida por los indios que se cierne como amenaza a la integridad del Estado y la unicidad de la nación (Mendoza 1996).

Al igual que durante la crisis de inicio de los 80, las FF. AA se vuelcan en acciones a favor del desarrollo, tanto para controlar la expansión del “separatismo” indio como porque con la firma del Tratado de Paz con el Perú (1998) pierden sentido sus acciones defensivas. Recurren así a las mismas estrategias “preventivas” de la etapa anticomunista.

La función social del soldado moderno, planteada ya a principios del siglo pasado, se convierte en la “acción cívica” del período desarrollista y vuelve a aflorar en los noventa como “apoyo al desarrollo” en respuesta a las supuestas aspiraciones indígenas de “dividir a la nación” (Ortiz 2006). La acción cívica y apoyo al desarrollo tienen un sesgo asistencialista y de ayuda humanitaria a las poblaciones indígenas y campesinas. Las FF.AA las apoyan a cubrir sus necesidades básicas en un contexto de ausentismo estatal. Ello forma parte de

la política populista y clientelar que implementan las FF.AA como actor político que intenta ganar adeptos en momentos de crisis interna, con el objetivo de intensificar los lazos entre indios y militares (Cfr. Crnl. Haro, entrevista de 2003). A fines de siglo, sin embargo, hablamos de un nuevo tipo de indio con mayor experiencia en la integración, capaz de desarrollar el diálogo entre pares con los militares, que adquiere un lenguaje común con tintes institucionalistas, basados en pactos y alianzas entre la dirigencia indígena y los oficiales coordinadores del desarrollo.

Desde la perspectiva de un militar (Crnl. Haro, entrevista de 2003), la acción cívica (décadas 60 a 80) y el apoyo al desarrollo (década de los 90) son los antecedentes de la alianza entre indios y militares que se plasma en enero de 2000, cuando los segundos han podido transmitir a los primeros su *military lore* en cuanto a las formas de hacer política.

Desde la perspectiva de los indios, por su parte, hay claridad en que “con quien tienen que hablar es con los militares porque son ellos quienes manejan el poder real” (Falconí 1991). No dudan en ofrecer sus capacidades bélicas cuando de aliarse con los militares se trata para defender una misma nación, como ocurre en el escenario de la guerra del Alto Cenepa, en 1995 frente a Perú. Entonces, los indios amazónicos explotan su conocimiento del medio selvático y su tradición de “guerreros naturales” (Selmeski 2002), y los ponen a disposición de “la Patria”. Los pueblos shuar habitan en la zona de conflicto, por tanto para ellos, la participación en la guerra implica la defensa de su suelo; no es un mero acto desinteresado de patriotismo. Las FF. AA abren las puertas a la solicitud de los shuar y les dan entrenamiento diferenciado en las filas del Ejército (Gallardo 2003: 111).

El resultado positivo para Ecuador en el Cenepa es considerado como un triunfo de las FF.AA ecuatorianas, y a su vez es idealiza-

do y convertido en una gesta épica de la “nación en armas”. Entre otros factores para la victoria la participación de los soldados indígenas amazónicos es vista como uno de sus puntales, ellos capitalizan el triunfo y la organización indígena se ve fortalecida. Al formar parte de las fuerzas de la defensa los indios están integrados a la nación sin necesidad de haber perdido sus características vernáculas (Gallardo, entrevista de 2003).

Este conjunto de factores permite entender la alianza entre indios y militares que se consuma el 21 de enero de 2000, con el golpe que derroca al presidente Mahuad. En ese escenario el alto mando militar impide la toma del gobierno por quienes encabezan el golpe –indios, oficiales y movimientos sociales– y opta por la vía constitucionalista entregando el poder al Vicepresidente de turno⁸, luego de retirar su apoyo al gobierno defenestrado de Mahuad.

Como resultado de ese episodio los coroneles y altos mandos que participaron en los sucesos del 21 de enero son dados de baja. Acto seguido, algunos coroneles forman el partido político “Sociedad Patriótica 21 de Enero” que en alianza con Pachakutik apoya la candidatura del coronel golpista Lucio Gutiérrez en las elecciones presidenciales del 2002 .

Tras el triunfo electoral de esta alianza se verifica el poder que alcanzó el movimiento indígena y la estrecha vinculación entre sus formas organizativas y el diseño social inducido por las FF.AA. No obstante, los militares y ex militares dentro del gobierno de Gutiérrez ven a los indios como una potencial amenaza política que requiere ser anulada, debilitada o cooptada.

Pero los indios y sus allegados (Pachakutik y otros movimientos simpatizantes) rompen el pacto al constatar que Gutiérrez los había

utilizado para llegar al poder y una vez en el gobierno, anular su poder de decisión. La CONAIE, como actor definitorio en la década de los 90, se debilita a partir de una estrategia dirigida desde el Ejecutivo y con la anuencia de las FF.AA., y sobre todo por sus propias debilidades estructurales.

Reflexión final

La fuerte influencia del corporativismo militar en el proceso de integración indígena a la sociedad nacional permite en Ecuador la constitución de un proyecto nacional enunciado desde las elites indígenas, que en esencia no se aleja de la propuesta militar, imbuida del patrimonialismo, clientelismo y populismo –cuyos rasgos son compartidos con otros grupos de poder– y que paradójicamente son criticados desde la retórica militar durante los últimos 100 años.

El fortalecimiento del discurso identitario que se consolida en las distintas formas organizativas de los indios incluye la influencia de diversos agentes: Iglesia, izquierda y otros activistas del desarrollo; sin embargo, desde el diseño de seguridad de las FF.AA estas influencias han sido catalizadas y dirigidas a consolidar al movimiento indígena dentro de la matriz estatal y su inclusión en un imaginario de nación común para todos los ecuatorianos. El movimiento indígena que representó una amenaza para los militares en la primera mitad de la década del 90 se transforma, al inicio de 2000, en un aliado para la acción política.

El resultado que dejan los hechos del 21 de enero de 2000 muestran que si bien en un momento dado, la propuesta indígena aparece como alternativa con un nuevo modelo de hacer política, este objetivo no logra plasmarse en la realidad en la medida que los indígenas comparten una misma matriz en su cultura política con el resto de elites de poder.

8 El Gral. Gallardo, entonces Ministro de Defensa, habla de las acciones conspirativas en que se envolvió la cúpula militar en ese contexto (Gallardo, entrevista de 2003).

Bibliografía

- Andrade, J. Crnl. EM., 1984, "La Federación Shuar y la nacionalidad ecuatoriana", Trabajo final realizado en el postgrado en Seguridad y Desarrollo del IAEN, Quito.
- Aulestia, V., Gral. de Div., 1969, "Aspectos generales de la Seguridad Nacional", en *Revista de las Fuerzas Armadas*, No. 38, Ministerio de Defensa Nacional, Quito.
- Burbano, L. Tcrn. EM., 1991, "Las fuerzas armadas y la problemática indígena en el Ecuador", Trabajo final realizado en el postgrado en Seguridad y Desarrollo del IAEN, Quito.
- Chiriboga, L., 1939, *Problema del indio examinado desde el punto de vista de la organización militar*, Ministerio de Previsión Social, Quito.
- Coral, H., 1988, *Alberto Enríquez Gallo*, BCE, Quito.
- De la Torre, C., 2003, "Movimientos étnicos y cultura política en Ecuador", en *Iconos, Revista de Ciencias Sociales* No. 15, FLACSO- Ecuador, Quito.
- Espinosa, R. Spfg. EM., 1989, "Consideraciones geopolíticas a la realidad ecuatoriana", en *Revista de las Fuerzas Armadas*, s/n, Ministerio de Defensa Nacional, Quito.
- Falconí, F., 1991, "FFAA y movimiento indígena: la visión de las FF AA sobre el problema indígena en el Ecuador", Tesis para la obtención de la Maestría en Ciencias Políticas, FLACSO, Quito.
- Fiallo, F., Tcrn. EM., 1992, "El problema indígena y su influencia en la estabilidad política del país", Trabajo final realizado en el postgrado en Seguridad y Desarrollo del IAEN, Quito.
- Gallardo, J., Gral. del Ejército (r), 2003, "El Ejército: de Paquisha al Alto Cenepa", en *Presencia*, No. 19, Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Quito.
- Goffman, E., 2001, *Internados*, Amorrortu, Buenos Aires.
- Guerrero, A., 2000, "El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquía y transcritura", en Andrés Guerrero, compilador, *Etnicidades*, FLACSO/ILDIS, Quito.
- Guerrero, C., Cptn. de Caballería, 1924, "Función social del Oficial", en *Revista El Ejército Nacional*, No. 18, s/e, Quito.
- Loveman, B., 1999, *For la Patria: politics and the armed forces in Latin America*, Scholarly Resources, Wilmington.
- Mendoza, C., Gral., 1996, "Amenazas y retos que deben enfrentar en el futuro del Estado Ecuatoriano y las Fuerzas Armadas", en *Tarqui fuerza terrestre*, Ministerio de Defensa Nacional, Quito.
- Ministerio de Defensa Nacional, 1969, "24 de Mayo", en *Revista de las Fuerzas Armadas*, No. 38, Ministerio de Defensa Nacional, Quito.
- Muñoz, E., 1974, *Con los pies torcidos por el camino recto*, Ediciones Santo Domingo, Quito.
- Muñoz, J. H. Tnte. Crnl. EM., 1949, *Doctrinas militares aplicadas en el Ecuador*, Estado Mayor General, Quito.
- Nunn, F., 1997, "An Overview of the Military Missions in Latin America", en Loveman y Davies, compiladores, *The politics of antipolitics*, SR Books, Wilmington.
- Ortiz, C., 2006, *Indios, militares e imaginarios de nación en el Ecuador del siglo XX*, FLACSO- Abya Yala, Quito.
- Páez, A., 2001, *Los orígenes de la izquierda ecuatoriana*, FIAAM - Abya Yala, Quito.
- Pallares, A., 2000, "Bajo la sombra de Yaruquíes: Cacha se reinventa", en Andrés Guerrero, compilador, *Etnicidades*, FLACSO-ILDIS, Quito.
- Rodríguez Lara, G., 1973, "Estamos Trabajando", en *Revista de las Fuerzas Armadas*, No. 47, Ministerio de Defensa Nacional, Quito.
- Rouquié, A., 1981, "Dictadores, Militares y Legitimidad en América Latina", en *Dictaduras y dictadores. Crítica y utopía latinoamericana de Ciencias Sociales* 5, Buenos Aires.
- Selmeski, B., 2002, "Warriors and citizens: racial stereotypes and military roles o Ecuadorian indigenous conscripts", Paper prepared for REDES 2001. N.Y: Syracuse University, PUCE, Quito.
- Serrano, O., Tnte. Crnel. A., 1946, *Inauguración de la Carretera al Puyo*, OO.PP Militares, Quito.
- Zamosc, L., 1995, *Estadística de las áreas de predomnio étnico en la Sierra ecuatoriana*, Abya Yala, Quito.
- Entrevistas (noviembre 2003)
 Gral. J. Gallardo Román
 Gral. H. Berrazueta
 Crnl. P. Haro.

Militares y Estado en Ecuador: ¿construcción militar y desmantelamiento civil?'

State Building, State Dismantling, and the Military in Ecuador

Liisa North

Departamento de Ciencia Política y Centro de Investigación en Latinoamérica y el Caribe (CERLAC), York University

Email: lnorth@yorku.ca

Fecha de recepción: abril 2006

Fecha de aceptación y versión final: julio 2006

Traducción: Natalia Greene

Resumen

Este artículo trata sobre los esfuerzos de algunos gobiernos militares por construir un Estado que responda a los intereses de la nación y no a los intereses privados de una minoría, esfuerzos que han encontrado límites en los enraizados patrones de dominación socio-política del Ecuador. El artículo comienza con una descripción de las diferencias entre la llamada "Revolución Juliana", y las propuestas planteadas en enero de 2000, durante el derrocamiento de Jamil Mahuad. Sigue con una revisión de los momentos clave para la construcción del Estado, desde 1925 hasta 1979, las políticas de desmantelamiento del Estado llevadas a cabo por las elites civiles desde la transición hacia la democracia en el último año mencionado, y las respectivas respuestas militares a recientes protestas sociales.

Palabras clave: Construcción militar del Estado, protesta social, incorporación social, desmantelamiento civil del Estado

Abstract

This article deals with some military governments efforts to build a state that could serve broad public rather than simply narrow private interests, and it does so with reference to the obstacles rooted in Ecuador's patterns of social-political domination that have undercut those efforts. The article begins with a description of contrasts between the so-called "revolutions" of July 1925 and January 2000. It then briefly reviews key moments in state building from 1925 to 1979, the policies of state dismantling pursued by civilian elites since the transition to democracy in the latter year, and military responses to recent social protest.

Keywords: Military State Building, Social Protest, Social Incorporation, Civilian State Dismantling

1 Este artículo es una versión reducida y revisada del trabajo publicado en Jo-Marie Burt y Phillip Mauceri, eds. *Politics in the Andes*, Pittsburg University Press, 2004.

*“La historia se repite.
Una Revolución Juliana:
Militares cansados de tanta corrupción”*
(Coronel Fausto Cobo,
21 de enero de 2000)

El Coronel Cobo, uno de los casi 400 oficiales (desde tenientes hasta coroneles) que apoyaron el levantamiento indígena que llevó a la caída del presidente Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000, se estaba refiriendo a los paralelismos entre ese evento y la revuelta en julio de 1925 realizada por jóvenes oficiales conocida como la Revolución Juliana. Ambos cataclismos políticos fueron precedidos por graves crisis económicas y la quiebra del sistema financiero del país, por la cual se culpó, tanto en 2000 como en 1925, a políticos corruptos al servicio de banqueros igualmente corruptos. Además, jóvenes oficiales preocupados por la integridad del Estado Nación fueron protagonistas en ambas ocasiones. Sin embargo, los aliados de los oficiales y las consecuencias de sus acciones fueron muy diferentes.

Este ensayo se concentrará en los esfuerzos de algunos gobiernos militares por construir un Estado en Ecuador que pueda servir a los intereses generales del pueblo, haciendo referencia a los obstáculos enraizados en los patrones de dominación socio-política del país que han frustrado tales esfuerzos. La primera sección contrasta algunos aspectos de la llamada “Revolución Juliana”, de julio de 1925 y la de la revuelta de enero de 2000. La segunda sección revisa los momentos claves de la historia político-económica del Ecuador desde 1925 hasta 1979 con referencia a los esfuerzos militares para fortalecer el Estado frente a las clases dominantes y realizar reformas redistributivas para incorporar a las mayorías a un proceso de desarrollo nacional. La tercera sección trata brevemente acerca de las políticas de desmantelamiento del Estado

llevadas a cabo por gobiernos civiles desde la transición hacia la democracia en 1979, las protestas sociales que esas políticas generaron y la forma como los militares se movieron dentro de ese juego de fuerzas.

Antes de entrar en los temas anteriormente mencionados, es necesario identificar ciertos aspectos clave de la evolución político-económica del Ecuador post independencia. Estas características se relacionan a las divisiones regionales, a la composición de sus clases dominantes, y a los patrones de organización socio-política entre las clases subordinadas.

Las clases terratenientes tradicionales se asentaron en la sierra andina después de la independencia y gobernaron sobre una población indígena inmersa en relaciones serviles de trabajo. La “moderna” elite financiera-comercial-terratiente surgió en la costa durante los períodos cacaotero (1860 a 1920) y bananero (1948 a 1972). Las principales instituciones de estas dos elites eran sus respectivas cámaras de agricultura, industria y comercio, como también sus bancos, ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil, y en menor medida en Cuenca, siendo los líderes de estas instituciones quienes han disfrutado del acceso directo a la elaboración de políticas públicas hasta la actualidad.

Organizaciones políticas y sociales de clase media también han sido históricamente fragmentadas por las divisiones regionales mientras que los sectores populares urbanos y rurales han estado separados tanto por razones regionales como por razones étnicas. Analistas de la política ecuatoriana se han referido a las formas de participación política en el Ecuador como atomizadas, heterogéneas o segmentadas, entre otras cosas. A pesar de la fundación tanto de los partidos socialista (1926) y comunista (1931), como de sus esfuerzos de organización clasista, los sectores subalternos permanecieron profundamente divididos y, en gran parte, movilizados por coaliciones dominadas por elites a través de

líderes populistas como José María Velasco Ibarra (desde la década de los treinta hasta inicios de los setenta) y Abdalá Bucaram (1990). Por su parte, las clases medias estaban mayoritariamente “encapsuladas” dentro de “partidos políticos dominados por elites” (Conaghan 1988:99). Además, dadas las estructuras sociales y económicas diferentes de las sociedades de la sierra y de la costa, las elites regionales del país han mostrado una capacidad notable para movilizar las clases subordinadas hacia la acción política en defensa de sus propios intereses económicos privados. Y lo han hecho apelando a clivajes y sentimientos regionales (Quintero y Silva 1991). Sin embargo, los dos grupos de elites han logrado montar un frente común cuando han sido amenazados por movilizaciones populares o políticas redistributivas.

La Revolución Juliana representaba el primer desafío importante, apoyado por amplios sectores de la población, en contra de la dominación de la “plutocracia” costeña, cuyos miembros se convirtieron en los actores clave para la ejecución de reformas neoliberales durante 1980 y 1990.

Construcción y desmantelamiento del Estado

En julio de 1925, las acciones de los jóvenes oficiales no sólo fueron apoyadas por las incipientes clases urbanas y medias del Ecuador, sino que también tuvieron el respaldo de las elites de la sierra e inclusive de algunos miembros notables de la elite costeña. De hecho, “el ideólogo” de la Revolución fue Napoleón Dillon, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y fundador de la primera fábrica textil moderna del Ecuador (Drake 1989:135-139, Almeida 1994:34), a pesar de que ciertas demandas específicas y el golpe mismo se originaron en la Liga Militar formada en 1924. El programa de la Liga se concentraba en for-

talear el poder y la autoridad del Estado central y de resolver la grave crisis fiscal, crisis por la cual se le culpó a la “plutocracia” bancaria y exportadora costeña. Por cierto, el foco específico del malestar generalizado era el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Por ser el banco donde se concentraban las riquezas del gran cacao así como el banco privado más importante autorizado a emitir suces, esta institución financiera se había convertido en el principal prestamista para los gobiernos crónicamente deficitarios de la época.

A pesar de la fuerte oposición de la plutocracia costeña, los eventos de julio llevaron a la fundación de un grupo de instituciones financieras y estatales, entre estas, un Banco Central en 1927. Además, la Constitución de 1928, por primera vez en la historia del país, incluyó principios de legislación social: el programa de doce puntos emitido por los militares trataba, entre otras cosas, la promoción de los intereses tanto de la clase trabajadora como de la población indígena, reformas de impuestos progresivos a favor del “proletariado” y el impuesto a la “fuga de capital” (citado en Paz y Miño 2000:25-26). A pesar de que sólo una pequeña parte del programa de la Revolución Juliana se transformó en políticas efectivas, sus líderes

“articularon un nuevo modelo de Estado-Nación, basado en tres nuevas orientaciones: en primer lugar, la imposición del interés de la nación, representado precisamente por el Estado, sobre los “intereses privados”, lo que significó una clara ruptura de los principios liberales anteriores; en segundo lugar, la imposición de la autoridad política centralista e institucional del Estado, como aparato de expresión de “lo nacional”, sobre los fraccionamientos regionales...; en tercer lugar, la institucionalización de la ‘cuestión social ecuatoriana’ como política de Estado... puesto que superó la visión liberal que atribuyó a los hacendados y empresarios de los diversos sectores...” (Paz y Miño 2000:72-73)

La “cuestión social” surgió de las condiciones deterioradas de vida de las clases trabajadoras en general y de la miseria de los trabajadores costeños en particular: ellos soportaron el peso de la crisis cacaotera de inicios de 1920 mientras que cientos de huelguistas y manifestantes fueron asesinados por el ejército en Guayaquil en noviembre de 1922. Esta “cuestión” también se refería a las condiciones serviles, a la opresión racial y a la negación de los derechos de ciudadanía de la población indígena, en ese entonces mayoritaria, que trabajaba en las haciendas serranas: rebeliones localizadas de indígenas campesinos ocurrieron en 1921 y 1923. Sin embargo, ni los trabajadores rurales de la costa ni los indígenas de la sierra, quienes formaban la mayoría de la población en aquella época, estaban organizadas. Ni siquiera participaron en la Revolución Juliana.

De todas maneras, una alianza social diversa conformada por grupos de elite serrana junto con sectores de clases medias y populares urbanas, tanto de la sierra como de la costa, apoyó la revuelta de julio de 1925. La situación de enero de 2000 fue radicalmente diferente ya que los jóvenes oficiales apoyaron a un levantamiento liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) formada en 1986. También se adhirieron a la rebelión algunos individuos destacados, incluyendo miembros de la Iglesia Católica inspirados por la Teología de la Liberación. La CONAIE, sin embargo, no prestó atención a la formación de alianzas, contando solamente con la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), que incorporaba a los trabajadores de empresas petroleras públicas y del sector eléctrico además de “ciertas agrupaciones del sur de Quito” (Ortiz Crespo 2000a: 30). La ausencia de apoyo organizado en la costa fue particularmente evidente, mientras que las clases medias, en vez de unirse a la rebelión, decidieron verla por la televisión. Incluso la

Federación Nacional de Indígenas Evangélicos (FEINE), que representa a una proporción significativa de la población indígena, no apoyó a los rebeldes.

El programa de la CONAIE demandaba la disolución de los tres poderes del Estado - ejecutivo, legislativo, judicial- y su reemplazo por un Parlamento Nacional Popular, apoyado por los parlamentos de las provincias y los distritos: demandaba un “cambio total” en la política económica, de un modelo neoliberal, a uno “justo, responsable, con una economía ambientalmente sustentable, que reconozca la plurinacionalidad y la diversidad cultural, [que sea] productiva y democrática [y] dirigida hacia el desarrollo humano ...; [y] la democracia ... bajo los principio de *ama killa, ama llulla, ama shua*”² (Declaración 2000, énfasis en texto original).

En comparación, las declaraciones del Coronel Lucio Gutiérrez, quien encabezó el movimiento militar del 21 de enero y que más tarde fue electo presidente (2003-2005), fueron bastante más imprecisas. Él se refirió a: “una tenaz e implacable Junta Pacífica contra una nueva forma de esclavitud para romper las cadenas que nos atan a la más espantosa corrupción. Nosotros estamos aquí para derrocar ese vergonzoso modelo a fin de cambiar las estructuras del Estado y fortalecer las instituciones democráticas”. Gutiérrez también hizo un llamado “a la Iglesia, los medios de comunicación, empresarios y banqueros, y otros líderes de opinión, trabajadores, mujeres y hombres” que amen al Ecuador a unirse al golpe y contribuir con “ideas para cambiar al país” (*El Comercio*, 22 de enero de 2000, A2).

Sin el apoyo de elites aliadas ni sectores sociales organizados, aparte de la CONAIE y de la CMS, la Junta de Gobierno de Salvación Nacional duró solo unas efímeras horas antes que el alto mando militar se hiciera cargo. Este dispuso la sucesión constitucio-

2 “No mentir, no ser ociosos, no robar”.

nal del vicepresidente Gustavo Noboa a la presidencia. El gobierno estadounidense, la Organización de Estados Americanos (OEA), y las instituciones financieras internacionales (IFI) plantearon claramente a los generales (quienes, de hecho, ya habían exigido la renuncia de Mahuad anteriormente) que ellos no tolerarían un gobierno militar y que la Constitución tenía que ser respetada.

Sorprendentemente, la administración de Noboa aceptó mantener la oficialización de la dolarización del sistema financiero que había sido anunciado por el Presidente Mahuad el enero 9 de 2000. Con esa decisión, el rol del Banco Central -quizá el mayor logro de la Revolución Juliana- fue anulado. Desde ese momento, el Banco no tendría la facultad de regular las tasas de cambio ni de controlar la demanda monetaria, convirtiéndose completamente en dependiente de los ingresos de exportación del país (ver, por ejemplo, Acosta y Juncosa 2000). Con las decisiones de profundizar las reformas neoliberales y adoptar el dólar americano como moneda oficial, se podría argumentar que el Ecuador en el año 2000, *mutatis mutandis*, estaba renunciando al rol intervencionista y al menos moderadamente desarrollista y reformista del estado como representante de los intereses comunes, planteado a partir de la Revolución Juliana encabezada por los militares (ver Paz y Miño 2000:73-74).

Momentos clave en la construcción del Estado, 1925-1979

Con la posible excepción del gobierno electo de Galo Plaza Lasso (1948-1952), los esfuerzos más coherentes para fortalecer las instituciones estatales y atender la “cuestión social” después de la Revolución Juliana fueron esfuerzos de gobiernos militares. Estos regímenes estuvieron administrados por el general Alberto Enríquez Gallo (octubre 1937-agosto

1938), una junta de cuatro oficiales (julio 1963-marzo 1966) de carácter marcadamente autoritario, y el general Guillermo Rodríguez Lara (febrero 1972-enero 1976). El último régimen mencionado fue reemplazado por un Triunvirato militar (1976-1979) que, llevado por los intereses dominantes, cambió la política económica y social bruscamente hacia la derecha.

El breve intervalo en el poder del general Enríquez ocurrió durante los años altamente conflictivos de la gran depresión de los 1930 cuando pasaron quince jefes de Estado por la presidencia del país. La participación de los miembros del Partido Socialista Ecuatoriano fue decisiva en su gobierno (Moreano 1991: 194, pie de página 15) ya que se dio curso al primer Código de Trabajo en el país, se limitaron los privilegios a las corporaciones extranjeras, se intentó fortalecer al Banco Central, y se mantuvieron las libertades políticas que permitieron que la izquierda se organice, no sólo en el escenario urbano sino también entre las clases trabajadoras rurales y los campesinos de la costa y de la sierra (Cueva 1990: 103). También se reconoció a las comunidades indígenas a través de la Ley de Comunas, la cual abrió la puerta a la organización política indígena a nivel local. En reacción a las políticas moderadamente reformistas, nacionalistas y de inclusión social-política de esta dictadura militar, las elites civiles se aliaron para dividir a las Fuerzas Armadas y destituir a Enríquez a mediados de 1938, encabezando “una purga en el ala democrática del ejército” y provocando una gran represión (Cueva 1990:104).

Tras la recuperación de la economía exportadora durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Plaza Lasso, apoyado por consejeros estadounidenses, comenzó a construir el moderno “Estado desarrollista”. La intervención activa del gobierno creó las condiciones para el “boom bananero” (1948 - 1965). A pesar de que este gobierno no trató

de reformar ni las condiciones de alta inequidad en la distribución de la tierra ni el predominio de las relaciones sociales precapitalistas en la agricultura, las políticas de tierra y crédito en las nuevas áreas agrícolas favorecieron a productores bananeros de pequeña y mediana escala. La provincia de El Oro, que con este tipo de políticas se transformó social y económicamente, en 1974 estaba en el cuarto lugar más alto entre las veinte provincias del Ecuador de aquel entonces con referencia a sus indicadores sociales y económicos (Larrea 1987:242). Claramente, las Fuerzas Armadas ecuatorianas influenciaron la manera en que se colonizó la frontera agrícola en El Oro, una provincia estratégica que fue ocupada por las fuerzas peruanas durante la guerra de 1941 entre los dos países.

La “cuestión social” en el sector agrario fue el objeto de atención del reformista y a la vez represivo gobierno militar anti-comunista de mediados de 1960, asesorado por consejeros estadounidenses inspirados por la Alianza por el Progreso y presionado por la agitación social en el campo. En aquel tiempo, el problema no residió sólo en la alta concentración de la tierra en pocas manos, sino en el aún existente huasipungo, relación social precapitalista que todavía se mantenía en las zonas indígenas de la sierra. Sin embargo, para 1960, algunos huasipungueros se habían organizado en la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), establecida en 1947 bajo la tutela del Partido Comunista. En diciembre de 1961, entre diez y quince mil miembros de la FEI se habían tomado las calles de Quito en una demostración pacífica pero “amenazadora” en pos de una reforma agraria (Guerrero 1993: 91-92). Entretanto, estalló el conflicto y se dio paso a la organización rural en las zonas costeras: Uggen (1975: 179) documentó 18 huelgas e invasiones de tierra entre 1960 y 1963 solamente en la provincia del Guayas, es decir, en el asiento rural de las elites costeñas.

La ley de reforma agraria decretada por el gobierno militar en julio de 1964 fue diseñada para reducir la tensión de estos conflictos con la abolición de las relaciones sociales precapitalistas y con la creación de una clase media rural, principalmente a través de la extensión de la frontera agrícola mediante la colonización. Esta ley también creó el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) que funcionó hasta 1994 cuando fue eliminado por una ley neoliberal de desarrollo agrario. A pesar de que la ley de reforma agraria de 1964 fue moderada, las clases terratenientes de la sierra se opusieron y los terratenientes de la costa y sierra unieron fuerzas para asegurar que ni los trabajadores agrícolas ni los campesinos estuvieran representados en el Consejo Ejecutivo de IERAC (North 1985:434-438). Mientras tanto, los esfuerzos de la junta por fomentar la industrialización, reformar la administración de aduanas en Guayaquil y aumentar los impuestos de importación hicieron que se ganen la enemistad de las elites costeñas. Una vez que el peligro de la revolución social estuvo aparentemente neutralizado por las iniciativas reformistas, combinadas con la represión de grupos de izquierda y populares, las elites de la costa y de la sierra juntaron sus fuerzas de nuevo, “recurriendo al sabotaje económico”, para expulsar a la junta militar (Isaacs 1993: 3), e idearon una transición a un gobierno civil que ellos pudiesen controlar (Cueva 1991:156 y 160, Moreano 1991:190).

Con el boom de exportación petrolera en el horizonte, en 1972, sectores reformistas y nacionalistas de las fuerzas armadas lideraron un golpe, esta vez, para asegurar que el capital extranjero proveniente del petróleo se destine al desarrollo social y económico en vez de que caiga en las manos de compañías extranjeras y sus respectivos aliados locales pertenecientes a la clase dominante. Los golpistas prometieron que el nuevo gobierno no sólo

“realizará una reforma agraria real y efectiva’, distribuyendo la tierra ‘a las personas naturales que genuina y directamente la trabajan’, [sino] que ‘hará todos los esfuerzos que sean necesarios para eliminar la dependencia del país en los aspectos económico, político, social, cultural e ideológica” (citado por Cueva 1991: 167).

La ley de reforma agraria llevada a cabo por los militares (1973) estuvo lejos de llenar estas promesas ya que los terratenientes de la costa y de la sierra, con el apoyo de otros sectores de elite, lograron minimizar el contenido reformista de las propuestas de ley presentadas por los militares (North 1985:439-441). Sin embargo, el gobierno de Rodríguez Lara sí consiguió renegociar los contratos con las compañías petroleras, por ende asegurando estos recursos para el Ecuador, a la vez que permitiéndole emprender programas de construcción de infraestructura, expansión de la educación pública y de los servicios de salud, y la disposición de generosos subsidios para sostener políticas de Industrialización por Substitución de Importaciones (ISI) como también para la modernización agrícola. Estas políticas favorecieron la expansión de las clases medias urbanas que prosperaron con la diversificación económica y el rápido crecimiento de fuentes de empleo público. Al mismo tiempo, empero, las clases dominantes “conservaba[n] intactas las raíces de su poder” (Cueva 1991:169, ver también Isaacs 1993:73-79).

A pesar de que las elites de la costa y la sierra se beneficiaron inmensamente de los subsidios proporcionados al sector privado, como lo explica el General Paco Moncayo, “a los sectores hegemónicos no les gustó la posición nacionalista y progresista” de Rodríguez Lara (Moncayo 1995: 169). Por consiguiente, se unificaron de nuevo para forzar la renuncia de ministros progresistas y, finalmente, del propio Rodríguez Lara. Éste fue reemplazado en 1976 por un Triunvirato (los líderes de las

tres ramas de las Fuerzas Armadas). El Triunvirato, en cambio, emitió una nueva ley de colonización agraria (1977), pero no recortó la inversión en educación, salud pública, alumbrado público y los subsidios al sector privado. El boom petrolero facilitó la modernización agraria y formas de ISI intensivas en la utilización de capital (Larrea y North 1997: 920-921), y cuando el ingreso de las exportaciones petroleras comenzó a decaer, no sólo el Estado sino también el sector privado aumentaron agresivamente su capacidad de endeudamiento (Ortiz 2000b: 54). Esto marcó el inicio de la creciente crisis fiscal del Estado y de las repetidas demandas del sector privado para recibir ayuda de los gobiernos civiles durante los siguientes años.

La debilidad de los esfuerzos militares para fortalecer las instituciones públicas y comprometerse con la construcción de la nación, para llevar a cabo reformas redistributivas y auspiciar un patrón de desarrollo social más benigno, residió en parte en la ausencia de organizaciones de apoyo social y político para contrarrestar la oposición de las poderosas clases dominantes del país y en parte a las propias contradicciones internas de los militares que les impidió a llevar una política consecuente en todos los campos, como fue el caso del Triunvirato que sustituyó al gobierno progresista de Rodríguez Lara. Sin embargo, ya que estas dictaduras no practicaban excesos de represión comparables a los de las sangrientas dictaduras militares de Argentina, Chile y Brasil, la mayoría de los ecuatorianos se acuerdan del último gobierno militar con nostalgia, como una “dictablanda” más que una “dictadura” y también como una era de prosperidad económica (Isaacs 1993: 4-6).

Con respecto a la capacidad de las clases dominantes para bloquear las iniciativas militares reformistas, muchos expertos han analizado su evolución hacia redes monopolísticas y/o oligopolísticas basadas regionalmente que establecieron los límites si no la agenda de las

políticas públicas (Larrea Maldonado 1987: 67-110, Navarro 1976:80-97). Mientras tanto, Conaghan (1988:57) proporciona evidencia que demuestra como los grupos empresariales más grandes, tanto de la costa como de la sierra, se asociaban con capital multinacional. Su encuesta a 70 industriales también encontró que la gran mayoría de ellos percibían a las reformas redistributivas como una amenaza ya que eran las elites y las clases medias urbanas quienes constituían su mercado doméstico (Conaghan, 1988: 46 y 68-70).

La transición de gobierno militar a “democrático” civil en Ecuador se llevó a cabo en una sociedad en la cual “grupos comerciales-financieros-industriales de comportamiento rentista, que surgieron o pertenecían a las clases terratenientes tradicionales, penetraron directamente en el aparato estatal” (Larrea y North 1997:927). Estaban acostumbrados a equiparar sus intereses privados con los intereses nacionales.

El “Consenso de Washington” y el desmantelamiento del Estado

El primer gobierno civil después de la transición (1979-1984) empleó medidas de estandarización y resistió la aplicación a gran escala de políticas contenidas en el “Consenso de Washington”. Fue el segundo gobierno post transición, liderado por el dirigente del Partido Social Cristiano, León Febres Cordero (1994-1998), que comenzó a implementar la agenda neoliberal con mayor fuerza. El rescate financiero de sus aliados comerciales en el sector privado debilitó seriamente al Banco Central (Jácome 1994: 24-25) mientras otras instituciones públicas claves sufrieron durante esta presidencia, incluyendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Corporación Petrolera Ecuatoriana (CEPE), y al antes existente

Instituto Nacional de Electrificación (INECEL), como también otras agencias que proveían subsidios para el consumo básico (Roldós Aguilera 1991:343-345). Pareciera como si el gobierno a propósito hubiera debilitado esas instituciones para apoyar argumentos futuros a favor de la privatización. Al mismo tiempo que la viabilidad de las instituciones sociales y económicas del Estado estaba siendo socavada, surgió un levantamiento guerrillero de poca importancia que el gobierno de Febres Cordero aprovechó como excusa para involucrarse en una serie de abusos a los derechos humanos y para incorporar nuevas unidades policiales.

Después, en 1994, la Ley General de Instituciones Financieras, legislada por otro presidente de derecha, Sixto Durán Ballén (1992-1996), como parte de un programa para modernizar y liberalizar los mercados financieros, dejó la supervisión de los bancos en “niveles mínimos”. En efecto, la ley “era una invitación al desastre: una serie de banqueros inescrupulosos concentraron créditos en empresas propias, reales o fantasmas, canalizando el ahorro de sus clientes hacia su riqueza personal” (Ortiz Crespo 2000b: 51). El gobierno de Durán Ballén también impulsó una nueva legislación agraria auspiciada por un *think tank* (banco de ideas)³ de la clase terrateniente apoyado por USAID, para garantizar los derechos de propiedad y la liberación de los mercados de tierra. Las cláusulas redistributivas de la legislación anterior

3 “Un *think tank* es una institución investigadora u otro tipo de organización que ofrece consejos e ideas sobre asuntos de política, comercio e intereses militares. A menudo están relacionados con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo. Normalmente este término se refiere específicamente a organizaciones en las que trabajan varios teóricos e intelectuales multidisciplinarios que elaboran análisis o recomendaciones políticas. El nombre proviene del inglés por la abundancia de estas instituciones en Estados Unidos y significa depósito de ideas” (Nota de la traductora. Fuente: <http://ed.wikipedia.org>)

fueron eliminadas por la Ley de Desarrollo Agrario en 1994.

Mientras que los gobiernos civiles después de los 1980 y 1990 llevaron a cabo políticas para limitar el papel del Estado, políticas promovidas por bancos internacionales y las grandes naciones donantes, estos gobiernos también confrontaron el problema de la deuda externa, con mercados de exportación inestables, déficit presupuestarios crónicos y desastres naturales (por ejemplo El Niño durante 1982-1983 y de nuevo en 1997-1998). El gasto público como proporción del PIB cayó de 20.5% en 1982 a 11% en 1992, y los servicios sociales se deterioraron con los recortes en el presupuesto de educación y salud. Al mismo tiempo, el sector informal floreció mientras que las oportunidades de empleo formal, tanto en las instituciones públicas como en las privadas se redujeron, carcomiendo las bases de la organización sindical. Por lo tanto, no sorprende que la distribución del ingreso empeorara en un país históricamente caracterizado por profundas desigualdades sociales (Larrea 1998: 194).

A la población indígena, mayoritariamente rural, le golpearon las políticas y tendencias revisadas anteriormente: en 1995, 73.2% sobrevivió por debajo de la línea de pobreza y el 37.6% estuvo en condiciones de indigencia, en contraste al 54.9% y 19% de la población no indígena, respectivamente (PNUD 1999:44). Comenzando en junio de 1990, las quejas de la población indígena encontraron expresión en los levantamientos organizados por la CONAIE. En estos levantamientos y protestas, la CONAIE demandaba, entre otras cosas, la resolución de conflictos de tierra, la modificación a la ley de modernización agraria propuesta por Durán Ballén, y el abandono de las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos. Mientras tanto, otros sectores sociales, en varias alianzas, apoyaron los levantamientos y/u organizaron otras protestas por su cuenta. Los

noventa y el comienzo del nuevo siglo estuvieron, por lo tanto, marcados por altos niveles de conflicto social.

Todas las tendencias discutidas anteriormente, desde el desmantelamiento de las instituciones del Estado y el creciente control por parte las elites rentistas de la agenda política del país, hasta el deterioro de los estándares de vida, manifestaciones indígenas y otras protestas sociales, culminaron durante la presidencia de Jamil Mahuad (1998-2000). Sin ahondar en detalles, basta notar que, en el contexto de la crisis económica generalizada, Mahuad procedió a anunciar la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial del país el 9 de enero de 2000. Lo hizo después de decretar, tres días antes, un estado de "emergencia nacional", cuando la CONAIE ya estaba organizando reuniones en toda la sierra preparando otro levantamiento más. La posterior revuelta indígena-militar fue descrita en la sección introductoria de este artículo. Lo que falta por recalcar es que las Fuerzas Armadas, en su mayor parte, reaccionaron de una manera medida tanto a los levantamientos anteriores como a los posteriores, así como a las constantes acciones sociales de protesta contra la agenda neoliberal que favorecía a las elites civiles.

Observaciones finales

Primero, en el largo plazo, desde la Revolución Juliana de 1925, la mayoría de gobiernos militares han favorecido más consistentemente políticas de inclusión (como la reforma agraria y la seguridad social) que pudieron haber conducido al desarrollo del mercado doméstico y al progreso social. De hecho, las elites políticas-económicas dominantes del país repetidamente bloquearon los esfuerzos militares que, para mejor o peor, estaban dirigidos hacia la construcción de un Estado Nación *socialmente más incluyente*.

Cuando estas elites estuvieron en el poder, algunas probaron ser más represivas que los militares, como fue el caso de la administración de Febres Cordero, y *otras veces* más rapaces, corruptas y con poca visión, como fue el caso de la presidencia de Mahuad. Con esto no queremos dejar de lado unas cuantas intervenciones nefastas del militarismo en la vida del país, como las que se produjeron durante la junta militar de los años sesenta y durante el gobierno civil -pero de base militar- de Lucio Gutiérrez.

Segundo, la capacidad de las elites ecuatorianas rentistas para perseguir sus intereses privados a corto plazo -en vez de velar por los intereses generales nacionales- fue facilitada por las políticas de liberalización del mercado plasmadas en el "Consenso de Washington". Impuestos en un país donde el Estado nunca alcanzó un grado significativo de autonomía frente a las clases dominantes, la desregularización, la liberalización del comercio y las políticas de privatización llevaron a la desinstitutionalización pública y política que incrementó la capacidad de las elites para extraer recursos del Estado, retirar capital del país para ahorro e inversión en el extranjero, y eventualmente provocar catástrofes financieras. Además, como todos los partidos políticos estuvieron obligados por fuerzas externas a seguir las mismas políticas, desafortunadamente, el incipiente sistema de partidos de comienzo de 1980 fue desacreditado y desestabilizado. En esta situación, las Fuerzas Armadas, de una u otra manera, se convirtieron en árbitros en la resolución de conflictos políticos en 1997, 2000, y de nuevo en el 2005. A menos que se establezca una genuina democracia política y social en el Ecuador, el riesgo de la intervención militar en los asuntos que deberían ser tratados por los civiles estará presente.

Bibliografía

- Acosta, Alberto y José E. Juncosa, editores, 2000, *Dolarización: Informe urgente*, ILDIS y Abya-Yala/UPS, Quito.
- Almeida, Rebecca, 1994, *Kemmerer en el Ecuador*, FLACSO, Serie Tesis-Historia, Quito.
- Conaghan, Catherine, 1988, *Restructuring Domination: Industrialists and the State in Ecuador*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
- Cueva, Agustín, 1991, "El Ecuador de 1960 a 1979", en Enrique Ayala Mora, editor, *Nueva Historia del Ecuador*, vol. 11, Corporación Editora Nacional, Quito.
- , 1990, "El Ecuador de 1925 a 1960", en Enrique Ayala Mora, editor, *Nueva Historia del Ecuador*, vol. 10, Corporación Editora Nacional, Quito.
- CONAIE, 2000, "Declaración del Parlamento Nacional de Pueblos del Ecuador", documento.
- Drake, Paul, 1989, *The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions*, Duke University Press, Durham.
- Guerrero, Andrés, 1993, "La desintegración de la administración étnica en el Ecuador" en José Almeida *et al*, *Sismo Étnico en el Ecuador*, CEDIME, Abya-Yala, Quito.
- Hanson, David, 1971, "Political Decision Making in Ecuador: the influence of business groups", Doctoral thesis, University of Florida.
- Isaacs, Anita, 1993, *Military Rule and Transition in Ecuador, 1972-92*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
- Jácome, Luís, 1994, "La experiencia de estabilización en el Ecuador", Apunte Técnico 28, CORDES, Quito.
- Larrea Maldonado, Carlos, editor, 1987, *El Banano en el Ecuador: Transnacionales, modernización y subdesarrollo*, Corporación Editora Nacional, Quito.
- Larrea, Carlos y Liisa North, 1997,

- “Ecuador: adjustment policy impacts on truncated development and democratization”, en *Third World Quarterly*, 18 no. 5.
- Larrea, Carlos, 1998, “Structural Adjustment, Income Distribution, and Employment in Ecuador”, en Albert Berry, editor, *Poverty, Economic Reform, and Income Distribution in Latin America*, Lynne Rienner Publishers, Boulder.
- Moncayo, Gallegos, 1995, *Fuerzas Armadas y Sociedad*, Corporación Editora Nacional, Quito.
- Moreano, Alejandro, 1991, “El sistema político en el Ecuador contemporáneo”, en Enrique Ayala Mora, editor, *Nueva Historia del Ecuador*, vol. 11, Corporación Editora Nacional, Quito.
- Navarro, Guillermo, 1976, *La Concentración de Capitales en el Ecuador*, Ediciones Soltierra, Quito.
- North, Liisa, 1985, “Implementación de la política económica y la estructura de poder político en el Ecuador”, en Louis Lefebvre, editor, *Economía Política del Ecuador: Campo, región, nación*, Corporación Editora Nacional, FLACSO y CERLAC, Quito.
- Ortiz Crespo, Gonzalo, 2000a, “Reportaje a los tres golpes de Estado”, en *Gestión*, No. 68, Ecuador.
- , 2000b, “Esquema de la historia económica del Ecuador en el siglo XX”, en *Gestión*, No. 68, Ecuador.
- Paz y Miño Cepeda, Juan, 2000, *Revolución Juliana: Nación, Ejército y bancocracia*, Abya-Yala, Quito.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1999, *Informe sobre Desarrollo Humano, Ecuador 1999*, PNUD, Quito.
- Quintero, Rafael y Erika Silva, 1991, “Región y representación política en el Ecuador contemporáneo (1939-1959)”, en Rafael Quintero, editor, *La Cuestión Regional y el Poder*, Corporación Editora Nacional, FLACSO y CERLAC, Quito.
- Roldós Aguilera, León, 1991, “La administración de Febres Cordero y el sector público”, en Enrique Ayala Mora, editor, *Nueva Historia del Ecuador*. Vol. 11, Corporación Editora Nacional, Quito.
- Uggen, John Forrest, 1975, “Peasant Mobilization in Ecuador: A Case Study of Guayas Province”, Doctoral Dissertation, University of Miami.

Milicia e indios

una relación contradictoria

Mirada con la distancia del tiempo, una fotografía es una *puesta en escena* de una época, de una ideología, de una clase social. Una *puesta en escena* en la que todos los elementos se convierten, en cierta manera, en símbolos, en huellas de un discurso particular. Ese ha sido el criterio con el cual *Taller Visual* ha seleccionado de su archivo¹ un grupo de fotografías que nos hablen de una historia de relaciones ambiguas, contradictorias, en las que los dos actores, los indígenas y los militares, protagonizan aproximaciones y distancias. Porque la relación entre la milicia y el indígena se ha expresado, a lo largo de la historia republicana y particularmente del siglo veinte, de diversas maneras: como fuerzas en conflicto donde a la milicia le ha correspondido reprimir los levantamientos indígenas a órdenes de un poder político autoritario y excluyente; como “buenos vecinos” en el marco de una convivencia rural en el caso de la colonización amazónica en épocas pasadas; como protagonistas de lo que se ha llamado la “cholificación” del ejército, esto es, la milicia convertida en un espacio de atracción para jóvenes indígenas expulsados por la estructura agraria o atraídos por una forma de inclusión a la sociedad que les fuera negada como pueblos.

Cada fotografía seleccionada tiene algo que decirnos: el general de ideas bolivarianas y el grupo indígena armado, juntos en el escenario mítico de la revolución boliviana de 1952-53.

El retrato desolado y sin contexto ni escenario de Fernando Daquilema, fusilado en 1872 bajo el régimen de García Moreno en el marco de una criminalización de las sublevaciones indígenas; frente a la forzada teatralidad con la que posa, a lomo de un caballo blanco, en actitud casi napoleónica, un general, miembro de las familias de abolengo del Ecuador del siglo XIX.

La imagen/síntesis del largo crepúsculo terrateniente de los Andes: el grupo indígena compacto, en silencio, vencido, resguardado por un pelotón militar .

Las imágenes que evocan la convivencia en la Amazonía y el gesto del buena vecindad entre indígenas y militares, no siempre presente en una región caracterizada por la violencia de la colonización.

La curiosa escena de una demostración pública de “pericia militar”, que antecedió a la intervención del ejército en la represión de un levantamiento indígena a comienzos del siglo XX.

Finalmente, los jóvenes miembros de las clases populares rurales asimilados por la milicia, que posan en el estudio fotográfico de Fernando Zapata en Latacunga: jóvenes extrapolados de la comunidad rural de origen, individualizados, *integrados*.

Taller Visual

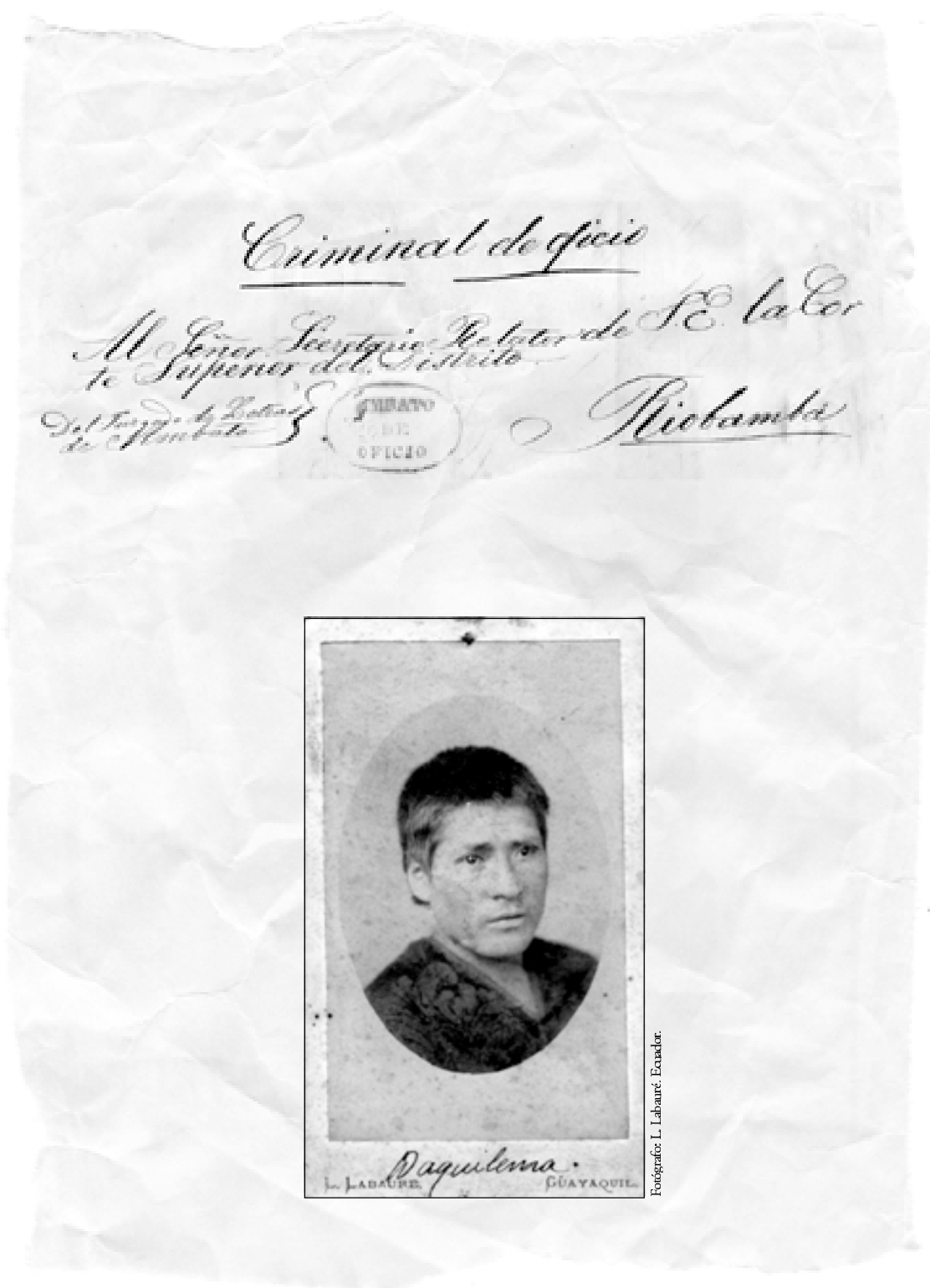
Compilación: Lucía Chiriboga

1 El *Taller Visual*, Centro de Investigaciones Fotográficas, mantiene un Centro de Documentación con una rica base de datos que cubre desde 1840 a 1980.



Fotógrafo: Thorlchten, La Paz, Bolivia

El general ecuatoriano A. I. Chiriboga durante la proclamación de la Reforma Agraria, Bolivia, 1953



Fernando Daquilema, capitán de la sublevación de los indios en Riobamba, fue fusilado en 1872 bajo el régimen conservador de Gabriel García Moreno, en épocas en que los levantamientos indígenas eran criminalizados.



Arquívalo. Ecuador

El general Reinaldo Flores y Jijón, en la entrada a Quito de las fuerzas conservadoras en 1883.



Militares en la comunidad indígena de Amula, Chimborazo, 1928



Fotógrafo: H. Donoso. Ecuador.



Anónimo. Ecuador

“Ametralladoras llevadas a Cuenca por el Mayor Pablo Guerrero en 1920, en ocasión del levantamiento de los indios”.



Arquímino, Ecuador



Arquímino, Ecuador

Arriba: Soldado e indígenas Shuar en la Amazonía ecuatoriana, 1936
Abajo: En la Amazonía ecuatoriana, 1936

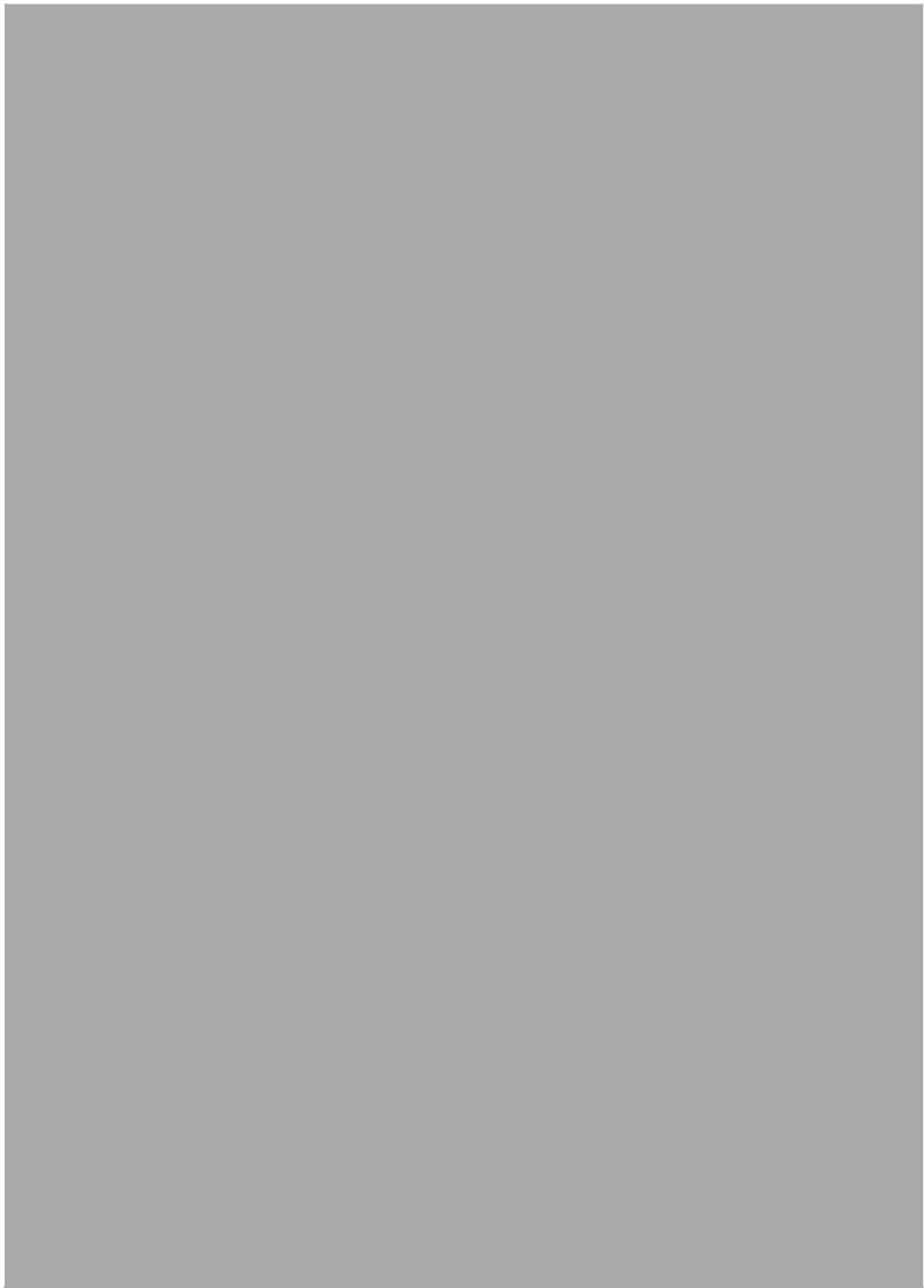


Fotógrafo: Fernando Zapata. Ecuador.

Soldados ecuatorianos, ca. 1960

DEBATE

Q



“Entre la academia y la política”

FLACSO otorga el Doctorado

Honoris Causa a Ricardo Lagos Escobar



“Entre el intelecto y la acción”¹

Dentro de pocos meses se iniciará el año del cincuentenario del sistema internacional de FLACSO. El Doctorado Honoris Causa que hoy entregamos a Ricardo Lagos Escobar es, en cierto sentido, emblemático y podría considerarse ya parte de esa efemérides institucional. Quien recibe el reconocimiento es una persona que ha jugado un papel clave en la FLACSO y en Chile, en la academia y en la consolidación democrática de su país y de toda América Latina. Ricardo Lagos personifica las luchas de toda una generación de chilenos defensores y promotores de la democracia. En ese carácter, su desempeño como Secretario General de la FLACSO, su rol como académico e intelectual, debe mirarse como un símbolo de lo que la institución significa: diálogo entre la política y el conocimiento; encuentro entre lo oficial y lo no gubernamental; puente entre el intelecto y la acción.

Muchos no tuvieron la oportunidad de ayudar a construir, como lo hizo Lagos, el Chile democrático y solidario al que aspiraban. Tampoco al desarrollo de una América Latina democratizada. Muchos se quedaron en el camino. Pero los que hoy están presentes saben que aquel

¹ Extracto de la intervención de Francisco Rojas, Secretario General de FLACSO, en ocasión de la entrega del Doctorado Honoris Causa a Ricardo Lagos.

sacrificio no fue en vano porque decenas de miles de chilenos y latinoamericanos hoy pueden caminar por las “anchas alamedas” y recordar el sueño desde donde partieron y al cual no todos llegaron, por el largo peso del oscurantismo.

América Latina ha cambiado mucho desde los años de las dictaduras. En la actualidad el Hemisferio vibra en democracia, por imperfecta que ésta sea. Los desafíos, sin embargo, siguen ahí. Algunos de ellos son viejos y conocidos: la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, el débil estado de derecho. Otros son retos de nuevo cuño: el impacto de la globalización y con ella las siete “guerras” que ha destacado Moisés Naím ligadas al proceso de mundialización.

Pero todos esos problemas tienen como denominador común un elemento principal: en última instancia plantean la urgente necesidad de construir sociedades y comunidades latinoamericanas distintas; más solidarias, más equitativas, más participativas, en definitiva, más democráticas e integradas. Las diferencias que hoy nos separan son menos ideológicas que éticas; son menos políticas que económicas, son más de diseño de estrategias que de instituciones.

Estas brechas se superan con creatividad y pragmatismo, esa es la senda que propuso Ricardo Lagos, ésta convoca a un diálogo permanente entre la sociedad y el Estado, entre la ciudadanía y el gobierno: construir políticas de Estado sobre la base de una mirada estratégica.

FLACSO ya casi cumple cincuenta años, medio siglo de reflexión y servicio a favor de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe, medio siglo contribuyendo al desarrollo y la integración regional. El horizonte que vislumbro de la FLACSO es la de un organismo internacional con representación plena de los países latinoamericanos. Quiero agradecerle al Presidente Lagos el rico aporte que como Secretario General de FLACSO proveyó su liderazgo en momentos difíciles, en que esta organización era joven y él mismo era un joven investigador y académico todavía lejos de convertirse en el estadista y en el líder mundial que es hoy día.

El otorgamiento de un Doctorado Honoris Causa no es un rito de pasaje, sino un reconocimiento a una cumbre alcanzada. No es una ceremonia de inicio, sino la más distinguida estación en el altozano de la madurez. Esto no es poca cosa para ninguna organización académica y mucho menos lo es para la FLACSO, cuyo Comité Director y el Consejo Superior acogieron con profunda satisfacción la sugerencia de otorgárselo al profesor y ciudadano Ricardo Lagos Escobar. En este sentido, además de ser cumbre, esta ceremonia es un punto de encuentro de la familia de FLACSO con sus mejores tradiciones académicas y políticas. Vale la pena destacar que esta institución congrega poco más de medio millar de personas, hombres y mujeres que investigan, enseñan y administran en las Sedes y Programas de la FLACSO en diez países de la región.

Quisiera terminar con unas palabras del Presidente del Consejo Superior de la FLACSO, Dr. Francisco Delich, quien en razón de su cargo parlamentario en Argentina y de una sesión extraordinaria de la mayor importancia no nos puede acompañar en el día de hoy: “En este acto, la FLACSO está reconociendo una trayectoria académica, una gestión institucional y un compromiso con la democracia emergente en América Latina. Sociedades movilizadas en busca de liderazgos no siempre los encontraron. Este Presidente al que ahora rendimos homenaje marca uno de esos encuentros felices donde la sociedad civil se articula con el Estado para potenciar el crecimiento con equidad. Chile es, por ahora, el único país de América Latina que está más cerca del desarrollo que del subdesarrollo, de la modernidad que del atraso, y esa excepcionalidad marca el encuentro de la razón con la pasión nacional. Este doctorado, Presidente Lagos, es en su persona un homenaje al pueblo chileno que sufrió la dictadura, la derrotó con el sufragio, evitó restaurar el pasado para fundar otro país, otro Estado, otra sociedad, esa es su obra y la obra de todos los chilenos”.

“Una figura emblemática”²

La Sede Ecuador de FLACSO solicitó al Concejo Superior la concesión del doctorado Honoris Causa a Ricardo Lagos. Al hacerlo, la FLACSO no sólo consideró los méritos personales del Dr. Lagos sino la necesidad de construir referentes de identidad regional que permitan imaginar la continuidad histórica de América Latina en momentos en que la región enfrenta procesos de dispersión y fragmentación, como consecuencia de una nueva arquitectura en la economía global y del orden internacional en las últimas décadas.

El presidente Lagos es una figura emblemática de la región. De alguna manera encarna para los latinoamericanos a la sociedad chilena y, más allá de las coincidencias o discrepancias ideológicas o técnicas con el modelo societal de esa república, Chile da cuenta a lo largo de las últimas cuatro décadas de un proceso histórico de extraordinario poder simbólico en términos de los dramas que ha vivido, de la evolución de su orden político, de su proceso de crecimiento, y del tratamiento de sus problemas sociales. En Chile, por lo menos desde la elección del presidente Allende hasta la de la presidenta Bachelet, nos hemos visto reflejados todos en algún momento. Las múltiples historias de Chile nos han pertenecido apasionadamente en el hemisferio y Ricardo Lagos encarna todos y cada uno de los episodios de su devenir contemporáneo.

Este homenaje es el de una escuela internacional de postgrado, un organismo internacional que cumplirá medio siglo de existencia el próximo año y se produce en una de las sedes más antiguas del sistema. De hecho, ésta es una de las dos sedes que se abrieron para reemplazar a la de Chile cuando el general Pinochet denunció el acuerdo y cerró el único local que existía en ese entonces, y que se ubicaba en Santiago. En cierto sentido, los autoritarismos militares de derecha del Cono Sur permitieron la conversión de FLACSO de una organización construida a imagen y semejanza de la CEPAL dedicada a las Ciencias Sociales, a una red internacional de entidades de investigación y educación de cuarto nivel que cubre la mayor parte de los países de la región. Esto ocurrió cuando ante la clausura de Chile, los estados miembros del acuerdo internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales decidieron abrir dos sedes al mismo tiempo: Ecuador y México, que se sumaron a una tercera de facto: Argentina. El Presidente Lagos fue un personaje central en esa transformación cuando trabajaba, precisamente, para esta institución.

Este reconocimiento personal, además, ocurre cuando las ciencias sociales en la región enfrentan en el momento actual al menos tres retos importantes. Tienen que comprender y producir respuestas a los fenómenos de diversificación de la región, a la necesidad de institucionalizar y construir democracia, y a la urgencia de generar políticas de desarrollo que apunten a la equidad y la sustentabilidad.

Una de las consecuencias importantes del proceso de globalización sobre nuestro continente ha sido la generación de la tendencia de comunidades nacionales y locales a construir identidades económicas y culturales múltiples que desbordan la idílica imagen de un continente homogéneo con pretensiones de unidad. Sin que este proceso sea necesariamente bueno o malo, las últimas dos décadas se han caracterizado por el surgimiento de múltiples imágenes de nosotros mismos. México, Centroamérica, El Cono Sur, los Andes y el Caribe han ido diferenciándose.

2 Extracto de la intervención de Adrián Bonilla, director de Flacso-Sede Ecuador.

En las comunidades nacionales esta tendencia tiende a reproducirse. Las reivindicaciones por identidades regionales se expresan en demandas autonómicas y tensiones permanentes entre los estados centrales, sus capitales y las periferias. Varias ciudades buscan inserciones que les den ventajas comparativas en el mercado y cuestionan la imagen de estados unitarios y homogéneos.

En los últimos diez años se ha vuelto evidente, por otra parte, que la democracia es un proyecto por construirse y completarse. La vigencia de gobiernos civiles de origen electoral no ha sido suficiente para consolidar dinámicas de participación y representación de los intereses del conjunto de la sociedad en los procesos de toma de decisión. Queda mucho por hacer en temas relacionados con rendición de cuentas y ausencia de impunidad. América Latina, y particularmente la región andina, se caracterizan todavía por la existencia de sociedades excluyentes, jerárquicas, autoritarias y profundamente racistas

Asistimos también a dinámicas de des-institucionalización y de erosión de la legitimidad de la política. Varios gobernantes en toda la región no han terminado sus mandatos; los parlamentos y los sistemas judiciales se encuentran retados por la complejidad de la política y por su propia ineficacia. La imagen de ausencia de estado de derecho se acompaña de procesos paralelos de violencia societal y lógicas públicas de seguridad que apelan constantemente a la coerción.

Finalmente, los temas tradicionales de desarrollo, equidad y justicia social, persisten. La liberalización del continente no significó en la mayoría de los casos el cumplimiento de las expectativas de crecimiento, y varias de las dinámicas económicas de apertura desataron fenómenos de concentración del ingreso, acumulación predatoria de los recursos públicos y destrucción de ecosistemas, sociedades locales y culturas originarias.

Las ciencias sociales en Latinoamérica se han transformado también intensamente. Se diversificaron las fuentes académicas y el contacto con varias regiones del mundo, especialmente con Norteamérica y Europa, y está pendiente todavía la construcción de puentes de pensamiento Sur-Sur. Las disciplinas se han especializado mucho y en varios sentidos esto ha marcado una tendencia hacia la compartimentación y pérdida de vista de la totalidad de la sociedad. Para FLACSO, y particularmente para la Sede Ecuador, es un desafío central reconstruir una perspectiva latinoamericana de sus sociedades, generar visiones regionales e identificar los puntos de encuentro de realidades, a veces, muy distintas. Ésta es una tarea básica para proteger y fortalecer a nuestros pueblos y una misión cultural cuyo propósito no es homogeneizar sino visibilizar la enorme y diversa riqueza de nuestras sociedades.

“Treinta años después”: entre la academia y la política¹

Ricardo Lagos Escobar

Llego aquí ante ustedes después de treinta años y un poco más de haberme desempeñado como Secretario General de FLACSO. Los años setenta fueron momentos difíciles, sobre todo porque el diálogo entre la política y el conocimiento siempre fue una relación compleja. Lo que sucede es que el conocimiento y en particular las ciencias sociales no son sino el deseo de escrutar la sociedad a medida que va emergiendo.

Ya hace mucho tiempo, una distinguida economista, Joan Robinson, dijo que dos profesiones por excelencia, la de abogado y la de economista, eran las profesiones defensoras del *statu quo*: la de abogado por explicar por qué el sistema institucional jurídico actual es perfecto, por algo es “actual”, y la de economista por demostrar que la forma en que están organizadas las normas económicas de una sociedad son las mejores. Sin embargo, a poco andar, sea que se trate de abogados o de economistas, sociólogos o científicos políticos, antropólogos o psicólogos sociales, el tener como tema de análisis la forma en que una sociedad funciona, a la larga, lleva a señalar aquello puede funcionar de una manera distinta y mejor. Esa es la clave del conocimiento, esa es la clave del cambio. De ahí que muchas veces, el Príncipe que quiere gober-

nar según el *statu quo* para preservar su poder, choca con aquel cientista social que busca mejorar el entorno en el cual su objeto de análisis está enclavado. Esta es la razón por la cual, cuando llegan a nuestra América épocas de autoritarismo, son las ciencias sociales tal vez las primeras que sufren el embate de aquellos.

Septiembre de 1973 no fue una excepción en esta regla general. En medio de la caída de una democracia (el golpe de Pinochet) me tocó dirigir esta institución, cuya sede estaba en Chile, cuyos estudiantes y profesores venían de América Latina y también de más allá: de Estados Unidos, de Europa. Todo fue complejo y difícil. Tuvimos a estudiantes y a profesores detenidos. También tuvimos un conflicto difícil de entender, en tanto FLACSO tenía el estatus de organismo internacional y, como tal, tuvimos que exigir a las nuevas autoridades unos diplomas muy elegantes que decían que esta institución era extra territorial y que no podía ser invadida. Recuerdo esto porque en un momento, mi secretaria entra presurosa a decirme “unos señores lo buscan”, y sin que alcance a terminar la frase, entran cuatro soldados del ejército de Chile y me apuntan desde los cuatro rincones de mi oficina.

Eran tiempos complejos, pero no he llegado acá para recordar aquello, salvo para decir que ese fue el acicate que puso en movimiento la idea de si era posible consolidar la institución en Chile o tener sedes a lo largo de Latinoamérica. Este debate terminó abruptamente y la necesidad, en consecuencia, de

1 Este texto es la transcripción del discurso de Ricardo Lagos en el acto en el que FLACSO le otorgó el doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales. La edición y revisión final fue realizada por Edison Hurtado, editor de ICONOS. El título y los subtítulos son añadidos.

abrir sedes a lo largo de nuestra América no fue resultado de un debate intelectual altamente conversado en la academia. Fue, más bien, resultado de elementos nuevos que llegaron a interrumpir el debate académico con tareas más apremiantes como buscar sitios mejores para seguir pensando. Así fue como surgieron Flacso-Ecuador, Flacso-México y de a poco Flacso-Argentina y las demás sedes.

Treinta años después

Llego aquí después de treinta años para ver a un mundo que ha cambiado y para constatar, luego de tanto tiempo, qué pasó con aquellas certezas que entonces se afirmaban (que hoy día no existen o que difícilmente han subsistido). En esos años, en las ciencias sociales había una cierta idea de la continuidad en el desarrollo de las sociedades: había la idea de una linealidad. La tarea del investigador era, entonces, definir esa linealidad en el desarrollo de las sociedades en el mundo moderno. La idea de las etapas por las cuales transcurre cada sociedad estaba firmemente asentada y, en el debate de la época, por cierto, cuestionábamos la idea que indicaba que había cinco etapas en el crecimiento económico de una sociedad, que nos llevaban del subdesarrollo al desarrollo casi de una manera inexorable. Según esa visión, era cuestión simplemente de descubrir cuál es el elemento que dinamizaba el crecimiento, casi como el “Big-Ban” que muchos años después los astrónomos nos dijeron que era el origen del universo.

Para generar el desarrollo había que acumular e invertir. Era indispensable, pasado un cierto grado de inversión, generar el círculo virtuoso que todo economista de la época buscaba, en donde a mayor inversión, mayor crecimiento, a mayor crecimiento, mayor ahorro, y este mayor ahorro reforzaba la mayor inversión ¡Qué perfección! Y antes de todo esto, según la famosa tesis de Rosenstein-Rodan, un economista de Europa

Central, se debía dar el *Big Push*, el “gran empuje” que nos permitiría saltar del subdesarrollo al desarrollo, inexorablemente.

Otro economista aportó lo suyo y nos dijo que a medida que se inicia un proceso de desarrollo inevitablemente se acentúa la desigualdad y la distribución de ingresos, pero que no había por qué preocuparse puesto que al poco tiempo, precisamente porque continúa el desarrollo, empieza a disminuir la desigualdad como resultado de la influencia de elementos no económicos. Ese mismo economista, inspirado tal vez en algún ejemplo escandinavo, sostenía que se podía demostrar claramente que después de una etapa de desarrollo, la desigualdad inicial que se había presentado producto de la acumulación para invertir, daba paso a una política económica que apuntaba a mayores grados de igualdad. Fíjense ustedes qué mundo hermoso había, un mundo lleno de certezas. Teníamos etapas, teníamos linealidad, rompíamos en un momento la etapa del subdesarrollo, y luego íbamos a tener un mundo de mayor igualdad.

En ese clima intelectual, la sociología hizo lo suyo con el “efecto demostración”, un elemento propuesto por Rosenberry que decía que en los países subdesarrollados había una tendencia a imitar el consumo de los países más avanzados. Pero -se decía- eso era problemático ya que ese tipo de consumo afectaba infinitamente la capacidad de acumulación. Muchos años antes de Rosenberry, allá por 1920, un educador chileno también sostuvo que los chilenos éramos “civilizados para consumir y primitivos para producir”. Está claro el resultado de a dónde nos debía conducir esa ecuación...

Luego, la ciencia política también hizo lo suyo: estableció una correlación casi perfecta entre ingreso *per cápita* y nivel de democracia en una determinada sociedad. Esta estrecha correlación planteaba que si usted logra tener un mayor nivel de ingreso, consolidará la democracia casi automáticamente. Algo que, en realidad, puede ser más complejo que eso.



Lo que hoy llamamos “globalización”

Todas estas eran las certezas en torno a las cuales la ciencia social se debatía. Por cierto, los debates tenían como referencia a otras grandes categorías paradigmáticas en donde socialismo y capitalismo podían dar respuestas globales, cada uno por su cuenta. En treinta años, todo ese mundo cambió, no sólo como resultado de la caída del Muro de Berlín, sino tal vez -y esto es lo más importante- como resultado de un proceso que hoy llamamos “globalización”: un enfoque mucho mayor comparado con aquel que tenía el cientista social de hace treinta o cuarenta años atrás. En ese entonces, apenas se hacían algunas referencias a los parámetros internacionales. Algunos como Jain Silver fueron pioneros en hablar de las empresas transnacionales, pero lo hacían casi como algo adicional al elemento central de análisis que era la sociedad local o nacional.

Lo que ocurre en este período es que el cientista social empieza a cambiar el objeto de análisis: de la sociedad-país pasa a la sociedad internacional inserta en un proceso de globalización. Esta globalización empieza a plante-

arnos temas que se los debe tratar a nivel de una sociedad en particular, de un país, pero si se los quiere analizar en profundidad, habrá que hacerlo desde el punto de vista global, que es la forma que tenemos hoy de debatir, discutir y analizar, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente o una política de desarrollo sustentable.

Treinta años atrás, cuarenta años atrás, el mundo verde apenas nacía. Del tema del medio ambiente apenas había referencia. Y ni qué decir de las pandemias que hoy día cruzan de un país a otro y no reconocen fronteras ni continentes, o de aquellos otros temas mucho más complejos y difíciles respecto de la soberanía de un país. Por ejemplo, hoy se debate si un país tiene soberanía para definir las tasas de interés, pero me temo que más importantes son aquellas cifras definidas en Wall Street o en las bolsas de Europa.

La simultaneidad de la información

En la globalización, lo nuevo -a mi juicio- no tiene que ver con el hecho de que hay más comercio, ni con el hecho de que hay mayores flujos financieros que van de un país a otro. Lo importante en la globalización es la simultaneidad de la información; eso es lo que genera el cambio de época en el cual estamos inmersos. Estoy hablando de esa información accesible al instante en Internet. Yo no sé si es adecuado decir que la tarea del cientista social hoy día es tratar de comprender este cambio epocal, pero es claro que ese cambio solo sea comparable con la invención de la imprenta hace ya más de quinientos años por Gutenberg. Imaginemos el fin del medioevo y el comienzo de los tiempos modernos, y pensemos en lo que significó la invención de la imprenta: al inicio fue clara la admiración por los libros que se producían en serie. Pero luego, unos doscientos años después de los libros en serie, a alguien se le ocurre imprimir noticias diariamente en algo que

llamamos el periódico, el diario. Y ahí, no me cabe la menor duda de que el cambio para definir la necesidad de sistemas democráticos no radica en el rey, ni en la monarquía absoluta: querer que el soberano, el pueblo, tenga la capacidad de decidir, tiene que ver con la invención de la imprenta, y por su intermedio, con el periódico. Esa es la magnitud de la imprenta. ¿Qué decir de la Internet?

Con la simultaneidad de la información y el conocimiento, ¿podremos pensar en una forma de administración distinta? ¿Vamos a volver al sistema ateniense donde todos podemos definir los grandes temas del Estado porque tenemos acceso al conocimiento que deseamos a través de este instrumento? En otras palabras, recién estamos procesando la magnitud de este cambio epocal en el mundo de las ciencias sociales. Cuando hablamos de globalización, entonces, son todas esas cosas que nos aparecen en lo inmediato, pero lo más profundo e importante es cómo vamos a captar esta tarea.

Del mercado a los bienes públicos

No llego aquí a recibir esta distinción y a plantear a los científicos sociales de hoy que este es el tema de investigación más importante. Pero no me cabe duda de que no podemos pensar que el mundo volverá a ser como fue a partir de este nuevo descubrimiento, de esta antes desconocida simultaneidad de la información a nivel mundial. Junto a esto, el científico social hoy enfrenta otro desafío: el de aquellas modas o formas de entender el desarrollo de lo social a partir de un cuerpo casi estático de conocimientos.

Quiero ser claro: si pensamos en nuestros países, no es posible plantearse al mercado como el elemento que lo define todo, sin límites. No es posible reducir al mercado, la forma, el crecimiento y el desarrollo de las sociedades. Eso es reducir una sociedad a una sociedad de mercado y dejar que los dilemas económicos y

de equidad (un valor ético que está en toda sociedad humana) los resuelva “la mano invisible”. Creo que plantear eso es un reduccionismo; y espero que a estas alturas de la historia, ese reduccionismo ya se bata en retirada.

El mercado cumple muy bien su rol en muchas áreas, pero hay otras en que reducirlo todo a éste implica cimentar una sociedad que no la construyen los ciudadanos, implica tener una sociedad construida por los consumidores. Existe una pequeña-gran diferencia: consumidores somos todos, ciudadanos somos todos. La diferencia es que si bien todos consumimos, valemos distinto según nuestra capacidad de consumir. Como ciudadanos, todos tenemos el mismo valor; una cabeza, un voto. A partir de esta definición, los ciudadanos también deciden aquellos bienes que quieren que estén al alcance de todos. Los podemos denominar como bienes públicos, lo cual no quiere decir que sean gratuitos, pero sí se puede esperar que una sociedad se organice para que esos bienes estén al alcance de cada uno de sus hijos.

Por eso es que creo que un gran debate del mundo de hoy tiene que ver con la sociedad que queremos: una a imagen y semejanza del mercado o una sociedad a imagen y semejanza de lo que quieren sus ciudadanos. En esta segunda opción, el mercado cumple su rol de asignar recursos en el campo económico, y esa asignación se hace en función de la capacidad de consumo, la cual es modificada al introducir la categoría de bienes públicos. Estos bienes públicos son los que una sociedad pone al alcance de todos.

Bienes públicos internacionales

Ahora bien, si exigimos para la sociedad, al interior de nuestros países, la existencia de bienes públicos como elemento esencial para introducir equidad frente a la inequidad que por sí sola produce el mercado, entonces, ocurre que tenemos también que plantearnos

la existencia de bienes públicos a escala internacional. ¿Puede haber bienes públicos internacionales? Me parece que sí, por ejemplo, cuando se plantea un acuerdo como el de Kyoto respecto al tema del calentamiento global. Ahí se está buscando una cierta definición de cómo podemos tener bienes públicos internacionales que queremos preservar y cuidar. No quiero entrar en temas más complejos como si podemos definir la paz como un bien público al que tenemos que ayudar internacionalmente, o si cuando queremos romper la paz a través de una acción de fuerza, eso se trata de un bien público o no, y de quién lo define como tal. Pero me parece que el bien público internacional se debe definir en el ámbito de las instituciones multilaterales que el ser humano ha definido. Es un tema de alta complejidad que aquí lo dejo planteado.

El ser humano no olvida

Por otro lado, también existe otro reduccionismo, que tantas veces lo hemos escuchado, y que nos dice: “si quieren pasar de un sistema autoritario a un sistema democrático, la única forma de hacerlo es olvidar para lograr la reconciliación”. Ese reduccionismo que nos propone dejar ciertas cosas en el pasado es un profundo error: el ser humano no olvida, es más, el ser humano no quiere olvidar para no cometer los errores que llevaron a tanto abuso. Es por eso que yo abogo por hacer los esfuerzos necesarios para no olvidar, sin venganza, sin odio, pero con la convicción de que no queremos repetir esos horrores.

Excúsenme que en este momento hable como presidente de un país que dio un paso tremendamente complejo y difícil: pese a que habíamos avanzado en algunos temas, aún quedaba un ámbito pendiente: el de aquellos que habían sufrido la cárcel y la tortura. Y es claro que, en virtud de ese reduccionismo, era mejor hacer como en otras partes y no mirar

para atrás. Sin embargo, en un momento nos atrevimos a mirar y señalar al país la magnitud de hasta donde la sociedad chilena cayó, en el sentido de caída, y hasta donde calló, en el sentido de callar. Por eso es importante recordar que luego de que se conformó una comisión presidencial con altísima autoridad moral, 35.000 chilenos y chilenas declararon en torno a las experiencias de cárcel y tortura. Al recibir este doctorado en esta institución yo quiero enfatizar en que lo que se hizo no fue para resaltar la división que nos condujo a la barbarie, sino precisamente para entender que no podemos generar divisiones que lleguen a semejantes límites, a nombre de los cuales se justificó esa barbarie. Terminamos el siglo veinte con una de tantas barbaries cometidas en nombre de otras tantas “verdades” que algunos creían tener. Esperemos que en este siglo veintiuno seamos un poco más humildes respecto de nuestras verdades, y tengamos claro que ninguna verdad justifica la magnitud de hasta donde ha caído a veces el ser humano.

Las tareas

Permítanme que pase aquí a un tema que tiene que ver con las tareas de las ciencias sociales, con aquellas tareas que se presentan cuando aplicamos distintas perspectivas de análisis para entender los cambios que suceden en nuestras sociedades, con cómo somos capaces de entender una institucionalidad democrática y consolidarla... En ese ámbito, aún tenemos -por ejemplo- una larga tarea en torno a repensar el rol del partido político. Hace treinta años, el partido político era la vía de comunicación entre el pueblo y su dirigencia; no era una forma más entre otras, era la única. El partido era la correa de transmisión, el que tenía la vinculación directa con lo que allí ocurría. Era a través del partido que podíamos procesar todas las demandas de la sociedad, y el partido debía tener respuesta ante todas y cada



una de las demandas de la sociedad. Pero lentamente empezamos a ver que hoy el partido no es todo. Hay ciudadanos que se interesan en la tarea pública, pero no están seguros de poder canalizarlo todo a través del partido. Ahora hay movimientos ambientales, hay movimientos que discuten cómo organizamos a la ciudad, a los barrios, a las juntas de vecinos, hay movimientos que nos confrontan a ver si somos capaces de aceptar la diversidad sexual, hay movimientos que nos plantean si somos capaces de terminar con la exclusión (allí están, por ejemplo, los movimientos indígenas y los movimientos feministas)... Todos luchan desde su propia óptica, y no necesariamente desde el partido. Eso no quiere decir que un partido no tome definiciones frente a estos temas, pero no es lo único.

Este es un tema clave a ser entendido cuando nos planteamos hoy en día que queremos remozar la institucionalidad democrática y la ciudadanía. Por ejemplo, intente usted hacer una obra que produzca un impacto grande en una ciudad (una gran carretera, la canalización de un río, un metro, un nuevo aeropuerto): le aseguro que tendrá a un grupo de ciudadanos que se paran y dicen *no*. Nadie

les dio carta de ciudadanía para el *no*, pero su actuación nos parece absolutamente legítima. Ese *no*, no se expresa a través del partido. En ese sentido, lo que tenemos son partidos con características distintas a las de la población, partidos de ciudadanos que tienen que interpretar a todos. Hoy en día nadie debería tener un partido en donde una elite ilustrada se asuma como aquella que sabe mejor que el resto a dónde los va a conducir.

Lo que les quiero decir con todo esto es que acá tenemos un conjunto de tareas y temas para repensar desde las ciencias sociales, ya sea desde el punto de vista de una sociedad global, o a nivel de un país o una región. Y todo ese conjunto de temas se enfrentan a varios reduccionismos que se deben combatir por el simple hecho de la vida es más compleja de lo éstos suponen. En esa medida, también hay que plantearse si somos o no capaces de acercar la democracia al ciudadano participante a través de estas nuevas institucionalidades, a través de su participación en la definición de las políticas públicas. Y uno puede apostar a que sí, a que a través de políticas públicas definidas participativamente se puede redondear la ecuación de tener crecimiento con equidad. Eso es posible ya que a diferencia de hace treinta años, hoy no tenemos un nuevo paradigma. Lo que tenemos, a lo sumo, son atisbos de ciertas experiencias que queremos señalar.

En ese sentido, Manuel Castells, el distinguido sociólogo, acaba de publicar recientemente un pequeño libro, en donde hace una comparación entre el Chile de Pinochet y el Chile pos 1990, el de la restauración democrática. Castells establece una suerte de paradigma entre uno y otro "modelo", como él los llama. Así, habla de la cultura excluyente versus la incluyente, de la cultura que maneja normas monolíticas frente a la cultura de la diversidad y, por cierto, de la cultura del mercado versus la cultura de aquellas políticas públicas definidas por ciudadanos que se

orientan a obtener mayor equidad, lo que de otra manera parece un objetivo esquivo.

Las ciencias sociales hoy

Me pregunto, por tanto, ¿esta módica ciencia social está en condiciones de poder contribuir, a través de distintos modelos (teórico y analíticos), a desentrañar los debates en los cuales nuestra América Latina se encuentra inmersa? Yo ya no hablaría de plantear paradigmas pues eso implica un deseo de poder explicar todo, y creo que hoy difícilmente podemos estar en condiciones de tener respuestas tan amplias como en el pasado. Lo que pasa es que todo esto tiene que ver con un debate de proyectos políticos. Es un debate sobre estrategias de desarrollo distintas. Y ahí yo veo un rol esencial para el cientista social de hoy. ¿Cómo puede un académico caminar por una América Latina que parece seguir y seguir buscando el alma que la una? ¿Por qué tenemos que buscar esa alma que nos une si ya tenemos un conjunto de valores que compartimos todos, como esta democracia que tanto costó conquistar, en donde hay hechos del pasado que sabemos que difícilmente volverán porque hay una democracia más madura, por ejemplo? ¿Acaso no es signo de una democracia más madura el que se pueda pensar en una dirigencia política que esté por fuera del sistema cuando éste ya no nos satisface, y de intentar otros atajos, otros caminos, independientemente de la idea que tengamos de esos atajos? ¿No es signo de una democracia más madura el que un país del tamaño de Brasil elija como presidente a un dirigente sindical que durante veinte años ejerce como líder de un sector, de un grupo, y que es capaz de dar un salto monumental para convertirse en un presidente que tiene estatura y visión nacional para todo el país? ¿No es signo de una democracia más madura el que después de tantos años un país pueda tener en la presidencia por primera vez a un

dirigente indígena? O, un ejemplo más cercano, ¿no es signo de una democracia más madura el que se pase de un presidente varón a una presidenta mujer? Allí hay una democracia más rica, que nos sorprende. Y porque nos sorprende, nos asusta. No afirmo que esta sea la panacea, pero debemos encontrar la explicación del fenómeno. Ahí está la tarea de las ciencias sociales. Si como cientistas sociales encontramos explicaciones a estas nuevas realidades, a lo mejor estamos más cerca de poder definir un común denominador desde el punto de vista de lo que somos nosotros como sociedad o como proyecto.

La academia y la política

Al recibir este doctorado, miro hacia atrás. Miro al debate de los años sesenta y setenta. Y miro también, a la par, lo que fue esa difícil construcción institucional de las ciencias sociales. Recuerdo los distintos congresos de FLACSO y de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, esa entidad que buscó crear una red de los distintos centros de investigación en ciencias sociales de toda nuestra América. Recuerdo que me tocó participar activamente en el Consejo Directivo de CLACSO entre los años 1972 y 1979, y recuerdo también esos años como un intento por institucionalizar el espacio de pensamiento, al que lo queríamos definir de tal manera que sigamos pensando con la necesaria libertad al Príncipe que toda democracia tiene. La democracia, me dijo un ex-presidente, consiste en saber hacer maletas, y es una gran verdad. El Príncipe democrático es de corta duración, aunque aquel que está en la lucha cotidiana tiende a la mirada de largo plazo.

La pasión es mala consejera para poder interpretar fenómenos. De ahí que la relación entre el académico y el político es una relación compleja. He estado en ambos lados de la mesa y estoy consciente de que el político sí necesita la pasión para poder llevar adelan-

te el proyecto en el cual cree, porque sin ese proyecto no se justifica la acción del político que pide, con tremenda inmodestia, el voto a cada uno de sus conciudadanos. Cuando no existe esa convicción del proyecto, se está muy cerca de la mayor de las corrupciones. En el fondo, es buscar el poder por los halagos del mismo y no buscar el poder por la capacidad de hacer cambios que conlleva.

En esta capacidad de cambios reconozco que tal vez la frase de Lord Keynes es cierta: “detrás de todo hombre de acción hay alguien, un economista tal vez ya difunto, del cual es esclavo respecto de sus ideas”. Y entonces, ¿qué es más importante, el académico o el hombre de acción? De hecho, hay una interacción, pero en el largo plazo, son las ideas del cientista las que permanecen y mueven al mundo. Por tanto, no es menor la responsabilidad del cientista social y no es menor su responsabilidad en un continente como este, donde hace falta más análisis, más observación, menos descalificación y más frialdad para mirar al mundo en el cual nos estamos adentrando.

Es en ese contexto que llego acá, con esta vida un tanto irregular, del que fue ayer académico y que ahora viene dejando cargos de mucha acción. Al recibir este homenaje de

FLACSO lo entiendo como el deseo de querer reconocer los esfuerzos de quince millones de chilenos para poder transitar de la dictadura a la democracia. En ese tránsito debimos darnos cuenta que ha habido otra transición más difícil que no se muestra bajo los reflectores de la televisión o ante las cámaras del momento. Ese es el tránsito de un país que quiere alcanzar los umbrales del desarrollo al cumplir 200 años de independiencia, nuestro bicentenario. Es ahí cuando nos dimos cuenta de que es en esa tarea más difícil, más ardua, más compleja (cuando las luces no son suficientes) que debemos recurrir a las ciencias sociales.

Menuda tarea que a modo de agradecimiento les dejo a ustedes cientistas sociales de esta Facultad, a la cual llevo dentro del corazón como parte de mi propia historia. Esta es la historia que vivió un latinoamericano que anduvo por esta América nuestra en uno u otro carácter, ya sea como cientista social ayer o como dirigente de un pueblo más recientemente, pero en ambas calidades, entendiendo que tenemos que esforzarnos para construir un mundo mejor.

Muchas gracias.

Quito, 24 de mayo de 2006

Amazonía contemporánea: fronteras y espacio global

Comentarios al dossier de ICONOS N° 25

Contemporary Amazonia: frontiers and global space

Víctor López A.

Antropólogo. Profesor invitado, FLACSO-Ecuador

Email: vlacev@yahoo.com

Fecha de recepción: agosto 2006

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2006

Resumen

Al igual que los *mundos amazónicos* que la componen, diversa y contradictoria -fascinante en su fragilidad a la vez que exuberante en su complejidad- la cuenca amazónica ha sido materia de la investigación social en el dossier de Iconos N° 25, referido a “La Amazonía en la agenda global”. Cuatro artículos diversos, complejos, de diferente escala, alguno que otro contradictorio, siempre en la perspectiva de la integración del espacio amazónico al Estado y al mercado global, por medio de la expansión de fronteras económicas y demográficas, nos aportan su particular comprensión y método de análisis sobre las condiciones e implicaciones de la globalización en la Amazonía del siglo XXI. Nuestro trabajo ubica estos aportes en el debate sobre una Amazonía, caracterizada por ser *contemporánea*, actual, plural, en transformación y adaptación permanente, pero también postergada, expoliada y olvidada. Identificamos en los textos sus premisas teórico-metodológicas, señalando aquellos elementos que en nuestra opinión merecen un tratamiento posterior. El *espacio global*, aparece como una categoría de análisis a ser considerada en los estudios amazónicos sobre el tema que nos ocupa.

Palabras clave: Amazonía contemporánea, espacio, fronteras, globalización, estudios amazónicos, sustentabilidad

Abstract

The article comments critically four diverse articles included in “La Amazonía en la agenda global”, the dossier of ICONOS No. 25, may 2006. We locate these contributions in the debate about an Amazonian characterized for being contemporary, present, plural, in transformation and permanent adaptation, but also delayed, spoiled and forgotten. We identify in texts its theoretical and methodological premises, and indicate those elements that in our opinion deserve a further treatment. At last, “global space” appears as an analytical category to be considered in the Amazonian studies.

Keywords: Contemporary Amazonia, Space, Frontiers, Globalization, Amazonian Studies, Sustainability

Antes de comentar los aportes y límites del dossier del número anterior de ICONOS señalaré algunas de las premisas teórico-metodológicas que me sirven de base para el análisis de los artículos. Se trata de corrientes teóricas que ponen énfasis en la contradicción –más que en la interacción- entre autoconsumo y mercantilización de la naturaleza, entre las políticas de desarrollo y el reto por la conservación de la diversidad biológica y cultural, o entre la integración impuesta desde fuera y la poco explorada dimensión de la incorporación del Estado y el mercado al espacio comunal, local y regional. Al mismo tiempo se registran avances teóricos en la comprensión de las relaciones entre soberanía y autodeterminación en los procesos de integración, el tránsito de *fronteras violentas* a *fronteras domesticadas*, o la instrumentación de la identidad cultural en contextos de cambio social y globalización. Varios de estos elementos se encuentran esbozados en los trabajos del dossier y tienen implicaciones de distinto nivel para el desarrollo de los estudios sobre globalización y ocupación del espacio en la Amazonía contemporánea.

¿Cómo se ha planteado el problema de la globalización en los estudios amazónicos?

La ocupación del espacio es una categoría de análisis fundamental en los estudios amazónicos y esto ha servido de base a los más enconados debates. Sobre la ocupación de la Amazonía *antes* del “contacto” europeo, existen dos posiciones abiertamente contradictorias. La primera plantea que en las zonas ribereñas de *várzea* o llanuras inundables, por su potencial de subsistencia¹, existieron socieda-

des sedentarias, de elevada densidad poblacional y estructura social estratificada. Su análisis se basa en las primeras crónicas españolas, relatos etnohistóricos y evidencia arqueológica de la existencia de suelo antropogénico en extensiones considerables de la Amazonía, aunque tampoco esta evidencia demuestra que éste fuera ocupado de manera permanente en el tiempo y continua en el espacio. Pero, si hay algo que demuestra fehacientemente la evidencia arqueológica, es que los territorios *protohistóricos* se encontraban bisectados por los ríos y que las fronteras se definían por las confluencias, debiendo notarse que es el límite de los recursos acuáticos provistos por la várzea el factor que definía una *frontera cultural*, entre ribereños y gente de tierra firme, algo muy similar a lo que se observa entre los grupos contemporáneos (Meggers 1997:98).

La segunda teoría, basada en estudios de ecología humana, antropológicos y arqueológicos, señala que la inestabilidad de las inundaciones, del clima y los suelos pobres de tierra firme ha provocado limitaciones en la capacidad de carga sostenible de la Amazonía, condicionando la ocupación de su espacio y la estructura socio-demográfica de sus poblaciones. Así, el patrón de asentamiento se caracterizó por una ocupación itinerante y de baja densidad, correspondiéndole una estructura social sin estratificación (aunque la sociedad se dividida en mitades), con una organización social basada en el parentesco (por afinidad y consanguíneo), con exogamia aldeana y endogamia territorial, tal como se observa entre las comunidades y pueblos de hoy (Meggers 1997:105). Sobre esta “teoría de las limitaciones medioambientales en la selva tropical”, se ha llegado a decir que se desconoce el nivel de organización social alcanzado en la región y su potencial agrícola, o que representa una versión “distorsionada y excesivamente simplificada de las culturas nativas” (Den evan 1966, citado por Meggers 1997:103).

1 Estas han sido consideradas iguales o mayores a las del río Nilo en Egipto.

Para García Jordán (1994:234), las tres estrategias fronterizas identificadas por Saignes en 1979 al estudiar la ocupación de la selva amazónica², favorecieron la colonización de tierras teóricamente “despobladas”, la extracción de sus recursos y el reclutamiento de la “mano de obra selvícola”. Como respuesta se produjeron en los grupos de selva, tanto desplazamientos hacia el Este como enfrentamientos directos, producto de los cuales se provocó una fractura en el *continuum* cultural existente desde la antigüedad entre los Andes y la Amazonía, sobre todo en el pie de monte. La evangelización de estos pueblos reemplazó a la ocupación militar, después de constarse su fracaso a mediados del siglo XVI, y se convirtió en una estrategia tanto territorial como ideológica con profunda significación en los procesos de aldeamiento o reducciones que se conformaron en las históricas “Misiones”, institución a la que en realidad le correspondería el mote de “descubridores” de la Amazonía.

La discusión continúa en los estudios sobre la ocupación de la Amazonía después del siglo XVII. Según esta perspectiva histórico-culturalista, la ocupación de la cuenca amazónica es resultado de procesos sociales –no meramente geográficos o físicos– los cuales dieron origen a cuatro “espacios” de diferente tipo: el espacio *imaginario*, que se alimentó del mito y la fantasía que impulsó la “conquista” hispano-lusitana de El Dorado, del lago sagrado de Parima, de la gran ciudad dorada de Manoa, así como para la reconquista del Paititi, la última capital del imperio inca en la selva; el espacio *físico*, que consistía en la base territorial de los pueblos indígenas; el espacio *socio-económico*, en el cual los

2 Estas tierras fueron ocupadas en distintos momentos por agricultores de tierras altas y bajas para una producción complementaria; por los imperios inca e ibérico para el control y defensa de fronteras territoriales, y por ocupantes con fines estrictamente económicas de la actualidad



Estados desarrollaron fronteras internas (demográficas y económicas, básicamente), pero que también forzó la delimitación de fronteras externas entre los Estados (coloniales y republicanos); y finalmente, un espacio *ideológico*, estructurado a partir de la evangelización y la civilización de los pobladores de la selva: salvajes, bárbaros y en el mejor de los casos semi-civilizados. (García Jordán 1996:426). En nuestra opinión, este aporte debe ser actualizado, incorporando al análisis del espacio *imaginario contemporáneo* (el mito moderno de la “naturaleza intocada” o de la Amazonía como “el pulmón del mundo”) el del espacio *real* (la creciente urbanización, extensión de cultivos “ilegales”, áreas protegidas, bases militares y guerrilla); igualmente habría que sumar el estudio del espacio *socioeconómico* (los modelos e impactos de los mega proyectos extractivos, hidrocarburos, agua o biodiversidad, pero también de las iniciativas de integración regional tipo IIRSA y OTCA), y el del espacio *ideológico* (el análisis de la ideología del desarrollo *para* la Amazonía y de la conservación de su biodi-

versidad). Desde una perspectiva endógena - desde la Amazonía- estos mismos elementos nos sugieren adecuar el análisis a un nuevo tipo de condicionante: el espacio *global*, en el que convergen y se articulan, de manera contradictoria, Estado, mercado internacional e iniciativas locales para la ocupación del espacio amazónico.

El debate en torno al *boom* del caucho en la Amazonía nos trae diversas constataciones; primero, que se trata del antecedente inmediato de mayor significación para los actuales procesos de integración y globalización (Santos 1996); segundo, que fueron dos *boom* y no uno solo, el inicial de fines del siglo XIX hasta 1913, que implicó transformaciones permanentes en toda la cuenca, y el último que estuvo asociado a la Segunda Guerra Mundial entre las décadas de 1930-40 y que tuvo honda significación para la amazonía brasileña (Schmink y Wood 1992); tercero, que el rol del cauchero se explica en medio de una cadena de endeudamiento, que partía desde las casas comerciales de Londres, para atravesar Lima, Manaus o Iquitos, hasta llegar a lo más recóndito de la selva por medio de los barcos a vapor, desde el Putumayo hasta el Manu o por el Atlántico hasta el Solimoes (Humphrey y Hugh-Jones 1996); cuarto, que las poblaciones indígenas fueron víctimas de la violencia con que se implementó el mecanismo de reclutamiento, pero que además fueron activos en su interacción con los mercaderes en el sistema de “peonaje por deuda” o *aviamento*, en relaciones que articulaban el intercambio tradicional con la economía mercantil (Hugh-Jones 1996); sexto, que la denuncia sobre las atrocidades de los caucheros peruanos que exterminaban a la fuerza de trabajo (indios y sirinzeiros) hecha por el parlamento británico (Chirif 2005), representó tanto una estrategia por globalizar la defensa de los derechos indígenas -tal vez la primera- como una estrategia comercial para sacar del mercado el cau-

cho amazónico y colocar la materia prima proveniente de sus plantaciones en el sudeste asiático (Chirif y Mora 1980, Gray 2005).

El relativo consenso sobre la relación entre violencia y ocupación del espacio para el control de la fuerza de trabajo local y recursos naturales, definió la teoría de la *frontera violenta* que ha guiado a la inmensa mayoría de estudios en la ocupación contemporánea de la Amazonía desde los años 70, y que bien puede ser catalogada según la figura de Malbury Lewis como una “segunda conquista”³. Sin embargo, actualmente se constata que la frontera violenta está dejando paso a una de nuevo signo, la *frontera domesticada*, que analiza el desarrollo endógeno de la sociedad y economía amazónicas -de sus instituciones y autoridad, la expansión de la democracia y los derechos humanos - puesto que según sus autores, la violencia no puede ser un factor permanente de estructuración social (Barclay y Santos 2002). A esta nueva perspectiva se suman otros estudios sobre la demanda indígena de mercancías y servicios “modernos”, y su relación con el monopolio externo en la provisión de bienes y para la resolución de conflictos (Santos 1996, Hugh-Jones 1996, López 2003).

Otro es el debate que nos plantean los estudios amazónicos sobre el desarrollo y la globalización en la cuenca amazónica, enfocados en las políticas públicas (aunque también de empresas transnacionales privadas) y las consecuencias de su implementación, que en el dossier de ICONOS son presentados como impactos de la “modernidad tardía” sobre el ambiente amazónico. Entre estos estudios incluimos el aporte crítico de la ecología política y más recientemente de la economía ecológica. En términos muy generales, desde esta perspectiva, se analizan los modelos económicos de enclave y escala, definidos

3 Ver al respecto el artículo de Fontaine que abre el dossier que comentamos.

en políticas nacionales para la Amazonía, los impactos derivados de su implementación, encontrando un debate que contrapone la crítica de quienes denuncian un tipo de uso que degrada, deteriora o privatiza el espacio amazónico, frente a otros que consideran existe una evolución en estos modelos, abriendo posibilidades al manejo adecuado de la biodiversidad. Este debate se generó a partir de las denuncias hechas en los estudios de Becker a inicios 1980 y Hecht sobre las políticas de la dictadura militar para incorporar la Amazonía al Brasil, sus consecuencias en la degradación ambiental y el conflicto entre campesinos, indígenas y latifundistas, en su objetivo por desactivar presiones internas en otras regiones del país y responder a la demanda de la economía internacional por materias primas (Schmink y Wood 1992). Para Hecht (1985), el reemplazo del bosque por una ganadería y latifundios poco productivos, correspondió a una salida definida en términos políticos e ideológicos por el gobierno militar brasileño desde 1964, para hacer de la tierra el patrón de acumulación (vía subsidios o especulación) en contextos de economías inflacionarias, según dos fórmulas que se afianzaron desde entonces como políticas pan-amazónicas: “tierra sin hombres para hombres sin tierra” (colonización) e “integrar para no entregar” (fronteras con soberanía). Desde entonces, cada vez más autores han abordado con mayor o menor acierto este tema, entre los que cabe resaltar por su magnífico aporte a Bunker, Schmink y Wood en Brasil, Barclay y Santos en Perú, Domínguez en Colombia o Taylor y Narváez en Ecuador. Algo que llama nuestra atención en el dossier, es que con rara frecuencia se citan estos aportes. Al parecer, la conservación actualmente es asumida más como una consecuencia de la “globalización con matices verdes”, que como una conclusión de un debate político sobre gobierno y geopolítica en el espacio amazónico.

Dourojeanni (1998:187), por su parte, plantea que la supuesta dicotomía entre “desarrollar” y “proteger” a la Amazonía no es tal, puesto que después de constatarse una evolución –claramente lineal- en lógica de su integración al Estado nacional (desde la conquista-ocupación-explotación hasta el desarrollo sustentable, pasando por el desarrollismo y el ecodesarrollo) existen posibilidades concretas de conjugar los factores del desarrollo (economía, justicia social y ecología) de una manera sustentable, sobre todo en un contexto en que se observa la articulación entre globalización y afirmación local para la definición de un “nuevo proyecto amazónico”, que use intensivamente el espacio intervenido y defina una “moratoria” en el uso de la selva en pie. Esta conclusión la comparten autores como Brack Egg (1996) desde el Perú, o la misma Bertha Becker desde el Brasil, para quien el desafío actual para la Amazonía se resuelve con una “revolución científico-tecnológica”, que utilice la biodiversidad con inclusión social de las poblaciones locales y permita la generación de valor agregado con proyectos de economía de escala (Becker 2004). Así, por medio de valorizar económicamente los recursos de la diversidad biológica (estrategia definida en Brasil como política federal desde 1942) se podrá combatir de manera efectiva su uso depredatorio, sea por parte del latifundista, la agroindustria o por el productor de soya y el minero artesanal o *garimpeiro*, concluye la autora. Sin embargo, podría afirmarse que la sustentabilidad está todavía por consolidarse en la Amazonía, sobre todo por un modelo económico que prevalece y se basa en el beneficio económico máximo posible, aplicado sin consideraciones democráticas, tanto como ambientales y culturales. (López 2003b).

Este modelo de economía extractiva de la naturaleza implica la sobreexplotación de tierras, recursos naturales y mano de obra, y se respalda en ciertas políticas públicas para el

fomento de la inversión extranjera -vía desregulación y desinstitucionalización de la autoridad ambiental, tercerización laboral, etc.- o para elevar la competitividad nacional -vía externalización de costos ambientales y sociales- en la extracción de materia prima y producción de bienes, como nos muestra uno de los mejores aportes del dossier. Por otro lado, se observa que en estudios enfocados desde la ecología “profunda” o del ecologismo “de los pobres”, la preservación de la Amazonía y pueblos que la habitan, sí plantea una dicotomía entre desarrollo y conservación, puesto que de la biodiversidad dependen la reproducción de estos pueblos, la preservación de su conocimiento sobre el manejo de los recursos y la continuidad de su cultura tradicional (AA.VV 1995, Falconí 2002). La crítica que hacen a la mercantilización de la naturaleza como la causa fundamental de deforestación y degradación del bosque amazónico por parte de actores externos, aunque en términos generales es indiscutible ha centrado su análisis en la contradicción de dos tipos diferentes de uso de la naturaleza (explotación vs. autoconsumo), dejando irresuelta su relación y articulación, la existencia de otros tipos de uso, así como el rol de la demanda local de mercancías y servicios “externos” en la construcción de salidas a los conflictos o crisis que se generan en la Amazonía. Algunos de los trabajos del dossier se hacen eco de esta contraposición de enfoques -formulada como “representaciones” de la naturaleza- y buscan hacer sugerencias de distinto nivel.

Finalmente, sobre la Amazonía indígena contemporánea es posible identificar un nuevo debate en formación. Por un lado, encontramos los estudios clásicos que retratan de manera adecuada las consecuencias de la “integración” (forzada) al Estado de los pueblos indígenas (García Jordán 1994, Schminck y Wood 1992, Muratorio 1998), y por el otro, algunos estudios sobre la relación y articulación entre economía indígenas y

mercado, y sus implicaciones en lo que se viene proponiendo como la “incorporación” del Estado y el mercado global al mundo comunitario (Hugh-Jones 1996, Santos 1996, Gray 2002, López 2003). Desde la perspectiva de la integración, las incuestionables atrocidades que provocaron el despoblamiento de la Amazonía indígena, la aculturación, adaptación y en muchos casos exterminio entre los grupos pacificados, contactados, beligerantes o en aislamiento voluntario, así como la definición de territorios “neotradicionales”, o la referida ruptura en la relación sierra-selva, terminaron por colocar a los pueblos indígenas como “minorías en situación de riesgo”.

Sin embargo, según lo sugiere Santos (1996), durante las tres “olas de cambio” identificadas (en el periodo colonial, en la expansión del capitalismo y en el reciente proceso de globalización) las poblaciones indígenas tuvieron sus propias expectativas e intereses en su relación con los agentes externos, lo que en opinión de Hugh-Jones hace que el despliegue de la economía mercantil no se interrumpa en las múltiples fronteras étnicas contemporáneas. Así, la tendencia analítica que asumía la introducción de bienes occidentales como la “manzana envenenada” (capaz de seducir al indígena para provocar su destrucción), viene siendo complementada por el estudio de la demanda indígena de bienes y su rol en la articulación con la sociedad nacional y global (por medio del turismo, las tecnologías de información y comunicación, prensa, telefonía móvil, etc).

El dossier: la Amazonía en la agenda global

Una constante en el análisis de los autores es la revisión de las consecuencias de la incorporación de la Amazonía a los diferentes Estados nacionales y al mundo globalizado.

Cada uno, a escala diferente (desde la comunal, local, nacional y regional) nos presenta un conjunto de hipótesis sobre las implicaciones de la globalización en la ocupación del espacio amazónico, con antecedentes de contexto y referencias comparativas que ayudan al lector, a entender la particularidad de varios de los elementos que buscan retratar.

Para Fontaine (2006), la tardía incorporación del espacio amazónico por parte de los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) para satisfacer la demanda del mercado internacional de materias primas y recursos energéticos (desde la segunda Mitad del siglo XX), significó un acelerado deterioro de los ambientes naturales y la explotación de su población. Aunque se distinguen ciertas diferencias con el caso de Brasil, se puede comprender que la denominada “segunda conquista”, para el caso andino-amazónico, produjo una ampliación de las fronteras extractivas y agrícolas. Así, la deforestación y la colonización son los elementos centrales en la generación de la “crisis ecológica” en la Amazonía, producto de la cual, precisamente la presión internacional de diferentes organismos y actores globales, presionan por la definición de áreas de protección de la naturaleza en el bosque amazónico.

Con la crisis ecológica, la década de los 80 trajo la “crisis de la deuda”, signada por el incumplimiento en el servicio de la deuda externa por los países andino amazónicos, periodo en el cual, además, inicio la convergencia entre “ecología y etnicidad”. Tal como lo ha planteado el autor anteriormente para los casos ecuatoriano y colombiano (Fontaine 2003) la relación entre el movimiento indígena y el ambientalista, interpeló al Estado sobre la agenda política que definió en función de intereses extractivos y apertura a la inversión extranjera. Sin embargo, un elemento importante a tomar en cuenta con mayor acuciosidad al que se ha referido el autor es el mecanismo del “canje de deuda

por conservación de la naturaleza”. Indiscutiblemente, estos elementos estuvieron presentes en las reacciones del ecologismo y los movimientos indígenas frente a la *integración* del espacio amazónico, sus recursos y poblaciones, bajo la lógica del mercado internacional. El deterioro ambiental que esto provoca debe tomarse en cuenta al momento de examinar las consecuencias de la globalización en la Amazonía, especialmente cuando en ella habitan pueblos indígenas.

La integración regional promulgada e impulsada desde Brasilia, actualiza la inserción de la Amazonía andina en el contexto de la cuenca hidrográfica del Amazonas, especialmente después de la definición de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en el año 2000 y de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), calificada por Fontaine como resultado de la “convergencia de los propios Estados” en el proceso de globalización de la Amazonía. Hay que lamentar que el autor no haga una reflexión más detallada sobre el contexto, condiciones y efectos que puede tener este nuevo tipo de convergencia para la emergente región.

Para Trinca (2006), en uno de los pocos estudios conocidos para la Amazonía norte, el espacio amazónico gana proyección internacional con los procesos de globalización, en tanto es “percibido como un hábitat natural en proceso de degradación y demandado como una inmensa reserva para la humanidad por sus invaluable recursos genéticos”. Importante es la distinción que la autora hace sobre la “revalorización” hecha por Venezuela y Brasil de sus respectivos espacios amazónicos, así como de los costos ambientales de estos procesos de integración al Estado nacional. Trinca parte de una hipótesis readeuada de los estudios histórico-culturalistas sobre la ocupación del espacio amazónico, según la cual el tipo de modernidad con que Venezuela o Brasil se acercan a ese espacio,

termina por definir —a través del tipo de tecnología utilizada— el territorio y su respectiva historia de ocupación. Así, considera que para Venezuela, la “conquista del Sur” representó un hecho en el que se conjugaron “frontera y soberanía”, fenómeno ampliamente registrado para los casos de países amazónicos confrontados en la definición de límites y el control de sus recursos y fuerza de trabajo. Sin embargo, esta acotación le conduce a una reflexión que siempre es bienvenida: la frontera debe ser concebida como un “hecho político” y no solo geográfico.

El aporte más significativo del artículo de Trinca es su análisis comparado entre la política exterior de Venezuela y la de Brasil en relación al espacio amazónico, en el cual nos trae a debate las diferencias e implicaciones de las figuras jurídicas heredadas de los gobiernos coloniales para delimitar fronteras externas: la legitimación del dominio territorial por medio del *utti possidetis de facto* portugués (el derecho del último en ocupar —de hecho la tierra) por parte de Brasil, frente al *pacta sum servanda* de los españoles (atados —obligados— por el acuerdo sobre la definición de límites) que orienta la política venezolana. La defensa de la soberanía de un territorio ocupado de manera efectiva hace de la conquista territorial un elemento de “identidad y cohesión social” nos recuerda la autora, y es este factor el que ha impulsado la política brasileña para la ocupación de su frontera norte, el desarrollo amazónico e inclusive para la protección ambiental (por presión de ambientalistas nacionales e internacionales), siempre con el objetivo de completar la apropiación física y el control del espacio amazónico.

En el caso venezolano el tradicional abandono de los territorios ubicados al sur del Orinoco hasta fines de la década de 1960, se rompe con creación la Corporación para el Desarrollo del Sur, con el emplazamiento de la industria básica nacional en el estado Bolívar y la rehabilitación de la vía Ciudad

Bolívar- Pto. Ordaz – Sta. Elena de Uaiare (concluida en 1997). Este abandono histórico se explica por el interés puesto por el Estado en combatir la presencia de misioneros ingleses, así como en controlar la explotación de oro y diamantes y ejercer soberanía en un espacio tan próximo a Boa Vista (capital de Roraima, norte de Brasil), cuyos principales motores de ocupación efectiva del espacio fueron la colonización y el *garimpo* (minas). La escasa densidad poblacional y los pocos centros poblados venezolanos en el “sur”, reflejan no sólo una estrategia de protección de su extensa frontera sur sino un real desinterés sobre esta región por parte de un país que mira hacia el “norte” (sobre todo después de su transformación en país petrolero a inicios del siglo XX).

Aunque los cambios en la ocupación del espacio son progresivos, sobre todo en miras de la integración entre el Caribe y la Zona Franca de Manaus. Este proyecto de carácter global, coloca a la frontera sureste de Venezuela en una situación inédita, aunque Trinca advierte que no se conoce con certeza “cual podría ser el costo ambiental de la decisión integracionista”, presumiendo que el incremento en la actividad minera, turística y maderera, provocara daños sobre las fuentes de agua.

Cuestionable resulta la comprensión del “problema indígena” por parte de la autora, ya que por falta de precisión en las implicaciones de la ocupación del espacio amazónico por el Estado sobre los territorios indígenas, deja la sensación de que los usos particulares que hacen estos pueblos de “este territorio”, elude el tratamiento de los derechos de ellos sobre la tierra y la cultura, entendidas como formas de organización y determinación frente al Estado y los actores globales.

En su estudio de caso sobre la producción de soya en la *Amazonía legal* de Brasil, Pasquis (2006) analiza las condiciones y estrategias que están detrás de las actuales “ventajas com-

petitivas” que han colocado a Brasil como el segundo productor mundial. La respuesta nacional a la creciente demanda del mercado internacional de la soya tiene serias implicaciones para la biodiversidad amazónica, sobre todo por la ampliación de la frontera agrícola (monocultivo y desmonte), pero en último término, esta degradación afecta a la actividad agrícola en otras regiones del Brasil (por el cambio climático y sequía). Para el autor, la globalización representa un proceso de competencia entre los países para atender las demandas del mercado internacional, representando para la Amazonía brasileña cambios en su estructura institucional, redefinición de políticas públicas e integración territorial para la explotación de recursos naturales, aunque según lo advierte con claridad el propio autor, sin consideración de sus “especificidades”. Se trataría, de acuerdo a Pasquis, de ventajas competitivas alcanzadas por tres medios: la *reducción en los costos* de producción, especialmente con la disponibilidad de extensas áreas de tierra de bajo precio; el *incremento de la productividad* con el desarrollo por parte del Estado federal de paquetes tecnológicos adecuados, la provisión de servicios públicos y la investigación científica con aporte de las agroindustrias; y, por último, la *externalización* de los costos ambientales y sociales. Esto último condujo, al mismo tiempo, a la transformación de áreas naturales en monocultivos, la deforestación asociada a las vías que facilitan la exportación de la soya y sus impactos sobre el clima (cambios en la temperatura, evotranspiración, precipitaciones y circulación atmosférica), los cambios en los ciclos del carbono (liberación de CO₂) y del agua (recarga, disponibilidad y calidad), así como la degradación de la biodiversidad, todo lo cual representa un problema muy serio para la actividad agrícola en todo el Brasil, no solo en las áreas de producción de soya.

Desde 1960 los cambios en la institucionalidad y en el uso de los territorios amazóni-

cos se relacionaron con la demanda del mercado internacional de la soya, la que actualmente ha crecido de manera sostenida por los requerimientos de China. Con el tiempo, estos cambios reflejaron el colapso de los mecanismos de regulación nacional e internacional, los cuales pasaron a manos de las agroindustrias transnacionales que actualmente controlan el mercado. Además, estos cambios implicaron la transformación de la agricultura tradicional. En la última década, la aplicación de una estrategia “liberalizadora” alteró las funciones del territorio, para favorecer las inversiones, conduciendo a la deforestación de un promedio de 17.000 km² por año en Brasil, tanto en los estados amazónicos como en áreas del “Cerrado” (sabanas y bosques secos contiguos al bosque tropical amazónico). La soya se convirtió en el motor de un proceso en el que los patrones de ocupación del espacio guardan relación con los ciclos productivos (exportación y cultivo), aunque el autor no alcanza a definir con precisión el tipo de relación, dejándonos entrever únicamente su mecanismo: “la expansión de la frontera de recursos”.

Apenas referenciados en anexos y sin ningún análisis por parte del autor, los costos sociales de la definición de estas ventajas competitivas para la soya brasileña, se refieren a la concentración de la renta, lo cual provoca conflictos (sin definir entre quienes, los motivos o sus formas), siendo el éxodo rural la expresión de un tema de fondo que no trata el autor, pero que lo enuncia: la exclusión social en la Amazonía brasileña. Así, estos elementos nos recuerdan a los ya clásicos trabajos de Bunker, Hecht, Schmink y Wood, sobre las políticas federales y las “fronteras en disputa” que caracterizaron el “desarrollismo” de las actividades agropecuarias en la Amazonía brasileña desde los años 60 y su impacto en un modelo de degradación ambiental con sustrato político-ideológico.

Con estos elementos, entre las consideraciones finales del autor cabe resaltar su preocupación por la privatización de los beneficios y la socialización de los costos (ambientales y sociales); la amenaza que representa para el complejo brasileño de la soya (y otros granos) el control del precio por las políticas proteccionistas de EEUU (subsidios a los productores) y de las transnacionales (inversiones), control que podría significar un riesgo muy elevado para la economía y el ambiente en Brasil. De allí, que las estrategias vuelven al debate sobre intensificar el uso de la Amazonía desmontada, y la moratoria para la selva amazónica en pie.

En el artículo de Neira (2006) en el dossier de ICONOS la globalización es presentada como una amenaza -tal vez la mayor- para que las poblaciones amazónicas puedan mantener sus niveles de uso de la naturaleza a largo plazo. Estos niveles se expresan en las prácticas económicas de subsistencia (autoconsumo y reciprocidad), que hacen de la naturaleza “el pan de cada día” para estas poblaciones, indicándonos que este tipo de uso no es la causa principal de la deforestación y el deterioro ambiental en la Amazonía. Para ello, reporta en su estudio algunos indicadores sobre la pérdida de bosque por la agricultura de subsistencia en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Limoncocha (RBL) en el alto Napo ecuatoriano (0,82% año), su aporte energético para la dieta de la población kichwa (yuca = 7.055 Kcal/día/persona), así como de las actividades de caza (1.014 Kcal) y pesca (4.540 Kcal/semana). Aunque de manera general -sin referencia al caso que presenta- el trabajo nos advierte sobre las constricciones que el enfoque de la biología de la conservación para el uso de los ecosistemas, según el tipo de actividades que asigna a los pueblos indígenas, según su “cultura nativa”.

En su trabajo, tampoco el autor especifica el lugar en que se realizan las actividades de

caza y pesca (dentro de la RBL, en sus áreas núcleo de bosque inundado y lagunas, o en su zona de amortiguamiento), lo cual abre una gran incógnita sobre el *conservacionismo corporativista* que critica como fenómeno del tipo “globalización con matices verdes”. Así, si los kichwa se proveen de proteína fuera de las áreas de protección, podría ser porque el deterioro ambiental en las zonas de amortiguamiento es mínimo; pero, si por el contrario la encuentran dentro de las áreas protegidas, entonces se constataría que éstas se han convertido en zonas de refugio para la vida silvestre frente a las presiones externas, parte de las cuales bien pueden ser las actividades de subsistencia kichwa. En el primer escenario, la conservación en áreas protegidas no tendría mayor sentido, mientras que en el segundo, la conservación se justificaría en áreas de protección, tanto por el refugio que representan para la vida silvestre, como por el aporte social para la subsistencia de las poblaciones locales. Sobre este dilema, desafortunadamente no se encuentra reflexión alguna en el texto, quizá por partir de la dicotomía entre subsistencia vs. mercantilización, y que tampoco se resuelve con la referencia comentada de la “conservación biocultural” como propuesta a probarse en los hechos.

Finalmente, cabe decir que el empleo que el autor hace de los conceptos culturales sobre la representación, visión y usos de la naturaleza, adolece de generalizaciones e imprecisiones que estereotipan las prácticas de manejo, entre aquellas que provienen de una genérica “cultura occidental” frente a otras, que por antonomasia pertenecen a una “cultura nativa”, fuertemente *tradicionalizada*. Estos son los aspectos sobre los que se debe avanzar en el tratamiento de la ocupación del espacio y la incorporación e integración de los pueblos indígenas en la Amazonía ecuatoriana contemporánea.

Consideraciones finales

Los estudios amazónicos sobre la ocupación del espacio, la integración y articulación entre Estado, poblaciones locales y agentes externos, nos muestra una permanente, y a veces contradictoria transformación en cuenta a sus enfoques, premisas e inclusive métodos de trabajo. Autores que 25 años atrás denunciaban el inicio de la desregulación y privatización como políticas para la Amazonía, ahora evalúan con otros elementos la contribución de los gobiernos militares de los años 60-70, sobre todo en relación a la planificación y el ejercicio de la soberanía en el espacio amazónico. Asimismo, quienes quince años atrás desarrollaron a profundidad la hipótesis de la frontera en la Amazonía brasileña y peruana –especialmente- ahora reflexionan sobre la transformación de las fronteras violentas en fronteras domesticadas, incorporando un recién llegado *enfoque de derechos* y estudios sobre la democracia a las tan afamadas “sociedades de frontera”. La conservación también es materia de evolución teórica (del enfoque de la biología de la conservación a otro más político y culturalmente adecuado), siendo aún incipiente su adecuación al espacio amazónico como se ha argumentado antes.

Desde una perspectiva endógena -desde la Amazonía- los elementos revisados de los estudios histórico-culturales para la ocupación del espacio amazónico, nos sugieren adecuar (no solo actualizar) el análisis a un nuevo tipo de espacio, producto de los anteriores procesos de ocupación de la Amazonía: *el espacio global*, en el que convergen integración y articulación entre Estado, mercado internacional e iniciativas locales para la ocupación del espacio amazónico.

Bibliografía

- Barclay, Frederica y Fernando Santos, 2002, *La frontera domesticada. Historia económica y social de Loreto, 1850 - 2000*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Becker, Bertha, 2004, “Una visión de la región amazónica sin extremismos”, en *Revista Pesquisa*, No. 102, FASEP, Brasil.
- Brack Egg, Antonio, 1996, “Amazonía: Desarrollo y Sostenibilidad”, Lima-Perú, mimeo
- Chirif, Alberto, 2004, “Introducción”, en Carlos Valcárcel, en *El Proceso del Putumayo y sus secretos inauditos*, CETA-IWGIA, Perú.
- Chirif, Alberto y Carlos Mora, 1980, “La Amazonía peruana”, en *Historia del Perú. Procesos e Instituciones*, Tomo XII, Editorial JMB, Lima.
- Falconí, Fander, 2002, *Economía y desarrollo sostenible ¿Matrimonio feliz o divorcio anunciado? El caso de Ecuador*, FLACSO, Quito.
- Fontaine, Guillaume, 2006a, “La globalización en la Amazonía: una perspectiva andina”, en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales* No. 25, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 25 – 36.
- , 2006b, “La Amazonía en la agenda global”, en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales* No. 25, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 23 – 24.
- , 2003, *El Precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica*, FLACSO-IFEA, Quito.
- Dourojeanni, Marc, 1998, “Medio siglo de desarrollo en la Amazonía: ¿existen esperanzas para su desarrollo sustentable?”, en *Revista Estudios Avanzados*, No.12 (34), Universidad de Santiago de Chile, Chile, pp. 187-218.
- García Jordan, Pilar, 1994, “El descubrimien-

- to contemporáneo de la Amazonía. La conquista continua”, en Varios autores, *El Reino de Granada y el Nuevo Mundo*, Diputación Provincial de Granada, España.
- , 1996, “La frustrada reconquista de la Amazonía andina (1742-1821)”, en Varios autores, *Las raíces de la memoria. América Latina, ayer y hoy. Quinto encuentro debate*, Universidad de Barcelona Publicaciones, España.
- Gray, Andrew, 2002, *Derechos indígenas y desarrollo. Autodeterminación en una comunidad amazónica*, IWGIA-Programa para los Pueblos de los Bosques, Lima.
- , 2005, “Introducción. Las atrocidades del Putumayo reexaminadas”, en Varios autores, *La defensa de los caucheros*, Monumenta Amazónica E2, CETA-IWGIA, Perú.
- Hecht, Susan, 1985, “Environment, development and politics: capital accumulation and the livestock sector in eastern Amazonia”, en *World Development*, Vol. 13, N° 6, McGill University, Canada, p. 663-684.
- Hugh-Jones Stephen, 1996, “Los lujos de ayer, las necesidades de mañana: el negocio y el trueque en el Noroeste de la Amazonía”, en Varios autores, *Trueque, intercambio y valor. Aproximaciones antropológicas*, Abya-Yala, Quito.
- López, Víctor, 2003a, “Nuestras necesidades no son nuestras debilidades. Gestión de conflictos socioambientales y defensa de derechos de los pueblos indígenas del centro sur de la Amazonía ecuatoriana”, Tesis FLACSO-CBC, Quito.
- , 2003b, “Los dilemas del desarrollo sin democracia en la Amazonía”, ponencia presentada al Congreso de Ecuatorianistas, LASA-FLACSO, Quito, mimeo.
- Megggers, Betty, 1997, “La Amazonía en vísperas del contacto europeo: perspectivas etnohistóricas, ecológicas y antropológicas”, en Varios autores, *Arqueología, antropología e historia en los Andes. Homenaje a María Rostworowski*, IEP-Banco Central de Reserva del Perú, Lima.
- Muratorio, Blanca, 1998, *Rucuyaya Alonso y la historia social y económica del alto Napo. 1850-1950*, Abya-Yala, Quito.
- Neira, Francisco, “Representaciones de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana: ¿subsistencia local o conversión global?”, en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales* No. 25, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 57 – 65.
- Pasquis, Richard, “Mercado y medio ambiente: el caso de la soya en la Amazonía brasileña”, en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales* No. 25, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 47 – 56.
- PUCE – PETROECUADOR, 2000, *Planificación socioambiental y compañías petroleras*, PUCE-UIDT-UPA, Quito.
- Santos, Fernando, 1996, *Globalización y cambio en la Amazonía indígena*, Abya-Yala-FLACSO, Quito.
- Schmink Marianne y Charles Wood, 1992, *Contested frontiers in Amazonia*, Columbia University Press, New York.
- Trinca, Delfina, 2006, “La ocupación de la Amazonía vista desde Venezuela”, en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales* No. 25, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 37 – 46.
- Varios autores, 1996, *Trueque, intercambio y valor. Aproximaciones antropológicas*, Abya-Yala, Quito.
- Varios autores, 1995, *Marea negra en la Amazonía*, ILDIS-FTPP-UICN-Abya Yala, Quito.

Forjando democracia: formación político-cultural y vinculaciones desde abajo¹

Forging Democracy: Political-Cultural Formation and Bottom-Up Linkages

Gerardo Otero

Departamento de Sociología y Antropología, Simon Fraser University, Canadá,
y Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Email: otero@sfu.ca

Fecha de recepción: septiembre 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2006

Resumen

En contra del globalismo de izquierda que arguye que las fuerzas de la globalización han debilitado fundamentalmente a los Estados-nación, aquí se propone que esta esfera sigue siendo crítica, tanto para la imposición de los intereses de las clases dominantes, como para la resistencia y construcción de una alternativa popular-democrática. En la medida en que las raíces de las organizaciones sean locales, podrán enfocarse en los temas ambientales y socioeconómicos específicos de sus localidades, y podrán desarrollar mecanismos de participación democráticos. La práctica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (México) se usa como ilustración de esta alternativa de política popular-democrática impulsada desde abajo.

Palabras clave: movimiento indígena, EZLN, México, ciudadanía, autonomía.

Abstract

Against left globalism, which argues that the forces of globalization have fundamentally weakened the nation-state, this paper proposes that this sphere continues to be critical both for the imposition of ruling-class interests as well as for the resistance and construction of a popular-democratic alternative. To the extent that the roots of social movement organizations are local, they will be able to focus on environmental and socioeconomic issues that are specific to their localities and will be able to develop democratic participation mechanisms. The practice of the Mexico's Zapatista National Liberation Army (EZLN) is used to illustrate this popular-democratic political alternative promoted from the bottom up.

Keywords: indigenous movement, EZLN, Mexico, citizenship, autonomy.

¹ Agradezco al Consejo para las Ciencias Sociales y las Humanidades de Canadá por el financiamiento recibido para mi investigación a través del proyecto "Neoliberal Globalism and its Challengers" dirigido por Gordon Laxer y del cual soy co-investigador. Partes de este ensayo están basadas en el primer capítulo de *México en transición: Globalismo neoliberal, Estado y sociedad civil*, coordinado por el autor (Otero 2006).

El propósito de este artículo es ofrecer una perspectiva alternativa del globalismo de izquierda. Esta posición arguye que las fuerzas de la globalización han debilitado fundamentalmente a los Estados-nación, y que el destino de la política y los movimientos sociales progresistas, democráticos y de izquierda depende ahora del grado en que cuenten con solidaridad internacional y de la conformación de una sociedad civil transnacional (véase por ejemplo Strange 1996, Bronner 2002, Beck 2000, Brysk 2000). Si bien estos autores no han tenido mucho impacto más allá de sus ámbitos académicos, los escritos de Michael Hard y Tony Negri (véanse *Imperio y Multitud*) sí han trascendido en algunos sectores activistas de los movimientos sociales.

En contra de esta postura globalista, internacionalista o “cosmopolita”, mi argumento es que el Estado-nación sigue siendo la esfera crítica para la imposición de los intereses de las clases dominantes. De la misma manera, la lucha por cualquier mejoría de las condiciones económicas, políticas y culturales de las clases, las comunidades y los grupos subalternos tiene que darse en este mismo ámbito. Si bien la solidaridad internacional siempre será bienvenida; por sí misma no tendrá un impacto sustancial en el balance de fuerzas a escala local. De hecho, el lugar principal de la política sigue siendo el ámbito local o nacional para el logro de cambios sustanciales en las oportunidades de vida de las clases, las comunidades y los grupos subalternos. Ultimadamente, estos grupos podrán afectar la intervención estatal a su favor en la medida en que se constituyan político-culturalmente en el ámbito local, en la forma de una existencia organizada con capacidad de movilización. En la medida en que las raíces de las organizaciones sean locales, en esa medida podrán enfocarse en los temas ambientales y socioeconómicos específicos de sus localidades, y podrán desarrollar mecanismos de par-

ticipación democráticos. El ejemplo que aquí propongo de esta alternativa de política popular-democrática impulsada desde abajo es la práctica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El principal desafío para lograr la formación político-cultural se puede plantear de la siguiente manera: ¿cómo pueden extraer concesiones del Estado las clases, las comunidades y los grupos subalternos sin que al hacerlo sean cooptados por el mismo, y por tanto desarticulados de las luchas popular-democráticas? Para enfrentar este desafío con éxito se requiere construir organizaciones para la lucha que sean democráticas, que tengan un liderazgo responsable, que rinda cuentas a sus bases, y la participación de éstas en la toma de decisiones.²

La primera sección introduce el enfoque aquí propuesto y ofrece algunos antecedentes históricos sobre la movilización de los campesinos indígenas, lo que constituye el referente empírico del artículo. En la segunda sección presento un esbozo de la teoría de la formación político-cultural de las clases, las comunidades y los grupos subalternos (FPC). En la tercera sección se presenta una propuesta alternativa a la perspectiva globalista respecto a cómo enfrentar el globalismo neoliberal. Llamo a esta alternativa teórica y de práctica política el enfoque de las “vinculaciones de desde abajo” o VIDA. A la luz de las herramientas teóricas de FPC y VIDA, y con el propósito de mostrar su pertinencia, la cuarta sección analiza una paradoja que se ha dado en el surgimiento y desarrollo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México: que si bien surgió como un movimiento revolucionario, nacional-popular, eventualmente se vio reducido a una lucha indígena regional. Finalmente, las con-

2 Para una mayor elaboración de estas ideas, véase mi libro *¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las clases en el México rural* (Otero 2004a).

clusiones resumen los argumentos del artículo y plantea los principales desafíos para los Estados latinoamericanos ante las luchas indígenas por la autonomía.

Enfoque y antecedentes

Como alternativa a la posición globalista, y complemento de la teoría de la formación político-cultural (FPC), aquí se propone un enfoque en torno a las vinculaciones desde abajo (VIDA). Las implicaciones de este enfoque son tanto teóricas como políticas. Desde el punto de vista teórico, VIDA nos induce a pensar en los nuevos desafíos que plantea el globalismo neoliberal, y la nueva relación entre el Estado y la sociedad civil (para una elaboración de estos conceptos, véase Otero 2004a, 2004b).

Como propuesta política, el enfoque que aquí se presenta está parcialmente de acuerdo con la que ofrece John S. Dryzek (1996) en torno a los prospectos para la profundización de la democracia en la era del capitalismo global. Para Dryzek, tales prospectos de profundización “son mejores en la sociedad civil que en las instituciones formales del gobierno, a través más que al interior de las fronteras nacionales, y en los ámbitos de la vida que no siempre se han reconocido como políticos” (1996: 3-4). Estoy de acuerdo con Dryzek respecto a los ámbitos primero y tercero que plantea para profundizar la democracia, pero sólo parcialmente con el segundo (“a través más que al interior de las fronteras nacionales”). Si bien reconozco que la escala internacional es relevante para la acción política, planteo que si la democracia ha de profundizarse, la lucha por esta meta debe estar firmemente enraizada en el nivel local-nacional. Es en este ámbito donde las clases, las comunidades y los grupos subalternos dan sus luchas y donde el Estado puede responder con políticas estatales en su favor (o no hacerlo),

donde los dirigentes pueden ser responsables y rendir cuentas directamente a sus bases (o no hacerlo), y donde se puede dar mayor (o menor) grado de participación democrática de las bases.

Las referencias empíricas que respaldan el análisis de este artículo provienen de las luchas de los campesinos indígenas en Latinoamérica y la amplia solidaridad que han recibido desde varias partes del mundo. Hemos presenciado una movilización extensa y vigorosa por parte de los campesinos indígenas de la región desde las últimas dos décadas del siglo XX, por lo cual no es coincidencia que se hayan escrito muchos libros al respecto (por ejemplo, Assies, van der Haar y Hoekema 2000, Brysk 2000, Burguete Cal y Mayor 2000, Díaz Polanco 1997, Ramos 1998, Van Cott 2000, Wearne, 1996, Yashar 2005). Sus demandas principales quedan contenidas en la noción de *autonomía* e incluye los temas de autodeterminación, tierra y territorio.

“Autonomía”, como lo ha sugerido Héctor Díaz Polanco (1997), se puede definir de dos maneras, pero sólo con una de ellas se pueden resolver satisfactoriamente las demandas indígenas. La primera es la definición liberal de autonomía, concebida como la dotación del “permiso” desde arriba por parte de las clases dominantes para que las comunidades indígenas se encarguen de sus asuntos y retengan por lo menos algo de sus costumbres. En este caso, la definición específica de autonomía depende de la discreción del antojo de las clases dominantes. La segunda definición, por contraste, implica el llegar a formular un régimen jurídico político que sea el resultado de un acuerdo mutuo, de una concertación que implique la creación de una verdadera colectividad política dentro de la sociedad nacional” (Díaz Polanco 1997:95).

Mi argumento es que las demandas por la autonomía, ultimadamente, sólo pueden satisfacerse a cabalidad en el ámbito del

Estado-nación. Para llegar a acuerdo político y un régimen de autonomía se requiere que los pueblos indios se constituyan en actores formados político-culturalmente para exigir sus derechos y reivindicaciones. Es decir, una verdadera autonomía indígena sólo puede ser el resultado de una lucha desde abajo, y no de una graciosa concesión de las clases dominantes. Además, en Latinoamérica, estas demandas sólo pueden ser acomodadas trascendiendo los débiles regímenes de democracia liberal que empezaron a surgir en los años ochenta. El desafío es transitar hacia una democracia societal, basada en la gran consolidación de la sociedad civil y la multiplicación de formas participativas en la vida política de las bases.

Si bien la discusión en este ensayo trata del campesinado indígena latinoamericano en general, se presta mayor atención al caso mexicano porque México ha visto la expresión más radical de la movilización campesino-indígena contemporánea: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o EZLN en 1994. A diferencia de la revolución de 1910-1920, que resultó en instituciones que intentaron asimilar o integrar a los pueblos indios a la cultura mestiza nacional dominante, el levantamiento de 1994 ha puesto la cuestión de los derechos y la cultura indígenas al frente del debate público.

Los pueblos indios de México constituyen del 12 al 15 por ciento de la población total, es decir, algo más que el promedio latinoamericano de 10 por ciento. El rango en porcentaje en la región va de menos de uno por ciento en Brasil hasta de 30 a 45 por ciento en Perú y Ecuador, hasta más del 60 por ciento en Guatemala y Bolivia (Van Cott 2000: 14; Yashar 2005:21). Si consideramos que la población *rural* de México es de alrededor de 25 por ciento del total, entonces podemos inferir que cerca de la mitad del campesinado mexicano mantiene una identidad indígena, dada la concentración rural de los indígenas.

La pregunta es si la emergente democracia mexicana puede acomodar las demandas de esta porción tan sustancial de su pueblo. Esta pregunta es relevante no sólo para México, sino para América Latina en general, sobre todo para los cinco países que concentran al 80 por ciento de la población indígena en la región: Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú (Van Cott 2000: 14; Yashar 2005:21).

Podríamos argüir que la manera como los estados latinoamericanos enfrenten las relaciones con sus pueblos indios determinará en gran medida el carácter y la profundidad de sus transiciones democráticas. Las clases dominantes tienen la opción de mantener a los pueblos indios como los grupos más explotados, oprimidos y excluidos políticamente, o de reconocer finalmente sus diferencias culturales y su derecho a tierra y territorio no sólo en el papel, sino en los hechos. En una medida cada vez mayor, sin embargo, esto ya no sólo es una cuestión de opciones para las clases dominantes y el Estado. El alcance del cambio dependerá de la movilización indígena desde abajo; de ahí la necesidad de un enfoque teórico y político de VIDA.

La teoría de la formación político-cultural de grupos, clases y comunidades

¿Cómo se han organizado las clases, las comunidades y los grupos subalternos de la sociedad para montar una movilización protectora contra los ataques del globalismo neoliberal? En el contexto de una democracia liberal emergente, de carácter elitista y concentrado en las elecciones, tal movilización se localiza en el ámbito de la sociedad civil. Aquí partimos de la definición del Estado democrático en su sentido extenso que propone Antonio Gramsci (1971). En vez de restringir su definición a las estructuras jurídico-políticas, Gramsci generalmente se refiere al Estado

como la suma de la “sociedad política”, o el ámbito de la dominación, más la “sociedad civil”, o el ámbito de la hegemonía. Entre menos democrático sea un Estado, más dependerá de la fuerza y la dominación. Pero entre más democrático sea, más se basará en la hegemonía o el consenso del pueblo que lo constituye. La democracia, nos dice Gramsci, “debe significar que todo ‘ciudadano’ pueda ‘gobernar’ y que la sociedad lo ubique, aunque sea de manera abstracta, en la condición general de poder lograr esto. La democracia política tiende hacia la coincidencia entre los gobernantes y los gobernados” (Gramsci 1971: 40).

Dentro de esta concepción radical de la democracia y del Estado, una pregunta central que surge entonces es la siguiente: ¿cómo pueden las clases o grupos subalternos llegar a ser hegemónicos, o por lo menos a lograr la habilidad para influenciar intervenciones o políticas estatales en su favor?

La formación político-cultural se puede definir como el proceso a través del cual los productores directos y otros grupos sociales subalternos conforman sus demandas u objetos de lucha, forman sus organizaciones para la lucha, y generan una dirigencia para representarlos ante el Estado y otras organizaciones con las cuales pueden establecer alianzas. En el contexto del globalismo neoliberal, podemos re-plantear así la pregunta anterior desde la teoría de la formación político-cultural: ¿Cómo se pueden organizar las clases, las comunidades y los grupos subalternos para hacer avanzar sus demandas sin que por ello sean cooptados por el Estado bajo el discurso hegemónico-burgués? Con estos planteamientos teóricos, volvamos ahora a la historia, tratando de establecer su relación con estos postulados.

La teoría de la formación político-cultural (FPC) contrasta con el reduccionismo clasista y economicista del marxismo tradicional (MT) y con el reduccionismo culturalista de las teorías identitarias que surgen de las teorías

de los nuevos movimientos sociales (NMS). Mientras que aquel establece una relación causal directa entre la posición de las clases en el proceso productivo y su formación política, el segundo hace abstracción de las demandas materiales y se enfoca en los procesos de formación identitaria. FPC propone una síntesis sistemática que trascienda el reduccionismo de ambos enfoques (véase Otero y Jugentz 2003 para una crítica del MT y de NMS).

En vez de enfocarse en la relación directa entre posición económica de clase y resultados políticos, FPC plantea que hay tres determinantes que median este proceso. En primer lugar, las culturas regionales forman la base desde la cual se articulan las demandas de las organizaciones de clase que surgen para la lucha. En segundo lugar, la intervención del Estado conforma los contornos iniciales del carácter de las organizaciones resultantes, que pueden ser de tres tipos: burgués-hegemónico, de oposición, o popular-democrático. Por último, los tipos de liderazgo y los modos de participación de las bases determinan las oportunidades que tiene la organización de retener su independencia frente al Estado y su autonomía frente a otras organizaciones políticas, así como las alianzas que puede construir con otros movimientos y organizaciones. Esbozemos brevemente cómo funciona cada una de estas mediaciones, ilustrando su significado en relación al ejemplo que nos ofrece la formación del campesinado indígena.

Las culturas regionales para los pueblos indios han estado en una relación muy cercana con sus relaciones de producción y sus relaciones de reproducción, o lo que he llamado “procesos estructurales de clase” (Otero 2004a). En la medida que la etnicidad de los pueblos indios ha sido una parte central de las culturas regionales en la mayor parte del centro y sur de México, su identidad como pueblos indios juega un papel clave en la conformación de las demandas o los objetos de

lucha. Por otra parte, la reproducción de la cultura indígena depende en gran medida del acceso continuo a la tierra y el control sobre un territorio determinado. Un hecho notable acerca de los pueblos indios contemporáneos es que han resistido las políticas estatales de genocidio, asimilación o integración subordinada por medio milenio, a pesar de la realidad de que siempre han ocupado posiciones subordinadas como grupo.

FPC plantea que se dan tres tipos principales de intervención del Estado, cada una de las cuales produce efectos distintos sobre las organizaciones de clase. Primero, cuando la intervención del Estado ayuda a la reproducción material de las clases subordinadas, pero la iniciativa de tales políticas proviene del propio Estado. En este caso el resultado político consiste generalmente en una organización cooptada que pierde su independencia frente al Estado y refuerza la hegemonía burguesa. En este sentido, la hegemonía estaría expresada en el número y el espesor de las organizaciones que apoyan el proyecto hegemónico que defiende el Estado. Podríamos decir que entre más organizaciones cooptadas existan, la sociedad civil más queda “confiscada” por el Estado o la sociedad política. Dentro de un régimen autoritario, esto puede significar que el ámbito de la dominación crece por encima del de la hegemonía, en la medida que la cooptación de las organizaciones se da por la fuerza más que por el convencimiento. Como mínimo, tendríamos una situación de corporativismo estatal como la que caracterizó a México la mayor parte del siglo XX (véase los capítulos de Mackinlay y Otero, Singelmann, y de la Ganza Toledo en Otero 2006).

En segundo término, y del otro lado del espectro político, se pueden dar intervenciones del Estado negativas o represivas. Estas pueden resultar en la desmovilización, por lo menos temporal, pero potencialmente también pueden reforzar la formación de organizaciones independientes y de oposición (un

ejemplo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN). En este caso, no importa tanto si tales organizaciones no alcanzan ningún éxito en sus demandas específicas en medio de las políticas represivas del Estado, pues la sola emergencia de las organizaciones se puede considerar un logro, mismo que puede resultar eventualmente en la apertura de oportunidades políticas para hacer avanzar el resto de sus demandas en luchas futuras.

Finalmente, una tercera variante se da cuando la intervención estatal es favorable para la reproducción de los productores directos como resultado de la movilización desde abajo. Esto se da cuando las organizaciones de oposición ingresan en lo que he llamado el “momento subjetivo de la lucha”, es decir, cuando se convierten en sujetos o actores políticos que construyen su propio futuro. En la medida en que este tipo de organizaciones llegue a tener éxito tanto en la conformación de la política estatal en su favor como en la retención de su independencia organizativa respecto del Estado, entonces su carácter se convierte en “popular-democrático”. Cuando un conjunto sustancial de organizaciones de este tipo establecen una alianza entre ellas, estarían en condiciones de promover un proyecto hegemónico alternativo de carácter popular-democrático.

Los tipos de dirigencia y sus correspondientes modos de participación de las bases determinan si la organización va a retener su independencia del Estado (o no) y su autonomía de otras organizaciones políticas (o no), y el carácter de las alianzas que puedan establecer con otras organizaciones de la sociedad civil. Desafortunadamente, los tipos de liderazgo en tanto mediación o “variable” dependen a su vez considerablemente de la propia intervención del Estado. Es decir, el Estado generalmente tiene la posibilidad de por lo menos intentar la cooptación o la compra de líderes de organizaciones de oposición o de las popular-democráticas. Pero la relati-

va facilidad o dificultad de que se de la cooptación dependerá enormemente del nivel de democracia y participación en la organización: entre mayor sea la democracia y la participación, menores serán las posibilidades de que los líderes comprometan la integridad de su organización; y viceversa.

Al teorizar sobre rendición de cuentas y democracia en organizaciones de amplia membresía en el México rural, Jonathan Fox (1992) argumenta que pueden escapar a la “ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michel, aún si éstas pasan por ciclos de participación altos, bajos y de vuelta altos. En este contexto, la rendición de cuentas del liderazgo, dice Fox, “se refiere a la capacidad de los miembros para hacer responsables a los líderes de sus acciones, pero también requiere un grado de autonomía de la dominación externa” (1992: 23). También se requiere el desarrollo de contrapesos internos: “Los canales múltiples y alternativos tanto para la democracia directa como representativa conforman el balance de poder entre líderes centrales y sus bases” (Fox 1992: 28).

Históricamente, se podría argumentar que han existido los siguientes tres tipos principales de dirigentes en México (Otero 2004b), planteado esto como tipos ideales:

El liderazgo “carismático-autoritario”, que se interesa primordialmente en mantener su control personal sobre la organización o el movimiento. Este tipo de liderazgo puede retener mayor independencia del Estado, especialmente cuando sus bases están movilizadas, pero tiende a no rendir cuentas ante sus bases.

Por su parte, el liderazgo de tipo “corrupto-oportunista” puede rendir mejor sus cuentas inicialmente, pero ser más susceptible de comprometer la independencia o la autonomía estratégicas de la organización. En este caso, de poco sirve la democracia inicial si el liderazgo puede sucumbir a la corrupción o la cooptación.

Finalmente, los principios y la práctica del

liderazgo “democrático-participativo” incluyen el elevar la conciencia política e ideológica de sus bases y entrenar nuevos cuadros que puedan eventualmente llenar los puestos de dirección cuando sea conveniente, ya sea porque los actuales han cumplido con sus tiempos o por causas de fuerza mayor. Aquí los modos de participación incluyen una comunicación fluida de abajo hacia arriba y viceversa, de tal forma que pueda existir plena representación real de las bases por la dirigencia. Así pues, los intereses de ésta—tanto de corto como de largo plazo—coinciden plenamente con los de las bases, y existen mecanismos de revocación de los líderes en caso de que haya desviaciones importantes entre acciones y mandato.

Sobra decir que los primeros dos tipos de dirigencia son los que se encuentran con mayor frecuencia en la historia. Con un liderazgo democrático-participativo, sin embargo, podrían existir mayores niveles de rendición de cuentas, democracia interna, así como también mayores posibilidades de reducir dramáticamente la corrupción y la cooptación. Por lo tanto, una dirigencia democrático-participativa aumenta también las probabilidades de que la organización llegue a ser de carácter popular-democrático (Otero 2004a, 2004b).

Vinculaciones desde abajo (VIDA): sociedad civil y transición democrática

LA TORMENTA... la que está... nacerá del choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene... así será... LA PROFECIA... la que está... cuando amaine la tormenta, cuando lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor

(Subcomandante Marcos, 1994)

El fin de la Guerra Fría y el colapso del socialismo de estado de la Unión Soviética representan un gran parte-aguas para las luchas progresistas y de izquierda alrededor del mundo. No sólo se trataba de un modelo de desarrollo desde arriba y autoritario, sino que el socialismo de Estado también fue desacreditado por sus fallas en el ámbito económico (Halliday 1995). Si bien la lógica de movimiento del capitalismo es la búsqueda de la ganancia, en el socialismo de Estado lo que se trataba de maximizar era el poder de la elite burocrática y su Estado (Castells 1997). La mayoría de las izquierdas del mundo habían tomado ese tipo de socialismo como el modelo a aspirar, y por tanto centraron sus fuerzas en la lucha directa por el poder estatal, una estrategia que Antonio Gramsci había cuestionado desde los años veinte para el caso de las democracias occidentales, a partir de su propia experiencia durante año y medio de estancia en los años iniciales de la Unión Soviética. Una de sus ideas centrales era que primero había que conquistar la hegemonía, o el liderazgo moral e intelectual de la sociedad, antes de aspirar al poder estatal. De lo contrario el resultado necesariamente sería un modelo de desarrollo desde arriba, autoritario, sin que necesariamente se tomaran en cuenta los designios de las masas.

Parte de las fallas económicas del socialismo de Estado ha de atribuirse a su falta de democracia en la mayoría de los niveles de la organización social, desde los talleres de ensamblaje de las fábricas hasta el Estado mismo (Burawoy 1985). Esta ausencia democrática resultó en gran medida del enfoque desde arriba de las luchas previas y de la propia organización leninista del partido. La naturaleza vanguardista y elitista de esta teoría y práctica de la organización, que contrasta claramente con la noción que Marx propuso de *praxis* y retomada por Gramsci, llevaba en sí la semilla del futuro autoritarismo estatal. El ideal leninista del “centralismo demo-

crático” se convirtió en la práctica en un centralismo claramente inclinado hacia la jerarquía y el autoritarismo, no sólo en la Unión Soviética, sino en todos los países del llamado socialismo real, o de socialismo de Estado (Medvedev 1975, Bahro 1978, Konrád y Szelenyi 1979, Eckstein 1994, Otero y O’Byryan 2002), o peor aún, como lo llamó Roger Bartra, socialismo “trágicamente existente” (1982).

Ahora bien, se da una paradoja en la reestructuración neoliberal: tal reestructuración asigna un papel decreciente para el Estado en la economía (Biersteker 1995) y contiene por tanto la posibilidad de introducir o fortalecer la toma de decisiones en forma democrático-participativa en los países semiperiféricos ricos en recursos naturales como México, Venezuela o Ecuador. Los países semiperiféricos son países que ocupan posiciones contradictorias en el sistema capitalista mundial: tienen la conciencia de su dependencia pero también los medios para contestar el globalismo neoliberal. Puesto que las fracciones dominantes del sector privado en México han estado de acuerdo y promovido el globalismo neoliberal (Valdés Ugalde 1996), su crítica y contestación ha venido desde abajo. Por ello mismo, para poder desafiar al globalismo neoliberal desde abajo se requiere la existencia, promoción y profundización de la gobernanación democrática en todos los niveles de la vida pública.

En Latinoamérica, este proceso de democratización se está dando de manera endógena en la mayoría de los niveles de la sociedad, aún cuando parecería que los requerimientos económicos de la globalización se imponen como factor exógeno, pero con la anuencia gustosa las clases dominantes y sus elites burocráticas. A la larga, la profundización de la democracia en las sociedades semiperiféricas en desarrollo, a la par con la consolidación de las sociedades civiles también en los países de capitalismo avanzado o centrales, podría

llevar a un cambio de modelo económico para el sistema mundial en su conjunto. Del globalismo neoliberal podríamos avanzar hacia algo más compatible con un modelo de desarrollo redistributivo y ambientalmente sustentable. Se trataría de trascender el nacionalismo burgués que ha prevalecido desde el siglo XIX, y que ha sido excluyente de los beneficios del desarrollo para la mayoría de la sociedad, y que ha marginado a los grupos que no encajaron o no quisieron encajar en la cultura mestiza dominante. La nueva sociedad podría semejar a un nacionalismo de nuevo tipo de carácter popular-democrático y multicultural, una suerte de “nacionalismo internacionalista”.³

Puesto que las fuerzas que imponen en Latinoamérica el globalismo neoliberal parecerían ser abrumadoras, surge la pregunta siguiente: ¿qué tipo de estrategias políticas se le podrían oponer para resistir este proyecto, y para promover uno en favor del nacionalismo popular-democrático, multicultural e internacionalista? Mi proposición es que la lucha encaminada hacia la toma directa del poder estatal (como las insurgencias en Centroamérica) han sido las menos efectivas para lograr la justicia y la democracia, aunque no hayan sido las menos comunes. Por otra parte, los movimientos popular-democráticos de las últimas tres décadas se han enfocado en la consolidación de la sociedad civil y en el cambio de la correlación de fuerzas entre sociedad civil y sociedad política, o Estado en sentido restringido. En la medida en que esto demuestre ser más efectivo para hacer avanzar los intereses de las clases, las comunidades y los grupos subalternos, entonces la mayoría de los movimientos revolucionarios de las décadas pasadas, los que se enfocaron en la toma directa del Estado, tendrían que ser ree-

valuarlos. En retrospectiva, se puede apreciar que todas las rebeliones basadas en el campesinado en Centro y Sudamérica durante los años setenta y ochenta enfocaron sus esfuerzos en la toma del Estado a la manera leninista (Brockett 1990, Castañeda 1993, Carr y Ellner 1993, Palmer 1994).

Hacia los años noventa, la combinación de estructuras de clases recalitrantes –excluyentes y represivas– y la determinación de los Estados Unidos de contener “la amenaza comunista” en su “patio trasero” selló el destino de las rebeliones y las revoluciones centroamericanas. Con algunas excepciones en Perú y Colombia, todos los movimientos guerrilleros han entrado en algún proceso de negociación con sus Estados respectivos, de tal forma que sus actividades se han confinado al actuar de los partidos políticos en la sociedad política (Rochlin 2003).

El contraste más novedoso con la tendencia leninista y vanguardista, así como también con los partidos políticos, ha estado representado por la lucha del EZLN (véase, por ejemplo, Harvey 1998, Díaz-Polanco y Sánchez 2003, Otero 2004b). A diferencia de todos los movimientos guerrilleros previos en Latinoamérica, el EZLN no ha tratado de tomar el poder estatal directamente. Más bien ha apostado a que la “sociedad civil” se organice y obligue al Estado a que se logre una solución pacífica del conflicto militar. Desde su primera declaración pública en enero de 1994, el EZLN mostró ser un actor institucional. Si bien etiquetó al entonces Presidente Carlos Salinas como ilegítimo producto de un fraude electoral, convocó no obstante a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, a que ejercieran su función y se deshicieran del usurpador. Esta primera *Declaración de la Selva Lacandona* invocaba también al Artículo 39 de la Constitución mexicana como fuente de legitimidad para la rebelión del EZLN:

3 Debo esta frase a conversaciones con mi amigo Gordon Laxer de la Universidad de Alberta en Canadá.

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno (citado en EZLN 1994).

Al ver la tremenda movilización de las organizaciones de la sociedad civil por detener el conflicto, sin embargo, el EZLN decidió cambiar su estrategia armada: de “guerra de movimientos” (confrontación militar directa) pasó a una “guerra de posiciones” (luchas en el ámbito moral y cultural a través de comunicados, marchas, encuentros, etc.). Otro cambio crítico pronto después de levantamiento se refiere a las demandas del EZLN. Aunque la vasta mayoría de sus bases son las comunidades indígenas de Chiapas, las demandas iniciales del EZLN eran demandas típicamente clasistas, y se resumían en las siguientes: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (EZLN 1994). Posteriormente, el diálogo con una multiplicidad de organizaciones indígenas llevó al EZLN a incluir la lucha por “la cultura y los derechos indígenas” como una de sus demandas centrales. Este énfasis indianista le costaría un relativo aislamiento del resto del movimiento popular-democrático (Bartra y Otero 2005).

El enfoque del EZLN en la consolidación de la sociedad civil, sin embargo, ya tenía notables precedentes en México. De hecho, muchos de los movimientos populares durante los años setenta y ochenta tenían metas distintas a las de los partidos políticos: más que desafiar al Estado directamente en la sociedad política, querían fortalecer la existencia organizativa de las clases y los grupos subalternos en la lucha por sus derechos dentro de la sociedad civil. Con esta orientación, la mayoría de los grupos defendieron celosamente su independencia del Estado y su autonomía

frente a otras organizaciones políticas, particularmente los partidos (Moguel, Botey y Hernández 1992, Foweraker y Craig 1990, Hellman 1994, Cook 1996, Otero 2004a).

La rebelión del EZLN, por tanto, ha fortalecido esta tendencia a consolidar la sociedad civil como medio para lograr la transición democrática en México. Su novedad consiste en haber agregado la “guerra de movimientos” a la “guerra de posiciones” que habían contribuido los movimientos anteriores como estrategia para la transición democrática. La esperanza del EZLN era, no obstante, que el forzar una transición democrática, cualquier ulterior “guerra de movimientos” se haría innecesaria.

Se podría argüir que la inicial transición hacia la democracia electoral del 2000 se debió primordialmente a la presión ejercida desde fuera del sistema político por parte del EZLN, lo cual forzó a los partidos políticos a pasar las suficientes reformas legislativas en el terreno electoral como para que un partido de oposición pudiese acceder a la presidencia. Antes del levantamiento zapatista los partidos de oposición, cuando mucho, contribuyeron a generar reformas electorales que modernizaban el sistema autoritario. Pero dada la abrumadora dominación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) las reformas electorales dejaban intacta la naturaleza autoritaria del sistema, en cuanto que no permitían una competencia electoral equitativa, justa y democrática (Otero 1996).

Ahora que se ha dado el inicio de una democracia electoral en México a partir de las elecciones del 2000, podría emerger una nueva relación entre los partidos y la sociedad. De una situación en que los partidos políticos sólo discuten entre ellos, ahora tendrán que enfrentar y dialogar con las organizaciones emergentes en la sociedad civil y otros electores. Si los satisfacen, los partidos políticos podrán ser reelectos; de lo contrario tendrán que ser revocados de sus cargos

mediante recursos legales que están aún por establecerse.

La paradoja del EZLN

En esta sección utilizo los planteamientos de la teoría de la formación político-cultural (FPC) esbozados arriba para entender cómo el EZLN ha desafiado las limitaciones de la emergente democracia liberal mexicana centrada en las elecciones. Esta discusión también nos servirá para resolver la paradoja del surgimiento y trayectoria del EZLN. A diferencia de la mayoría de las luchas indígenas en Latinoamérica durante el siglo XX, que consistieron en movilizaciones pacíficas (Yashar 2005), el EZLN lanzó su insurrección armada como una lucha típicamente clasista, con intenciones de articular un amplio movimiento revolucionario popular-nacional. La paradoja de su desarrollo consiste en que, pronto después del levantamiento, el EZLN adoptaría como suyas las demandas de los pueblos indios, centradas en la lucha por los derechos y la cultura indígena. El problema es que una lucha exitosa contra el neoliberalismo y por una sociedad posliberal, pluricultural y popular-democrática requiere del establecimiento de alianzas mucho más allá de las organizaciones indígenas. El desafío para las organizaciones indias se puede plantear en torno a tres dilemas.

Primero, ¿cómo pueden afirmar sus luchas por la cultura y la identidad indígena sin diluir sus demandas clasistas, primordialmente como campesinos? Segundo, puesto que los pueblos indios han sido los más marginados políticamente en las sociedades latinoamericanas, el lanzarse directamente a la política electoral y gubernamental conlleva graves riesgos. Aquí el dilema consiste en cómo entrar a la lucha política sin comprometer su independencia organizativa y evitando la cooptación de sus dirigentes. Por último, el

tercer dilema está relacionado con el segundo: si la organización ha de enfocar sus luchas en la sociedad civil o en la sociedad política o el Estado, y qué tan estrecha o ampliamente debe construir sus alianzas. Al restringirse a sus bases indígenas la organización puede asegurarse de que sus demandas identitarias no serán diluidas en luchas más amplias, pero sin alianzas más amplias corre el riesgo de aislarse y, ultimadamente, ser derrotada o ignorada por el Estado.

Al igual que la mayoría de las luchas indígenas en Latinoamérica, el EZLN ha compartido metas similares, pero los medios para conseguirlas han variado. Si bien el EZLN lanzó inicialmente una insurrección nacional-popular en 1994, con demandas económico-clasistas al centro, hacia la vuelta del siglo se había constituido en un movimiento india-nista que intentaba construir la autonomía en su región inmediata (Burguete Cal y Mayor 2000, Van der Haar 2000).

¿Cómo podemos resolver esta paradoja desde el punto de vista de la teoría de la formación político cultural (FPC)? Esbozemos una solución a esta paradoja. En México el Estado cuenta con una red de organizaciones corporativistas muy fuerte. Aún después de la derrota electoral del PRI en las elecciones presidenciales de 2000, el corporativismo sigue siendo una de las características centrales del autoritarismo estatal y del control hegemónico-burgués (véanse los capítulos de Singelmann, de Mackinlay y Otero, y de de la Garza en Otero 2006).

El EZLN se ha opuesto vehementemente a participar en la política electoral de un Estado que considera autoritario o, cuando mucho, una democracia electoral de elites. El Frente Zapatista de Liberación Nacional, auspiciado por el EZLN en 1996, se convirtió en una organización política cuyos miembros sólo actuarían en la sociedad civil, pero no buscarían el poder político en la sociedad política o el Estado en sentido restringido. El

FZLN, disuelto formalmente en junio de 2005 en la *Sexta Declaración de la Selva Lacandona* del EZLN, estuvo controlado muy de cerca por la dirigencia del EZLN y no logró atraer a un rango muy amplio del pueblo mexicano. Se concentró sobre todo en la Ciudad de México y su membresía se reducía principalmente a algunos intelectuales, académicos y estudiantes. Además, dado que los Acuerdos de San Andrés no se han legislado a cabalidad (Hernández Navarro y Vera Herrera 1998; Harvey 2002), el EZLN se ha negado a negociar con el Estado, y también a que sus bases acepten fondos de cualquier programa estatal. Este enfoque ha resguardado al EZLN de divisiones internas que podrían resultar de la corrupción o la cooptación de sus miembros o dirigentes. Pero también ha significado depender del apoyo socioeconómico de las organizaciones no gubernamentales con fondos limitados y probablemente decrecientes.

La posición resguardada del EZLN en contra de la cooptación ha resultado en su aislamiento relativo de la sociedad, sobre todo desde que pasó la Ley Indígena espuria en abril de 2001, que no reconoce la autonomía a escala federal y no satisfizo a la mayoría de los pueblos indios. Esta posición cautelosa del EZLN seguramente responde al hecho de que el Estado mexicano es un enemigo formidable. Prueba de ello la constituye el hecho de que en 2003 y 2004, una de las más grandes movilizaciones campesinas que se han dado en el México moderno en torno a “El campo no aguanta más”, o ECAM fue dividida mediante la intervención estatal en octubre de 2004. La demanda central de ECNAM era la renegociación del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero su sexta y última demanda era la resolución de los derechos y la cultura indígenas contenidos en los Acuerdos de San Andrés (véase Bartra 2006 sobre sus movilizaciones y Celis Callejas, 2005 sobre su

colapso). El EZLN, sin embargo, permaneció al margen de esta movilización.

Es irónico, entonces, que el Estado mexicano parecería haber aislado al EZLN al confinarlo a su lucha por los derechos y la cultura indígenas. Al “indianisarse”, parecería que el EZLN ha perdido de vista su lucha de clase original y su ímpetu para construir un frente pluricultural y popular-democrático amplio en contra del neoliberalismo y por la humanidad. Se habrían perdido de vista, entonces, los otros tres grandes temas de los zapatistas que estaban en la agenda de negociación con el Estado: tierra y economía, derechos de las mujeres y reforma del Estado.

Dado lo imponente de la cultura política y las instituciones corporativistas, el ECNAM se colapsó por las divisiones en su dirigencia y el inmediatismo de varias de sus organizaciones después de apenas dos años de surgimiento. Mientras tanto, el EZLN ha estado construyendo pacientemente la autonomía indígena en los hechos, a partir de sus vinculaciones desde abajo (VIDA). Acaso esta lucha paciente y a cuenta gotas es la que se requiere para debilitar al Leviatán mexicano. La lucha por la autonomía sólo se resolverá mediante un régimen político formulado por acuerdo mutuo, lo cual permitirá crear una nueva colectividad política popular-democrática, incluyente y pluricultural.

Conclusiones

En este ensayo he ofrecido el esbozo de una teoría alternativa a la posición globalista. En primer lugar, el globalismo nos induce a enfocarnos en la política identitaria, como si los procesos de formación de las identidades colectivas no tuviesen nada que ver con la base material para la reproducción social de los productores directos. Mi argumento al respecto ha sido que, en general, pero de manera especial para los campesinos indíge-

nas, una teoría sólida de la movilización y la formación político-cultural de las clases, las comunidades y los grupos subalternos debe incorporar sistemáticamente tanto las reivindicaciones materiales como las culturales para explicar sus resultados en cuanto a formación político-cultural. La teoría FPC ofrece justamente esta posibilidad al proponer tres mediaciones críticas entre los procesos estructurales y los resultados políticos.

En segundo término, la posición globalista propone que los movimientos enfoquen sus luchas en la construcción de organizaciones para una sociedad civil transnacional. Esta sugerencia es tan vieja como el llamado de Marx y Engels en el *Manifiesto comunista* de 1848: “¡Proletarios del mundo, uníos!” Pero a más de siglo y medio de que se lanzó esta consigna, debería quedar claro que si alguna clase se ha organizado en el terreno transnacional ésta ha sido la burguesía mundial, encabezada por los intereses transnacionales y financieros de los Estados Unidos. Más aún, este hecho tiene su expresión en organizaciones supra-Estatales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Si bien los movimientos anti-globalización han logrado boicotear algunas de las reuniones de estas organizaciones, difícilmente podrían llegar a igualar su fuerza y menos desarrollar mecanismos democráticos internos para el ejercicio de una dirigencia responsable, con rendición de cuentas hacia sus bases. Tampoco se vislumbra cómo podrían tomar en cuenta las organizaciones civiles transnacionales los problemas ambientales de las diversas localidades, así como los temas socioeconómicos de sus gentes.

Por lo tanto, aún si se concede que la solidaridad y la organización internacional son sin duda importantes, he argumentado que el proceso de construcción de un proyecto popular-democrático alternativo que desafíe al globalismo neoliberal debe darse a partir de

las vinculaciones desde abajo (o VIDA). Sobre la base de una organización que parta de estas vinculaciones desde abajo, sus ligas con organizaciones internacionales de solidaridad podrían ultimadamente convertirse en democráticas en una escala global. Pero en el futuro inmediato y de mediano plazo el Estado-nación sigue siendo la esfera más crítica para la acción política—tanto para la imposición de los intereses de las clases dominantes como para que las clases, las comunidades y los grupos subalternos se constituyan político-culturalmente para resistir e intentar moldear la intervención estatal en su favor. Esta perspectiva es particularmente relevante para los países dependientes en general, pero sobre todo para los que podemos llamar “semi-periféricos”: dependientes, sí, pero con los recursos y las instituciones para resistir el globalismo neoliberal a partir de una nueva hegemonía de carácter popular-democrático que construya un nacionalismo internacionalista.

En tercer lugar, a un nivel más sustantivo, las luchas de los pueblos indios latinoamericanos han tratado de desafiar las políticas homogeneizadoras del globalismo neoliberal mediante el logro de espacios económicos, políticos y culturales para el desarrollo autónomo. El éxito que puedan tener las luchas indígenas en el siglo XXI tendrá por tanto que medirse frente a esta meta: ¿Pueden reformarse los Estados latinoamericanos como para trascender el globalismo neoliberal, de tal forma que puedan aceptar y respetar la diferencia a la vez que reconozcan los derechos de los pueblos indios para la autonomía (Harvey 2002, Díaz-Polanco y Sánchez 2003, Otero y Jugenitz 2003, Van Cott 2000)?

En una época en que algunos de los más prominentes politólogos se conforman con una definición “minimalista” de la democracia, (por ejemplo, Karl 1990, Mainwaring 1992, O’Donell y Schmitter 1986), Donna

Lee Van Cott (2000) ha argumentado que, por el contrario, para enfrentar adecuadamente los problemas seculares de exclusión de los pueblos indios lo que se necesita es un tipo de democratización que se aproxime a la visión del mundo de los propios indígenas. En esta visión, la política estaría arraigada en un universo ético y cultural más amplio, en el que los ciudadanos obedezcan las leyes voluntariamente porque las aceptan, y no porque temen ser castigados. En última instancia, este tipo de cambio sólo podrá venir desde abajo, a partir de las organizaciones democráticas de la sociedad civil.

Bibliografía

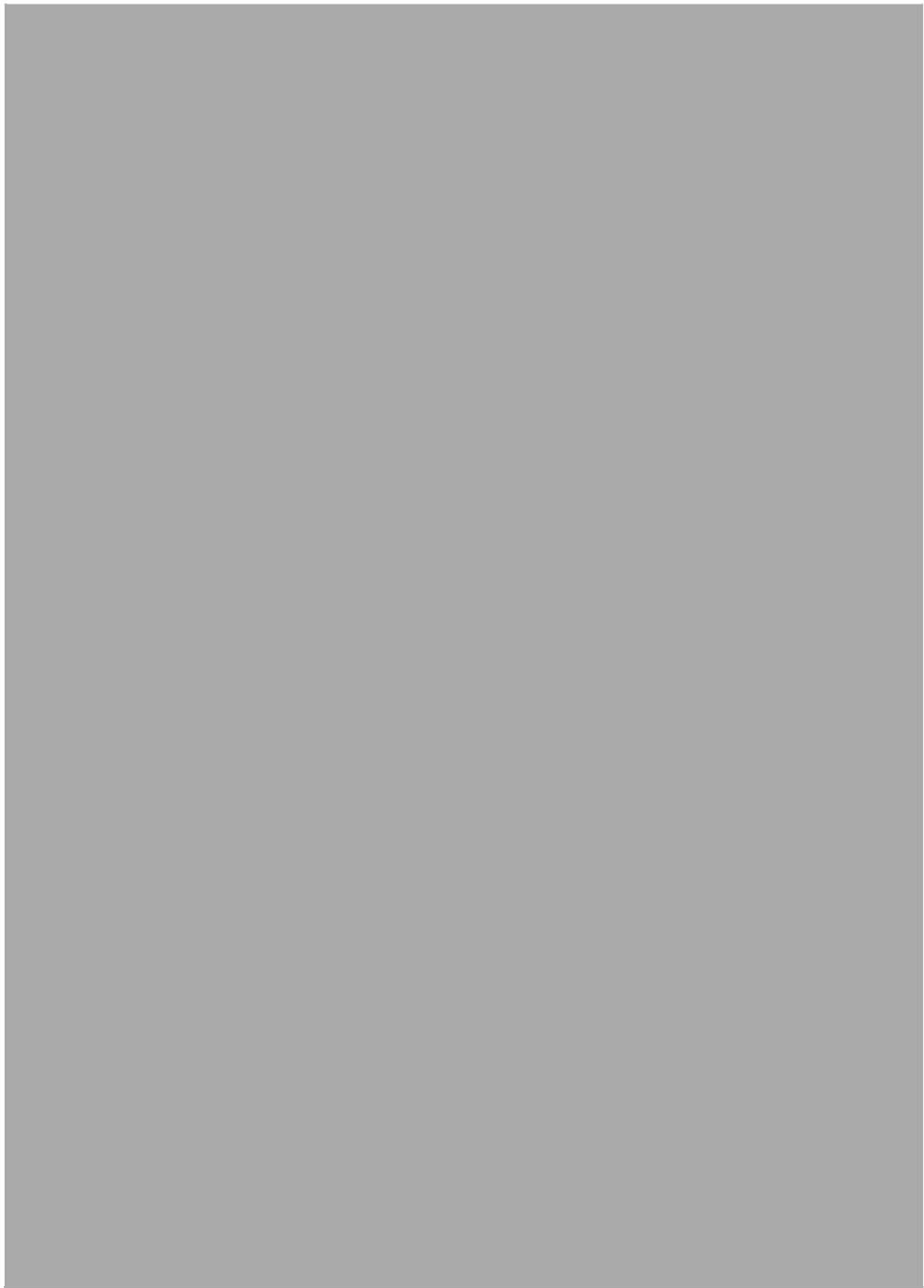
- Assies, Willem, Gemma van der Haar y André Hoekema, coordinadores, 2000, *The Challenge of Diversity: Indigenous Peoples and Reform of the State in Latin America*, Thela Thesis, Amsterdam.
- Bahro, Rudolf, 1978, *The Alternative in Eastern Europe*, New Left Books, London.
- Bartra, Roger, 1982, *Redes imaginarias del poder político*, Era, México.
- Bartra, Armando, 2006, "Milpas airadas: Hacia la autosuficiencia alimentaria y la soberanía laboral", en Gerardo Otero, coordinador, 2006, *México en transición: Globalismo neoliberal, Estado y sociedad civil*, M.A. Porrúa, México.
- Bartra, Armando y Gerardo Otero, 2005, "Indian-Peasant Movements in Mexico: The Struggle for Land, Autonomy and Democracy", en Sam Moyo and Paris Yeros, coordinadores, *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*, Zed Books, Londres y Nueva York.
- Beck, Ulrich, 2000, "The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity", en *British Journal of Sociology*, No. 51(1), Blackwell Publishing, London, p. 79-105.
- Brockett, Charles, 1990, *Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in Central America*, Revised Edition, Unwin Hyman, Boston.
- Bronner, Stephen, 2002, *Imagining the Possible: Radical Essays for Conservative Times*, Routledge, New York.
- Brysk, Allison, 2000, *From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America*, Stanford University Press, Stanford.
- Burawoy, Michael, 1985, *The Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism*, Verso, London.
- Burguete, Cal y Aracely Mayor, editores, 2000, *Indigenous Autonomy in Mexico*, International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen.
- Carr, Barry y Steve Ellner, 1993, *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika*, Westview Press, Boulder, CO.
- Castañeda, Jorge, 1993, *La Utopía Desarmada: intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina*, Joaquín Mortis, Mexico.
- Celis Callejas, Fernando, 2005, "El movimiento que no aguantó más." *Masiosare, La Jornada*. Abril 3. <http://www/jornada.unam.mx/2005/abr05/050403/mas-celis.html> (consultado: abril 10, 2005).
- Cook, Maria Lorena, 1996, *Organizing Dissent: Unions, the State, and the Democratic Teachers' Movement in Mexico*, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.
- Díaz Polanco, Héctor, 1997, *Indigenous Peoples in Latin America: The Quest for Self-Determination*, Westview Press, Boulder Colo.
- Díaz-Polanco, Héctor y Consuelo Sánchez, 2003, *México diverso: El debate por la autonomía*, Siglo XXI Editores, México.
- Dryzek, John, 1996, *Democracy in Capitalist Times: Ideals, Limits, and Struggles*,

- Oxford University Press, Nueva York y Oxford.
- Eckstein, Susan, 1994, *Back From the Future: Cuba under Castro*. Princeton, Princeton University Press, NJ.
- EZLN, 1994, "Declaración de la Selva Lacandona." Disponible en: <http://www.ezln.org/documentos/1994/199312xx.es.htm>. (Consultado en: Mayo 28, 2003).
- Foweraker, Joe y Ann Craig, 1990, *Popular Movements and Political Change in Mexico*, Lynne Rienner Publishers, Boulder y London.
- Fox, Jonathan, 1992, "Democratic Rural Development: Leadership Accountability in Regional Peasant Organizations", en *Development and Change*, No. 23, Blackwell Publishing, p. 1-36.
- Halliday, Fred, 1995, "The Third World and the End of the Cold War", en Barbara Stallings, editora, *Global Change, Regional Response*, Cambridge University Press.
- Harvey, Neil, 2002, "PPP y derechos indígenas", *La Jornada*. Diciembre 28. <http://www.jornada.unam.mx/2002/dic02/021228/013a1pol.php?origen=opinion.html> (Consultado en: Diciembre 28, 2002).
- , 1998, *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*, Duke University Press, Durham, NC.
- Hellman, Judith Adler, 1994, "Mexico and Popular Movements, Clientelism, and the process of Democratization", en *Latin American Perspectives*, No. 21(2), SAGE Publications, p. 124-142.
- Hernández Navarro, Luis y Ramón Vera Herrera, editores, 1998, *Los acuerdos de San Andrés*, Ediciones Era, México.
- Karl, Terry Lynn, 1990, "Dilemmas of Democratization in Latin America", en *Comparative Politics*, No. 23, The City University, New York, p. 1-21.
- Konrad, George e Ivan Szelenyi, 1979, *The Intellectuals on the Road to Class Power*, Harvester Press, Brighton.
- Mainwaring, Scott, 1992, "Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Issues", en Scott Mainwaring, Guillermo O'Donnell y J. Samuel Valenzuela, editores, *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective*, University of Notre Dame Press, Notre Dame.
- Medvedev, Roy, 1975, *On Socialist Democracy*, Knopf, New York.
- Moguel, Julio, Carlota Botey y Luis Hernández, editores, 1992, *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, Siglo XXI Editores y CEHAM, México.
- O'Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter, 1986, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Otero, Gerardo, coordinador, 2006, *México en transición: Globalismo neoliberal, Estado y sociedad civil*, M.A. Porrúa, México.
- , 2004a, *¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las clases en México Rural*, M.A. Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas y Simon Fraser University, México.
- , 2004b, "Global Economy, Local Politics: Indigenous Struggles, Citizenship and Democracy", en *Canadian Journal of Political Science*, No. 37(2), Canadian Political Science Association, Canada, p. 325-346.
- , editor, 1996, *Neoliberalism Revisited: Economic Restructuring and Mexico's Political Future*, Westview Press, Boulder, CO y Oxford.
- Otero, Gerardo y Janice O'Bryan, 2002, "Cuba in Transition? Civil Society's Challenge to the Castro Regime", en *Latin American Politics and Society*, No. 44(4), Lynne Rienner Publishers, Miami, pp. 29-57.

- Otero, Gerardo y Heidi Jugenitz, 2003, "Challenging National Borders from Within: The Political-Class Formation of Indigenous Peasants in Latin America", en *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, No. 40(5), p. 503-524.
- Palmer, David Scott, editor, 1994, *Shining Path of Peru*, Second Edition, St. Martin's Press, New York.
- Ramos, Alcida Rita, 1998, *Indigenism: Ethnic Politics in Brazil*, University of Wisconsin Press, Madison y London.
- Rochlin, James Francis, 2003, *Vanguard Revolutionaries in Latin America: Peru, Colombia, Mexico*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO y London.
- Stallings, Barbara, editora, 1995, *Global Change, Regional Response: The New International Context of Development*, Cambridge University Press, New York.
- Strange, Susan, 1996, *The Retreat of the State: the Diffusion of Power in the World Economy*, Cambridge University Press, New York.
- Subcomandante Marcos, 1994 [1992], "Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía." Disponible en: <http://www.ezln.org/documentos/1994/199208xx.es.htm>. (Consultado en Mayo 11, 2005).
- Valdéz Ugalde, Francisco, 1996, "The Private Sector and Political Regime Change in Mexico", en Gerardo Otero, editor, 1996, *Neoliberalism Revisited: Economic Restructuring and Mexico's Political Future*, Westview Press, Boulder, CO y Oxford.
- Van Cott, Donna Lee, 2000, *The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in Latin America*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
- Van der Haar, Gemma, 2001, *Gaining Ground: Land Reform and the Constitution of Community in the Tojolabal Highlands of Chiapas, Mexico*, Wageningen Universiteit y Rozenberg Publishers, Amsterdam.
- Wearne, Phillip, 1996, *Return of the Indian: Conquest and Revival in the Americas*, Foreword by Rigoberta Menchú, Cassell y Latin America Bureau, London.
- Yashar, Deborah, 2005, *Contesting Citizenship in Latin America The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge*, Cambridge University Press, Nueva York.

DIÁLOGO

o



Las posibilidades de la Historia: México y Ecuador

Diálogo con Manuel Miño Grijalva

Juan Fernando Regalado
Estudiante de doctorado, Flacso-Ecuador

Manuel Miño es quizá uno de los profesionales ecuatorianos con más larga trayectoria académica en México. Trabaja como profesor-investigador en El Colegio de México desde 1984 y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989. En 1995 fue nombrado miembro de la New York Academy of Sciences y recibió el Premio del Comité Mexicano de Ciencia Históricas al mejor artículo en historiografía 2002. Ha realizado numerosos estudios sobre la manufactura y el artesanado de México y América Latina, y sobre el siglo XVIII y la estructura social urbana, temas sobre los cuales ha publicado ampliamente (ver bibliografía). Manuel Miño nos ofrece aquí una versión muy madura y frontal sobre el estado de las Ciencias Sociales, que proviene de una trayectoria académica sostenida de más de 25 años. A lo largo del diálogo nos presenta un planteamiento acerca de la formación académica en México y Ecuador, y una reflexión sobre el lugar de la investigación histórica en las Ciencias Sociales y sus posibles rutas de estudio.

Quisiera que abordemos el problema de la Historia como disciplina y las condiciones para su desarrollo. En Ecuador ya habías realizado investigación histórica. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué se ha sostenido?

Desde una mirada construida sobre realidades intelectuales internacionales, el resultado sin duda es poco alentador en términos de las



Manuel Miño Grijalva

opciones y fortalezas que ofrecen las instituciones públicas o privadas que forman historiadores y, en general, profesionales de las Ciencias Sociales. La Universidad Central de Ecuador prácticamente no ha intervenido en este campo y lo que venía haciendo la Universidad Católica se paralizó: simplemente, como política, no interesa la investigación ni el conocimiento original. La Católica de Quito se ha conformado con la docencia, aunque eso -diría- ya es bastante. Sin embargo, a nivel comparativo, está muy atrás de la Católica del Perú que incorpora permanentemente profesores e investigadores, y de la Universidad Iberoamericana en México. Ambos centros educativos cuentan con un fuerte programa de publicaciones. Incluso, la Universidad Católica de Chile mantiene un importante órgano de difusión como es *Historia*, del Instituto de Historia. Esto para comparar lo comparable.

Sin duda, cabe mencionar como un logro la creación de la Universidad Andina Simón Bolívar y el fortalecimiento y consolidación de la docencia e investigación, a buen paso, de la FLACSO-Quito. Es evidente el peso que tiene la formación internacional de su planta académica para dar cabida a una estructura renovada.

¿Y el apoyo de otras instituciones a la producción en el campo de la Historia?

Debo mencionar el impulso de la Corporación Editora Nacional y de Abya-Yala en la difusión del conocimiento histórico y en general de las ciencias sociales. Sin embargo, es lamentable la crisis de la única entidad que estaba en posibilidad de ejercer un liderazgo financiero en términos del conocimiento: la gerencia de Cultura del Banco Central del Ecuador que, como otras entidades bancarias (por ejemplo, el Banco de Colombia o el Banco Nacional de México), había empezado a ser -y mermaidamente aún lo hace- un motor en la vida cultural, hasta que la política, que todo lo corrompe en Ecuador, asestó golpes mortales de los cuales posiblemente ya no se levantará nunca más. No veo, además, un crecimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos y, por lo tanto, esa esfera de organización documental -que es definitiva para el avance del conocimiento histórico- está en veremos. El Archivo Nacional debe cumplir con su función de cabeza que ejerza una sinergia en el contexto documental general.

Se visualizaba, acaso, más claramente, la función de la Universidad en la “orientación de la sociedad”...

Nuestra generación se desprendió del 68 como muchas de otros países. Como ninguna otra, nuestra generación fue producto de una reflexión sobre nuestro mundo y nuestros problemas y fue crítica en la medida en que podíamos serlo en el Ecuador de entonces. Evidentemente, tengo que aclarar de qué universidad hablamos, porque había mucha diferencia entre una Universidad Central ya masiva y politizada y una Universidad Católica selectiva: intelectual y socialmente hablando. La Central dio muy buenos ingenieros y médicos, pero nada ha hecho en el

campo de la Historia y poco en las Ciencias Sociales. Por paradójico que pareciera, en general el Estado no ha hecho nada trascendente por la formación Superior en ciencias sociales; ésta es parasitaria, marginal. De manera clara uno puede reconocer una filiación familiar y privada en la formación y educación de los actuales representantes de las Ciencias Sociales ecuatorianas. ¿Elitista? Posiblemente, ¿pero cuál ha sido el papel del Estado para que no lo fuera? Si pensamos en categorías modernas, el Estado ha vivido bajo el subsidio permanente de los grupos privados y los organismos internacionales. La U. Católica realizó la primera maestría internacional en Sociología agraria en tiempos de Hernán Malo, a la par que en el campo del pensamiento se acogían a los celebres filósofos argentinos Arturo Andrés Roig y Rodolfo Agoglia. Poco después la primera maestría internacional en Historia fue patrocinada por la FLACSO. Mucho tiempo después la FLACSO actual ha hecho hincapié en diversos tópicos de las Ciencias Sociales, además de mantener varios programas de maestría y un doctorado. Esto, que es importante; pero lo que quiero resaltar es que la universidad pública como institución en América Latina - con raras excepciones- parece haber perdido la batalla en términos del pregrado. La Universidad es del pueblo, pero no el saber ni la formación de investigadores, porque es en ese sector en donde los programas son más débiles.

En el plano de la formación profesional ¿cómo se convierte uno en *historiador*? Parece un título muy grande, muy vasto.

No se trata de conocer toda la historia. Nadie conoce *toda* la historia. Un historiador se forma, estudia y piensa sobre una realidad concreta. Pero sobre todo se forma y trabaja de manera consistente y disciplinada. Entiendo que es una respuesta general. En

términos personales el historiador se hace trabajando de la mano y codo a codo con maestros reconocidos. En mi caso hubo un guía afectivo familiar; tal vez la vocación vino por allí, por mi abuelo materno, Carlos Emilio Grijalva, alumno de González Suárez en Ibarra y colega de Jijón y Caamaño. La suerte -si cabe la mención- por lo menos en mi caso, también jugó un papel crucial, pues me puso de la mano de los más importantes historiadores americanos y de otros que fui conociendo con el tiempo, particularmente Pedro Porras Garcés, Sempat Assadourian, Clara E. Lida, Franklin Pease, María Rostworowski de Diez Canseco, entre otros, en sus niveles y saberes, y otros que, sin haber sido maestros directos, influyeron de manera cotidiana en tu idea de la historia, como Marcello Carmagnani, o Linda y Jaime Rodríguez. Gente como ellos, de una forma directa o indirecta, terminan por formar tu criterio y dar consistencia a tu rumbo. ¿Cómo se hicieron ellos historiadores?: de la misma manera, bajo la guía de otros maestros notables.

La Historia, como cualquier profesión, se la aprende haciendo...

Efectivamente, el tiempo y el ejercicio nos dan oficio. Recuerdo el título del brillante historiador mexicano recientemente fallecido, Luis González y González, *El oficio de historiar*. La historia es un oficio, pero entiéndase un oficio con método, como explicación y comprensión del pasado, como disciplina y permanente actualización, y para que esta condición se cumpla el investigador necesita un marco institucional que garantice su reproducción y crecimiento académicos. En este punto la tarea del Estado es irremplazable.

¿Cómo se presenta la relación entre docencia e investigación? ¿Es acaso una dicotomía que dificulta el trabajo?

De ninguna manera; ambas son complementarias. Lo que no han entendido las universidades y centros de educación ecuatorianos -excepto en alguna medida la FLACSO y la Simón Bolívar- es que no puede haber un docente de calidad si no investiga y transmite sus hallazgos originales. De otra manera son entes repetitivos, su papel sólo consiste en repetir una y otra vez apuntes elaborados desde hace 20 años o en usar textos de Historia o Ciencias Sociales casi siempre superados. No habrá un conocimiento original ni posibilidades de reproducirlo sin una relación estrecha y connatural entre investigación y docencia.

Pero sin duda la docencia universitaria, y la de posgrado en particular, presenta ciertos avatares...

Los avatares de la docencia, más que los métodos y los instrumentos, tienen que ver con los tiempos y sus requerimientos inmediatos y coyunturales. Es decir, el problema principal es el tipo de estudiante que está llegando a la universidad: más ignorante que antes, aunque con más instrumentos -tecnología e idiomas-, sin cultura general y con un virtual abandono de la lectura y el pensamiento. En mis tiempos -y nuestra generación lo puede demostrar- leíamos mucho más que ahora. Los profesores europeos y americanos están de acuerdo también en el hecho que es un problema generalizado. La historia y las ciencias humanas y sociales no son útiles, y su gasto es innecesario. Frente a esto, la flexibilidad de los sistemas docentes y un virtual predominio del estudiante sobre el docente, que no encuentra sustento de permanencia frente a "la paridad" o "cogobierno", hacen tambalear la seriedad académica. Los alumnos no demandan un "rol" docente determinado. Nosotros sí lo hacíamos. Ahora lo que quieren es pasar rápidamente por la facultad e insertarse en el mercado de trabajo.

Son hábiles para tejer ensayos, pero ya no leen. El resultado: el deterioro de la educación pública y la multiplicación de los institutos privados de mala calidad. A esta afluencia de la educación como negocio le llaman “modernidad”. El problema es que el mercado se ha cerrado y si no tienes postgrado o no vienes de universidades reconocidas, estás afuera. Y es entonces cuando el sistema les pasa la factura.

La universidad mexicana tiene una trayectoria en la formación de historiadores y en el desarrollo de un campo de reflexión histórica que en países como el Ecuador ha sido limitada. ¿Cómo entender esto? ¿Pasa por el hecho de que acá en México hay una tradición de apoyo a la investigación histórica?

Pienso que a pesar de ciertos problemas y obstáculos comunes a todo campo de investigación y que se superan casi siempre, el proyecto de formación de historiadores es relevante en el caso mexicano. Y en esto el sistema federal constituye una condición favorable. Cada uno de los estados soberanos que conforman la Federación necesita fortalecer su identidad y es por eso que mantienen por lo menos una licenciatura en Historia en sus universidades públicas. Lo que sí ha costado y cuesta más trabajo introducir y sostener es el sistema de postgrado; y esto debido, en parte, a la limitada disposición de profesionales y de recursos humanos calificados que puedan afrontar el reto. La importancia cultural del país, dada la fuerte presencia de su patrimonio musical, arquitectónico y arqueológico, ha sido clave para mantener una preocupación permanente por la Historia. Lo que siempre me impresionó de México y Perú es su permanente lucha por dotar a su país de un fuerte rasgo de identidad, unidad y proyecto nacional. Esto en Ecuador aún no se entiende. Pero lo que diferencia el caso mexicano del ecuatoriano es, además, el haber entendido desde hace más

de sesenta años que el Estado y el sistema universitario tiene que apoyar y auspiciar a un campo que necesita, de manera obligada, un apoyo estatal. Un aspecto fundamental es en ese sentido la fuerza que ha adquirido el Sistema Nacional de Investigadores. No sólo el Estado central sino los gobiernos locales están interesados en la Historia. ¿Y por qué se puede hacer todo esto?: fundamentalmente por la estabilidad institucional. Algo que no se da en el Ecuador, donde cambian los gobiernos cada dos años con la consecuente pérdida de continuidad en los planes y programas de trabajo.

Existen ventajas evidentes si te apoyas en un marco institucional para la investigación académica...

Por ahora esta es la condición ineludible. Ecuador debe pasar del mecenas a la inversión institucional. Este es el camino de una verdadera profesionalización. De otra manera la Historia o las Ciencias Sociales en general sólo serán un adorno de abogados, sacerdotes o de maestros. Es decir, no será un cultivo profesional, por importante que sea la labor de aquéllos.

Para el trabajo en las Ciencias Sociales está en boga adoptar la modalidad de funcionamiento de las ONGs. ¿Qué opinas de esto?

No conozco bien como funciona una ONG, pero siendo un grupo privado, independiente del Estado, su funcionamiento para el caso de las Ciencias Sociales viene a caer -de alguna forma- en la aportación voluntaria, que es otra forma del mecenazgo antiguo. Ni la Historia ni las Ciencias Sociales en su conjunto deben hacer recaer su práctica en la piedad ni pública ni privada. Por supuesto, en el mundo, con otros nombres como asociaciones o corporaciones, funcionan innumerables instituciones, porque tampoco deben ser exclusivas del sec-

tor gubernamental. Todo lo que contribuya al fortalecimiento de nuestro campo debe ser utilizado y respetado, a condición que se cumplan requisitos académicos -no políticos- básicos de la práctica profesional.

En el caso específico de El Colegio de México, ¿qué estructura curricular tiene la formación de historiadores?

Ha cambiado; no es la misma todo el tiempo. Actualmente hay una planta de 25 profesores-investigadores lo que ofrece la posibilidad de una curricula más variada que hace 20 años. Ahora podemos darnos el lujo de tener un conjunto de cursos que son obligatorios y generales, y cursos optativos de acuerdo a la especialidad de cada profesor. Esto da la oportunidad a los alumnos -becados y de tiempo completo- de escoger las materias que mejor se ajusten a sus preferencias, lo que les ayuda a perfilar su especialidad. Pero lo importante de El Colegio no sólo es su estructura curricular, también el excelente apoyo a nivel de información e infraestructura de sistemas automatizados. La idea central de El Colegio es el trabajo intenso y permanente, para lo cual al alumno no se le permite aducir que no dispuso de tal o cual libro, revista o publicación. Nuestra labor es dotar a la biblioteca de todos los materiales necesarios que usaremos en los cursos. De la misma forma, el estudiante tiene la obligación de resolver sus problemas en otros idiomas. Aquí es cuando -como te decía anteriormente- el alumno paga sus omisiones de la licenciatura.

¿Aquí en El Colegio, cuál es el lugar de la Historia? ¿Está dentro de las ciencias sociales o de las humanidades? ¿O está considerada como auxiliar de disciplinas más “duras” como la economía y sociología?

Esa ha sido una discusión que por ahora está apaciguada. Cuando Rodolfo Stavenhagen,

como Coordinador Académico General, impulsó la creación del Doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Demografía o Sociología, me comentaban que los historiadores levantaron la mano para decir que se oponían a que la Historia fuera considerada una ciencia social, por la sencilla razón de que no reconoce modelos ni formalidades que han caracterizado a las ciencias sociales. La historia -dice un sector- tiene más de humano que de “modelo”. Por mi parte, pienso que está a caballo de las ciencias sociales y las disciplinas humanas. No es posible ahora olvidar conceptos e instrumentos de la economía, la sociología o la antropología, por ejemplo, para estudios de etnohistoria, historia económica o social. Pero tampoco pienso que fenómenos del pasado deban ser reducidos a modelos matemáticos. Los modelos cuantitativos, y en general las Ciencias Sociales, le ayudan al historiador a formalizar sus propuestas, pero eso no es todo. No se trata de decir “todo sobre todo”, ni de amontonar los datos sin un esquema explicativo lógico, problematizado y propositivo. Por ello, la historia no puede ser ciencia auxiliar de la economía o la sociología, aunque éstas, por su fortalecimiento, así la quieran hacer ver. Mis amigos economistas no tienen la menor duda de que hacen historia económica del siglo XVIII cuando, en realidad, sólo hacen economía histórica contrafactual, con fuerte cuantificación y con cifras que no están sujetas a la menor crítica. Siempre disputamos, porque les digo que ven tres números de cualquier especie, origen y fiabilidad, y los toman porque calzan en su modelo. Lo demás no les importa. Finalmente, la moda ha impuesto también este predominio; pero es un predominio artificial.

Quisiera hacerte unas pocas preguntas sobre tu trabajo. ¿Qué temas trabajas actualmente en la docencia e investigación?

En esta promoción he dictado el curso “Ciudades y sociedad hispanoamericana en el Antiguo Régimen colonial”, por contradictorio que pareciera. La idea es que el alumno entienda que más allá de esa atosigante historiografía agraria, que era el centro de los procesos históricos, los ejes sobre los cuales caminaron nuestra sociedad fueron básicamente urbanos o dependientes de lo urbano. Evidentemente, yo no estudio el mundo rural y agrario, que siempre me ha parecido subordinado a los sectores externos locales e internacionales. Pero esto es otra cosa. Me interesa mostrar el peso de las estructuras productivas urbanas, el peso de la familia, pero particularmente de las redes sociales y la conformación de los núcleos de poder hispanoamericanos. Tal vez te parezca demasiado ambicioso y complicado. Y lo es. Lo que sucede es que por ahora atravieso por una inconformidad intelectual con la explicación de la historia: creo que además de necesitar explicaciones desde la Historia económica, social o política, necesitamos dar pasos intermedios que la historiografía latinoamericana no ha dado, como en su tiempo lo hicieron los europeos. Y esto es entender la explicación de fenómenos del pasado desde varias perspectivas. Por temperamento, soy enemigo de las explicaciones deterministas y únicas, de lo que definen los marcos teóricos o, lo que es peor, actualmente, los métodos cerrados y la cuantificación reducida.

¿Cuáles fueron los temas que investigaste al inicio de tu carrera?

Me inicié con temas de carácter más prehispánico y etnohistórico, tratando de explicar el mundo aborigen, original -si cabe el concepto- y la transición colonial. Trabajo ahora sobre la historia social urbana mexicana y pretendo centrarme en hacer una historia social de Quito. Creo que así podré servir mejor a una realidad por investigar, la de allá

y, la de México, que necesita parámetros diferentes, comparativos, para seguir creciendo.

Tú has realizado un muy importante esfuerzo comparativo entre realidades históricas de Ecuador y México. Por ejemplo, respecto a la producción manufacturera en el contexto de la época colonial. ¿Existen más ámbitos de posible estudio comparativo?

Claro que sí. Ahora quisiera estudiar -conjuntamente con otros colegas- los censos de la ciudad de México, Quito y Lima que se realizaron entre 1840 y 1860. También en la cabeza traigo la idea de comparar Cuzco, Riobamba y Puebla, pero sólo son ideas. En realidad son varios temas relacionados con las ciudades: el papel del Municipio, el funcionamiento de redes sociales y de poder. Y esto, por una razón: porque las sociedades mesoamericanas y andinas son estructuralmente similares, pensando en el *mundo colonial*. Aún me resisto al uso del concepto “Antiguo Régimen” aunque historiográficamente parece correcto.

Coincido contigo en que la noción de “antiguo régimen” se usa actualmente mucho, pero explica poco y de mal modo.

Esa es parte de la discusión, de los avances o de los retrocesos teóricos. Es una moda impuesta por la historiografía francesa, politizada e ideologizada -aunque sus cultores digan que no- que intenta superar el adjetivo “colonial”. En estos meses me he pasado escribiendo un artículo: “De colonia y antiguo régimen: dos conceptos en cuestión”, para tratar de entender sus atributos conceptuales y su pertinencia histórica. Creo, finalmente, que ambos pueden ser usados y hasta son complementarios, porque “colonial” tiene que ver con una relación de tipo esencialmente económica y “Antiguo Régimen” con otra de matiz administrativa y política en

el proceso largo de construcción del poder. Si por una parte es innegable el fuerte carácter corporativo, jerárquico y desigual en términos de la representación, se ha vuelto más clara la articulación y pertenencia del mundo americano a la monarquía castellana como un solo cuerpo institucional: la relación económica asimétrica subordinada a los intereses económicos de los grupos peninsulares parece incuestionable

¿Qué categorías de análisis, qué referentes conceptuales, convendría retomar de los llamados clásicos y cuáles debieran ser incorporadas para un nuevo marco explicativo? Actualmente hay mucho énfasis en el “discurso”, en los “imaginarios”, en los “actores”...

A lo que yo añadiría la perspectiva del “nuevo institucionalismo” en historia económica, o de la formación y funcionamiento de las redes mercantiles, sociales o políticas, por citar alguna más. Bueno, son temas novedosos. No me gusta descalificar fácilmente nada ni a nadie, porque creo que la buena Historia se nutre de todo, pero de todo lo que está bien construido. Mi problema nace cuando los “nuevos historiadores” descalifican un conocimiento que a mí me parece básico para optar por un modelo de historiografía: la formación de campos estructurales que son la base explicativa de cualquier nuevo paradigma. Y, sin ningún temor, digo que no puede haber una buena comprensión del nuevo institucionalismo si el investigador no tiene una solvente formación en derecho. Ahora, todos los economistas, para ser “modernos”, tienen que ser neo-institucionalistas y, por supuesto, cuantificadores “finos”, aunque no acierten con la realidad. En mi tiempo, obligatoriamente tenías que recitar los “modos de producción” para ser considerado “científico”. Yo no lo hice nunca porque me resisto a copiar modelos creados para latitudes que nada tienen que ver con la formación y complejidad

de nuestras sociedades. Ahora vivimos una época en la que han fallado los modelos cerrados y paradigmas de interpretación del mundo y la sociedad; las teorías se han pulverizado como las infalibles “metodologías científicas” siempre invocadas y nunca bien comprendidas. Hemos pasado de los fundamentalismos y dogmatismos al escepticismo y, en términos prácticos, al descrédito social. Como todo el marco explicativo anterior ha fracasado, el impulso es estudiar si el problema está en el discurso o en el imaginario; pero no puedes estudiar los llamados “imaginarios” o el discurso o los actores si antes no has profundizado en la Historia social, económica, política, o desde la antropología, la lingüística y la psicología, dependiendo la perspectiva que te interese abordar. Lo que quiero decir es que no hay que olvidar a los clásicos.

Simplificando, ¿qué es el nuevo institucionalismo sino una perspectiva hegeliana, racional, por contraposición a la social “marxista” que ahora ha sido desechada? Pero ahora la gente prefiere hablar como antes de la “nueva historia económica”, de la “nueva historia política” o de la “nueva historia cultural”. No sé en donde quedó la vieja discusión entre positivismo, marxismo, historicismo, estructuralismo, por ejemplo.

¿Qué tan pertinente es una historia económica contrafactual?

Esta es una discusión que lleva décadas y no parece haber solución. Los economistas defienden su armazón teórico y los historiadores lo menosprecian. Se ha vuelto un diálogo de sordos. Los economistas, sin embargo, han mostrado que para estudiar la evolución de la economía capitalista no se puede omitir la teoría económica; los historiadores han replicado sobre los riesgos de extrapolar conceptos e instrumentos de tiempos contemporáneos para sociedades del pasado que no se rigieron por sus “leyes”; es decir, refutan el

conocido anacronismo. De toda la extensa discusión, sin embargo, hay que retener que los economistas nos han obligado a los historiadores a formalizar nuestras propuestas y a no desechar las hipótesis contrafactuales simplemente como un método de construcción y explicación lógica de un fenómeno histórico. Pero una explicación encontrada para los procesos clásicos no siempre es aplicable a otras realidades no estudiadas. Sin duda la historia de la historiografía ha mostrado que los esquemas explicativos, los modelos teóricos, son construcciones esencialmente ahistóricas.

Tú permaneces muy al tanto de la producción académica en Ecuador. ¿Cuál es tu evaluación de las principales obras de investigación histórica? ¿Qué tendencias estarían predominando en la Historia, y en las Ciencias Sociales en conjunto?

Esta es una pregunta compleja, pero haciendo un esfuerzo de síntesis comentaré que sin duda la *Nueva Historia del Ecuador* marcó en su tiempo un hito como empresa intelectual colectiva. Me parece encomiable la continuidad del *Boletín* de la Academia Nacional de Historia y esperanzador el rumbo que van tomando las revistas *Procesos* e *Iconos*. En términos individuales, sin adentrarme en la historiografía del siglo XX, me parece que existen importantes trabajos para esclarecer la economía colonial, particularmente sobre el funcionamiento del crédito.

Como nuevos trabajos que intentan profundizar sobre la estructura urbana, estoy pensando en Terán Najas y Kingman pero, sin duda -y este es un rasgo más del poco apoyo institucional nacional- la renovación más fuerte viene de Estados Unidos y Francia. Puedo recordar ahora a Robson Tyrer, Poloní-Simard y Linda Alexander Rodríguez. Para la Historia social, y particularmente la demografía histórica y la conformación de la estructura social, a Hamerly, Mnchon,

Caillavet, Büschges, y, en el ámbito de lo político y regional, a Saint Geours, Demelas, Manguashca, Jaime Rodríguez, Tamar Herzog, por citar algunos. En sus obras se revelan diversos marcos conceptuales y metodológicos que van desde la "New Economic History" y un marcado uso de la cuantificación, hasta el análisis de grupos sociales y de sistemas políticos e institucionales con fuerte raigambre en las necesidades del análisis actual. Se ha profundizado en temas como la ciudadanía, las elecciones, la representación, en el marco más bien del nuevo institucionalismo. Se revisan viejas explicaciones como ahora lo hace Jaime Rodríguez sobre la Independencia.

Finalmente, ¿qué habría que abandonar para bien de la investigación? Me parece que más que abandonar hay que adoptar tendencias, nuevos problemas por discutir, métodos y marcos conceptuales que no se observan en la historiografía local, pero para esto es necesario que la historiografía se profesionalice; es decir, que se institucionalice en el sentido que el historiador pueda dedicarse a tiempo completo a formarse y a producir un nuevo tipo de Historia.

¿Guardan pertinencia la base empírica, el trabajo de archivo, el manejo de fuentes documentales? A esa tarea, en ocasiones, se la califica como empirismo reducido con poca potencialidad teórica...

Evidentemente, los "teóricos" -en caso de que los hubiere, hablando de la Historia- pueden descalificar la investigación de archivo. Hubo intentos "marxistas" sobre ello, por paradójico que pareciere: obviamente me refiero al marxista que creyó que sólo con leer a Marx -a su manera- estaba capacitado para entender los procesos sociales. Los geniales en esta corriente siempre acudieron al archivo. Se me viene a la memoria Hobsbawm, E.P. Thompson o Assadourian, por citar algunos. No hay investigación original si no hay inves-

tigación de primera mano. Justamente, nuevas revelaciones y nuevos documentos mostraron hasta la saciedad la debilidad de las construcciones teóricas y de los “metadiscursos”. Evidentemente tampoco me refiero a que un montón de datos de archivo pueda llamarse “historia”. Siempre he creído que el adecuado uso de conceptos, métodos y la comprensión -teórica- de procesos diferentes a los que investigamos, sirven de guía y constituyen uno de los ejes fundamentales de la investigación sobre el pasado.

Desde otra óptica, ¿qué desafíos presenta la realidad mexicana para un profesional ecuatoriano?

Bueno, la realidad mexicana es un desafío como lo es la estadounidense, española, francesa o inglesa. En términos del conocimiento histórico acá convergen todas las tendencias y sus instituciones están capacitadas para dotar de una infraestructura material y de recursos humanos calificados a quienes busquen un campo de preparación o desarrollo profesional. También, desde finales de los años treinta, con la migración de los intelectuales españoles, hasta la de los setenta, con aquella originada en el cono sur y Brasil, el fortalecimiento intelectual mexicano ha sido consistente y permanente. El desafío es que el estudiante logre formarse adecuadamente y salir del Ecuador y, mucho más, que pueda regresar. En mi caso no fue posible; no pude regresar. La carencia de apoyo institucional constituyó un obstáculo insuperable, aunque también es cierto que algunas coyunturas personales determinaron mi ausencia.

¿En qué podría contribuir una perspectiva desde Ecuador para los temas de debate en México?

Mucho más de lo que se piensa. México es un país latino -con todas sus implicaciones- y de

habla hispana, lo cual le da mucha posibilidad de penetrar en las estructuras sociales latinas. Una muestra de ello es el peso en cine y televisión y en general una clara presencia de la “cultura de masas”. Por el contrario, antes que en Ecuador, Julio Jaramillo fue un ídolo indiscutible en México, sencillamente porque si hacemos una sociología del cantante, México, la ciudad, era para los años sesenta el principal foco de atracción de una población que desertaba del campo, mientras en Ecuador era un músico destinado a las “cocinas” o las “chinas” como se les decía. La burguesía ecuatoriana empezó a apropiarse de sus canciones a partir de su muerte, a fines de los setenta y a principios de los años ochenta; pero era un Julio Jaramillo que llegaba de fuera, era importado. El crecimiento urbano ecuatoriano, la migración acentuada desde el campo, ha producido un efecto similar al que se produjo en México después de 1940.

Y si te refieres a la Historia, ese es un gran tema para ambos países, como también lo son prácticamente todos los aspectos de la vida colonial. Claro que se pueden comparar: desde la estructura social básica como la familia, la vida cotidiana, la organización social hasta la formación del Estado. Desde Ecuador se puede perfectamente abordar estos temas, pero por cuestiones de recursos o institucionales no se ha podido realizar.

Quisiera terminar insistiendo en un tema que ha sido central en esta entrevista: el tipo de relaciones que podrían ser promovidas y buscadas entre el Estado y las investigaciones en el campo de las ciencias sociales.

No existe Estado moderno ni política científica que no se sirva de lo que hacen sus científicos y universidades en cualquier campo que hablemos, a riesgo de ser un ente amorfo, atrasado e inmaturo. En Ciencias Sociales la irrupción de la Economía es indiscutible; en el campo del desarrollo urbano o

la de los estudios de población y el ambiente -por citar los más relevantes- tampoco hay duda. Debo aceptar que hay más problemas para el arte y las ciencias humanas. La Historia juega un papel de bisagra que puede articular la memoria y el pasado con las necesidades del futuro. El problema es a qué pasado nos estamos refiriendo y de qué futuro hablamos. Sólo investigando podremos determinar cómo utilizar esas reflexiones. Sólo el fortalecimiento de la investigación original, como eje articulador de la educación y la política pública, hará que los ciudadanos cambien, y que en consecuencia los políticos sean distintos; que dejemos los clanes familiares entre los que se debate actualmente, para dar paso a partidos o grupos responsables y con horizontes a programas que finalmente puedan permitir la construcción de proyectos e identidad nacionales.

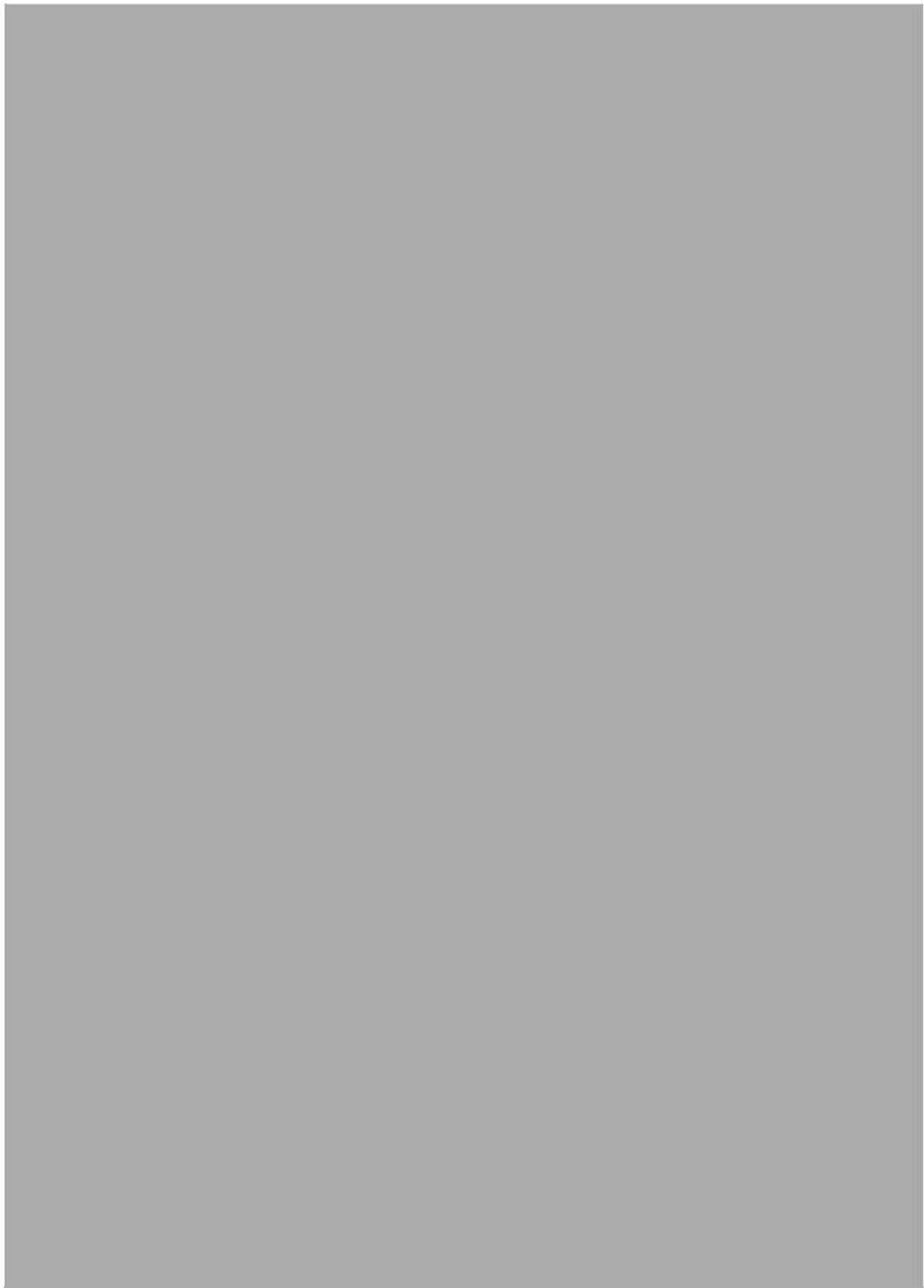
Julio de 2006

Bibliografía de Manuel Miño

- Obrajes y tejedores de Nueva España, 1700-1810*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1991.
- La protoindustria colonial hispanoamericana*, El Colegio de México-FCE-Fideicomiso Historia de las Américas, México, 1993.
- La manufactura colonial. La constitución técnica del obraje*, El Colegio de México, México, 1993.
- El mundo novohispano. Población, ciudades y economía. Siglos XVII y XVIII*, FCE, El Colegio de México, México, 2001.
- La población de la ciudad de México en 1790. Estructura social, alimentación y vivienda*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, Conacyt, 2004 (con Sonia Pérez Toledo).
- Codirector del vol. VI de la *Historia General de América Latina. La construcción de los países latinoamericanos, 1820-1870*, Madrid, UNESCO-Editorial Trotta, 2003.
 - Coordinador adjunto de la Serie *Breves Historias de los estados de la República Mexicana*.
 - Coordinador (en colaboración) de la *Historia General del Estado de México*, Toluca, El Colegio Mexiquense-Gobierno del Estado de México, 1998.

TEMAS





El regreso de Jumandy: historicidad, parentesco y lenguaje en Napo

The Return of Jumandy: Historicity, Kinship, and Language in Napo

Michael A. Uzendoski

Assistant Professor of Anthropology, Florida State University

Email: muzendos@mailersfsu.edu

Fecha de recepción: febrero 2006

Fecha de aceptación y versión final: julio 2006

Resumen

Este trabajo analiza los significados culturales del levantamiento indígena en el 2001 en el alto Napo como modo de investigar la historicidad indígena. Aunque hay varias publicaciones sobre el levantamiento 2001 en Napo, no se han considerado estos eventos desde una perspectiva de la historicidad kichwa. El argumento es que la historia que producen los hablantes de kichwa amazónico se estructura como un complejo de circulación de sustancias (o *samai*) que vincula actores sociales con un tiempo-espacio primordial. A través de un testimonio histórico sobre Jumandy, se muestra cómo esta complejidad simbólica de lenguaje-cultura kichwa crea vínculos de sustancia y poder con seres mítico-históricos

Palabras clave: Napo kichwa, historia, historicidad, Jumandy, levantamiento de 2001, Amazonía, memoria, poética

Abstract

This article analyzes the cultural meanings of the indigenous uprising of 2001 in Upper Napo as a means to investigating indigenous historicity. Although there are various publications about the 2001 uprising, no one has looked at these events from the perspective of Kichwa historicity. The argument is that Amazonian Kichwa speakers structure and produce history through a conceptual complex of substance circulation (*samai*) that links social actors with primordial time-space. Using a historical testimony about Jumandy, the paper shows how the symbolic complex of Kichwa language-culture allows people to create links of substance and power with mythohistoric beings.

Keywords: Napo Kichwa, history, historicity, Jumandy, indigenous uprising of 2001, Amazonia, memory, poetics

El presente trabajo¹ se halla contextualizado por la tensión que existe entre la historiografía y la antropología. Aunque tengamos una conciencia de que antropología e historia no se pueden separar, seguimos debatiendo cómo combinarlas. Guillaume Boccara, un antropólogo francés, señala que “si bien hoy en día los americanistas reconocen tanto la necesidad de estudiar a las sociedades indígenas en su contexto histórico... no parecen ponerse de acuerdo sobre el problema de la historicidad de estas sociedades” (Bocarra 2002: 49). El desafío al que se refiere Boccara es cómo desarrollar formas de escribir la historia más articuladas con las culturas y subjetividades indígenas. Aunque está emergiendo un fructífero debate sobre las historicidades indígenas o historias alternativas en el Ecuador (véase, por ejemplo, Benavides 2004), se necesitan también estudios etnográficos que articulen los acontecimientos históricos desde la perspectiva indígena. Quisiéramos ver la creación de las historias alternativas como procesos vivos de lenguaje y cultura. En este ensayo, propongo como un ejemplo el levantamiento de 2001 en Napo. Las memorias de los participantes de este levantamiento nos ofrecen una oportunidad para investigar la historicidad indígena² junto a las características del discurso kichwa. Aunque hay excelentes publicaciones sobre el levantamiento de 2001 (Barrera 2001, Chiriboga 2001, García 2001, Kingman 2001), nadie ha considerado estos eventos desde la perspectiva del lenguaje kichwa, el idioma principal de los participantes. Napo fue un área donde la violencia fue intensa y hubo muertes -una tragedia que sus habitantes nunca

olvidarán-. Estando en Napo, pude observar, por ejemplo, que todavía en junio del 2001, la gente hablaba constantemente de sus recuerdos dolorosos y de las consecuencias de los eventos de febrero. Este levantamiento tuvo un impacto muy fuerte en Napo. Fue algo parecido a las luchas de los años noventa en la sierra o la “caminata” descrita por Whitten, Whitten y Chango (1997); es decir, que este evento del 2001 refleja una transformación de la conciencia popular, algo así como un *pachakutik*, una acción con un significado cultural específico (Whitten 1996, 2003, Uzendoski 2005a).

A través de un análisis de los eventos y memorias, trataré de demostrar que este levantamiento representa un evento monumental en que las formas del mito y la circulación de sustancia vital, o *samai*, se manifestó en los tiempos presentes a través del discurso kichwa. Mi posición es que la gente de Napo interpreta la historia por medio de la lógica del parentesco, una manera de relacionarse no sólo entre las personas sino también con el pasado, el futuro y el mundo “natural” de animales, plantas, y otros seres (Norman Whitten 1976, 1985, Uzendoski 2005a y 2005b, Fausto 2000). En 2001, durante una visita a Napo, observé actos del habla que vinculaban a los kichwa-hablantes (y aún más a los oyentes) al poder y sustancia vital (o *samai*) del gran guerrero Jumandy del siglo XVI.

El testimonio

Unos meses después de los eventos del 2001 en Napo, estuve presente en unas presentaciones (en kichwa) de unos estudiantes de los colegios bilingües interculturales de la zona. Era un concurso sobre el tema de los levantamientos. Una mujer joven de Pano, Daisy Tapuy, quien era mi alumna en el colegio intercultural bilingüe en Pano durante 1996, habló sobre la revuelta en forma de testimo-

1 Este ensayo se basa en parte en materiales publicados en mi libro, *The Napo Runa of Amazonian Ecuador* (2005). Usado con permiso de University of Illinois Press.

2 Historicidad es la historia que cuenta los grupos sociales a través de “rubricas culturales distintivas” (Sahlins 1997: 14).

nio -el modo tradicional cómo se cuentan las historias indígenas-. No grabé lo que dijo porque había olvidado mi grabadora en casa, pero escuché atentamente, y trato de reproducir aquí el significado de lo que dijo³. También consulté las interpretaciones de otras personas que escucharon el discurso, quienes contribuyeron a mi interpretación de los significados del evento⁴.

Daisy habló del sacrificio que la gente tuvo que hacer en el levantamiento, un periodo muy duro para los manifestantes. Por ejemplo, resistieron más de una semana en el área del puente en Puerto Napo, sin mucha comida y bajo la presión de las fuerzas armadas. También murieron dos o tres personas bajo el fuego del ejército y otras resultaron heridas. Daisy habló de los muertos y heridos, quienes se inmolaron por el bien del *Runa causai*, que quiere decir la forma de vivir de la cultura Napo Runa. El concepto del *causai*, sin embargo, va más allá del concepto de la “cultura” e indica también la fuerza interna o poder de la vida misma que circula a través de todas las personas y seres del mundo natural. Hay un sentido mucho más profundo, no sólo en lo concerniente al sacrificio por defender la cultura Napo Kichwa de los nuevos medios económicos y sociales que amenazaban su modo de vida, sino que también se refirió a la *causai* como fuerza interna presente en los participantes en el levantamiento del 2001.

Después invocó la historia y dijo que los manifestantes se levantaron para defender a su pueblo como lo hizo el gran rebelde Jumandy en el siglo XVI. Estableció analogías entre el levantamiento de 1578 y éste del 2001. Habló de que el espíritu, el *samai* de

Jumandy, estaba con los manifestantes durante los días del levantamiento y de que el poder de él estaba dentro de ellos. Estableció una relación entre el pensamiento-sentimiento de afecto del pueblo Napo Runa y el gran cacique Jumandy quien murió luchando contra los españoles.

El tiempo no era un espacio imaginario divorciado del presente. Daisy afirmó que el tiempo no escapa a los parentescos, ni al pensamiento emotivo, ni al poder de los seres antiguos. Recogió un momento de emoción negativo y lo transformó en uno positivo. A través del pensamiento histórico, surgieron los sentimientos de ser parte del *ayllu* Napo Kichwa y ellos experimentaron afecto y solidaridad al sentirse todos descendientes del gran cacique Jumandy.

Este “testimonio” demuestra la interrelación de la historia alternativa oral como algo íntimamente vinculado con la educación bilingüe intercultural y los procesos de interpretar los textos desde puntos de vista culturalmente relativos. Es decir, se transforma el conocimiento escrito occidental al conocimiento oral kichwa. Aunque no exista una tradición oral lineal sobre Jumandy entre los indígenas del Napo, la gente, especialmente los jóvenes, se está creando una nueva tradición a través de la oralización de textos históricos (Landázuri 1989 Oberem 1990, Muratorio 1982 y 1985). No hay nada “inauténtico” en este proceso porque toda historia proviene de una posición política cultural, implícita o explícita (Trouillot 1995). Lo performativo, historia como arte verbal, transforma las lógicas textuales a otras lógicas simbólicas (a veces llamados “mitos”) que definen la vida diaria de las culturas indígenas. Las formas de hablar kichwa -su vocabulario, gramática, conceptos y formas estéticas de detallar el mundo- estimulan los esquemas discursivos de la historia oral (Hymes 2003, Scott 1990, Uzendoski 2005a y 2005b, Uzendoski, Hertica y Calapucha 2005).

3 El autor es hablante del kichwa del Napo y ha trabajado extensamente con el lenguaje del pueblo kichwa, sus tradiciones orales y cosmovisión por más de diez años.

4 Doy gracias a Edith Calapucha, Esteban Calapucha, Juan Carlos Shiguango y otras personas más.

La circulación de sustancias y el tiempo en el Napo kichwa

Para explorar más este proceso de historicidad, quiero indagar más a fondo en las formas de construcción de parentesco en términos simbólicos. La teoría social del parentesco en Napo se basa en una filosofía de sustancia compartida, y la circulación de sustancias de parentesco refleja una cosmología-social amazónica que es diferente de la realidad biogenética en que se basa la teoría de parentesco no indígena. Por ejemplo, en el mundo occidental las relaciones de parentesco definen sólo una parte muy específica de la persona social; definen su “vida privada”, que es menos importante que su “persona pública” -o su habilidad de producir riqueza dentro de las relaciones complejas del mercado-. En las sociedades amazónicas, en contraste, el parentesco no sólo representa una teoría de la persona social, sino que también representa una filosofía social-cosmológica que define el cuerpo y su relación con el cosmos (Vivieros de Castro 2001, Overing y Pases 2000). Para las sociedades amazónicas, el parentesco toma una posición de importancia y complejidad igual que “el capital” en las sociedades neoliberales.

El parentesco amazónico, como destaca Vivieros de Castro (2001:19) se basa en el problema de que ninguna experiencia humana se da por construida; la realidad humana tiene que ser producida y creada. Esta es más o menos la crítica de David Schneider (1984) y sus estudiantes al estudio de parentesco en antropología; argumentan que parentesco no es una realidad exclusivamente biológica sino más bien simbólica (Wagner 1967, 1977). Siguiendo un análisis simbólico-estructural, Vivieros de Castro (2001:19) argumenta que la afinidad en Amazonía es la relación dada y que la consanguinidad se halla mejor definida por la acción e intencionalidad humana. En otras palabras, en la Amazonía existen teo-

rías sociales-cosmológicas diferentes sobre la consanguinidad y afinidad.

Aplicando esta idea, he observado que en Napo la consanguinidad y la afinidad no son opuestas, sino que la afinidad existe desde adentro y justifica la consanguinidad. Por ejemplo, ninguna relación de sangre existe sin una relación de afinidad. Una relación de afinidad es una relación que se forma con el “Otro”, ya sea un ser humano o un espíritu de la selva; y este tipo de relación tiene que producirse y crearse por la acción humana, pero nunca llega a representar perfectamente la consanguinidad. Como dice Vivieros de Castro (2002:28), la consanguinidad perfecta nunca se puede alcanzar, porque es una relación ideal que se crea y renueva constantemente.

En la cultura Napo Runa las relaciones de sustancia compartida forman la base de la familia, o el *ayllu*. Sin embargo, la circulación de sustancia material (*yahuar*) no se puede separar de la circulación de la sustancia del alma (*samañ*) que circula entre todos los seres vivos, la naturaleza y cualquier objeto chamánico, especialmente las piedras. La persona se forma de su sustancia física y del alma, y estos dos aspectos son igualmente importantes en las formas del parentesco. Por ejemplo, después que nace un hijo los padres tienen que ayunar y seguir las prácticas del *couvade* (si no, el niño va a crecer torcido y puede enfermarse o morir por falta de energía vital que se transmite desde los padres al niño). En Napo, los padres contribuyen con “sustancia de alma”. También, como lo demuestra Whitten (1976, 1985) los chamanes manipulan este modelo de parentesco para formar alianzas y conexiones de “consanguinidad”. Sin embargo, no solamente los chamanes son capaces de crear parentesco de este modo.

Todo el mundo manipula este modelo de parentesco espiritual a través de rituales, afectividad social y residencia, memorias, sueños y pensamientos. Por ejemplo, un niño adop-

tado llega a ser un familiar “de sangre” propia, aunque empiece como un “afin”. Aunque el *ayllu* se base en la idea de consanguinidad, tiene que ser producido a través de prácticas y los símbolos de la afinidad. La boda tradicional también sigue esta lógica donde los participantes dicen que el fin es “transformar dos familias (*ayllu*) en una”. Lo ideal es transformar la afinidad en consanguinidad.

Además, *samai* puede transferirse a otra persona o mejorar a un enfermo, como en los rituales de curación chamánica (Whitten 1976, 1985). Las personas más fuertes o los chamanes han acumulado mucho *samai* (aliento, sustancia de alma) en que se basa su poder simbólico-cosmológico (Muratorio 1985). Una persona recibe su *samai* inicial de sus padres y la línea familiar que está conectada a los tiempos míticos. A través de sus vidas, el *samai* va creciendo y una persona puede recibir más *samai* de cualquier otra persona que se pone de acuerdo para dárselo. Por ejemplo, un joven le pide a un anciano soplarle en la corona, para recibir su poder. Los chamanes son las personas que tienen más *samai*. Los evangélicos también creen en la importancia del *samai*, pero en su ideología un creyente acumula más *samai* a través de su relación con Dios (Uzendoski 2003). Es el mismo proceso conceptual que sigue el chamán, aunque la fuente sea diferente.

Otra cosa que he observado en Napo es que el *samai* se puede circular entre personas a través de la mente. Un pensamiento negativo puede hacer enfermar a una persona, o uno positivo puede transferir el *samai* positivo hacia otra persona. Un chamán, por ejemplo, continuamente está emitiendo energía de su cuerpo (*aicha*) que protege a su familia y su casa. El *samai* es invisible pero está presente en todas las cosas. También se puede recibir el *samai* de los seres de tiempos míticos. En el ritual de tomar la planta *puma yuyu* una persona recibe la sustancia y poder de los jaguares míticos (Uzendoski 1999). Los

petroglifos tienen *samai* infinito que han dejado los seres míticos. En el lugar de Sapo Rumi hay dos piedras importantes que animan la selva, *supai rumi* y *sapo rumi*. Una vez que la selva, como un ser de sentimientos, conoce y tiene sentimientos hacia quienes allí viven, no les hace daño, sino que mejor les protege y les ayuda a vivir. El parentesco no solamente fluye de una persona a otra sino también entre el mundo natural y las gentes, e igualmente entre los seres de tiempos míticos y del presente.

El pensamiento, el afecto y el poder

En la Amazonía el poder del pensamiento está relacionado con los afectos. No se puede separar “la mente” del “cuerpo” o divorciar la emoción del pensamiento (Overing y Passes, 2000:19). El enojo o la envidia pueden causar daño a otra persona; se puede enfermar o morir como consecuencia del enojo del otro. El enojo es un pensamiento afectivo poderoso que influye en la realidad material. Como dice Luisa Elvira Belaunde (2000:219), “tan poderosos son los significados y sentimientos asociados con el enojo que éste se caracteriza como poseedor de un poder capaz de transformar la percepción de la realidad, separándose de sus relaciones y transformando su identidad social-cosmológica”. Lo contrario del enojo, sin embargo, es el amor, o los afectos sociales positivos.

En muchos lugares de la Amazonía, pensamientos-emociones positivos son la base del “poder” legítimo, lo cual se define como una manera de crear y sostener un ambiente de fertilidad; es decir, el poder está vinculado con la habilidad de crear buenas relaciones y afectividad entre parientes. Joanna Overing (2000:78), por ejemplo, destaca que “el líder [amazónico], siendo una especialista en fertilidad, es también un especialista en los sentimientos afectuosos o ‘convivencia’”. El amor

de los antepasados y de los ancianos (abuelos, bisabuelos, tíos y tías, padrinos y madrinan) se manifiesta dentro de una persona como poder espiritual y conocimiento. En Napo este amor está representado por el simbolismo general y ritual de que el *samai* de los antepasados reside y vive dentro de las generaciones del presente. Muratorio (1985:323) relata que en Napo hay momentos de transferencia ritual de “poder” o *samai* de los padres a los hijos. Demuestra que los que son buenos cazadores o más fuertes, tienen más *samai*, y que dicho poder está vinculado al “amor” de los ancianos.

Viviendo en Napo, yo también he observado que hay una tendencia muy fuerte a vincular el poder (*samai* o *ushai*) al amor (*llaki - na*) de los padres, tíos y abuelos. Por ejemplo, un chamán me dijo que su tío le había dado poder. Me comentó que vivió con él por muchos años y que “él me quería bastante”; como consecuencia, dicho chamán había recibido más poder de su tío. El “amor” o *llakina* produce no sólo relaciones sociales sino también circula como la presencia afectiva del poder. Santos-Granero (1994), ha mostrado relaciones metafísicas similares entre los Amuesha, quienes ven la génesis de la vida misma formada por actos de amor. El amor, como sustancia de vida y parentesco, circula como poder entre todos los seres vivos y divinos. Podemos hablar de una etnoteoría del “amor”, una teoría que vincula el “amor” estrechamente con el poder y los parentescos espirituales. Dar “amor” o pensar bien de una persona, es transferirle un poco de fuerza, poder o energía a él o a ella.

La historia y el mito

Mi argumento es que, en su modo de ver historia, la gente del Napo no interpreta los eventos del pasado como un espacio imaginario-lineal aislado del pensamiento, la acción

humana y la memoria. Ellos ven la historia como un espacio mítico que está vinculado con el presente a través de relaciones de sustancia y amor. En términos de Vivieros de Castro (2001), el pensamiento histórico también crea afinidad. La historicidad en este contexto no se trata de los eventos lejanos que han pasado en lugares solo imaginarios o en tiempos distantes del presente. La historia se contará o se recordará dentro de las estructuras del pensamiento-sentimientos de afecto, y su poder de influir y transformar el presente. Como establecí al principio de este artículo, el concepto de la historicidad está sometido a los principios del parentesco.

Se puede notar esta idea sobre pensamiento-sentimientos de afecto y la historia en un mito de 1920 recogido por Warvin (1993), el cual está relacionado con los eventos de la sublevación de 1578 (Muratorio 1985). Como sabemos, después de destruir las ciudades de Ávila y Archidona, la rebelión fracasó en Baeza (Ruiz Mantilla 1992). Los rebeldes y los líderes principales (que eran chamanes) huyeron a esconderse en la selva y fueron perseguidos por las tropas españolas con la ayuda de otros indígenas. Finalmente fueron llevados a Quito y castigados con la muerte. El cuento tal como está en el trabajo de Warvin dice:

“Cuando vinieron los españoles hacían esclavos y atormentaban a los indígenas. Los brujos de entonces se reunieron para discutir. Resolvieron que todos se retiraran a la selva a los rincones más retirados, en donde, para evitar que se los fuera a perseguir, se metamorfosearon en tigres de todos los colores, todos animales enormes. Los que penetraban a la selva para ir a cazar eran devorados. Hasta los pueblos eran asolados. Las fieras hicieron tanto mal que los brujos de las poblaciones resolvieron poner fin a esta carnicería. Procuraron descubrir el lugar donde se escondían las bestias. Penetraron en una gran sala subterránea donde vieron suspendidas numero-

sas pieles de tigre, negras, mosqueadas, amarillas, etc. Intrigados se ocultaron. Pronto vieron venir hombres que tomaban cada uno una piel de tigre y se cubrían con ella. Acudiendo entonces la astucia, los condujeron hacia el cerro Galeras. Cuando se hallaron todos los tigres reunidos en una gran caverna cerraron el orificio por medio de una piedra enorme que tapa la salida y que se puede distinguir desde lejos” (Warvin 1927:328-329, en Muratorio 1985:342).

Este relato es una fusión del mito de los mellizos que atraparon el “jaguar mundo puma” en la montaña de Galeras y los eventos históricos de 1578. Sin embargo, en el relato, el papel de los mellizos está tomado por los “brujos de las poblaciones”. Ellos son los que encierran en la montaña los jaguares “rebeldes” que están acabando con la gente; así los “brujos” de la población crean un tiempo-espacio donde la gente otra vez puede construir comunidades productivas y pueblos. No sólo salvan a la gente indígena sino también a los españoles; hacen la sociedad colonial posible y establecen una relación de convivencia. Es el amor de los chamanes de la comunidad lo que permite la vida (ver cuadro).

El rasgo más notable de este cuento de 1920 es tal vez lo que no dice. La relación del narrador hacia los brujos y los eventos está ausente. Vale la pena preguntarse un poco más sobre la relación entre el narrador y los personajes históricos dentro de las tradiciones narrativas de Napo.

Cuando escuché una versión del cuento de Galeras en 1996 el narrador me indicó que sus abuelos “conocieron” a los mellizos, o sea, que el narrador construyó una relación de sustancia entre su ser y los personajes míticos (Uzendoski 2005b). Sus abuelos sobrevivieron el diluvio primordial y de ellos proviene la gente de su comunidad. Como en el ritual del *puma yuyu*, el narrador establece una transferencia del poder/sustancia desde el periodo mítico hasta su ser en el presente (se hace una conexión de amor). Es implícito que el narrador del mito recogido por Warvin se identifica con los “brujos de la población” y se da la transferencia de poder entre aquel tiempo y su realidad actual. El narrador del cuento construye una realidad mítico-imaginaria donde existe una relación de afinidad entre él y los seres de los tiempos pasados. El cuento se utiliza como un juego de símbolos para aumentar su poder y establecer una relación de circulación de sustancia entre la gente del presente y los seres míticos. En otras palabras, los mitos también forman parte del sistema de parentesco de la gente indígena de Napo y el poder se circula entre los seres del mundo mítico, mítico-histórico, el presente y el futuro. El tiempo nunca se puede escindir del pensamiento afectivo ni del poder. Está impregnado con los principios del parentesco

Los principios para transformar la historia a través de los cuentos mitológicos son los mismos que acabamos de observar con el discurso de Jumandy de Daisy. El lenguaje le permite a los hablantes invocar el simbolismo

Transformación estructural en el cuento de Warvin (1927) con El mito de Galeras				
MITO	Perseguidores	Atrapados	Tiempo	Emociones-Pensamientos
Galeras	Mellizos (Cuillur y Dociru)	Gran Jaguar Come-Gente	Primordial	Amor
Warvin (1920)	Brujos de la Población 1578- 1579	Brujos Rebeldes de 1578-1579	Colonial	Amor/ Enojo

del *samai* con seres míticos-históricos para transformar las realidades históricas en un presente primordial. El discurso verbal kichwa presenta sentimientos y experiencias de transformación del tiempo-espacio y historia. El lenguaje de los kichwa hablantes no es pura “comunicación” divorciada de la cultura; el habla kichwa, como los otros idiomas del mundo, encaja su cosmovisión⁵.

Historicidad indígena

Estoy de acuerdo con Laura Rival y Neil Whitehead (2001:10) en que necesitamos estudiar más las calidades distintivas de la historicidad indígena frente a la historicidad occidental (Sahlins 1997, Trouillot 1995). Según estos autores: “métodos diferentes de ver la historicidad nativa nos llevarían tal vez a entender mejor -las experiencias históricas de los que han sufrido dominación y colonización, o a entender lo que significan estos eventos hoy día, o tal vez aprenderíamos también a percibir la temporalidad desde una perspectiva nativa⁶”. A lo largo de este breve análisis, podemos establecer que no es cierto que los nativos de la Amazonía carezcan de esquemas temporales-históricos. Lo que ocurre es que la historicidad indígena está construida con principios de lenguaje y cultura distintos a las prácticas de producción de la historia occidental, que está fundada en esquemas lineales del tiempo y carece del simbolismo mítico del *samai*.

El concepto de la circulación del *samai*, como sustancia importante del parentesco y las relaciones de afinidad, es como un microcosmos en sí mismo que representa no sólo el

parentesco sino también una visión cíclica o re-cíclica del tiempo y el poder. Dicha presencia del *samai* contradice las lógicas limitantes (Wagner 1986) establecidas por la etnicidad -un proceso contrario a los esquemas occidentales lineales de la etnogénesis y la transculturación-. En contraste, la historia indígena, tal como está definida por el *samai*, enfatiza que en el mundo mítico los eventos y los personajes históricos pueden surgir al presente en momentos cuando una persona a través del pensamiento, del habla, de un sueño, o de un ritual, establece una relación afectuosa en que se basa el poder personal y colectivo. Cuando no hay memorias exactas, se las crea y así se recupera un modo de ver el pasado definido por las acciones de los antepasados.

La influencia de los conceptos lineales en la etnohistoria ha producido estudios con significados políticos y etnográficos que no encuadran bien con las realidades indígenas de tiempo-espacio e historicidad. Por muchos años, los conceptos de “transculturación” y “etnogénesis” han sido ideas centrales para entender el origen y la identidad de los hablantes kichwa del Alto Napo (Oberem 1980). Estos conceptos, aunque explican ciertos aspectos de la historia de los pueblos del Alto Napo, también enfatizan la historicidad occidental y el tiempo lineal.

Por ejemplo, Udo Oberem (1980), que ha escrito un libro muy importante sobre la historia del Alto Napo, enfatiza la transculturación. Después de analizar la sublevación de los indígenas de Napo contra los Jesuitas en 1892, comenta sobre su fracaso y el estado psicológico decaído de los indígenas frente a la sociedad blanca. Escribe que

“los indios [sic.] se retiran temerosos a la selva y dentro de poco tiempo vuelve a reinar la paz en toda la región de Quijos [Alto Napo]. Con ello termina el último intento de rebelión de los Quijos [Napo Runa] contra los blancos... Han perdido la confianza

5 Como dicen Pablo Macera Dall'Orso y Carlos Dávila Herrera (2004: 17), “la cosmovisión está presente y a la vez oculta. Es implícita porque constituye la estructura que subyace a todas las acciones del grupo colectivo”.

6 Las citas originales en inglés fueron traducidas al español por el autor.

en sí mismos, un hecho que ya se nota en la intranquilidad a comienzos del siglo [veinte]” (Oberem 1980:116).

Hoy en día, en el siglo XXI, vale la pena preguntar por qué Oberem se equivocó en su análisis, porque el levantamiento de 2001 contradice claramente la hipótesis de que los de Napo ya estaban sometidos psicológicamente a la sociedad blanca⁷.

Tampoco se ha hecho evidente la continua pérdida de la cultura indígena y su asimilación a la sociedad de campesinos, como predecía Oberem (1980). Mi opinión es que Oberem, un lúcido etnógrafo e historiador muy influyente, subestimó el poder de la historicidad indígena. Por ejemplo, aquí he tratado de demostrar que, a través de las acciones de resistencia contra las formas coloniales modernas en la sublevación del 2001, los pueblos de Alto Napo recuperaron y reestablecieron una afinidad de parentesco con el gran guerrero Jumandy; es decir, impusieron su visión mítica subalterna sobre la historia lineal que cuenta Oberem. Es un ejemplo de la “eficacia simbólica” (véase Lévi-Strauss 1987), en cual los símbolos de la cultura y lenguaje son capaces de crear realidades físicas y psicológicas en el mundo real.

La presencia afectiva de Jumandy es contagiosa también. La estatua de Jumandy en Tena no sólo es el monumento más conocido de la ciudad (véase la foto), sino que su figura sigue viva como objeto de poemas y otras manifestaciones de la cultura popular, indígena y mestiza también. Existe la compañía de transporte “Jumandy”, “Cuevas de Jumandy” y muchas otras cosas. Miguel Montoya Zúñiga (1998:8), un poeta, ha escrito un poema “A Jumandy”, en que refleja:



Estatua de Jumandy, Tena, Ecuador

“Jumandy eres historia en Sumaco, Archidona, Napo y el Oriente. Tu nombre trasciende la luz del rey sol”. Podríamos decir, entonces, que en Napo, Jumandy trasciende también la historia misma, porque desde la perspectiva indígena de la historicidad, Jumandy es más que un “símbolo”. A través de la lógica de parentesco indígena, sigue vivo su *samai* dentro de los chamanes y otras personas de la población. Es decir, como otros movimientos milenarios del mundo, la gente de Napo sigue usando elementos religiosos de su cosmovisión para transformar el presente.

Conclusiones

He presentado aquí cómo se crea la historia alternativa a través de los testimonios, una manera de transformar la historia usando los

⁷ La idea de reconectar con Jumandy refleja la transformación del contexto histórico en Napo de formas de resistencia pasivas, detalladas por Muratorio (1982: 66-69), a formas más activas representadas por el concepto de “autodeterminación”.

símbolos y la poética oral de las culturas indígenas. Se puede decir que, a través de la historicidad indígena, hay un proceso contrario a la etnogénesis (que asume un proceso lineal empobrecedor). En contraste con esta etnogénesis, la historia mítica rompe las barreras étnicas, temporales y coloniales que forman parte de las historias convencionales. El *samai* o circulación de sustancias se burla de los procesos coloniales, de su lógica social. Manifiesta que las comunidades indígenas no han aceptado la concepción modernista lineal del colonialismo, al igual que la idea de haber sido conquistados y de que sus identidades se puedan localizar dentro de un tiempo-espacio hispánico secular. Se podría argumentar, en términos de Godelier (1998), que la identidad basada en *samai* y el lenguaje kichwa es un “don sagrado”⁸, es decir, que no es alienable; es el concepto principal de “orígenes” (en contraste con la “etnia”) en que se basa la vida indígena.

Agradecimientos

Una versión de este ensayo fue presentada en el Primer Encuentro de LASA sobre Estudios Ecuatorianos (18-20 julio de 2002), Quito, Ecuador. El trabajo de campo en que se basa este estudio se desarrolló durante 26 meses entre los años 1994 y 2003. El proyecto fue apoyado por la Comisión Fulbright (1994) y Pew Charitable Trusts (1996-1997). Desde

8 Dice Godelier (1998:285), “más fundamentalmente, nuestro análisis nos llevan a concluir que ninguna sociedad humana sabría existir sin la presencia de dos dominios: el dominio de los intercambios -independientemente de lo que se intercambie y de la forma en que se intercambie... y otro dominio donde los individuos y los grupos conservan preciosamente para sí cosas, relatos, nombres, y formas de pensamiento, que posteriormente transmiten a sus descendientes o a quienes comparten su misma fe. Pues lo que se guarda son siempre ‘realidades’ que desplazan a los individuos y a los grupos hacia otro tiempo, y que los colocan de nuevo frente a sus orígenes, frente al origen”.

entonces he regresado a Napo cinco veces (2000, 2001, 2002, 2004, 2005). Mis actividades en 2001 fueron apoyadas por La Universidad Estatal de la Florida (FSU) y en el 2002 por la Comisión Fulbright y FLACSO. Primero, agradezco a todos los indígenas de la Provincia de Napo que me han ayudado no sólo en las investigaciones de su cultura e historia, sino en lo más importante: enseñarme otra visión del mundo y de la vida. Le agradezco especialmente a las comunidades de Sapo Rumi, Pano y Campo-Cocha. También, les agradezco mucho a Daisy Tapuy, Luis Carlos Shiguango y Fermin Shiguango. También agradezco a Fernando García, a Susana Cabeza de Vaca, a Julie Williams, a Juan Carlos Galeano y a muchas otras personas quienes me han ayudado. Cualquier error en este trabajo corre bajo mi responsabilidad.

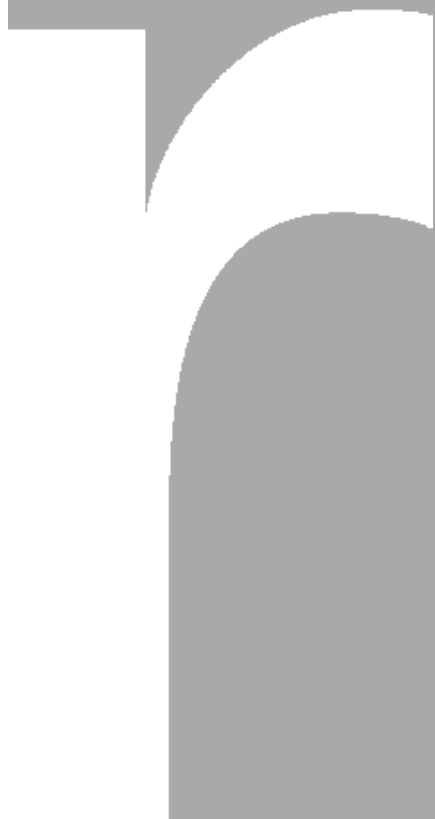
Bibliografía

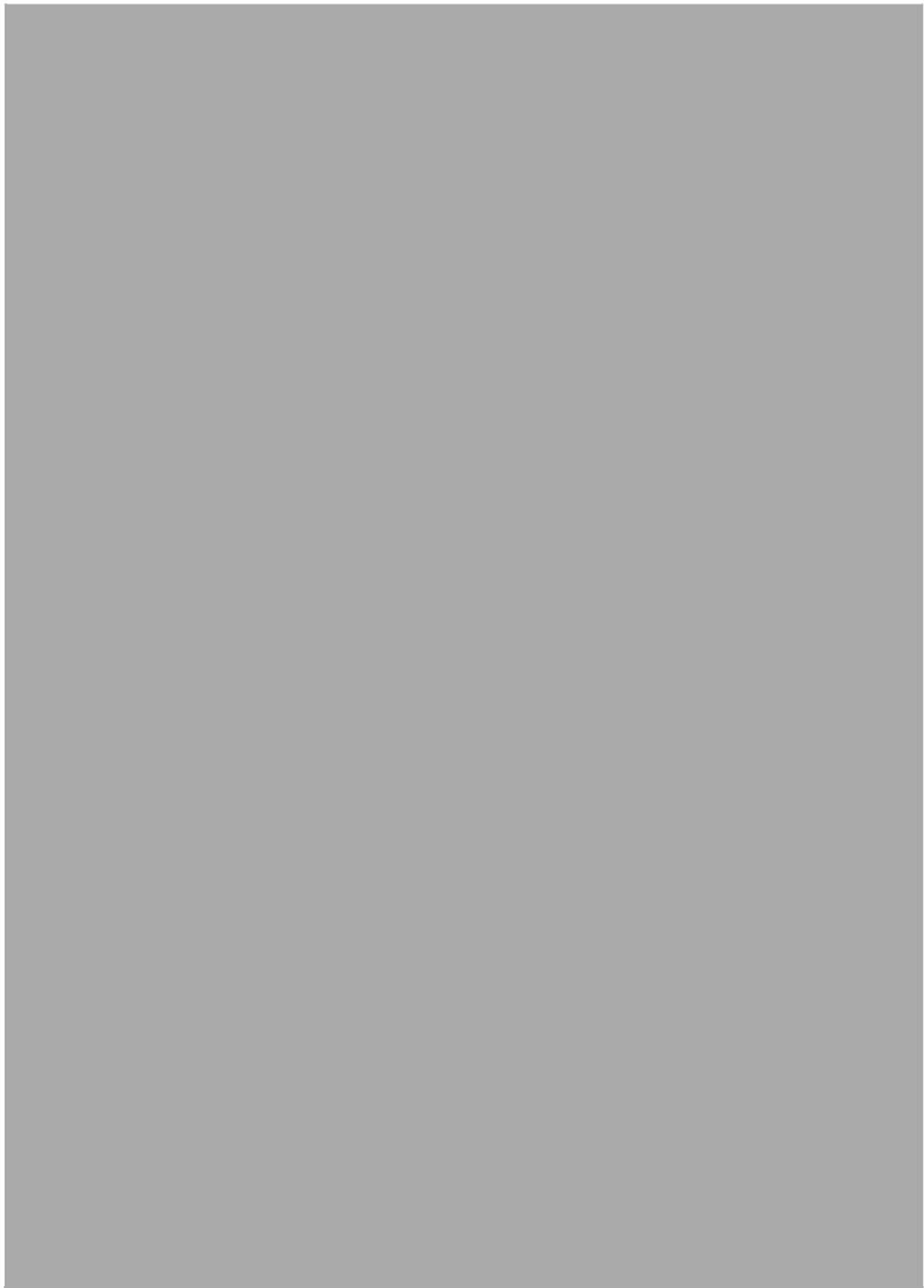
- Barrera, Augusto, 2001, “Nada sólo para los indios. A propósito del último levantamiento indígena”, en *ICONOS. Revista de Ciencias Sociales*, No. 10, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 39-47.
- Belaunde, Luisa, 2000, “The Convivial Self and Fear of Anger amongst the Airo-Pai of Amazonian Peru”, en Joanna Overing y Alan Passes, compiladores, *The Anthropology of Love and Anger*, Routledge, London.
- Benavides, Hugo, 2004, *Making Ecuadorian Histories: Four Centuries of Defining Power*, University of Texas Press, Austin.
- Boccaro, Guillaume, 2002, “Introducción,” en Guillaume Boccaro, compilador, *Colonización, Resistencia, y Mestizaje en las Américas: Siglos XVI-XX*, Abya-Yala, Quito.

- Chiriboga, Manuel, 2001, "El levantamiento indígena ecuatoriano de 2001: una interpelación", en *ICONOS. Revista de Ciencias Sociales*, No. 10, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 28-33.
- Fausto, Carlos, 2000, "Of Enemies and Pets: Warfare and Shamanism in Amazonía", en *American Ethnologist*, No. 26, American Anthropological Association, p. 933-56.
- García, Fernando, 2001, "¿Un levantamiento indígena más? A propósito de los sucesos de febrero 2001", en *ICONOS. Revista de Ciencias Sociales*, No. 10, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 34-38.
- Godelier, Maurice, 1998, *El enigma del don*, Paidós, Barcelona.
- Hymes, Dell, 2003, *Now I Only Know So Far: Essays in Ethnopoetics*, University of Nebraska Press, Lincoln.
- Kingman, Eduardo, 2001, "La ciudad como reinención: el levantamiento indígena de enero de 2000 y la toma de Quito", en *ICONOS. Revista de Ciencias Sociales*, No. 10, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 68-77.
- Landázuri, Cristóbal, 1989, "Introducción", en C. Landázuri, compilador, *La Gobernación de los Quijos (1559-1621)*, MARKA, Instituto de Historia y Antropología Andina, Quito.
- Lévi-Strauss, Claude, 1987, "La eficacia simbólica", en *Antropología Estructural*, Piados, Barcelona.
- Macara, Dall'Orso, Pablo y Carlos Dávila Herrera, 2004, "Introducción", en *El Ojo Verde: Cosmovisiones Amazónicas*, Programa de Formación de Maestros Bilingües de La Amazonía Peruana, AIDSESP, Iquitos, Perú.
- Montoya, Zúñiga, Miguel, 1998, *Cuando el verso habla: poesía social*, La Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de Napo, Tena.
- Muratorio, Blanca, 1985, *Rucuyaya Alonso y La Historia Social y Económica del Alto Napo 1850-1950*, Abya-Yala, Quito.
- , 1982, *Etnicidad, evangelización y protesta en el Ecuador: una perspectiva antropológica*, CIESE, Quito.
- Oberem, Udo, 1980, *Los Quijos. Historia de la transculturación de un grupo indígena en el Oriente ecuatoriano*, Instituto Otavaleño de Antropología, Otavalo.
- Overing, Joanna y Alan Passes, 2000, "Introduction: Conviviality and the Opening Up of Amazonian Anthropology", en Joanna Overing y Alan Passes, compiladores, *The Anthropology of Love and Anger*, Routledge, London.
- Rival, Laura y Neil Whitehead, 2001, "Introduction", en Laura Rival y Neil Whitehead, compiladores, *Beyond the Visible and the Material: The Amerindianization of Society in the Work of Peter Rivière*, Oxford University Press, Oxford.
- Ruiz, Lucy, 1992, "Jumandí: rebelión, anti-colonialismo y mesianismo en el oriente ecuatoriano, siglo XVI", en Fernando Santos, compilador, *Opresión colonial y resistencia indígena en la alta Amazonía*, CEDIME, FLACSO, Quito.
- Sahlins, Marshall, 1997, *Islas de Historia: la muerte del capitán Cook. Metáfora, antropología e historia*, Editorial Cédisa, Barcelona.
- Santos-Granero, Fernando, 1994, *El Poder de Amor: Poder, conocimiento y moralidad entre los Amuesha de la selva central del Perú*, Abya-Yala, Quito.
- Schneider, David, 1984, *A Critique of the Study of Kinship*, University of Michigan Press, Ann Arbor.
- Scott, James, 1990, *Domination and the Arts of Resistance*, Yale University Press, New Haven.
- Trouillot, Michel-Rolph, 1995, *Silencing the Past: Power and the Production of History*, Beacon, Press Boston.
- Uzendoski, Michael, 2005a, *The Napo Runa of Amazonian Ecuador*, University of

- Illinois Press, Urbana.
- , 2005b, “The Primordial Flood of Izhu: An Amazonian Quichua Myth-Narrative”, en *Latin American Indian Literatures Journal*, Vol. 21, No. 1, p. 1-20.
- , 2004, “The Horizontal Archipelago: The Quijos Upper Napo Regional System”, en *Ethnohistory*, Vol. 51, No. 2, p.318-357.
- , 2003, “Purgatory, Protestantism, and Peonage: Napo Runa Evangelicals and the Domestication of the Masculine Will”, en Norman E. Whitten Jr., compilador, *Millennial Ecuador: Critical Essays on Cultural Transformations and Social Dynamics*, University of Iowa Press, Iowa.
- , 1999, “Twins and Becoming Jaguars: Verse Analysis of a Napo Quichua Myth Narrative”, en *Anthropological Linguistics*, Vol. 41, No. 4, p. 431-461.
- Uzendoski, Michael, Mark Hertica y Edith Calapucha, 2005, “The Phenomenology of Perspectivism: Aesthetics, Sound, and Power, in Napo Runa Women’s Songs of Upper Amazonía”, en *Current Anthropology*, Vol. 46, No. 4, p. 656-662.
- Vivieros de Castro, Eduardo, 2001, “GUT Feelings about Amazonía: Potential Affinity and the Construction of Sociality”, en Laura Rival y Neil Whitehead, compiladores, *Beyond the Visible and the Material: The Amerindianization of Society in the Work of Peter Rivière*, Oxford University Press, Oxford.
- Wagner, Roy, 1986, *Symbols that Stand for Themselves*, University of Chicago Press, Chicago.
- , 1977, “Analogic Kinship: A Darabi Example”, en *American Ethnologist* No. 4, p. 623-642.
- , 1967, *The Curse of Souw: Principles of Daribi Clan Definition and Alliance in New Guinea*, University of Chicago Press, Chicago.
- Warvin, Marqués de, 1927 [1993], “Leyendas tradicionales de los Indios del Oriente ecuatoriano”, en Jorge Trujillo, compilador, *Indianistas, Indianofilos, Indigenistas: Entre el enigma y la fascinación, una antología de textos sobre el ‘problema’ indígena*, Abya-Yala, Quito.
- Whitten Jr., Norman, 2003, “Introduction”, en Norman Whitten Jr., compilador, *Millennial Ecuador: Critical Essays on Cultural Transformations and Social Dynamics*, University of Iowa Press, Iowa.
- , 1996, “The Ecuadorian Levantamiento Indígena of 1990 and the Epitomizing Symbol of 1992: Reflections on Nationalism, Ethnic-Bloc Formation, and Racialist Ideologies”, en Jonathan Hill, compilador, *History Power, and Identity: Ethnogenesis in the Americas: 1492-1992*, University of Iowa Press, Iowa.
- , 1985, *Sicuanga Runa. The Other Side of Development in Amazonian Ecuador*, University of Illinois Press, Urbana.
- , 1976, *Sacha Runa. Ethnicity and Adaptation of Ecuadorian Jungle Kichwa*, University of Illinois Press, Urbana.
- Whitten Jr., Norman, Dorothea Whitten y Alfonso Chango, 1997, “Return of the Yumbo: The Indigenous Caminata from Amazonía to Quito”, en *American Ethnologist* Vol. 24, No. 2, p. 355-91.

RESEÑAS





Bibliografías ecuatorianas: estado actual y últimos aportes, 2001–2005¹

Michael T. Hamerly
John Carter Brown Library,
Brown University

Estado actual

El estado actual de la bibliografía en el Ecuador deja mucho que desear. Desde el comienzo del nuevo milenio (en realidad desde fines del siglo XX) es casi, si no, imposible mantenerse al tanto de la producción nacional y extranjera de estudios ecuatorianos debido al lamentable hecho de que no existe ningún servicio bibliográfico que registre las publicaciones nacionales y/o ecuatorianistas, ni siquiera en su mayoría. El último *Anuario bibliográfico ecuatoriano*, del difunto Centro de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador en Cuenca, salió hace quince años (en 1991 para el año de 1987).² Diez años han pasado desde que se editó el tercer tomo de *Desde el mostrador del librero* de Edgar Freire Rubio, no obstante tener reunido este abnegado librero y literato fichas más que suficientes para sacar varios volúmenes más. Tampoco ha podido seguir adelante el amigo Freire con su columna de antaño de noticias bibliográficas en los diarios del capital por falta de interés de parte de sus editores.³ Y mucho menos el casi desconocido e inadecuadamente presupuestado Centro Nacional de Documentos

Científicos Ecuatorianos ha estado en condiciones de producir otra de sus magníficas bibliografías científicas en casi el mismo lapso de tiempo, para citar solamente un ejemplo más del estado bastante deplorable del (des)cultivo de la bibliografía en el país.⁴

No todo es gris, sin embargo. *El Libro en Ecuador: estadísticas y datos del ISBN. 2002–* (descrito por completo y analizado abajo, véase ficha no. 7) nos mantiene más o menos al tanto de algunas, empero en ningún momento todas, las publicaciones nacionales, en cuanto a libros se refiere. Peor sería nada.

Aunque no es una bibliografía en el sentido verdadero de la palabra, el lanzamiento del Sistema Nacional de Información Bibliográfica del Ecuador en 2003 también constituye un gran adelanto. Al menos ya es posible consultar los catálogos de varias bibliotecas del país en línea a través de SNIB. No constituye una herramienta bibliográfica verdadera o fácil de utilizar porque uno necesita buscar por nombres de autores, y/o títulos de publicaciones, y/o materias para darse con algunos de los materiales deseados. El sistema tiene solamente algunos de los materiales que uno debe consultar, y esto por tres razones: 1) no todo un siempre están conectadas las instituciones que pertenecen a la red; 2) la falta de compatibilidad de criterios y/o sistemas de catalogación; y 3) los fondos inadecuados de que disponen las bibliotecas particulares y públicas en el país para adquirir todas las publicaciones que les incumben. El URL del

1 En ICONOS 25 (pp. 183-186) se imprimió esta misma reseña, sin que los pies de página estén en su lugar. En esta edición reproducimos el texto de forma correcta.

2 *Anuario bibliográfico ecuatoriano: para el año de... 1982–1987*, 7 volúmenes, Banco Central del Ecuador, Centro de Investigación y Cultura, 1984–1991, Cuenca.

3 Edgar Freire Rubio, 1996 [1990], *Desde el mostrador del librero*, primera edición, 3 volúmenes, Ed. Grijalbo Ecuatoriana, Quito.

4 Rodrigo Fierro Benítez, Magdalena de Carrera y Jorge Revelo Rosero, 1995, *Bibliografía científica médica ecuatoriana publicada en el exterior*, Colección Bibliografía científica ecuatoriana No. 1, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Centro Nacional de Documentos Científicos Ecuatorianos, Quito; Rodrigo Fierro Benítez, Jorge Revelo Rosero y Flor María Hidalgo, 1997, *Bibliografía científica ecuatoriana sobre las Islas Galápagos*, 1a ed., Colección Bibliografía científica ecuatoriana, N° 2, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Centro Nacional de Documentos Científicos Ecuatorianos, Quito.

Sistema Nacional de Información Bibliográfica es:

<http://208.19.69.144:8080/snib/cliente/index.html>

También se debe mencionar que el catálogo de la indispensable Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit” hoy en día esta disponible en línea.⁵ El URL es:

<http://www.beap.org.ec>

Solamente queda por enfatizar que no existe ningún servicio de indización y/o abstracción de la literatura periódica en el país. Desde luego hubo algunos intentos de control de la literatura periódica en las postrimerías del siglo pasado, empero ninguno pudo seguir publicándose por mucho tiempo.⁶

Últimos aportes

Entre obras impresas y/o disponibles en línea, parece que solamente ocho bibliografías de estudios ecuatorianos y/o referentes a publicaciones nacionales salieron en el lustro que se acaba de cerrar (2001–2005). Cuatro se deben a la labor abnegada de ecuatorianistas (1, 4, 5, y 6) y los otros cuatro a nacionales (2, 3, 7, y 8). Labor abnegada porque tanto en el exterior como dentro del Ecuador, la obra bibliográfica rinde poco o nada y tiende a ser no tomada en cuenta para fines de ascensión y retención en el mundo académico.

- 1) Belote, James Dalby, y Linda Smith Belote, 2001, *Saraguro, Provincia de Loja, Ecuador*, <http://www.saraguro.org/>

Un sitio multifacético de la telaraña mundial que incluye bibliografías comprehensivas

5 El *Diccionario bibliográfico ecuatoriano*, de la Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit”, quedó trunco con el noveno tomo en 2001.

6 Sobre dichos intentos véase la segunda edición de la *Bibliography of Ecuadorian Bibliographies* del autor (ficha no. 5).

sobre este grupo étnico (v.g. “Etnohistoria de los Saraguros antes de 1850: documentos y libros” y “Etnohistoria de los Saraguros entre 1850 y 1950: documentos y libros”).⁷ Los esposos Belote se han dedicado al estudio de los Saraguros desde la década de los 1960. El sitio es puesto al día periódicamente.

- 2) Cepeda Astudillo, Franklin (1975–), 2003, *Novelistas chimboracenses: índice bio-bibliográfico 1868–2003*, KAUSTIKA Ediciones, Quito. 226 págs.

Un diccionario bio-bibliográfico de quince novelistas chimboracenses, ordenado cronológicamente por fecha de nacimiento desde Miguel Ángel Montalvo Vásconez (1868?–1933) hasta Bayardo Ulloa Enríquez (n. 1953). Ilustrado con reproducciones de retratos fotográficos de los autores y carátulas de sus obras.

- 3) Guerrero Blum, Edwing, 2001, *Sociedades ecuatorianas de escritores y artistas*, 1ª ed., P.H. Ediciones, Quito, 173 págs.

Una historia sólidamente documentada y ricamente detallada de las sociedades literarias y artísticas en el país desde la Escuela de la Concordia o Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito (1791–1793) hasta la Pedrada Zurda (1978–1998). Incluye un caudal de datos bibliográficos novedosos y bienvenidos sobre sus publicaciones, especialmente revistas, detalles que difícilmente se encuentran en otra(s) fuente(s).

- 4) Hamerly, Michael T. (1940–), 2001, *Bibliography of Ecuadorian Bibliographies, 1881–2000*, Bibliography and reference series; 48, Secretariat, Seminar on the

7 Incluye, revisa y aumenta su sitio anterior: *Saraguro: bibliografía general*, 1999, <http://www.saraguro.org/bib.htm/>

Acquisition of Latin American Library Materials, Benson Latin American Collection, University of Texas at Austin, Austin, xi, 61 págs.

Registra y describe 252 bibliografías. También esboza la historia y el estado de la bibliografía en el país.

- 5) Hamerly, Michael T. (1940–), y Miguel Díaz Cueva (1919–), 2002, *Bibliography of Ecuadorian Bibliographies*, 2^a ed. Ecuadorian Studies/Estudios ecuatorianos 2, LASA Section on Ecuadorian Studies, <http://www.yachana.org/ecuatorianistas/>

Registra y describe 316 bibliografías. Desarrolla la historia de la bibliografía en el país con muchos más detalles que la primera edición.⁸

- 6) Itzstein, Gertraud, and Heiko Prümers, 1981, *Enführende Bibliographie zur Archäologie Ecuador (Bibliografía básica sobre la arqueología del Ecuador)*, Bonner Amerikanistische Studien-Bonn Americanist Studies-Estudios americanistas de Bonn 8, Seminar für Völkerkunde der Universität Bonn, Bonn, 110 págs.

En alemán y español. Una lista de casi 1.200 estudios de y reportes arqueológicos sobre el período prehispánico publicados entre 1900 y 1980.

Nuevamente disponible en una versión aumentada en castellano empero solamente en línea: *Bibliografía básica sobre la arqueología del Ecuador*, 2005, Roswith Hartmann, Gertraud Itzstein, Denise Kuperschmidt, [y] Heiko Prümers. Bonner Amerikanistische Studien = Bonn Americanist Studies = Estudios americanistas de Bonn, 18. Bonn:

Förderverein Bonner Amerikanistische Studien, 183 págs. El URL es: <http://www.bas-bonn.de>

La nueva edición consiste de dos partes: “Primera parte, re-edición revisada de la edición de 1981, por Gertraud Itzstein & Heiko Prümers (BAS 8)” (págs. 5–68); y “Segunda parte, 2005, por Roswith Hartmann (BAS 18)” (págs. 69–183). La fecha de publicación más tardía para inclusión en la segunda parte fue 2001, el año del fallecimiento de Hartmann. Sin embargo, el número de fichas en BAS 18 es más que el doble de las en BAS 8.

- 7) *El Libro en Ecuador: estadísticas y datos del ISBN*. 2002–, Cámara Ecuatoriana del Libro, Núcleo Pichincha, 2003–, Quito.

Hubo al menos una entrega previa y pudiera haber habido otras, comenzando tan temprano como 1998, empero bajo otro título(s), tomando en cuenta que se comenzó a recopilar estadísticas de ISBN (número estándar internacional bibliográfica) desde 1997 en adelante. La edición para 2001, por ejemplo (no vista por el autor), se intitulaba: *Estadísticas: el libro en el Ecuador 2001* (Cámara Ecuatoriana del Libro, Núcleo Pichincha, 2002, Quito, 29 págs.).

Incluye descripciones de las obras editadas, organizadas por materias de acuerdo con el Sistema Universal Decimal. *El Libro en Ecuador* para 2003 (2004) lista las publicaciones de trece universidades además de editoriales particulares y públicas. Tiene un índice de autores e incluye un directorio de editoriales.

Estadísticas: el libro en el Ecuador 2001 describe 1378 publicaciones; *El Libro en Ecuador* para 2002 describe 1367 publicaciones; y *El Libro en Ecuador* para 2003, 1701 publicaciones.

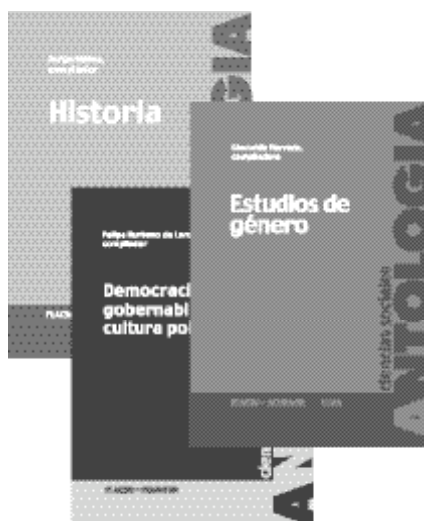
Es obvio, sin embargo, por los números de “editores” [sic] reportados por ciudades, que *El Libro en Ecuador* constituye un registro

8 Se ha preparado una 3^a ed. que se espera verá la luz en español en Quito próximamente.

más o menos completo solamente de impresos quiteños: de los 136 editoriales que reportaron sus publicaciones para 1987–2003, 113 (83,1%) se encontraban en Quito y solamente 7 (5,1 %) y 11 (3,8 %) en Cuenca y Guayaquil, respectivamente.

- 8) López Monsalve, Rodrigo, 2001, *Pequeña bibliografía de Antonio Lloret Bastidas*, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Núcleo del Azuay, Cuenca, 81 págs.

Bosqueja la vida y detalla las publicaciones del cuencano Antonio Lloret Bastidas (1920–2000), conocido por sus múltiples publicaciones sobre historia de literatura y estudios biográficos.



Más bibliografías ecuatorianas: las antologías de FLACSO

Michael T. Hamerly
John Carter Brown Library,
Brown University

En mi “Bibliografías ecuatorianas: estado actual y últimas publicaciones 2001-2005” (*Iconos* No. 25, mayo 2006) no tomé en cuenta a los ocho títulos publicados por FLACSO entre 2000 y 2004, uno de cuyos fines principales fue delinear y hacer resaltar los estudios que se publicaron en la década anterior sobre varios aspectos del pasado y temas contemporáneos ecuatorianos. Me refiero a la “Serie antología” de FLACSO. La responsabilidad por esta omisión, empero, no es del todo mía ya que las descripciones bibliográficas de dichas obras en los catálogos en línea de las redes internacionales de bibliotecas no incluyen el encabezamiento o como división de encabezamiento la palabra “bibliografía”. No logro entender el por qué. Los catalogadores responsables no nos han hecho ningún favor. Muy al contrario.

Me di cuenta de esta serie casi por casualidad. No del todo, porque desde luego de vez en cuando utilizo todos los bancos de datos a mis disposición para mantenerme más o

menos al tanto de las nuevas publicaciones sobre el Ecuador. Sin embargo, el hecho de no haberme percatado antes de la “Serie antología” de FLACSO subraya uno de los problemas principales que enfatice en “Bibliografías ecuatorianas: estado actual y últimas publicaciones”: la falta de control bibliográfico de publicaciones ecuatorianas y ecuatorianistas y al mismo tiempo la falta de publicidad adecuada de publicaciones nuevas y recientes.

Cada tomo en esta serie se abre con un ensayo introductorio en algunos de los cuales el autor o los autores esbozan el estado “actual” de la disciplina o campo de estudios que abarca la antología. El volumen inaugural en la serie, *Antología de estudios rurales* [1]¹, por ejemplo, incluye un magnífico ensayo preliminar “La investigación rural a finales de siglo” de su compilador Luciano Martínez Valle (págs. 9–52) que comenta informada e inteligentemente sobre la “Bibliografía temática” que sigue a continuación (págs. 55–66) y el estado de estudios del campo y campesinado ecuatoriano a fines del siglo pasado. Otro estudio introductorio que enriquece esta serie historiográficamente -además de bibliográficamente- es “Los estudios de género en el Ecuador: entre el conocimiento y el reconocimiento” de Gioconda Herrera Mosquera [5] (págs. 9–60). Además, Herrera Mosquera ha organizado su “Bibliografía temática” (págs. 61–75) por materias.

Por desdicha, no todos los compiladores han seguido el modelo brindado por Martínez Valle y Herrera Mosquera. Gabriela Pólit Dueñas, por ejemplo, discurre sobre los estudios incluidos en la *Antología de crítica literaria: hacia un nuevo siglo* [4] en su estudio introductorio, “Jirones en el tejido: una lectura de los aportes de la crítica literaria ecuatoriana en la última década” (págs. 9–28), mas

1 El número entre corchetes se refiere al orden en que salieron los libros que componen esta serie. Para las descripciones bibliográficas completas, vease la lista al final de este ensayo.

no dice casi nada sobre el estado de la crítica literaria. El estudio introductorio de Felipe Burbano de Lara, un sociólogo, “Democracia, cultura política y gobernabilidad: los estudios políticos en los años noventa” (págs. 13–63) analiza inteligente y perspicazmente los ensayos seleccionados por él para ser incluidos en la *Antología democracia, gobernabilidad y cultura política* [7], empero sólo comenta sobre el estado de los estudios políticos en los años noventa en el Ecuador *en passant*. Además, su “Bibliografía ecuatoriana” (págs. 65–80) casi no toma en cuenta la producción de los ecuatorianistas en inglés, francés, y en otros idiomas extranjeros sobre la problemática del país durante la década pasada, incluyendo su cuasi ingobernabilidad.

El supuesto estudio introductorio de Andrés Guerrero, “El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquía y transcritura” (págs. 9–60) ni siquiera es un estudio introductorio. Es simplemente otro de los aportes -por cierto, brillante y provocativo- a la antología compilada por Guerrero sobre etnias en el país [3].

Algunas de las introducciones incluyen una bibliografía propia, otras no, empero todas son seguidas por una “Bibliografía temática” con la excepción del último título en la serie, *Antología economía ecuatoriana* [sic] (8), que coloca la bibliografía temática al final del volumen. Algunas introducciones fueron escritas expresamente para esta serie, otras fueron recicladas. Quizás el mejor y al mismo tiempo el peor ejemplo de reciclaje es el estudio introductorio de Jorge Núñez Sánchez a la *Antología de historia* [2], “La actual historiografía ecuatoriana y ecuatorianista” (págs. 9–48). El ensayo introductorio de Núñez Sánchez apareció originalmente como *La historiografía ecuatoriana contemporánea (1970–1994)* (Quito: Ediciones de la FAU, 1994). Aunque sumamente interesante y bastante informativo, no solamente no fue puesto al día sino que carece del aparato

bibliográfico con que acompañó el original. De modo que el principiante o recién introducido a la materia se pierde. Algunos de los estudios citados esqueléticamente por Núñez Sánchez en su mal llamado estudio introductorio aparecen en la “Bibliografía temática” acompañante (págs. 51–61), mas no la mayoría. Sin embargo, no deja de ser útil la “Bibliografía temática” recopilada por Núñez Sánchez como una buena muestra de los artículos y libros que aparecieron sobre el pasado ecuatoriano en la década de los 1990. Hablo de una buena muestra porque está lejos de ser completa.

Desde el punto de vista bibliográfico, el estudio introductorio, “Antología de la economía ecuatoriana 1992–2003” (págs. 13–88) de Fander Falconí y Julio Oleas Montalvo es en cambio espléndido. No solamente introducen dichos autores los estudios que componen la antología sobre la economía [8] en un lenguaje claro e inteligible sino que Falconí, un economista, y Oleas Montalvo, un historiador económico, comentan sobre lo publicado durante la época cubierta. Además, una de las facetas que hace brillar su estudio introductorio es un examen del sector público (págs. 43–45) y de los centros de investigación académica y ONG (págs. 45–47) como editoriales de ensayos, reportes y fuentes económicas. Y su “Bibliografía temática” (págs. 295–405) abarca unas 1.500 citas. Lástima que Falconí y Oleas Montalvo no incluyeron la paginación en las citas, sobre todo en el caso de los materiales que aparecieron en otras antologías y revistas, una omisión de la que son culpables todos los editores de esta serie.

Solamente hace falta decir unas cuatro palabras sobre el estudio introductorio de Simón Pachano, “Ciudadanía e identidad” (págs. 13–63). Por lo general me agradan los escritos de Pachano, menos en este caso. Es que el autor no introduce ni los ensayos que componen *Ciudadanía e identidad* [6] ni dice

mayor cosa sobre el estado de los estudios relacionados con el tema, ni muchos menos explica en la miscelánea en qué consiste su “Bibliografía temática” que, por demás, no parece ceñirse a un tema determinado. Tampoco se limita a estudios de la década de los 1990.

En resumidas cuentas, la “Serie antología” de FLACSO proporciona unas bibliografías más o menos útiles. Hubieran sido mucho más útiles si los compiladores hubiesen incluido la paginación en los casos de artículos y contribuciones a recopilaciones y agregado algunas palabras explicativas no solamente sobre los criterios de inclusión/exclusión sino también sobre el contenido de los estudios, cuyos títulos no son siempre auto-explicativos.

En orden cronológico, las “bibliografías temáticas” de la “Serie antología” de FLACSO son:

Estudios rurales: “Bibliografía temática” por Luciano Martínez Valle en *Antología de estudios rurales*, Luciano Martínez, compilador (Quito: FLACSO –Ecuador, ILDIS, 2000), págs. 55–66.

Historia: “Bibliografía temática” por Jorge Núñez Sánchez en *Antología de historia*, Jorge Núñez, compilador (Quito: FLACSO-Ecuador, ILDIS, 2000), págs. 51–61. También disponible en línea (www.flacso.org.ec).

Estudios etnográficos: “Bibliografía temática” por Andrés Guerrero en *Etnicidades*, Andrés Guerrero, compilador (Quito: FLACSO-Ecuador, ILDIS, 2000), págs. 61–75. También disponible en línea (www.flacso.org.ec).

Crítica literaria: “Bibliografía temática” por Gabriela Pólit Dueñas en *Antología de crítica*

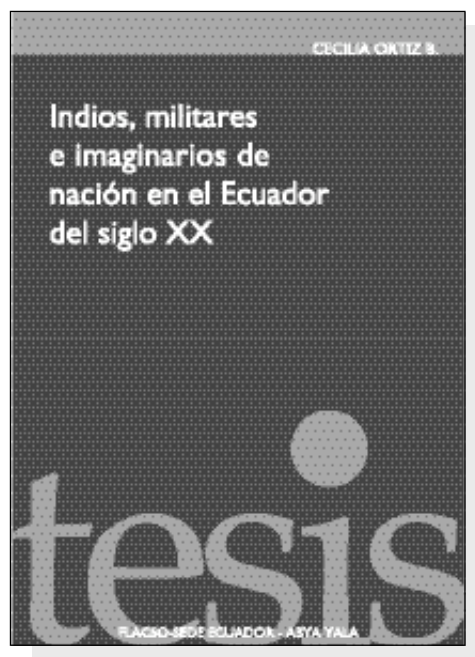
literaria: hacia un nuevo siglo, Gabriela Pólit Dueñas, compiladora (Quito: FLACSO, 2001), págs. 29–40. También disponible en línea (www.flacso.org.ec).

Mujer: “Bibliografía temática” por Gioconda Herrera Mosquera en *Antología de estudios de género*, Gioconda Herrera Mosquera, compiladora (Quito: FLACSO-Ecuador, ILDIS, 2001), págs. 61–75. También disponible en línea (www.flacso.org.ec).

Estudios antropológicos y políticos: “Bibliografía temática” por Simón Pachano en *Antología ciudadanía e identidad*, Simón Pachano, compilador (Quito: FLACSO-Ecuador, 2003), págs. 67–80. También disponible en línea (www.flacso.org.ec).

Estudios políticos: “Bibliografía temática” por Felipe Burbano de Lara *Antología democracia, gobernabilidad y cultura política*, Felipe Burbano de Lara, compilador (Quito: FLACSO, Sede Ecuador, 2003), págs. 83–106. También disponible en línea (www.flacso.org.ec).

Estudios económicos: “Bibliografía temática” por Fander Falconí, Julio Oleas Montalvo, María Cristina Vallejo y Rocío Cazar en *Antología economía ecuatoriana*, Fander Falconí y Julio Oleas Montalvo, compiladores (Quito: FLACSO-Ecuador, 2004), págs. 295–405.



Cecilia Ortiz

Indios, militares e imaginarios de nación en el Ecuador del siglo XX

Flacso-Ecuador, Abya-Yala, Serie Tesis, 2006

Los militares y la “democracia” de fines del S.XX

La sugestiva y documentada investigación de Cecilia Ortiz Batallas, publicada por FLACSO bajo el título “Indios, militares e imaginarios de nación en el Ecuador del siglo XX”, además de ser una novedosa combinación entre historia y ciencias políticas, suscita distintas y diversas reflexiones sobre los procesos desatados por los actores sociales y políticos a lo largo de la historia del Ecuador, particularmente en este último tramo. Motivado por este trabajo, me permito hacer una lectura libre acerca de algunos puntos del rol de los militares en los últimos años de democracia.

En los setenta

La profunda regionalización del país y la carencia de una clase hegemónica nacional,

entre otros elementos, convirtieron a los militares, sobre todo desde la revolución liberal, en columna vertebral del Estado y en árbitros de la intensa lucha de las facciones de las clases dirigentes regionales. De esta manera, las sucesivas dictaduras militares, que encarnaron en varias oportunidades proyectos nacionales de la “clase media”, las más de las veces de contenido social y otras anticomunistas, morigeraron la lucha política e impulsaron la modernización del Estado.

En los setenta, la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, en continuidad con la mejor tradición militar, encarnó un programa nacionalista y modernizador. A continuación, “los triunviros” no sólo que derrocaron al general “bombita” (como se conocía a Rodríguez Lara), sino que bajaron el perfil del proyecto de su antecesor e instauraron un régimen represivo, favorable a los grupos económicos más fuertes del país. Empero, uno y otros profundizaron la vigencia del modelo de sustitución de importaciones que garantizaba el rol directivo del Estado en el manejo de la economía. Uno y otros aplicaron medidas en beneficio de la institución. Verbigracia, de esta época datan las regalías del petróleo para el presupuesto de defensa, la renovación del parque militar, el mejoramiento sustancial de la infraestructura de los cuarteles, los comisariatos, la actividad empresarial, la fundación de institutos de estudios superiores como el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Ley de Seguridad Nacional, el fortalecimiento del Consejo de Seguridad Nacional, etc.

Para garantizar la continuidad del modelo económico y social, así como la presencia militar en el manejo de sitios claves del Estado y el mantenimiento de los “privilegios” institucionales logrados en los años de dictadura, bajo el argumento de la seguridad nacional, el triunvirato negoció favorablemente, entre otras cosas, que el Ministerio de Defensa fuese dirigido por un militar de alto

rango en servicio pasivo y que delegados de FF. AA se ubicaran en organismos directivos colegiados claves del aparato estatal.

De otra parte, como consecuencia del obvio desgaste del ejercicio del gobierno, las Fuerzas Armadas obtuvieron de su larga permanencia en el poder el descrédito (comprobado o no) de que entre sus miembros se habían generado “nuevos ricos” y que la institución estaba rodeada por una serie de privilegios. Esto, más el rostro represivo que adquirió la dictadura en su último periodo, causó el deterioro de su imagen ante la colectividad. Además, en el ámbito interno su nivel profesional disminuyó debido a que buen número de sus mejores cuadros ocupó cargos en toda la administración pública, en detrimento de sus funciones específicas en los cuarteles. De esta manera, los militares iniciaron el periodo democrático, desprestigiados a lo externo y débiles a lo interno.

De vuelta a los cuarteles

Con seguridad, después del ejercicio del poder y de constatar el deterioro alcanzado, las Fuerzas Armadas en general, y el Ejército en particular, se dedicaron a levantar su nivel profesional. Desde 1979 parecería que éste ha sido un objetivo esencial de la institución castrense. La formación de sus integrantes fue seguramente la preocupación central de los mandos. Se elevaron los requisitos y el nivel académico en las escuelas de formación de cadetes y en las escuelas de guerra de oficiales; en ellas, a más de lo estrictamente profesional, se integraron materias concernientes a formación geopolítica, social y económica.

Como complemento a las escuelas, los oficiales tuvieron la oportunidad de realizar especializaciones, becas y viajes de estudio dentro y fuera del país. Instituciones educativas como el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Escuela Politécnica del Ejército cumplieron un rol destacado en todo este esfuerzo.

En los años noventa, los resultados de este proceso a lo externo han redundado en el prestigio institucional. Las FFAA, particularmente el Ejército, han exhibido oficiales con otro discurso y con mejor formación que sus pares de otras décadas, por lo que su integración a la vida social y académica en todo tipo de foros se ha visto con simpatía.

En lo interno, este proceso ha repercutido en el fortalecimiento profesional e institucional. En los noventa las FFAA elaboraron evaluaciones, diseñaron escenarios y mapas estratégicos institucionales y del país, lo que las llevó a reclamar al Estado, a la sociedad y a los políticos la necesidad urgente de forjar un proyecto nacional de largo alcance.

FFAA y desarrollo

En los años ochenta y noventa las FFAA se acercaron a los indígenas y en general a los sectores más necesitados del país, sobre todo en las zonas rurales, bajo un esquema paternalista y asistencialista. Estas operaciones, entendidas como de acción cívica o de apoyo al desarrollo, han sido amparadas constitucionalmente, e internamente pueden explicarse como “acciones de inteligencia” inspiradas en viejas concepciones anticomunistas, que se realizan con la finalidad de frenar cualquier movimiento subversivo.

Sin embargo, este contacto con el pueblo repercutió en una mayor sensibilización de buena cantidad de oficiales respecto de las necesidades de la comunidad, lo que al mismo tiempo despertó simpatías populares por la institución armada. Esto de alguna manera podría explicar también el prestigio alcanzado por los militares en los noventa y la cada vez mayor convicción y necesidad política que tuvieron oficiales activos y retirados de participar en la vida política del país, en el escenario de la democracia formal.

FFAA y política en los ochenta y noventa

La presencia de las FFAA siempre ha sido gravitante en la política nacional. En los ochenta, aunque con un bajo perfil en relación a décadas anteriores, estuvieron presentes en la cultura del “golpe de estado”, por inspiración propia de los miembros de la institución, y en la práctica de “golpear a la puerta de los cuarteles” por instigación de los sectores civiles. Fue en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), cuando la posibilidad de un golpe de estado militar estuvo más cercana, por acción del levantamiento del Comandante de la Fuerza Aérea, general Frank Vargas Pazzos, y por el posterior apresamiento del presidente Febres-Cordero, en la base de Taura. Tales intentonas no desbordaron el marco jurídico debido a la falta de apoyo interno que tuvo el general Vargas y a la inexistencia de condiciones políticas favorables, tanto en el país cuanto en los Estados Unidos.

No obstante, en este mismo gobierno se utilizaron militares para sofocar situaciones de seguridad interna. Ciertamente, la institución se vio comprometida en acciones anti-subversivas contra el movimiento armado de origen izquierdista “Alfaro Vive Carajo”. En estos hechos, la Fuerza Naval empañó su imagen al comprobársele la tortura y asesinato de la profesora Consuelo Benavides, cuyo juicio de esclarecimiento, en los años noventa, llegó hasta cortes internacionales.

En los noventa, la fiebre privatizadora impulsada por algunos gobiernos, especialmente por el de Sixto Durán Ballén, llevó nuevamente a escena a las FFAA. Según versiones inéditas, la presencia de la institución militar en varios organismos de decisión impidió o atenuó la aplicación de procesos privatizadores poco claros. Con esto creció el prestigio de la entidad entre los sectores civiles nacionalistas.

Como en anteriores experiencias históricas, pero sin una definición hacia la constitu-

ción de un gobierno militar, el derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram (Febrero de 1998), colocó a las FFAA en condición de árbitro y juez del conflicto de todos los sectores políticos del país. Sin duda, la decisión de la presidencia a favor del doctor Fabián Alarcón pasó por el visto bueno del despacho castrense y por la venia de la embajada norteamericana.

En Febrero de 1997, como nunca antes, se dieron las condiciones internas para que un líder militar tomase el poder con apoyo popular. Sin embargo, como nunca antes también, el apoyo norteamericano a este tipo de salida fue negativo. Por esto los caudillos militares deben retirarse para ejercer el derecho democrático de participar como candidatos para cualquier puesto en las funciones legislativa o ejecutiva del Estado.

Los militares y el fin de la Guerra Fría

El derrumbe del socialismo soviético dio lugar a la extinción del enfrentamiento. Este hecho hizo que desapareciera el tácito alineamiento del Ecuador a favor de "Occidente" y que se eliminara de escena al comunismo como enemigo. Este hecho logró que las FFAA cuestionasen la vigencia de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, profundamente anticomunista. Para las nuevas generaciones de oficiales dicha doctrina no corresponde más a la realidad nacional; para ellos, han surgido nuevas concepciones de seguridad, por las cuales se entiende que las condiciones que generan inseguridad son el hambre, el analfabetismo, la injusticia social, etc. Con esta concepción el perfil del nuevo oficial se dota de contornos avanzados y democráticos.

Empero, a pesar de esta constatación, los militares no han realizado serios esfuerzos por concretar el diseño de la nueva doctrina de seguridad, menos aún por elaborar una nueva metodología de seguridad y, por tanto, una nueva ley de seguridad nacional.

En la práctica se estudia y se aplica la vieja doctrina y metodología de la seguridad, por lo que los criterios democráticos de los nuevos conceptos de seguridad, quedan simplemente en el plano de la retórica.

FFAA y globalización

La firma de la paz con el Perú y la reducción de la importancia de los estados en el marco de la globalización, determinarían que los ejércitos buscasen nuevos roles hacia el futuro. La concepción norteamericana respecto al papel de las FFAA continentales en este período de paz y de fin de la Guerra Fría, apuntaría hacia una reducción de personal y de presupuesto y hacia una reorientación a la solución de problemas de seguridad interna, entre los que se destaca el control del narcotráfico y el combate al terrorismo. En tal sentido, los militares pasarían a cumplir funciones que le son específicas a la policía. La modernización asigna nuevos roles al Estado; el viejo modelo intervencionista del Estado está siendo eliminado paulatinamente. Con esto, ¿acaso las FFAA —en tanto columna vertebral del Estado— van perdiendo fuerza?

Éstas son varias de las circunstancias que posiblemente indican un momento de recambios en la direccionalidad del país y en el inicio de nuevos roles de actores que han sido fundamentales en la conformación del país del siglo XX. Pero surge una pregunta: ¿qué funciones tendrán las FFAA para este siglo? Por el momento, las mismas que cumplieron en el siglo XX, mientras subsista el viejo Estado rico, desinstitucionalizado y corrupto, coopado por las corporaciones que lo succionan, sostienen y dan vida, por interés. ¿Por qué? Porque las FF. AA son una de ellas.

Milton Luna Tamayo, historiador.

Sociedad rural, comunidades y actividad minera en el Perú

A propósito del libro: "Te quiero pero no. Minería, desarrollo y poblaciones locales" de Roxana Barrantes, Patricia Zárate y Anahí Durand, Instituto de Estudios Peruanos-OXFAM, Colección Mínima, Lima 2005, 123 págs.

Durante la década pasada, el área que ocupaba la minería se multiplicó por cinco, provocando que más de la mitad de comunidades campesinas que contaban con títulos de propiedad se encontraran de pronto en zonas de influencia minera. A finales de 1999, los derechos mineros vigentes ocupaban el 12% del territorio nacional, consolidándose la presencia minera no solamente en zonas donde tradicionalmente existió, sino que se expandió hacia otros lugares donde la actividad era reducida; es el caso de regiones andinas como Ancash, Cajamarca, Apurímac y La Libertad.

Según el más reciente censo agrario (CENAGRO de 1994), en el Perú hay registradas 5.680 comunidades campesinas. El 70.5% están localizadas en la sierra centro sur del país, en los departamentos de Apurímac (7.7%), Ayacucho (8%), Cuzco (16.3), Huancavelica (8.8%), Junín (7.3%) y Puno (22.4%). Según datos del mismo censo, las comunidades ocupan una superficie de 14.171,967 hectáreas. Si a ésta extensión se le suma la de las comunidades nativas, juntas concentran el 55% de la superficie agropecuaria del país, llegando a albergar a casi la totalidad de la población rural peruana.

El mundo rural y en particular las comunidades, no solamente han venido sufriendo cambios en torno a la normatividad que las protegía, sino también como producto de sus propias dinámicas de cambio interno y del entorno.

Sin embargo, aún mantienen algunas de sus funciones tradicionales como la gestión

de su territorio de acuerdo a las ciertas facultadas que les permiten regular el acceso, utilización o control de los recursos naturales de uso individual y colectivo, el procesamiento y comando de conflictos internos, el mantenimiento de algunas formas de autogobierno y representación externa en su relación con el Estado y terceros, entre otras.

Una de las características fundamentales de la economía peruana ha sido su abundancia relativa de recursos naturales, lo que ha determinado un patrón de inserción de la economía peruana en el mercado internacional sobre la base de las ventajas comparativas. A lo largo de su vida republicana, el Perú ha aprovechado su *facilidad natural* para exportar diversos productos e importar los que presentaban ventajas: guano, algodón, azúcar y minerales.

La minería con fines económicos y de exportación tiene larga data en el Perú. Desde el siglo XVI hasta entrado el siglo XIX la plata fue uno de los principales productos de exportación. En el siglo XX lo fue el cobre y más recientemente el oro. De hecho, la minería impulsó la integración de la agricultura serrana a los mercados locales y regionales. En tal sentido, las relaciones entre campesinado y minería siempre han sido complejas y señaladas por conflictos.

Según el reporte "Vigilancia de las industrias extractivas", del mes de abril del 2006, el Valor de la Producción Minera (VPM) durante el año 2005 fue de 10.703 millones de dólares, superior en 32% al VPM del año 2004. Ello se debió fundamentalmente al incremento progresivo de las cotizaciones en el precio de los metales en el mercado mundial.

Así, los principales metales, por su contribución al VPM del 2005, han sido: el cobre (31%), oro (31%), molibdeno (12%), zinc (9%) y plata (8%). Para este mismo reporte, el 60% del VPM estuvo concentrado en cuatro grandes empresas: Southern (19%), Antamina (19%), Yanacocha (16%) y Barrick

(6%). En cuanto a zonas de producción, el 66% del VPM se ha extraído de cinco regiones: Ancash (23%), Cajamarca (16%), Moquegua (10%), Tacna (10%) y La Libertad (7%).

El repunte de la minería peruana desde los últimos años del siglo XX en adelante respondió a un conjunto de factores: el inicio de una nueva fase en la evolución de los precios de los metales en el mercado global; la neutralización de la violencia política vivida en el país entre principios de los ochenta y entrado los noventa y el nuevo marco legal impulsado por el gobierno del presidente Fujimori. En general, este nuevo marco normativo tuvo como objeto desaparecer la predominancia de la actividad estatal en el sector y promover la presencia de capital extranjero en el mismo.

Además de los cambios en las leyes y normas, también fueron establecidos un conjunto de incentivos a los inversionistas del sector como: estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa, deducción de tributos que inciden en la producción, deducción de impuestos por inversión en infraestructura de servicios públicos deducibles de la renta neta, no discriminación en materia cambiaria y otras medidas de política económica respecto a inversionistas nacionales u a otros sectores de la actividad económica, libertad de remitir utilidades, dividendos y recursos financieros y libre disponibilidad de moneda extranjera, entre otros.

Actualmente, Perú es el segundo productor mundial de plata en el mundo, el tercero de estaño, el cuarto de plomo y zinc, el quinto de cobre y el séptimo de oro. Antes de realizarse el proyecto de gas de Camisea, la mina Antamina en Ancash constituyó la mayor inversión del sector, la misma que sobrepasó los 2.000 millones de dólares. En proyección, se calcula que entre 1992 y 2007 el total de inversión peruana en minería, bordearía los 9.000 millones de dólares.

En términos macroeconómicos, la minería en el Perú viene aportando aproximadamente el 6% del PBI nacional, contribuye con el 50% de las divisas que ingresan al país y explica el 15% de la inversión extranjera directa de la última década.

Conflictividad social, evolución y tendencias

Según las cifras del reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de los conflictos entre poblaciones, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, contabiliza en mayo de 2006 un total de 77 conflictos, de los cuales cuatro (5%) permanecen activos y 73 (95%) en estado de latencia. Un análisis más detallado de los conflictos reportados muestra que el 49% de ellos tiene que ver con el cuestionamiento de las autoridades locales, el 17% por temas de afectación ambiental, 17% por disputas entre comunidades y 9% por demandas gremiales. Cabe mencionar que el mismo reporte muestra que el 74% de los conflictos reportados han ocurrido en áreas rurales, de los cuales 90% en zonas caracterizadas como de extrema pobreza. En promedio, siguiendo la secuencia de los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo, el número promedio de conflictos sociales activos en los últimos cuatro años ha sido de 65.

Según algunos autores, la activación de la protesta social y el conflicto en esta última década, se han debido a la concurrencia de múltiples factores, entre ellos: los efectos producidos por la implantación del modelo neoliberal y las transformaciones estructurales que llevó dicha implantación en términos de nuevas configuraciones económicas, sociales, políticas y culturales. La protesta social y el incremento sostenido de los conflictos a niveles regionales y locales responden a las reacciones, articuladas o no, frente a la hegemonía que constituye el nuevo modelo en el que son las fuerzas del mercado las que marcan la

pauta. Si bien la protesta y el conflicto social cumplen funciones corrosivas dentro del sistema social, también expresan la constitución, en movimiento, de nuevos actores sociales, con sus propios niveles de organización, articulación y propuesta alternativa.

La llamada “nueva conflictividad social” en el Perú se sitúa históricamente luego de un proceso complejo y dramático vivido a lo largo de toda la década del ochenta y entrada la década del noventa. La guerra interna contra el Estado en ese lapso, entre los grupos violentistas de Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac Amaru, tuvo como saldo trágico 69.280 muertos y desaparecidos. Si bien este conflicto afectó casi a la totalidad de la extensión del país, tuvo especial incidencia en las zonas geográficas que mostraban los mayores niveles de exclusión: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Huanuco. El 55% de las víctimas mortales de esta guerra tenía como principal actividad la agropecuaria, el 75% como lengua materna el quechua y el 68% tenía un nivel de instrucción primaria o ninguno.

Neutralizada la guerra interna, gracias a la captura de los principales cabecillas de ambos grupos armados, la conflictividad social en el Perú no cesó, sino que tomó otros causes, tal vez no con la virulencia de esas épocas pero, en general, la acción colectiva de protesta y enfrentamiento en el plano social y político no se paralizó. Todo lo contrario. Varias hipótesis se han tejido para explicar este nuevo escenario. Por ejemplo: la posible continuidad entre la matriz de violencia política desarrollada a partir de la década de los ochenta; la pobreza como caldo de cultivo para la agudización de la conflictividad social; la existencia y uso de mecanismos formales de participación que pueden estar sirviendo como vehículos de las exigencias sociales; el debilitamiento de los partidos políticos nacionales y su desplazamiento a las zonas más alejadas del centro del país y la presencia, en su defecto,

de operadores políticos independientes que abonan a favor de la inorganicidad política.

Lo planteado se expresa justamente en las características que durante esta última década han adquirido los conflictos sociales en el país: enfrentamientos focalizados, sin marcos organizativos, ni unidad en sus objetivos, marcados por el estallido imprevisible y disperso de la acción colectiva, sustentados más en el nivel de violencia desplegado que en su organicidad y extensión. Con relativamente bajos costos de transacción, mínimo aparato organizativo y altos grados de violencia, la protesta social actual orienta la acción hacia el cumplimiento de resultados, sean estos mínimos o de gran alcance.

Un campo en el que la conflictividad social se ha visto marcadamente incrementada en los últimos cinco años ha sido el que relaciona la actividad minera y el entorno social. Si bien no hay registros formales, tomando los reportes de la Defensoría del Pueblo, en promedio, entre el año 2005 y lo que va del 2006, hubo 4 episodios mensuales de conflictos activos y latentes. Las zonas de mayor incidencia fueron: Ancash, Cajamarca, Cuzco y Piura. Todos ellos expresados por el enfrentamiento abierto entre actores locales (comunidades campesinas, organizaciones sociales locales) y empresas mineras asentadas, en fase de producción o de exploración.

Los conflictos de esta naturaleza si bien han sido los más activos en el escenario social peruano, no han sido aún estudiados sistemáticamente, salvo algunas investigaciones de caso de las que se pueden extraer información interesante sobre las percepciones de los actores, las causas a las que se atribuyen la activación de dichos conflictos y sus consecuencias.

En un reciente documento de la Defensoría del Pueblo se plantea que el incremento de la actividad minera en los últimos diez años y su puesta en marcha en zonas donde los índices de pobreza son alarmantes, configuran el marco general desde donde

habría que entender los conflictos en este sector. Una de las características centrales de este tipo de conflictos es la alta polarización de las posiciones de las comunidades, en donde se juntan las necesidades largamente postergadas y la acción política de determinados grupos de interés.

Muchas veces, dichos grupos de interés rechazan el diálogo como un medio para llegar a acuerdos entre las partes. Entre las causas puntuales que dicho informe identifica, están:

- Problemas ambientales
- Situación de pobreza y extrema desigualdad social
- La percepción sobre el rol de la autoridad pública
- Existencia de intereses diversos y débil nivel de gobernabilidad local

Otras entradas van de lo más general hacia lo específico, planteando que la falla estructural viene desde la instauración de un modelo extractivo que no genera desarrollo, sino círculos viciosos al reforzar una economía de carácter primario y frenar la diversificación, promoviendo de este modo una estructura económica básicamente rentista y no productora de progreso. Respecto a los conflictos en sí, el planteamiento pasa por el lado más institucional, estableciendo la necesidad de un rol más definido del Estado y la constitución de una instancia especial y autónoma que dirima en casos de conflicto ambiental

Para el colectivo Muqui, que agrupa a un conjunto de ONGs vinculadas al trabajo de promoción del desarrollo en zonas impactadas por la minería, los conflictos en este campo se explican por: los impactos ambientales, el acumulado de experiencias negativas que las comunidades tienen respecto a la actividad minera, y la débil y muchas veces inexistente presencia del Estado. A ello se suma la expectativa generada por la presencia mine-

ra, que puede operar como un factor dinamizador del crecimiento de la oferta de bienes y servicios locales, vinculados a su fuerza laboral, pero que no necesariamente incluye a la amplia población desempleada de la zona, pues el alto componente tecnológico y el débil eslabonamiento productivo generado no permiten sinergias locales, por el contrario, pueden generar alteraciones nocivas en el costo de vida de las localidades en donde la minería se asienta.

De otro lado, en el estudio reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), *Té quiero pero no. Minería, desarrollo y poblaciones locales*, que analiza los casos de conflicto en Cajamarca, alrededor de la mina Yanacocha y Ancash, alrededor de Antamina, plantea que los detonadores de la protesta social respecto a la presencia minera se deben a las condiciones de extrema pobreza de las comunidades del entorno y las expectativas que de esta situación se derivan, a la débil presencia del Estado para prevenir y dirimir los conflictos que se suscitan, a las percepciones sobre el impacto ambiental, sea real o potencial, a serías dificultades de comunicación, transparencia y nivel de conocimiento respecto al manejo de los fondos orientados a proyectos de desarrollo social, que son comprometidos directamente con las empresas por la vía de la negociación. Aquí el panorama se agudiza, al tratarse del destino y resultados derivados de las inversiones provenientes del canon minero, monto que se paga sobre la base del impuesto a la renta de tercera categoría generada por la empresa minera.

A los problemas mencionados por el estudio del IEP, pueden sumarse los detectados por la investigación realizada por el Banco Mundial sobre la dimensión social de la minería en el Perú: expectativas insatisfechas de empleo y beneficios, impactos de la adquisición de tierras y reasentamientos, falta o ausencia de comunicación entre empresas, comunidades y Estado, impactos sociales

(inseguridad ciudadana, prostitución, etc.), débil cumplimiento de la normatividad, y percepción de la minería como actividad contaminante que afecta fundamentalmente al recurso hídrico, impactando directamente sobre el ecosistema y la salud de las personas.

Frente a este complicado panorama, el estudio del Banco Mundial propone: promover y mejorar el diálogo entre las partes interesadas, determinar qué compromisos pueden cumplirse y cuáles no, implementar estrategias de comunicación y difusión sobre las implicancias y beneficios de la actividad minera, desarrollar lineamientos específicos que normen la adquisición de tierras y los procesos de reasentamiento, crear capacidades locales articuladas al ciclo de vida del proyecto minero, con una visión de sostenibilidad.

De esta manera, lo que se tiene es un campo altamente complejo donde no hay una sola causa que desencadena los conflictos entre la minería y su entorno social, sino que concurren varias que pueden variar en el tiempo y según las circunstancias. Trabajar en este escenario implica tenerlas en cuenta y siempre ir validando el diagnóstico y análisis de los entornos para poder orientar eficazmente el abordaje.

César Bedoya García



Patricio Bravomalo Molina, 2002, **Homosexualidades. Plumas, maricones y tortilleras en el Ecuador del siglo XXI,**

Fundación de desarrollo humano integral CAUSANA, FRAKTAL, Ecuador:

La homosexualidad en Ecuador es un tema del cual poco o nada se ha escrito, y aún se mantiene una imagen difusa y oscura de estas identidades. En el imaginario cotidiano, en las publicaciones de prensa, en las relaciones de familia y entre amigos, los apelativos se reproducen sobre imágenes de transgresión del género, que avalizan la pena y la injuria en primera instancia; imágenes que se han volcado a formar parte de las prácticas y formas de imaginar la identidad homosexual incluso dentro de los mismos grupos homosexuales. En este sentido, el texto de Patricio Bravomalo se convierte en una puerta a la reflexión no sólo para evidenciar y visibilizar las identidades homosexuales, sino también para cuestionar las formas de identificación que se muestran en estos momentos y proponer una reflexión autocrítica respecto de las mismas.

Bravomalo nos describe las homosexualidades en Ecuador para hablarnos de algunos

elementos que se deben tener en cuenta al referirse a ellas: la historia y el contexto en que circulan, las formas de identificación y auto representación de las poblaciones GLBTT (gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transgénero) y, finalmente, un campo de reflexión sobre la posición política de los movimientos y la conciencia de las poblaciones.

Las homosexualidades -en plural- a las que refiere el autor se constituyen sobre ideas ya concebidas a lo largo de la historia de la humanidad (historia de la sexualidad): son vistas a veces como herencia perversa de enfermedad, negada y discriminada, pero que a la vez se mezclan y adquieren un sentido en escenarios y contextos específicos (el mercado, la migración, la tecnología), donde la dinámica de los actores va constituyendo nuevos instrumentos que modelan sentidos particulares y colectivos de las identidades sexuales en el país. No se asume que todas culminen como un mismo modelo, sino que la particularidad y la efectividad individual hacen posible que estas se aglutinen con distintas formas y que lleven a configurar el complejo entramado cultural y social. Así, no es suficiente hablar de homosexualidad cuando detrás de ella están señaladas otras formas negadas (abyectas) de identidad (las lesbianas, los travestis, los transexuales y otras aún no definidas en la sexualidad). Así mismo, no se puede asumir que los procesos hayan sido homogéneos y que hayan culminado en un final feliz; al contrario, se debe ubicar que tales procesos han sido intermitentes en contraposición a la herencia moralista del país, en conjunción con el esfuerzo de movimientos sociales, ONG's, y la cultura del consumo del siglo XXI. De esta manera, se entiende que las homosexualidades se despliegan a través de una latente experiencia de crisis y transformación que lleva, aún en los últimos años del nuevo siglo, a pensar sobre la militancia y la validez política de las nuevas ideas *queer* y la encrucijada de la falta de conciencia social sobre de las poblaciones GLBTT.

Otro aspecto interesante es como estas identidades hacen posible la formación de subculturas del juego y la representación política en el contexto de las dinámicas cotidianas, y que frecuentemente mantienen rasgos discriminatorios entre una u otra, como por ejemplo el lenguaje usado: "plumas", "tortilleras", "marimachos", "locas", que hacen que las poblaciones se distingan unas de otras, pero a la vez hace que se identifique un sistema de violencia y reproducción social que se apega a los estereotipos masculino-femenino. De esta manera, se distingue que las siglas GLBTT son un apelativo a las poblaciones que incluyen sus formas de identificación y agrupación que el mundo heteronormativo ha otorgado. En ese sentido, las lesbianas son calificadas como "butch" o "marimacho", al transgredir el sentido femenino de correspondencia de género. De la misma forma "loca", "travesti", son apelativos que designan la fortaleza con que el mundo de las homosexualidades busca el reconocimiento sobre la exacerbación de los actos contrarios del género, para reivindicar y subrayar la transgresión del contexto, mas se entiende que lo que esta en juego es la posibilidad de poder ser algo distinto y reconocido sin tener que recurrir al sistema normativo heterosexual. Y es que el lenguaje, los espacios de circulación y las prácticas de estas poblaciones hacen posible identificar formas de discriminación que apelan a la moral, las buenas maneras de mostrarse en público y el auto reconocimiento. En esta línea de análisis, el autor evidencia que la promiscuidad y los juegos sexuales por Internet son más frecuentes en gays que en lesbianas; lo que a su vez nos explica que las prácticas en relación a los espacios resaltan las mismas formas de rescate moral sobre las cuales se sustenta la validez de lo masculino (cortejo-poder) y lo femenino (sumisión-discreción) en la construcción de las representaciones y las identidades.

Un aspecto importante en la identificación de la homosexualidad es la conciencia

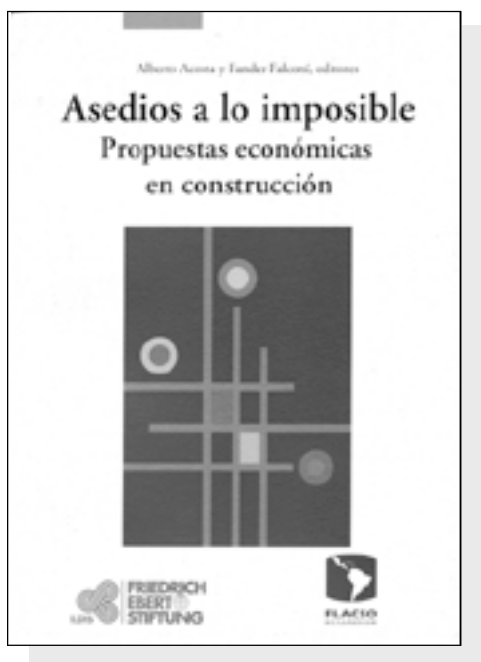
del placer y la culpa que se constituyen como elementos identificatorios de las prácticas de afecto, amor y sexo. Por un lado, se explica que los sentidos del afecto y el placer heredan una moral normativa que secunda las aficiones del amor heterosexual y consecuentemente niegan y castigan cualquier otra forma que no le corresponda. En este sentido, al entender que la homosexualidad es una práctica que se opone a la normativa sexual del sistema, resulta en un gesto de dolencia y auto culpa para el individuo que se enfrenta al acto y el deseo por otro hombre (homosexual) o una mujer (lesbiana). Detrás del placer y la culpa se encuentra la homofobia y la misoginia, que en la negación del primero reconstruye un sentido moral de culpabilidad y rechazo del mismo sujeto. Éste enfrenta más dolor mientras más se niega a identificar su deseo. Así, los actos se explican en las formas negadas de un placer negado, soslayado en la culpa, y reiterado sobre un intento constante por alcanzar un imaginario que se ha instrumentalizado en el cuerpo para negar constantemente, y seguir buscando un ideal según lo señala la norma social. Así se explica que las limitaciones en reconocer otras formas de sexualidad, otros afectos y reconocer al otro homosexual tenga sentido en un escenario que sigue discriminando con el lenguaje y las mismas prácticas, ya que lo que produce sigue siendo consecuencia de un mismo apego de “acto placentero -placeres y afectos- con el discurso represivo” (como las define el autor).

A través de este contenido, el autor también critica la posición desde la cual se construye la identificación de las poblaciones GLBTT. Aún es necesario reflexionar sobre las formas y los imaginarios donde se entiende y se expresan estas subculturas. Como se ha visto, la constitución de los imaginarios del género en torno a lo masculino-femenino de las distintas poblaciones no ha cambiado en referencia al modelo heteronormativo, lo cual ha mantenido la discriminación y las

posibilidades de reconocimiento de otras formas de sexualidad (no definidas-no identificadas). Consecuentemente, lo que hace que el pensamiento y las formas de entenderse entre estas poblaciones sigan circulando sin conciencia, y que se muevan hacia una política de la diferencia sin ni siquiera mirar al otro homosexual, tratando de naturalizar la homosexualidad sobre los mismos valores heterosexuales. A su vez, señala la necesidad de renovar el sentido político de los movimientos sociales, ya que se muestra una falta de interés sobre estos y por ende se invisibiliza su intervención. Al respecto, el autor señala que es más frecuente encontrar afiliados en los espacios de discoteca antes que en las acciones en pro de los derechos (por ejemplo, en una marcha del orgullo gay).

Antes de terminar, quiero señalar el valor crítico y el aporte que hace Bravomalo a la academia desde su posición de militante. En sus escritos nos trae a colación un mundo paralelo que vive y enfrenta momentos de crisis y transformación como el mismo lo dice, pero que a la vez nos muestra cómo los escenarios de las homosexualidades pueden igualmente recurrir en culpas y estereotipos sustentados en un sentido heteronormativo que aún vivimos a diario, que no nos permite imaginar un despliegue distinto de nuestras sexualidades, y que nos mantiene atados a los modelos masculino y femenino. En este sentido, es acertada su crítica respecto a la conciencia de la identidad. Posiblemente es necesario explorar más nuestras conciencias para desde ahí poder explorar más sobre los conflictos y momentos críticos de coyuntura que se viven actualmente en el país. Las reflexiones sobre la sexualidad aún no se han culminado y en nuestro país todavía vivimos un sentido conservador de la misma. Es posible que madurar la propuesta de Bravomalo ayude a pensar y ubicar mejor nuestro poder y nuestros sentidos sobre el placer.

Patricio Aguirre Arauz



Alberto Acosta y Fander Falconí, editores, **Asedios a lo imposible. Propuestas económicas en construcción**, FLACSO-Sede Ecuador, ILDIS, Friedrich Ebert Stiftung, Quito, 2005, 269 págs.

Los editores y autores de *Asedios a lo imposible* merecen felicitaciones por haberse arriesgado a proponer algo novedoso; no sólo por criticar las teorías y prácticas económicas dominantes de los últimos 20 años, sino también por presentar posibles políticas alternativas para promover un verdadero proceso de desarrollo nacional. Aunque el libro contiene algunas sugerencias sobre políticas específicas, los autores se limitan a delinear rasgos generales de iniciativas alternativas; no ofrecen recetas. Las propuestas hechas están bien fundamentadas en la investigación y en la experiencia -los contribuyentes incluyen viceministros, ex-ministros de Estado, profesores jóvenes y académicos de carreras largas y distinguidas-.

En lo que sigue, primero resumo los temas principales del tomo, luego presento los apor-

tes principales de la edición, y finalmente me atrevo a proponer algunos temas importantes adicionales para un posible tomo II de *Asedios a lo imposible*.

Los temas que más atención reciben en este trabajo son: 1) políticas sociales, 2) deuda externa, y 3) política petrolera, temas que corren a través de varios de los capítulos. Las políticas sociales son consideradas en detalle en los trabajos de Alison Vásconez y Jeannette Sánchez, aparecen también en los aportes de Carlos Larrea y, en menor medida, en el de Carlos Marx Carrasco. Los cuatro analizan sistemáticamente las deficiencias notorias de las políticas neoliberales, para luego especificar sus recomendaciones con referencia a políticas alternativas sobre las cuales, con pocas variaciones, están de acuerdo. Señalan también la necesidad urgente de incrementar la cantidad y la calidad de la inversión en salud y educación o, en otras palabras, invertir en el desarrollo de las capacidades humanas. Así mismo, los cuatro están de acuerdo en la necesidad de reducir las desigualdades sociales, en la importancia de políticas para generar empleo, y otros temas relacionados.

Para promover el empleo, Sánchez sugiere, por ejemplo, que el Estado contrate a microempresarios a fin de abastecer de insumos y mano de obra a programas públicos. Es una política que ha sido exitosamente empleada por muchos países, tanto por gobiernos centrales como por gobiernos locales. Sin embargo, es una política que puede resultar imposible si se firma el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, ya que según los términos de los tratados ya firmados por los países sur y centro americanos, las empresas norteamericanas tienen el derecho de competir en condiciones de igualdad con las empresas nacionales en contratos otorgados por el Estado.

El tratamiento de la deuda externa aparece como enfoque principal o al menos como

parte de la discusión en la “Introducción” de Alberto Acosta y Fander Falconí, en el aporte de Rafael Correa, y especialmente, en el capítulo escrito por Oscar Ugarteche y Alberto Acosta (“Un tribunal internacional de arbitraje de deuda externa”). La cuestión de la política petrolera es mencionada en varios capítulos y especialmente considerada por Correa.

Además de los tres temas mencionados -lo social, la cuestión de la deuda, y las políticas petroleras- el tomo incluye ensayos sobre microfinanzas (Hugo Jácome), políticas con “cimientos ecológicos” (Fander Falconí), la creación de fondos de desarrollo (Pedro Páez), y la globalización a la luz de la lógica del capitalismo (Pablo Dávalos). Algunos capítulos se presentan detallados y concretos (e.g., Jácome, Ugarteche y Acosta); otros están elaborados en términos más bien teóricos y generales (e.g., Dávalos).

Casi todos los autores sitúan sus presentaciones en el contexto histórico del neoliberalismo. El lector, además de encontrar sugerencias sobre políticas alternativas, descubrirá análisis cuidadosos de los resultados verdaderamente destructivos de las políticas de ajuste seguidas por los gobiernos ecuatorianos durante las últimas dos décadas. Por ejemplo, cuadros sobre la evolución de la desigualdad urbana (p. 54), cambios en la distribución de la PEA (p. 56), tablas que resumen las políticas sociales de los últimos 20 años (pp. 47-51) y las propuestas del Consenso de Washington y sus aplicaciones en el Ecuador en contraste con políticas alternativas por sectores como lo social, tributario, financiero, etc. (pp. 160-164).

Correa, por su parte, resume los resultados de las políticas seguidas en una frase que representa la conclusión general del libro: “Ecuador prácticamente no ha crecido en los últimos tres lustros, la inequidad ha aumentado y el desempleo se ha duplicado en relación con las cifras de inicios de los años

noventa, a pesar de la masiva emigración de compatriotas ocurrida en los últimos años” (p. 69).

En lo concerniente a los aportes principales del tomo, en la descripción de los contenidos hice referencia a dos: la documentación y análisis de los fracasos del modelo económico aplicado desde los años 80, y una serie de recomendaciones bien fundadas que encuentran su eco en las propuestas del PNUD y de varios economistas distinguidos. Un tercer aporte se refiere a la manera en que el texto establece el carácter ideológico del pensamiento económico neoliberal y, en el ensayo teórico de Pablo Dávalos, el carácter ideológico del pensamiento económico neoclásico. Esta desmitificación era necesaria porque, en los últimos años, los economistas neoliberales que trabajan las instituciones financieras internacionales y sus aliados locales, han presentado a su versión de las políticas públicas como la única alternativa razonable, moderna y científica que existe.

En contraste, varios autores del *Asedio a lo imposible* demuestran, de diferentes maneras, que las políticas neoliberales representan la visión, los valores y los intereses de los que detentan el poder a nivel nacional e internacional: éstas son producto de las relaciones de poder y de la correlación de fuerzas sociales de la época histórica en que vivimos. Son conceptos ideológicos, no científicos, por lo que otras políticas sí son posibles; todo depende de la voluntad política del país, expresada en sus gobiernos (e.g., Correa, p. 72). La posibilidad de elaborar estas otras políticas fue demostrada por el mismo Correa quien, como Ministro de Economía, logró cambiar la “Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal” (FEI-REP), de un instrumento que favorecía, sobre todo, a los tenedores de la deuda externa ecuatoriana, a un mecanismo que benefició más a los intereses nacionales, como la inversión en salud y educación.

En el transcurso de la discusión de los aportes, como cuarto ítem, se destaca la noción de la deuda ecológica presentada por Falconí; y como quinto, la propuesta de la creación de un “tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana” presentada por Ugarteche y Acosta. Por cierto, la posibilidad de lograr resultados en estos dos campos es más difícil que los cambios en la legislación petrolera o en las políticas sociales, pues se refieren a cambios a nivel global. No obstante las propuestas relacionadas al medio ambiente y a la deuda son críticas.

Finalmente, y con referencia a un segundo tomo de *Aseños*, sugiero capítulos sobre los siguientes temas:

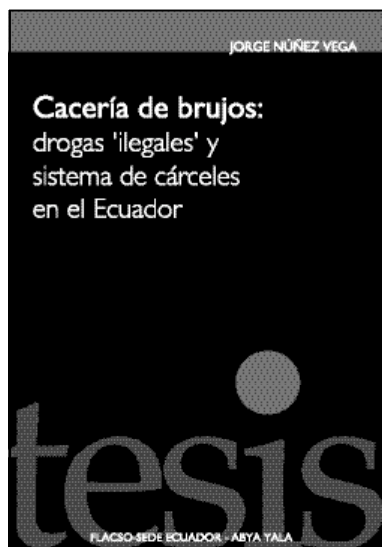
1. El tema del desarrollo rural y local, tanto agrícola como no agrícola, es un tema de urgencia. La población rural del Ecuador alcanza un 41.2%, si las ciudades menores de 10,000 habitantes están incluidas en la definición. Además, un porcentaje significativo de los residentes de las zonas periféricas de las ciudades grandes está involucrado en actividades rurales. Estamos hablando de casi la mitad de la población, y que a la vez es la mitad más pobre. Igualmente, la agricultura y la manufactura rural están especialmente amenazadas por los términos de los TLCs firmados por los países vecinos, que son los mismos términos que confrontan al Ecuador.
2. ¿Será posible la expansión del sector manufacturero bajo los regímenes de liberalización y dolarización?
3. Los derechos laborales no han recibido suficiente atención aunque representan una cuestión crítica en la elaboración de políticas de empleo y promoción de mayor equidad social.
4. El impacto económico y social de la corrupción y el lavado de narco-dólares

han recibido muy poca atención sistemática hasta ahora.

5. ¿Cómo reformar al Estado para convertirlo en agente activo del desarrollo? Esta otra cuestión urgente.

Para concluir los pedidos para el tomo II, sería importante desarrollar todos los temas arriba mencionados en equipos interdisciplinarios, y mantener en consideración la relevancia de enfoques ecológicos y de género en todos los análisis.

Liisa North



Serie TESIS

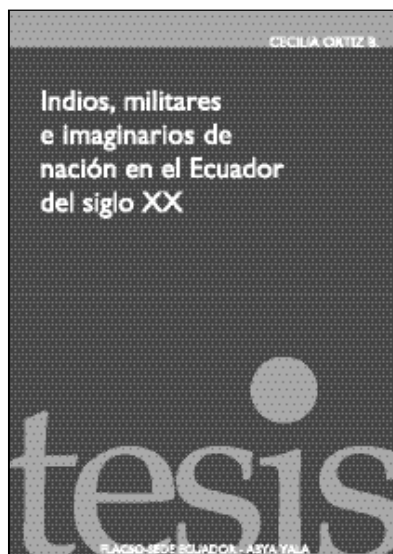
Cacería de brujos
drogas 'ilegales' y sistema
de cárceles en el Ecuador

Jorge Núñez Vega

Flacso-Ecuador - ABYA-YALA, 2006, 185 páginas

Esta es una investigación etnográfica que da cuenta de los efectos del modelo carcelario hacia las drogas ilegales implementado en el país desde principios de los ochenta. El libro analiza la articulación de la institución carcelaria a la economía política del narcotráfico. Describe la organización y funcionamiento/reproducción de cárcel. Explica la relación de la institución penitenciaria con el contexto social. Finalmente, atiende la crisis del sistema carcelario desde el punto de vista del Comité de Internos.

Este trabajo es un intento por discutir teorías de relaciones internacionales y de ciencias políticas desde el punto de vista de la etnografía. El resultado es un texto escrito en permanente diálogo entre categorías conceptuales y datos empíricos. Las conclusiones plantean serias críticas a la política antidroga y a la existencia misma de la institución carcelaria.



Serie TESIS

Indios, militares e imaginarios de nación en el Ecuador del siglo XX

Cecilia Ortiz B.

Alicia Torres, editoras

Flacso-Ecuador - Abya-Yala, 2006, 272 páginas

En Ecuador, los militares lideran un proyecto integracionista frente a los indios, que es compartido con otras fuerzas sociales entre las que se cuentan la Iglesia, la izquierda, los activistas nacionales e internacionales del desarrollo y los propios indígenas a través de su participación en este proceso que también es de su interés.

Este protagonismo de las Fuerzas Armadas en la integración de los indios a la sociedad nacional por la vía política, se posibilita por el rol que se atribuyen a sí mismas como conductoras de la modernización nacional. En este proceso, sin embargo, los indios adoptan un discurso que exige respeto a sus nacionalidades, lo que cuestiona, a primera vista, el proyecto uninacional de los militares. Las FF.AA. debilitan la propuesta indígena por "separatista", estrategia que, en el escenario del 21 de enero de 2000, también es utilizada con fines corporativos, en momentos de crisis institucional.

Política editorial

ÍCONOS es la revista especializada en ciencias sociales de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 y su objetivo es estimular un tipo de reflexión que vincule las inquietudes académicas de las ciencias sociales con problemas de la realidad social. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y el mundo en general.

La revista recibe artículos durante todo el año siempre que éstos se ajusten a la política editorial y a las normas de presentación de originales. Por el carácter especializado de la revista, se espera que los artículos presentados sean de preferencia resultados o avances de investigación en cualquier área de las ciencias sociales. También se aceptan ensayos que se apoyen sólidamente en bibliografía especializada, análisis de coyuntura nacional o internacional que partan de aproximaciones académicas y/o entrevistas de interés para el campo de las ciencias sociales. Para la selección de artículos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (*peer review*).

Cada edición de ÍCONOS se arma en torno a un tema central, recogido en la sección *Dossier*. En cada edición existe un Coordinador del Dossier, quien es un/una especialista en el tema, y con quien debe coordinarse la publicación en esta sección (información: revistaiconos@flacso.org.ec).

La sección *Debate* presenta textos críticos sobre artículos publicados en ediciones anteriores de ÍCONOS así como artículos de debate y confrontación teórica y analítica.

Diálogo es la sección de entrevistas temáticas y biográficas a académicos/as de las ciencias sociales.

Temas es una sección amplia. Recoge análisis y ensayos con temática libre, artículos de coyuntura nacional e internacional y análisis sobre temas internacionales y/o transnacionales.

Reseñas es la sección de crítica bibliográfica. Se incluyen tanto comentarios críticos a obras de ciencias sociales como estados de la cuestión sobre un tema determinado.

ÍCONOS se publica tres veces al año en los meses de enero, mayo y septiembre.

Normas para la presentación de originales

Las personas interesadas en publicar artículos en la revista ÍCONOS deberán enviar su original por correo electrónico a revistaiconos@flacso.org.ec y respetar las siguientes normas:

1. Los artículos deben ser originales, inéditos en español y no estar aprobados para su publicación en otras revistas.
2. El Consejo Editorial de ÍCONOS se reserva el derecho a decidir sobre la publicación de los trabajos, así como el número y la sección en la que aparecerán. Para su evaluación y selección final, los artículos serán enviados a lectores anónimos, quienes emitirán un informe bajo el sistema de doble ciego (*peer review*).
3. En una hoja aparte, el autor o autora hará constar su nombre, grado académico y/o estudios, adscripción institucional o laboral, el título del artículo, la fecha de envío, dirección postal y correo electrónico. Se debe indicar expresamente si el autor desea que se publique su correo electrónico (llenar formulario).
4. Los artículos deben estar precedidos de un resumen no mayor a 800 caracteres con espacios (100 a 150 palabras) en español e inglés. Esta norma no se aplica para la sección *Reseñas*.
5. Los autores deben proporcionar de cinco (5) a ocho (8) descriptores o palabras clave que reflejen el contenido del artículo. Éstos deben constar tanto en español como en inglés. Esta norma no se aplica para la sección *Reseñas*.
6. El título del artículo no deberá ser mayor a 10 palabras.
7. La extensión de los artículos variará según las secciones de la revista, se medirá en el contador de palabras de Word y será como sigue:

Dossier:	de 25.000 a 35.000 caracteres con espacios (cce)
Debate:	de 20.000 a 25.000 cce
Diálogo:	de 20.000 a 30.000 cce
Temas:	de 20.000 a 25.000 cce
Reseñas:	de 6.000 a 8.000 cce
8. La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo, luego las siglas.
9. Sobre cuadros, gráficos y tablas:
 - 9.1 Deberán estar incorporados en el texto de forma ordenada.
 - 9.2 Deberán contener fuentes de referencia completa.
 - 9.3 Cada uno contará con un título y un número de secuencia (Ejemplo: *Tabla 1. Presupuesto por organización, zona y monto*).
 - 9.4 Los gráficos pueden enviarse de forma separada en cualquier formato legible estándar (indicar el formato), siempre que en el texto se mencione la ubicación sugerida por el autor. Para asegurar la calidad final, el autor/a hará llegar a la redacción un archivo digital con alto nivel de resolución (en cd, disquette, zip, usb u otra forma de archivo).
10. Las citas bibliográficas que aparezcan en el texto deben ir entre paréntesis, indicando el apellido del autor, año de publicación y número de página. Por ejemplo: (Habermas 1990:15). La referencia completa deberá constar en la bibliografía.

11. La bibliografía constará al final del artículo y contendrá todas las referencias utilizadas en el texto. Se enlizará la bibliografía de un autor en orden descendente según el año de publicación (2004, 2003, 2002...).

12. La bibliografía se enlizará siguiendo el orden alfabético de los autores y las siguientes formas:

Libro de un autor:

Apellido, Nombre, año de publicación, *Título del libro en cursiva*, editorial, lugar.

Ejemplo: Laclau, Ernesto, 1996, *Emancipación y diferencia*, Ariel, Buenos Aires.

Libro de más de un autor:

Apellido, Nombre y Nombre Apellido, año de publicación, *Título del libro en cursiva*, editorial, lugar.

Ejemplo: Laclau, Ernesto y Chantall Mouffe, 1985, *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*, Verso, Londres.

Artículo en libro de editor (es), coordinador (es) o compilador (es):

Apellido, Nombre, año de publicación, "Título del artículo entre comillas", en Nombre Apellido, palabra que corresponda "editor"/ "editores"/ "coordinador"/ "compiladores", etc., *Título del libro en cursiva*, editorial, lugar.

Ejemplo: Muratorio, Blanca, 2000, "Identidades de mujeres indígenas y política de reproducción cultural en la Amazonía ecuatoriana", en Andrés Guerreño, compilador, *Etnicidades*, FLACSO-Ecuador, ILDIS, Quito.

Artículo en revista:

Apellido, Nombre, año de publicación, "Título del artículo entre comillas", en *Nombre de la revista en cursiva*, No. de la revista, editorial, lugar, páginas que comprende.

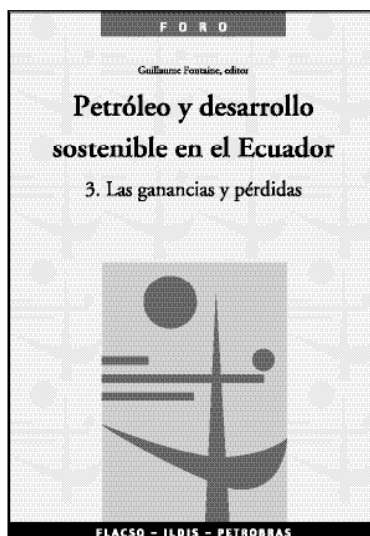
Ejemplo: Coraggio, José Luis, 2000, "Alternativas a la política social neoliberal", en *ÍCONOS*, No. 9, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 52-59.

13. Los artículos presentados para la sección *Reseñas* deben incluir toda la información bibliográfica del libro al que se haga mención.

14. ICONOS se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo.

15. Los artículos que se ajusten a estas normas serán declarados como "recibido" y puestos a consideración del Consejo Editorial para su evaluación antes de ser "aprobados". El mecanismo de evaluación se explica en la norma 2. Los artículos que no se ajusten a estas normas serán devueltos a sus autores y serán declarados como "no recibido".

Ediciones de FLACSO - Ecuador



Serie FORO

Petróleo y desarrollo sostenible en el Ecuador

3. Las ganancias y pérdidas

Guillaume Fontaine, editor

Flacso-Ecuador; ILDIS-FES-Petrobras Ecuador

2006, 368 páginas

¿Cómo se inserta Ecuador en el mercado mundial del petróleo?
¿Estamos preparados a asumir los retos que plantea la nueva bonanza de precios y de cantidad? ¿Cómo enfrentar la necesaria modernización del sector? ¿Es posible armonizar la gobernanza energética y la gobernanza ambiental? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas y del Estado en el desarrollo humano sostenible? Estas problemáticas fueron abordadas en el tercer ciclo de foros socio ambientales organizados por la FLACSO entre junio de 2004 y marzo de 2006. El presente libro, tercer volumen de la trilogía dedicada a la relación entre petróleo y desarrollo sostenible por el Observatorio Socio Ambiental, contiene las contribuciones de dos de estos eventos: el 15vo. foro, dedicado a los problemas de contaminación en Esmeraldas, y el 16vo. dedicado a “repensar la política petrolera”.

En la primera parte se abordan los aspectos claves de la gobernanza energética: el primer capítulo presenta el contexto internacional; el segundo, las dimensiones económicas; el tercero, las dimensiones tecnológicas. En la segunda parte los autores responden a algunos problemas planteados en el segundo volumen de esta trilogía, en torno a la gobernabilidad democrática: el cuarto capítulo aborda los problemas socio-ambientales generados por las actividades petroleras; el quinto, los problemas territoriales; y el sexto la responsabilidad corporativa.



Centro Andino de Acción Popular

ECUADOR DEBATE

No. 68

Quito - Ecuador, agosto del 2006

COYUNTURA

El Mercosur y su encrucijada: entre la disolución y un replanteo radical
De hojas de ruta a vericuetos: la reforma política en el Ecuador post-abril
Conflictividad socio - política Marzo-Junio 2006

TEMA CENTRAL

Los jóvenes en el Ecuador

Comprender los joven sublimación y condena: los desencuentros del discurso
Jóvenes y territorios urbanos: la noche en el centro paceño
Política vieja vs. sociedad joven
Encuentro y desencuentro entre jóvenes y viejos en los cargos de autoridad
Juventud, participación y ciudadanía. Reflexiones para la construcción
del movimiento juvenil

DEBATE AGRARIO - RURAL

Immigración de pueblos indígenas a España. Los Saraguros en
en el municipio de Vera (Almería)

ANALISIS

"Más ciudad", menos ciudadanía: renovación urbana
y aniquilación del espacio público en Guyaquil
Salvador Allende, narcisismo, crisis y bancarrota
de la izquierda chilena de los años 1970
Viabilidad de la aplicación del derecho autonómico en la realidad ecuatoriana
Reflexiones en torno a la migración internacional

RESEÑAS

El Gran Ausente: Biografía de Velasco Ibarra / 261-262

Suscripciones: Anual 3 números: exterior: US\$ 30,00 - Ecuador: \$ 9,00
Ejemplar suelto: Exterior US\$ 12,00 - Ecuador: \$ 3,00
Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre - Telef. 2 522763
Apartado aéreo 17-15-173B Quito - Ecuador

Perfiles

Latinoamericanos

Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México

28

Julio-Diciembre
2006

SECCIÓN VARIA

¿Democracia deliberativa y judicialización de los derechos sociales?

ROBERTO GARGARELLA

¿Influyen los ministros de culto sobre la intención de voto?

ALEJANDRO DIAZ DOMÍNGUEZ

La CIA y el exilio de Jacobo Arbenz

ROBERTO GARCÍA FERREIRA

Biografías de exclusión: desventajas y juventud en Argentina

GONZALO SARAVÍ

Democratización: pasado, presente y futuro

JOHN M. ACKERMAN

Conflictos agrarios del Nordeste argentino en la década de los sesenta

GUIDO PASCUAL GALAFASSI

Reflexiones socioantropológicas sobre el Estado

LUIS RODRÍGUEZ CASTILLO

La política social orientada al desarrollo: debates sobre su institucionalidad

MAGDALENA CHIARA Y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

ENSAYO

¿Qué ocurrió realmente en Bolivia?

MARCO TORRICO

Democracia sin ciudadanos: crítica de la teoría de la transición

LUIS ORTIZ SANDOVAL

RESENA

Los partidos políticos en México ante la democratización

FLAVIA FREIDENBERG



FLACSO
MÉXICO

Informes y ventas:

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México
Coordinación de Fomento Editorial
Carretera al Ajusco 377, Colonia Héroes de Paderma, C. P. 14200, México, D. F.
Tels. (5255) 3000 0200 y 3000 0208. Fax 3000 0284
publicaciones@flacso.edu.mx

www.flacso.edu.mx

AMÉRICALATINAHOY

Revista de Ciencias Sociales



n° 43, agosto del 2006

BOLIVIA 2005 ¿UNA NUEVA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA?

Simón Pachano: El peso de lo institucional: auge y fin del modelo boliviano

Salvador Romero Balvillán: Análisis de la elección presidencial de 2005 en Bolivia

George Gray Molina: La economía boliviana "más allá del gas"

Willem Assies: La Media Luna sobre Bolivia: nación, región, etnia y clase social

Rossana Barragán: Más allá del mestizo, más allá de lo aymara: exploraciones sobre la organización y las representaciones de clase y etnicidad en el comercio de la calle y las calles del comercio en la ciudad de La Paz de hoy

Edwin Cocarico Lucas: El etnocentrismo político - jurídico y el Estado Multinacional: nuevos desafíos para la democracia en Bolivia

VARIA

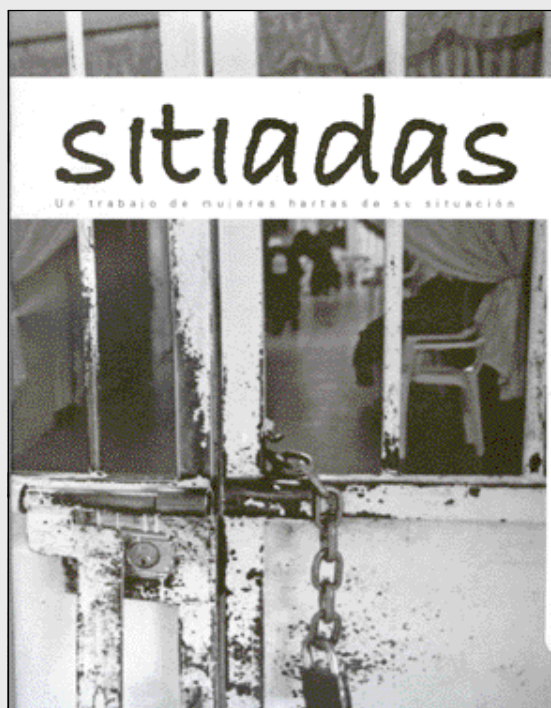
Leany Barreiro Lemos: El Sistema de Comisiones en el Senado brasileño: jerarquía y concentración de poderes en la década de 1990

DISPONIBLES A TEXTO COMPLETO TODOS LOS ARTICULOS DE
AMÉRICA LATINA HOY EN
<http://americo.usal.es/documentos/>

AMÉRICA LATINA HOY se publica tres veces al año (abril, agosto y diciembre) y se incluye sistemáticamente en las bases de datos: ISOC-América Latina, Réseau Amérique-Latine, Ulrich, Catálogo Latindex, HLAS, Hispanic Periodical Index (HAPI), REDALyC y DIALNET

Esta es una publicación del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica,
con Ediciones Universidad de Salamanca.

✉: latin hoy@usal.es



Un trabajo de mujeres hartas de su situación

Agosto 2006

El segundo número de Sitiadas es un producto de muchos meses de intensa labor colectiva, investigación conjunta entre mujeres diversas: tanto externas como internas en la Cárcel de Mujeres de Quito.

Sitiadas es un rescate de nuestras sabidurías, la voz de las que estamos acostumbradas a callar, la verdad de muchas, un espacio de denuncia que busca romper el silencio y tomarnos la palabra, sin pedir permiso, ni perdón, sin esperar a que nos den voz.

Con Sitiadas, quienes hacemos el colectivo Mujeres de Frente, buscamos desafiar el sistema que nos mata de a poco, que nos violenta, que desautoriza nuestras formas de conocimiento. Por eso, le apostamos a los métodos horizontales de transmisión de saberes. Por eso, escribimos lejos de la ayuda social y la academia formal que determinan una escritura rígida, ordenada, predicha y correcta, hecha para que todo el mundo se quede donde está.

Sitiadas es una invitación a escuchar, compartir, a encontrarnos y aliarnos, a unirnos para resistir. Sitiadas no es una revista más, es nuestra vida.

Mujeres de Frente

Geopolítica de la energía

COYUNTURA: **Jaime Acosta Puertas.** La desintegración andina. **Andrés Pérez-Balodano.** Nicaragua: actores nacionales y fuerzas externas en las elecciones de 2005.

APORTES: **Richard Sandbrook / Marc Edelman / Patrick Heller / Judith Teichman.** ¿Pueden sobrevivir las democracias sociales en el Sur globalizado?

TEMA CENTRAL: **Fernando Sánchez Albavera.** América Latina y la búsqueda de un nuevo orden energético mundial. **Ramón Espinosa.** Las contradicciones de Pdvsa: más petróleo a Estados Unidos y menos a América Latina. **Jürgen Schuldt / Alberto Acosta.** Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución? **Rolf Linkohr.** La política energética latinoamericana: entre el Estado y el mercado. **Roberto Kozulj.** La integración gasífera latinoamericana: una prospectiva cargada de incertidumbres. **Gerardo Honty.** Energía en Sudamérica: una interconexión que no integra. **Elsa Cardozo.** La gobernabilidad democrática regional y el papel (des)integrador de la energía. **Raúl Sohr.** Energía y seguridad en Sudamérica: más allá de las materias primas. **Eduardo Mayobre.** El sueño de una compañía energética sudamericana: antecedentes y perspectivas políticas de Petroamérica. **José Rafael Zanoni.** ¿Qué pueden hacer las políticas energéticas por la integración? **John Saxe-Fernández.** México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética.

LIBROS: **Carlos A. Gades.** El fin de lo social (reseña de *Un nuevo paradigma*, de Alain Touraine).

PAGOS: Solicite precios de suscripción y datos para el pago de las suscripciones desde América Latina y el resto del mundo a las siguientes direcciones electrónicas: <info@nuso.org>; <distribucion@nuso.org>.

EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO
Hugo Chávez
y América Latina

allpanchis



LEER O NO LEER

ANTONIOLI • CORTEZ
DÍAZ • GONZALES • SALAZAR
GONZALEZ DEL RIEGO

66

INSTITUTO DE PASTORAL ANDINA, SICHUANI - CUSCO

Allpanchis

No. 66, segundo semestre 2005.

Instituto de Pastoral Andina

Tema central: Leer o no leer



Ágora,
Revista de Ciencias Sociales,
No. 12, 2005.
Fundación Centro de Estudios
Políticos y Sociales

Tema central: Presente y futuro de
la Unión Europea



Quehacer,
No. 160, mayo – junio 2006.
DESCO Perú

Tema central: El APRA embiste

Contenido de ICONOS 23, septiembre 2005

Editorial

Coyuntura

¿Influyen los precios del petróleo en el alza de los Global 12?

Una reflexión de coyuntura sobre el endeudamiento externo ecuatoriano

Fander Falconí y Juan Ponce Jarrín

Dossier

La caída de Gutiérrez y la rebelión de abril

Presentación del Dossier

Felipe Burbano de Lara

La frágil legitimidad del príncipe democrático

Catalina Pazmiño

Ecuador: cuando la inestabilidad se vuelve estable

Simón Pachano

La crisis del sistema político ecuatoriano y la caída de Gutiérrez

Julio Paltán

El fervor democrático quiteño: ¿un mito, un sueño o algo sustancial?

Teodoro Bustamante

“Lo que pasó en Ciespal” Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sin-sentidos de la violencia

Edison Hurtado Arroba

Insurrección, legitimidad y política radical

Franklin Ramírez Gallegos

El 20 de abril: presente y pasado de un proyecto militar corporativo

Bertha García Gallegos

El regreso de Abdalá

Carlos de la Torre

Debate

Persona, religión y jerarquía

Comentarios al Dossier de ÍCONOS 22

Eduardo Khon

Diálogo

Ciencias políticas y trabajo de campo

Diálogo con Liisa North

Luciano Martínez

Temas

¿La ciudad puede llegar a ser educadora?

Patricia Pérez

Reseñas

Magdalena León, editora

Nadando contra corriente. Mujeres y cuotas en los países andinos

Andrés Mejía Acosta

Fander Falconí y Julio Oleas, compiladores

Economía ecuatoriana

Enrique Sierra C.

Javier Ponce Leiva, editor

La seguridad del Ecuador. Del 11 de septiembre al Plan Patriota

Carla Álvarez

Franklin Ramírez Gallegos

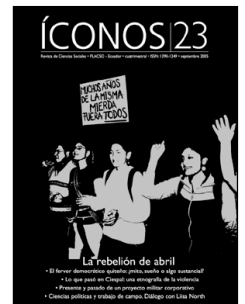
La insurrección de abril no fue sólo una fiesta

Álvaro Campuzano Arteta

Mauro Cerbino, editor

Violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana

Carlos Tutiven Román





Contenido de ÍCONOS 24, enero 2006

Coyuntura

De abril a diciembre: el recurrente simulacro de la reforma política

Pabel Muñoz López

¿Qué pasa si Ecuador no firma el Tratado de Libre Comercio

Alberto Acosta, Hugo Jácome y Fander Falconí

Dossier

Lo global y lo local en el medio rural

Presentación del Dossier

Luciano Martínez Valle

Globalización y comunidad de vecindad

Notas para el planteamiento de un concepto

Juan Pablo Pérez Sáinz

Comercio justo, neoliberalismo y desarrollo rural: una evaluación histórica

Gavin Fridell

Glocalidad y reforma agraria ¿de nuevo el problema irresuelto de la tierra?

Víctor Bretón Solo de Zaldívar

El sector agrario del Ecuador: incertidumbres (riesgos) ante la globalización

Francisco García Pacual

La perspectiva local-global en el medio rural ecuatoriano

Luciano Martínez Valle

Antiguos litigios

Ensayo fotográfico de Lucía Chiriboga

Debate

Abril y la crisis del régimen

Comentarios al Dossier de ÍCONOS 23

Pablo Ospina Peralta

Interpretando la(s) cultura(s) después de la televisión: sobre el método

Lila Abu-Lughod

Temas

La representación del pasado sexual de Guayaquil:

historizando los enchaquirados

O. Hugo Benavides

Las implicaciones del conflicto interno colombiano para las fronteras de Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, 2000-20050

Hernán Moreano Urigüen

Reseñas

Mercedes Prieto, editora

Mujeres ecuatorianas. Entre las crisis y las oportunidades

1990-2004

Jacqueline Contreras

Charle Tilly

La desigualdad persistente

Daniel Pontón C.

Cecilia Méndez Gastelumendi

The Plebeian Republic: The Huanta Rebellion and the Making of the Peruvian State

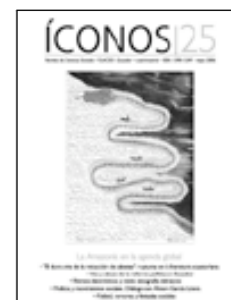
José Luis Ugue Tanaki

Katty Hernández Basante

Sexualidades afroserranas:

identidades y relaciones de género

Gioconda Herrera



Contenido de ÍCONOS 25, mayo 2006

Coyuntura

Uso y abuso de la reforma en Ecuador:

reflexiones generales con énfasis en lo electoral

Francisco Sánchez López

Dossier

La Amazonía en la agenda global

Presentación del Dossier

Guillaume Fontaine

La globalización de la Amazonía: una perspectiva andina

Guillaume Fontaine

La ocupación de la Amazonía vista desde Venezuela

Delfina Trinca Figuera

Mercado y medio ambiente: el caso de la soya en la Amazonía brasileña

Richard Pasquis

Representaciones de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana: ¿subsistencia local o conversión global?

Francisco Neira Brito

Mitos de los Naporuna

Ensayo gráfico de Marcelo Aguirre

Debate

Los retos de lo local en lo global: aportes analíticos y normativos

Comentarios al Dossier de ÍCONOS 24

Jeannette Sánchez

Diálogo

La política de los movimiento sociales en Bolivia

Diálogo con Álvaro García Linera

Franklin Ramírez Gallegos y Pablo Stefanoni

Temas

Rumores y fantasías sociales

La tragedia de Alianza Lima, 1987

Aldo Panfichi y Víctor Vich

Ritmos electrónicos y raves en la mitad del mundo

Etnografía del fenómeno tecno en Ecuador

Jérémie Voirol

Orígenes de la reforma social en Costa Rica: Iglesia católica y comunistas en la década de 1940

Iván Molina Jiménez

“El duro arte de la reducción de cabezas”: ruptura y continuidad en la literatura ecuatoriana

Carlos Arcos Cabrera

Reseñas

Mercedes Prieto, editora

Mujeres ecuatorianas. Entre las crisis y las oportunidades 1990-2004

Magdalena León, Cecilia Tamayo, Lola Valladares

Mauro Cerbino

Jóvenes en la calle. Cultura y conflicto

Carles Feixa

Astrid Ulloa

La construcción del nativo ecológico: complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre movimientos indígenas y ambientalismo en Colombia

Guillaume Fontaine

Eduardo Kingman Garcés

La ciudad y los otros. Quito 1860-1949

Jorge Núñez Vega

Lind Amy

Gendered Paradoxes: Women's Movements, State Restructuring and Global Development in Ecuador

Andreina Torres

Bibliografías ecuatorianas: estado actual y últimos aportes, 2001-2005

Michael T. Hamerly

Dónde adquirir ÍCONOS

INTERNACIONAL

Amazon.com

www.amazon.com

Libros Andinos

P.O.Box 164900

Miami, Florida 33116 - U.S.A.

Mail: info@incabook.com

La Librería - Flacso

www.flacso.org.ec

Mail: lalibrería@flacso.org.ec

GUAYAQUIL

Librería de la Casa de la Cultura,

Núcleo del Guayas

Av. 9 de Octubre 1200 y Pedro Moncayo

Macclibro

Extremo Norte del Malecón 2000 y Loja

Telf. 2309-400, ext. 123

CUENCA

Sodilibro

Benigno Malo 5-96 y Juan Jaramillo

Telefax: (593-2) 284 3137/284 8501

Universidad de Cuenca

Programa de Turismo y Gastronomía

Av. 12 de Abril 5-199

Telf.: (593-7) 2881-480

QUITO

La Librería – Flacso

Av. Diego de Almagro E7-174 y Pradera

Telfs: (593-2) 3238-888, ext. 2025

Mail: lalibreria@flacso.org.ec

Librimundi

Juan León Mera N23-83 y Wilson

Telfs : (593-2) 2521-606

Librería Abya-Yala

Av. 12 de Octubre 1430 y Wilson,

Teléfono (593-2) 2506-251, 2506-247

Librería Cima

Pasaje Carlos Ibarra 200 y 10 de Agosto

Telf: (593-2) 2571-218

Continental del Libro

Av. 10 de Agosto N11-473 y Pasaje Carlos

Ibarra

Telf: (593-2) 2950-686

Librería Española

Av. 10 de Agosto 1233 y Santiago

Telf.: (593-2) 2222-301/22-22258/2222-165

Librería Pomaire

Amazonas 836 y Veintimilla

Telf: (593 2) 540- 074

Librería Científica

Av. Juan León Mera y Colón

Telf: (593-2) 2552-854/ 2543-164